



# **PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS**

## **LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS PRIMER SEMESTRE DE 2011**

### **INFORME A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA**

Guatemala, julio de 2011

## ÍNDICE

1. Introducción .....	5
2. La situación económica nacional.....	6
3. La situación del derecho a la salud .....	19
3.1 Indicadores de Estructura .....	19
3.2 Indicadores de Proceso .....	20
3.3 Indicadores de Resultado .....	28
3.4 Causas estructurales que determinan la situación de la salud en Guatemala.....	28
3.5 Mortalidad Materna .....	34
4. El derecho a la educación en Guatemala .....	37
4.1 Importancia de la educación para el desarrollo .....	37
4.2 Marco jurídico.....	39
4.3 Programas, proyectos y presupuesto del Ministerio de Educación .....	39
4.4 Situación de la educación .....	42
4.4.1 Persiste el abandono de la educación preprimaria, básica y diversificada.....	43
4.4.2 Perduran grandes carencias en la calidad de la educación .....	44
4.5 Acciones del Procurador de los Derechos Humanos.....	46
4.5.1 Supervisión administrativa .....	47
4.6 Sucesos más relevantes en el semestre .....	54
5. Derecho a una Alimentación Adecuada .....	56
5.1 Legislación .....	56
5.2 Institucionalidad .....	58
5.3 Situación actual del derecho a la alimentación .....	59
5.3.1 Nutrición .....	59
5.3.2 Disponibilidad de los alimentos.....	61

5.3.3 Acceso de los alimentos .....	66
5.3.4 Aprovechamiento biológico, seguridad de los alimentos y protección al consumidor.....	69
5.4 Cuarto Informe SAN y su impacto en la atención a la seguridad alimentaria y nutricional.....	69
5.4.1 Fallas en la implementación de las recomendaciones del Cuarto Informe .....	71
6. Derechos de los migrantes.....	73
6.1 Marco jurídico vigente y la institucionalidad del Estado guatemalteco encargada de atender la problemática migratoria.....	73
6.2 Marco Institucional.....	77
6.3 Políticas, planes y programas para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de los migrantes .....	78
6.4 La migración de guatemaltecos al exterior y la importancia de las remesas.....	79
6.5 Situación de los migrantes guatemaltecos que viven en Estados Unidos.....	81
6.6 Riesgos para los migrantes en el paso por México hacia Estados Unidos .....	84
6.7 La situación de la niñez y adolescencia de las familias de los migrantes.....	86
6.8 Algunas acciones del Procurador de los Derechos Humanos ante la situación de los migrantes en el exterior y en Guatemala .....	88
7. Derecho a un ambiente sano .....	89
7.1 Agua: contaminación y escasez.....	90
7.1.1 Casos de escasez y contaminación de agua .....	95
7.1.2 Asolvamiento de ríos y canales.....	96
7.1.3 Deterioro de lagos y lagunas.....	99
7.2 Acción del Procurador: Supervisión por inundaciones en Lago de Amatitlán .....	101
7.2.1 Recomendaciones de la supervisión sobre el Lago de Amatitlán. ....	104
7.3 Incendios forestales .....	105
7.4 Disposición de desechos sólidos .....	106
7.5 Desertificación .....	107

7.6 Cambio climático y deforestación.....	108
7.7 Conflictividad social.....	111
7.7.1 Minería.....	111
7.7.2 Conflicto en el Polochic.....	112
8. Seguridad y justicia.....	114
8.1 Presupuesto .....	114
8.2 Agenda legislativa en seguridad y justicia.....	115
8.3 Fortalecimiento institucional y casos emblemáticos .....	120
9. Situación de criminalidad vinculada al narcotráfico en Guatemala.....	123
10. Muerte violenta – violación del derecho a la vida.....	127
10.1 Muerte violenta y lesiones.....	131
10.2 Detenidos por homicidio y lesiones .....	141
10.3 Muertes violentas relacionadas con el transporte público .....	144
10.4 Muerte Violenta por Linchamientos .....	152
10.5 Contexto de violencia en el proceso electoral.....	157

## **1. Introducción**

El presente informe de situación abarca el primer semestre de 2011. El análisis examina la situación con los hechos de enero a junio, dando cuenta de las principales tendencias, procesos y hechos relevantes que en el período considerado conforman la situación de los derechos humanos en el país.

Este informe de situación es elaborado en el marco de las atribuciones del Procurador de los Derechos Humanos, el cual como Comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos garantizados en la Constitución Política y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, tiene entre sus principales funciones la investigación de toda clase de denuncia sobre acciones que involucren alguna violación a los derechos de las personas, emitir recomendaciones, suscitar acciones, recursos o censuras que tiendan a corregir las faltas que atentan contra los derechos humanos. También supervisa y promueve el buen funcionamiento de la administración pública y la agilización de la gestión administrativa gubernamental para el respeto de los derechos humanos.

El Magistrado de Conciencia, igualmente, tiene atribuciones para realizar informes, compilaciones, estudios, investigaciones jurídico-doctrinales encaminadas al examen de situación de los Derechos Humanos, así como campañas divulgativas y cualesquiera otras actividades de promoción, con el propósito de hacer conciencia en los diversos sectores de la población y en funcionarios públicos sobre la importancia de estos derechos.

Este es el segundo informe parcial que el Procurador de los Derechos Humanos, a solicitud hecha por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, presenta ante la Comisión, en el 2011.<sup>1</sup>

Para los meses venideros en el presente año, el Procurador seguirá prestando estrecha atención y seguimiento a los aspectos señalados en este informe; campos prioritarios de la realidad económica, política, social y cultural de los habitantes en la República de Guatemala.

---

<sup>1</sup> La presente es una versión revisada a la cual se agregó el índice y el apartado 10.5.

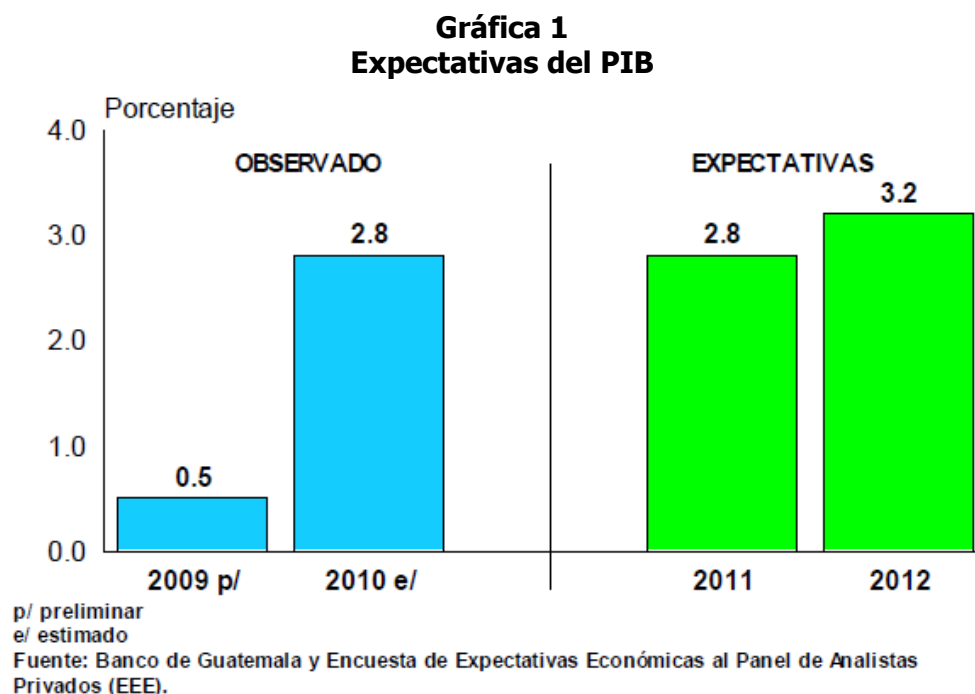
## 2. La situación económica nacional

**Producto Interno Bruto:** La actividad económica nacional medida a través del Producto Interno Bruto (PIB), se encuentra en una fase de recuperación, a partir del comportamiento positivo de determinadas variables macroeconómicas: las exportaciones, el incremento en el consumo, la estabilidad del precio del petróleo y la mejora en el ingreso de las remesas familiares.

Adicionalmente, a juzgar por las opiniones de los diferentes actores económicos y productivos del país, que exponen sus puntos de vista a través de la más reciente Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de mayo de 2011, existe una actitud positiva respecto al desenvolvimiento de la actividad productiva y sus expectativas con relación al futuro próximo.

Dentro de los aspectos consultados por la EEE se encuentra, en primer lugar, la estimación sobre el comportamiento del PIB, en donde los panelistas consideran que la actividad económica para el año 2011 tendrá un crecimiento de 2.8%, superior en 0.1 puntos porcentuales a la prevista en la encuesta anterior (2.7%); esto aunque la última estimación de la Junta Monetaria, en junio del presente año, incluso la calcula en 3.2%.

Este comportamiento se presenta en la gráfica siguiente:



Estas estimaciones sobre el comportamiento positivo de la actividad económica se sustentan principalmente en un precio estable del petróleo, que no presionará tanto sobre los precios de los combustibles; los niveles de las tasas de interés que proyectarán mayor

financiamiento a la actividad económica; la contención del gasto de la política fiscal, que permitirá un mayor control del déficit fiscal y atenuar el comportamiento de la deuda pública; el mayor consumo que dinamiza el mercado interno y eventualmente la ejecución de los denominados megaproyectos, principalmente la Franja Transversal del Norte y el Corredor Seco Interoceánico.

Los factores que influyen sobre el comportamiento positivo de la actividad económica se incluyen en la tabla siguiente:

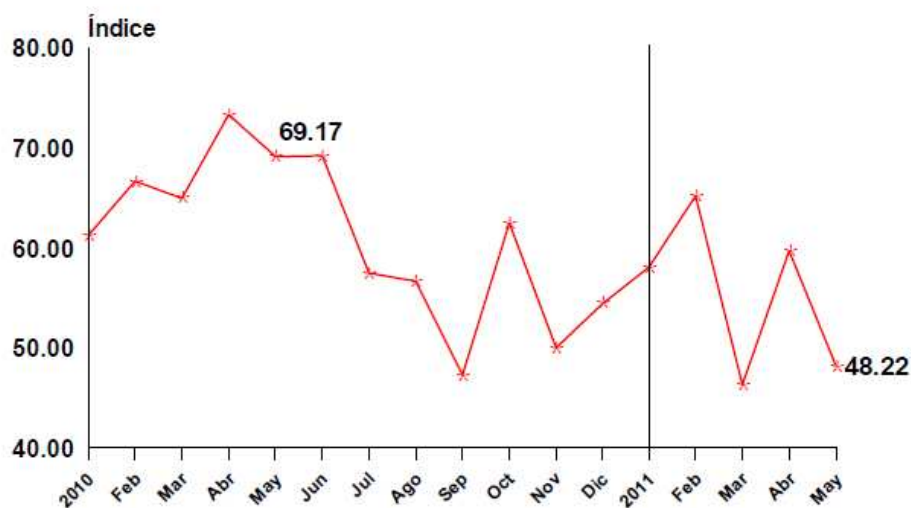
**Tabla 1**  
**Factores que inciden positivamente sobre la actividad económica**

FACTORES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Precio internacional del petróleo	10.87	13.04	12.72	15.00	15.38
Niveles de las tasas de interés (internas y externas)	10.87	6.52	16.36	12.50	13.46
Desempeño de la política fiscal	17.39	13.04	10.91	12.50	13.46
Precios de los combustibles	13.04	10.87	9.09	15.00	11.54
Fortalecimiento del mercado interno	8.70	13.04	14.55	10.00	11.54
Ejecución de megaproyectos	8.70	8.70	10.91	7.50	11.54
Estabilidad en el tipo de cambio nominal	13.04	13.04	9.09	12.50	7.69
Estabilidad en el nivel general de precios	10.87	8.70	9.09	12.50	5.77
TLC con los Estados Unidos de América	4.35	8.70	3.64	2.50	3.85
Otros	2.17	4.35	3.64	0.00	5.77
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Fuente: BANGUAT

Las expectativas del panel de analistas privados que utiliza el Banco Guatemala para establecer el índice de confianza en la actividad económica, indica que en relación a la encuesta anterior se tiene una percepción menos optimista del futuro de la actividad económica, pues el mismo que alcanza 48.44% es inferior a la medición hecha en abril, que registró un 19.27% menos (59.73), así como es más bajo en un 30.29% en relación a lo observado en mayo del año anterior con 69.17.

**Gráfica 2**  
**Índices mensuales de expectativas de agentes económicos**



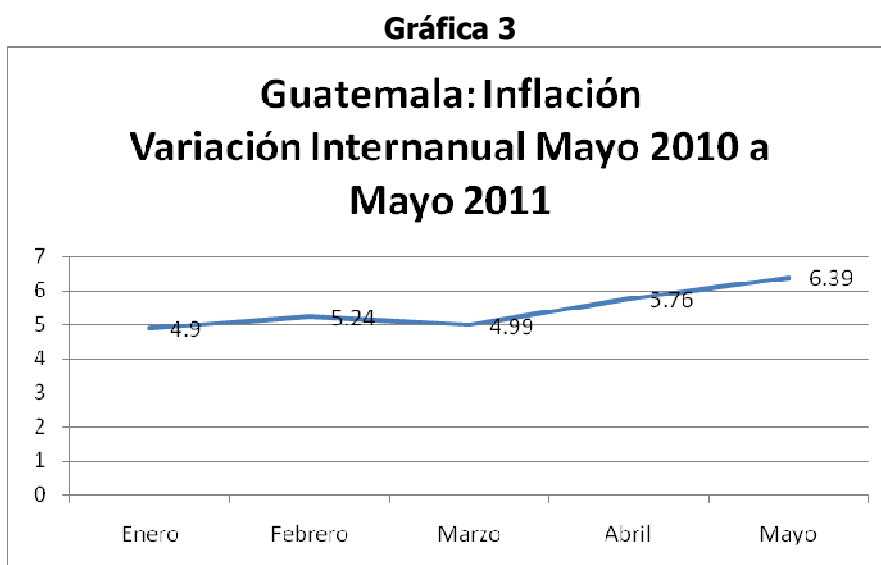
Fuente: Banco de Guatemala y Encuesta de Expectativas Económicas al Panel de Analistas Privados (EEE).

El comportamiento de los diferentes índices de expectativas mensuales de 2010 y 2011 se incluye en la gráfica a continuación; destaca por su irregularidad y las diferencias intermensuales. Se puede comparar también los índices que se expresaban para el año 2010 con los de 2011 hasta el mes de mayo.

**Inflación:** En relación a la inflación, se calcula que la misma, de acuerdo a lo expuesto en la EEE por los analistas económicos encuestados, para mayo de 2011 presentará un ritmo inflacionario de 5.75%, con un valor máximo de 6.53% y un valor mínimo de 5.25%, mientras que para junio de 2011, estiman que éste alcance 5.68%.

En diciembre, se proyecta que la inflación promedio llegará a 6.61%, registrándose un valor máximo de 8.00% y un mínimo de 6.00%. Estos datos reflejan que la inflación proyectada, superará la meta de inflación propuesta al inicio del año por la Junta Monetaria, que la situaba entre 3 y 5% anual.

La tasa de inflación interanual se presenta en la gráfica siguiente:



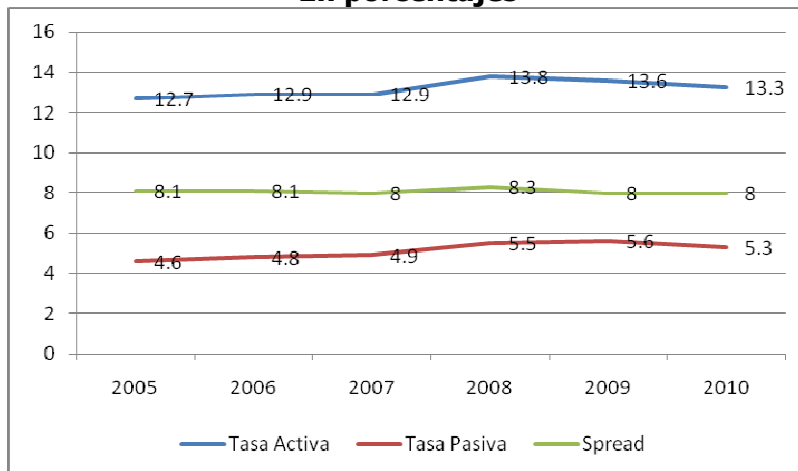
**Tasa de interés:** La tasa de interés es otra de las variables macroeconómicas que incide fuertemente sobre la actividad económica en general, puesto que establece el precio del dinero, lo cual significa que, en la medida que dicha tasa se encuentre en un nivel relativamente bajo, en esa misma dimensión contribuirá a propiciar el crédito en las diferentes expresiones sectoriales productivas.

En este sentido, la tasa de interés activa, que refleja el costo financiero de cualquier préstamo, se ha mantenido durante 2010 en un nivel relativamente moderado, pues se conservó en un 13.3%. Por otra parte, la tasa de interés pasiva alcanzó un 5.3%; lo cual implica que el spread; es decir, la diferencia entre la tasa activa y pasiva, la tasa de ganancia del sistema bancario, es de un 8%.

El comportamiento de las tasas de interés se presenta en la siguiente gráfica:

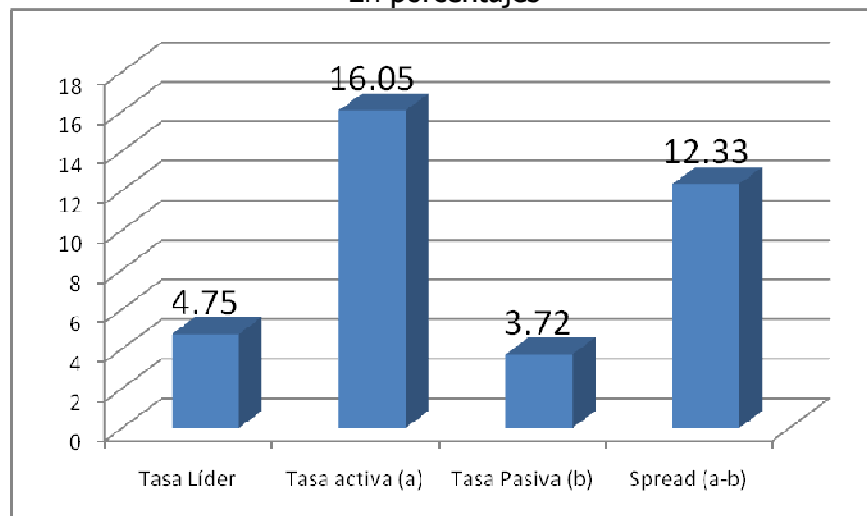


**Gráfica 4**  
**Tasas de Interés en Guatemala**  
**En porcentajes**



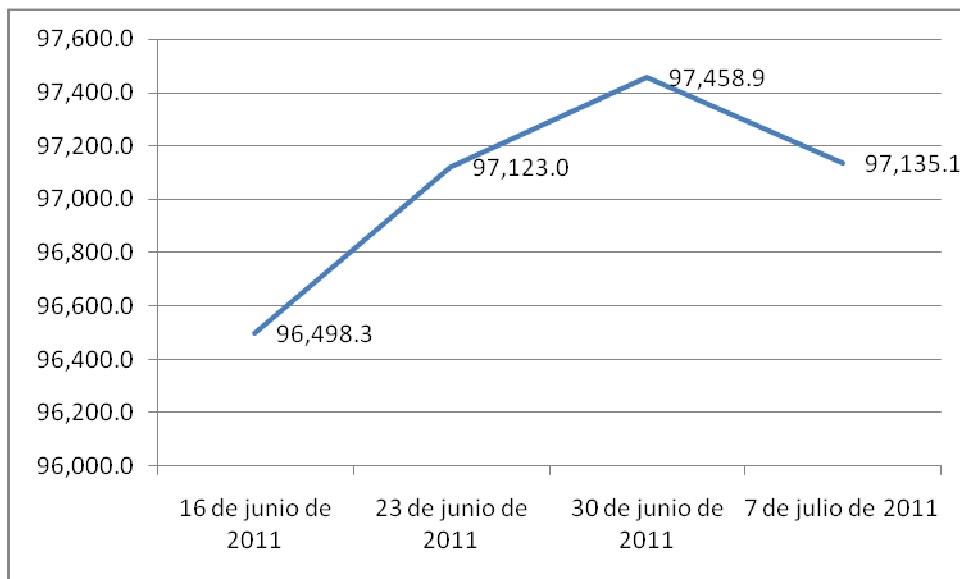
En el primer semestre de 2011 la tasa líder, que es el instrumento con el que la autoridad monetaria busca mantener controlada la inflación, se mantuvo en un 4.75%, y aún así la tasa activa se mantiene en un 16.05%, bastante alejada de la tasa líder y la tasa pasiva se ha mantenido en un 3.72%, lo que implica un margen de 12.33%; tal como se ilustra en la gráfica siguiente:

**Gráfica 5**  
**Tasas de interés hasta junio 2011**  
**En porcentajes**



**Crédito al sector privado:** En lo que concierne a la movilización de fondos de los bancos para impulsar la actividad económica por medio del financiamiento, se conocen las cifras que se incluyen en la gráfica siguiente:

**Gráfica 6**  
**Crédito al sector privado**  
En millones de Quetzales



**Comercio internacional:** En el caso de las exportaciones, se puede destacar que existe un comportamiento creciente, en los primeros meses del año, en cuanto el monto de productos comercializados internacionalmente, lo cual incide en el comportamiento positivo de la producción. Las exportaciones hasta el mes de abril de 2011 y del año anterior se incluyen en la tabla 2.

Como se puede observar, el monto total de las exportaciones muestra un crecimiento relativo de 30.4% hasta abril del presente año, situación que representa un signo altamente positivo para la economía del país debido a la dimensión de dicho porcentaje. Este comportamiento se encuentra influenciado fuertemente por el incremento de las exportaciones de los principales productos, que crecen en un 33.8%, aunque el resto de componentes también contribuyen a este comportamiento al crecer los otros productos en 28.8%, en donde aquellos que se orientan al resto del mundo suman un porcentaje de 33.6%.

**Tabla 2**  
**Valor FOB de las exportaciones**  
**Al mes de abril de cada año**  
 En miles de US dólares

CONCEPTO	2 0 1 0		2 0 1 1		VARIACIÓN	
	Monto	Estructura (%)	Monto	Estructura (%)	Absoluta	Relativa
T O T A L	2,862,462.2	100.0	3,733,645.0	100.0	871,182.8	30.4
PRINCIPALES PRODUCTOS	951,860.1	33.3	1,273,346.1	34.1	321,486.0	33.8
Azúcar	345,700.3	12.1	359,591.3	9.6	13,891.0	4.0
Banano	125,520.6	4.4	175,273.2	4.7	49,752.6	39.6
Café	306,202.4	10.7	479,647.3	12.9	173,444.9	56.6
Cardamomo	92,884.7	3.2	149,219.6	4.0	56,334.9	60.7
Petróleo	81,552.1	2.9	109,614.7	2.9	28,062.6	34.4
OTROS PRODUCTOS	1,910,602.1	66.7	2,460,298.9	65.9	549,696.8	28.8
Centroamérica	728,151.2	25.4	880,171.5	23.6	152,020.3	20.9
Resto del mundo	1,182,450.9	41.3	1,580,127.4	42.3	397,676.5	33.6

Fuente: BANGUAT

En el caso de las importaciones también se puede denotar su comportamiento positivo, pues las mismas han crecido en un 24.5% hasta abril del presente año con respecto el mismo mes del año anterior. Dentro los rubros de bienes, llama la atención el crecimiento positivo y mayoritario de los bienes de capital con un 26.3%, mientras que los bienes intermedios crecieron un 24.8% y los bienes de consumo únicamente un 16.5%.

Por otra parte, en lo relativo a los materiales, se puede observar que los combustibles y lubricantes muestran un crecimiento de 31.7% y los de construcción un incremento del 27.7%.

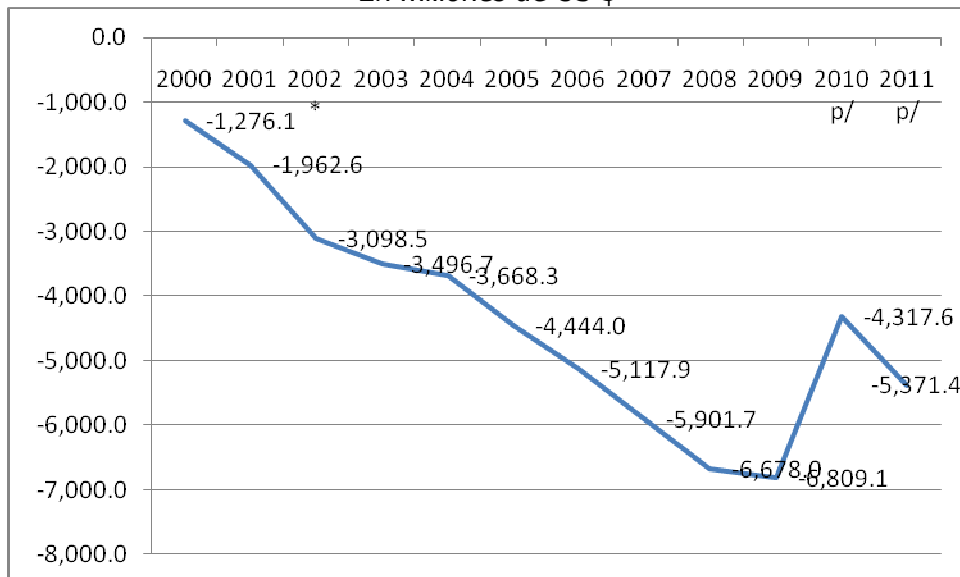
**Tabla 3**  
**Al mes de abril de cada año**  
**Valor CIF de las Importaciones**

<b>CONCEPTO</b>	<b>2 0 1 0</b>		<b>2 0 1 1</b>		<b>VARIACIÓN</b>	
	<b>Monto</b>	<b>(%)</b>	<b>Monto</b>	<b>(%)</b>	<b>Absoluta</b>	<b>Relativa</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4,225,252.8</b>	<b>100.0</b>	<b>5,245,609.5</b>	<b>100.0</b>	<b>1,020,356.7</b>	<b>24.1</b>
BIENES DE CONSUMO	1,172,494.4	27.7	1,365,626.1	26.0	193,131.7	16.5
No duraderos	716,780.7	17.0	808,999.5	15.4	92,218.8	12.9
Semiduraderos	252,402.3	5.9	294,512.4	5.6	42,110.1	16.7
Duraderos	203,311.4	4.8	262,114.2	5.0	58,802.8	28.9
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS	1,478,378.0	35.0	1,845,285.9	35.2	366,907.9	24.8
Para la agricultura	153,359.7	3.6	182,876.3	3.5	29,516.6	19.2
Para la industria	1,325,018.3	31.4	1,662,409.6	31.7	337,391.3	25.5
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	844,480.1	20.0	1,111,967.4	21.2	267,487.3	31.7
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	90,747.2	2.2	115,843.4	2.2	25,096.2	27.7
BIENES DE CAPITAL	638,961.7	15.1	806,784.8	15.4	167,823.1	26.3
Para la agricultura	16,057.5	0.4	18,788.0	0.4	2,730.5	17.0
Para la Ind., Telecomunicaciones y Construcción	525,003.0	12.4	668,228.5	12.7	143,225.5	27.3
Para el transporte	97,901.2	2.3	119,768.3	2.3	21,867.1	22.3
DIVERSOS	191.4	0.0	101.9	0.0	(89.5)	(46.8)

Fuente: BANGUAT

La relación entre las exportaciones y las importaciones en el primer semestre de 2011, muestra una tendencia deficitaria para la balanza comercial, al igual que en los últimos años. La balanza comercial de Guatemala, desde el año 2000, se muestra en la siguiente gráfica

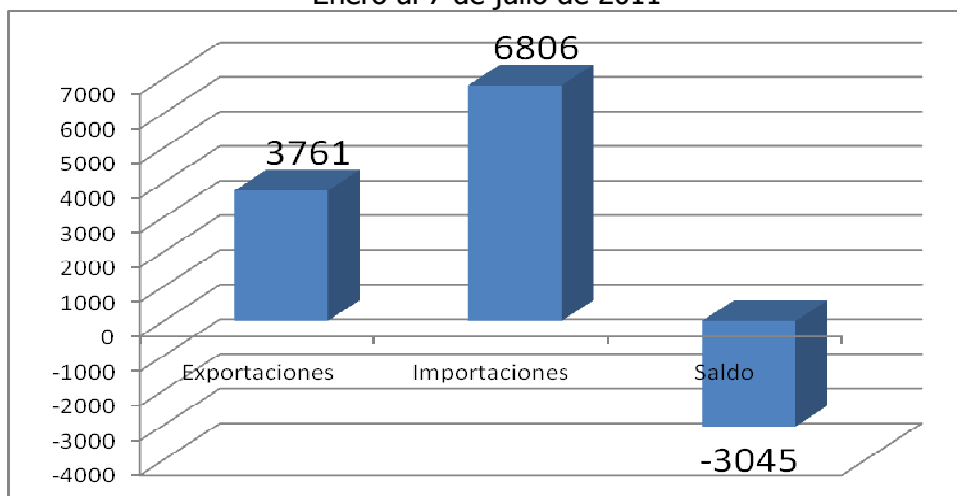
**Gráfica 7**  
**Balanza Comercial**  
En millones de US \$



La tendencia del déficit en balanza comercial ha sido creciente, y aunque ha habido mejoras en algunos años, por ejemplo, 2009 y 2010, fue producto de la crisis económica internacional, en donde se deprimieron más las importaciones.

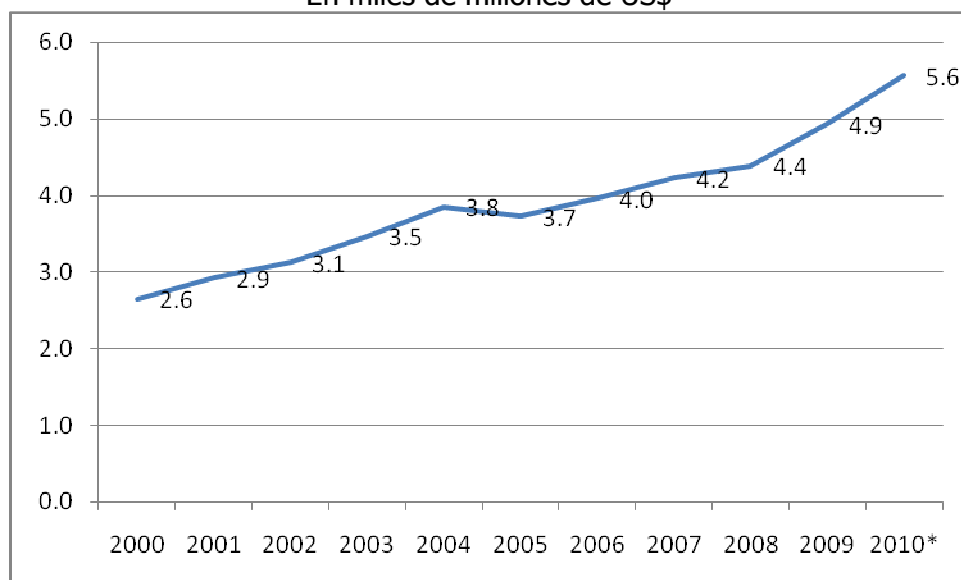
El monto de las exportaciones e importaciones y su respectivo saldo de dicha relación se observa en la gráfica siguiente:

**Gráfica 8**  
**Exportaciones e importaciones y saldo comercial**  
Enero al 7 de julio de 2011



**Deuda pública externa e interna:** Adicionalmente a los problemas de las finanzas públicas durante el presente régimen, el crecimiento acelerado de la deuda externa e interna constituye una de las situaciones que afecta seriamente en el desenvolvimiento de la actividad económica del país, pues al crecer la deuda automáticamente se eleva el nivel de servicio de la misma, con lo cual el país tiene un costo de oportunidad elevado, principalmente en el gasto social, pues en cuanto a la cantidad de recursos financieros requeridos para el pago de amortizaciones, tasas de interés y compromisos es considerablemente elevada y con ello se desfinancian programas que son de la mayor importancia y trascendencia para el país como la desnutrición, la salud y la educación.

**Gráfica 9**  
**La situación de la deuda externa en Guatemala**  
En miles de millones de US\$

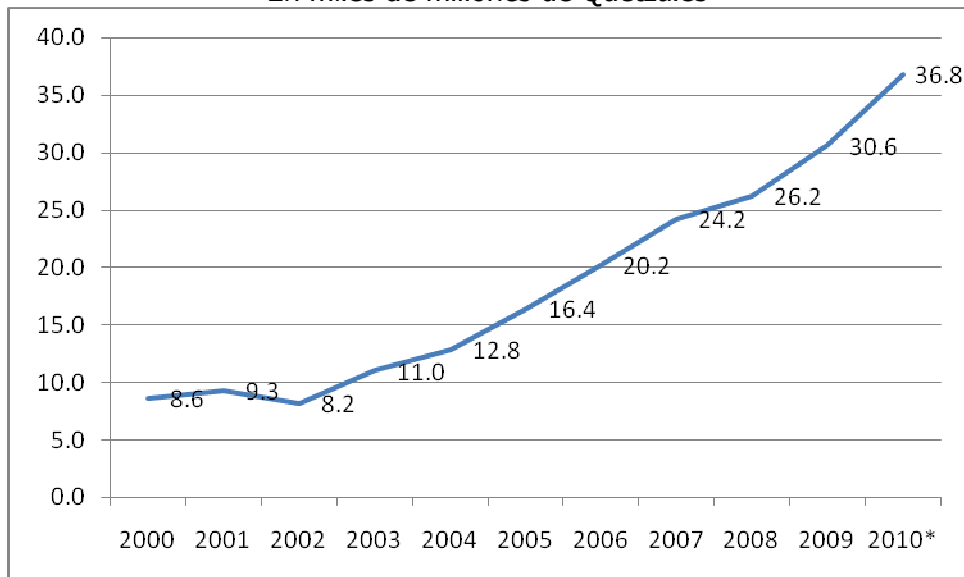


Como se puede observar, en una década la deuda externa de Guatemala se multiplicó por 2.15, lo que significa una tasa promedio anual de 7%, con lo cual la situación financiera resulta alarmante para las autoridades de gobierno presentes y futuras.

Sumado a esta problemática, las autoridades de gobierno presionaron fuertemente sobre los niveles de la deuda pública interna y ésta tiene mayor dificultad porque, en general, los plazos son más cortos y las tasas de interés son superiores a la tasa pasiva promedio del mercado financiero.

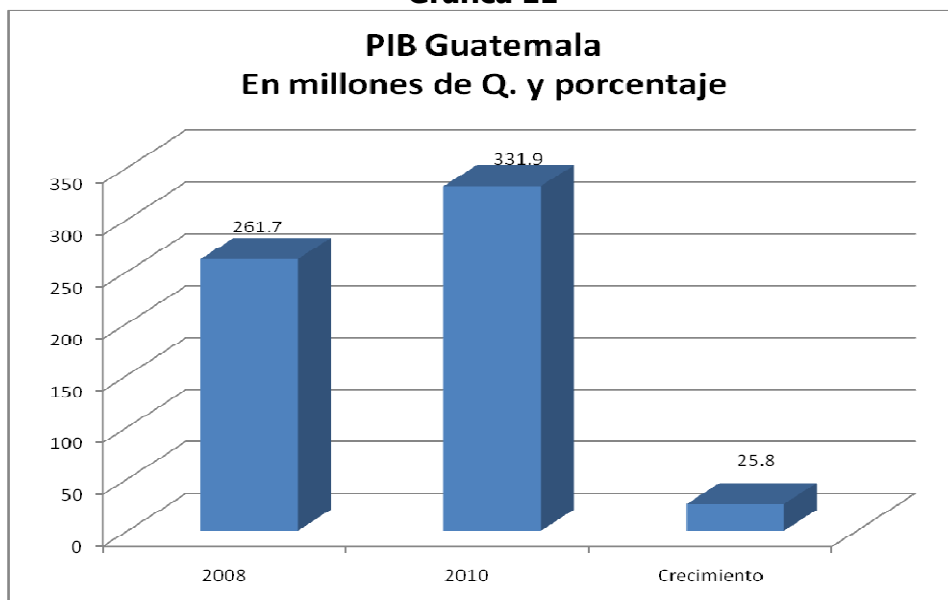
Es sabido que la mayor concentración de la deuda interna la mantienen los bancos del sistema financiero, con lo cual la misma beneficia a este sector, así como reduce los niveles de recursos financieros que ellos podrían colocar en el mercado por medio del crédito al sector privado.

**Gráfica 10**  
**Situación de la Deuda pública interna**  
 En miles de millones de Quetzales



Se observa la tendencia alcista y creciente de los montos pactados de deuda interna, que en la década presentada en la gráfica se multiplicó por 4.28 veces, lo que implica una tasa de crecimiento promedio anual del 16%. Al igual que la deuda pública externa, la interna también implica un enorme costo de oportunidad para la sociedad en general, pues los recursos desviados para honrar dicha deuda, se dejan de utilizar en otros programas sociales orientados a mejorar las condiciones de vida de la población y, por lo tanto, se siguen postergando los derechos fundamentales de la población.

**Gráfica 11**  
**PIB Guatemala**  
 En millones de Q. y porcentaje

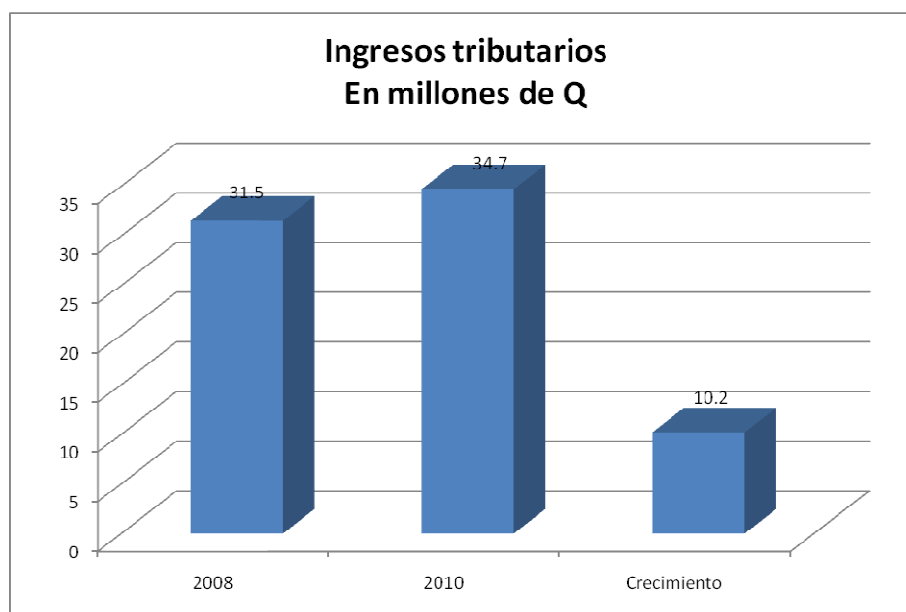


La situación actual de las finanzas públicas es uno de los problemas más serios que enfrenta el país; si se hacen algunas comparaciones, se podrá visualizar que la problemática de la deuda es realmente preocupante.

Así, un primer ejercicio de comparación, utilizando el PIB como punto de referencia en el 2008 y 2010; se notará el nivel de recaudación en los mismos años y finalmente la situación de la deuda.

El crecimiento de la recaudación en esos mismos años, en miles de millones de quetzales, se presenta a continuación:

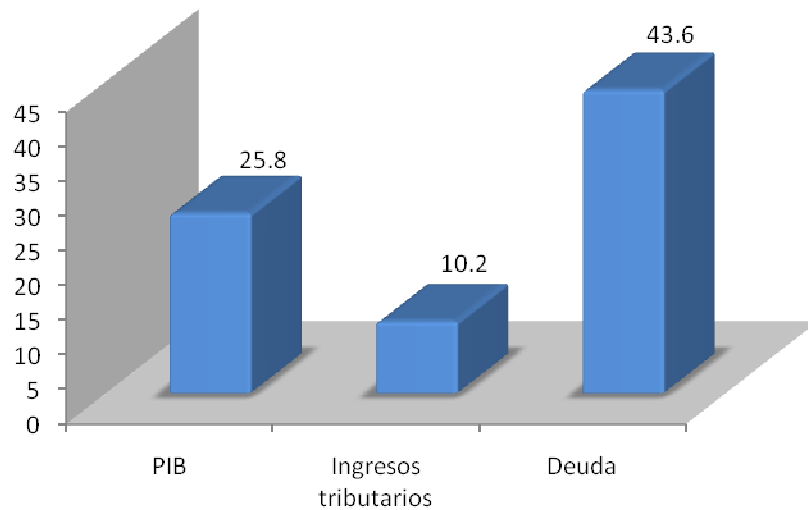
**Gráfica 12**



Finalmente, si se hace la comparación del crecimiento de la deuda en los mismos años, se puede visualizar el siguiente comportamiento:

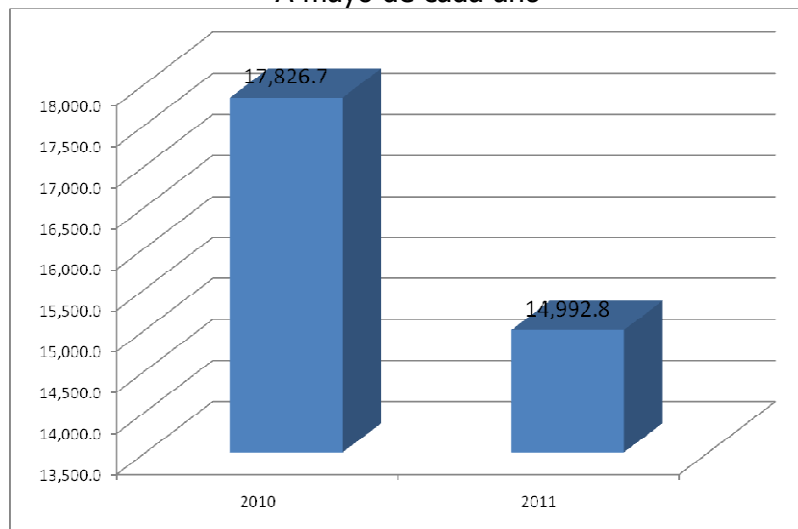


**Gráfica 13**  
**Comparación crecimiento bianual 2008 2010**  
 En porcentajes



Mas allá de estas consideraciones, es conveniente indicar que la recaudación tributaria, medida a mayo de este año con respecto del mismo mes del año anterior, refleja una disminución, lo cual significa que se mantuvo un proceso de retracción de la recaudación, en la medida que los impuestos recaudados expresaron una menor cantidad con respecto el año anterior. Tal situación se puede observar en la siguiente gráfica.

**Gráfica 14**  
**Desempeño de la recaudación tributaria 2010 y 2011**  
 A mayo de cada año



Fuente: SAT

La recaudación decayó en términos absolutos en Q.2.8 miles de millones, lo que significa una reducción de casi 16% entre el mes de mayo de 2010 y el de 2011. Esta situación

afecta seriamente el flujo de caja de las finanzas públicas pues les reduce seriamente la liquidez de recursos financieros para sus diferentes ministerios, secretarías y programas.

**Tabla 4**  
**Recaudación Tributaria 2010-2011**  
**A mayo de cada año**  
En millones de Q

Años		Variación	
2010	2011	Absoluta	Relativa
17,826.7	14,992.8	(2,833.9)	-15.9%

Fuente: SAT

**Resumen de la situación fiscal:** En lo que se refiere al comportamiento de las finanzas públicas, se puede observar que existe un grado de captación de ingresos del 41.7% a mayo del presente año, mientras que por el lado del gasto, la ejecución es del 37.2%, con lo cual se tiene un déficit presupuestal de Q.11.6 millardos en términos globales respecto al presupuesto vigente y un déficit presupuestal en mayo de Q.2.4 millardos.

**Tabla 5**  
**Situación general de las finanzas públicas**  
**2011 al mes de mayo**

Concepto	Presupuesto Vigente	Recaudación al mes de mayo	Porcentaje de Ejecución
<b>Ingresos Totales</b>	<b>42,428.4</b>	<b>17,700.0</b>	<b>41.7</b>
Ingresos Corrientes	42,401.5	17,693.9	41.7
Ingresos Tributarios	38,789.9	16,924.5	43.6
Impuestos Directos	11,551.6	5,835.5	50.5
Impuestos Indirectos	27,238.3	11,088.9	40.7
No Tributarios y Transferencias	3,611.5	769.4	21.3
Ingresos de Capital	26.9	6.2	22.9
<b>Gastos Totales</b>	<b>54,062.8</b>	<b>20,135.2</b>	<b>37.2</b>
Gastos Corrientes	39,247.1	15,414.7	39.3
Gastos de Capital	14,815.7	4,720.5	31.9
<b>Resultado en Cuenta Corriente</b>	<b>3,154.4</b>	<b>2,279.1</b>	<b>72.3</b>
<b>Resultado Primario</b>	<b>-5,465.7</b>	<b>-177.2</b>	<b>3.2</b>
<b>Resultado Presupuestal</b>	<b>-11,634.5</b>	<b>-2,435.2</b>	<b>20.9</b>

Fuente: MINFIN

### **3. La situación del derecho a la salud**

La salud es uno de los derechos fundamentales de las personas, pues el hecho de vivir una vida digna pasa por contar con condiciones de salubridad, sanidad y salud necesarias para desenvolverse en la vida.

El derecho a la salud permite o expande las posibilidades para gozar otros derechos como el derecho al trabajo, la educación y la cultura; una vida sin salud no propicia el disfrute de esos otros derechos conocidos como los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).

La salud descansa en la interrelación de otras variables que se encuentran integradas en la matriz social del país. La situación socioeconómica incide seriamente sobre la salud y sus indicadores, pues el hecho de no contar con ingresos regulares provenientes de un empleo, o vivir en la informalidad o subsistir bajo las condiciones de pobreza y pobreza extrema, configuran un espectro desfavorable para la salud de las personas.

#### **3.1 Indicadores de Estructura**

El Derecho a la salud está garantizado en La Constitución, el Código de Salud e instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – PIDESC-

La Constitución Política de la República de Guatemala se refiere a la salud en distintas partes pero con mandatos claros, entre los que se pueden mencionar: Artículo 51. Protección a menores y ancianos, garantizándoles su derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social.

En toda su Sección Séptima se refiere a la Salud, seguridad y asistencia social iniciando con el Artículo 93. Derecho a la salud, donde refiere que el goce de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna. En el Artículo 94. Obligación del Estado, sobre salud y asistencia social, menciona que el “Estado velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. Desarrollará, a través de sus instituciones, acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el más completo bienestar físico, mental y social.” El Artículo 95 declara que “la salud de los habitantes de la Nación es un bien público. Todas las personas e instituciones están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento”.

Otros artículos que se refieren a la salud son el Artículo 96. Control de calidad de productos, el Artículo 97. Medio ambiente y equilibrio ecológico, el Artículo 98 sobre la participación de las comunidades en programas de salud, el Artículo 99 sobre alimentación y nutrición menciona que “El Estado velará porque la alimentación y nutrición de la población reúna los requisitos mínimos de salud. Las instituciones especializadas del Estado deberán coordinar sus acciones entre sí o con organismos internacionales dedicados a la salud, para lograr un sistema alimentario nacional efectivo.”

El Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 12 y en el Protocolo de San Salvador, en su artículo 10, se refieren al derecho a la salud, mencionando que requiere el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; así

como el más alto nivel de bienestar físico, mental y social y que la salud debe ser reconocida por los Estados como bien público.

Además, mandata aplicar medidas para la reducción de la mortalidad infantil; higiene, trabajo y medio ambiente; prevención y tratamiento enfermedades epidémicas; creación condiciones asistencia y servicios médicos. Añade medidas de atención primaria en salud; educación a la población sobre prevención y tratamiento problemas de salud; satisfacción a grupos que por sus condiciones de pobreza son de más alto riesgo y vulnerabilidad.

El Código de Salud establece obligaciones individuales artículo 3) y del Estado (artículo 4) con participación de la comunidad (artículo 5), creando el sector salud. Establece en los artículos 21, 23 y 24 aspectos de financiamiento y específicamente en el 21 dice que "El Estado asignará los recursos necesarios para el financiamiento público de la prestación de servicios de salud, para atender a la población en general y, en forma prioritaria y obligatoria, a la de mayor postergación en su desarrollo social y económico".

**Institucionalidad encargada de velar por la salud:** El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es el ente encargado de garantizar el ejercicio del derecho a la salud de las y los habitantes del país, ejerciendo la rectoría del sector salud. Esto, a través de la conducción, coordinación, y regulación de la prestación de servicios de salud, y control del financiamiento y administración de los recursos para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, recuperación y rehabilitación de las personas, lo cual debe hacer con calidad, pertinencia cultural y en condiciones de equidad.

### 3.2 Indicadores de Proceso

Los indicadores de proceso en materia de salud, se refieren a todas las políticas, planes, programas, proyectos y acciones que las instituciones encargadas de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho específico realizan para ello. Contempla también el presupuesto que respalda el funcionamiento del Ministerio de Salud y Asistencia Pública y Social (MSPAS) y que a partir del funcionamiento de la entidad rectora del sector salud, la interacción de sus diferentes unidades y programas; y la colocación de recursos financieros para hacerlas efectivas, buscan incidir sobre la situación de salud de la población en sus diferentes localidades.

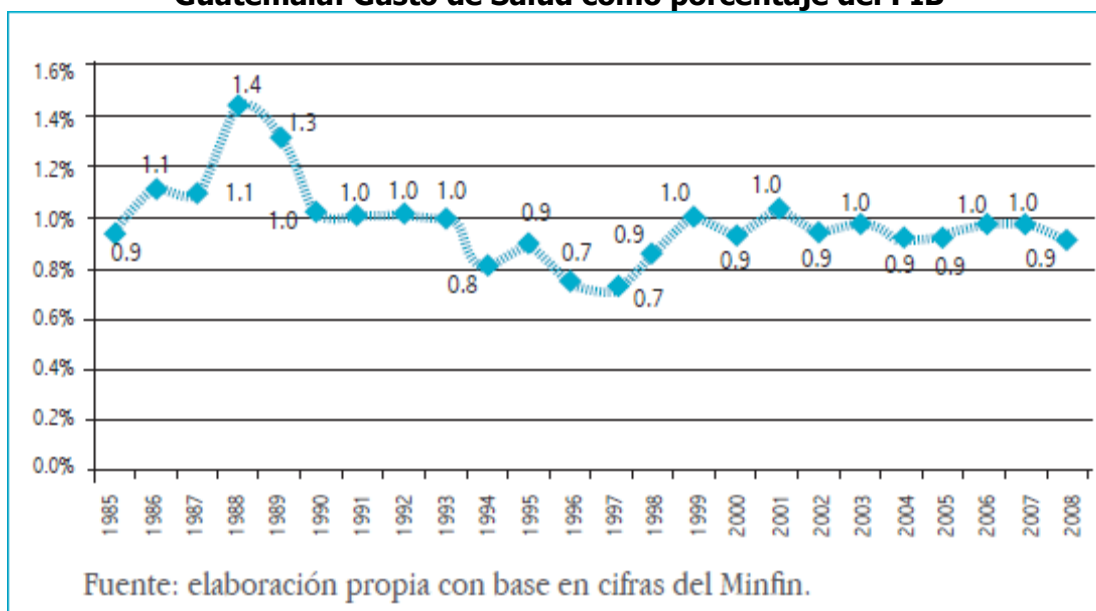
El MSPAS tiene nueve políticas mediante las cuales impulsa su accionar. Cuenta también con un Plan de Salud, una red de servicios (Primer, segundo y tercer nivel de atención y el servicio de extensión de cobertura).

Cuenta entre sus secciones administrativas con una Gerencia General Administrativo-Financiera, Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control en Salud y con una serie de normativas sobre atención, regulación y control de alimentos, autorización de establecimientos farmacéuticos y afines, medicamentos, registro sanitario de productos farmacéuticos, licencias sanitarias de alimentos, procesados y bebidas y otras más. Cuenta con 8 principales programas.

**El presupuesto del MSPAS:** Son las finanzas del MSPAS, las que permiten a la entidad consolidar su oferta de servicios de salud, su infraestructura y la dotación de sus recursos humanos, medicinas, insumos y exámenes de laboratorio, y cómo buscar modificar la matriz de salud de los habitantes.

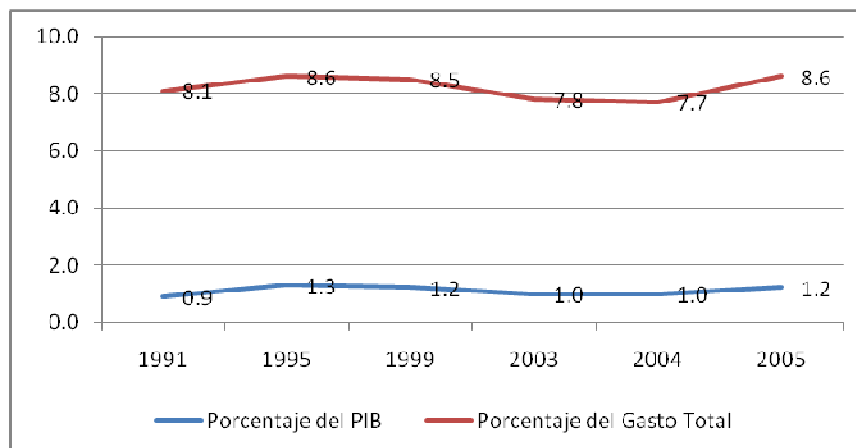
Aunque ha existido una enorme presión internacional y nacional por elevar el presupuesto sectorial de salud, los datos muestran que todavía sus cifras son sensiblemente bajas, no sólo en su comparación con el PIB, sino también en términos de su relación porcentual con el gasto total o el presupuesto nacional.

**Gráfica 15**  
**Guatemala: Gasto de Salud como porcentaje del PIB**



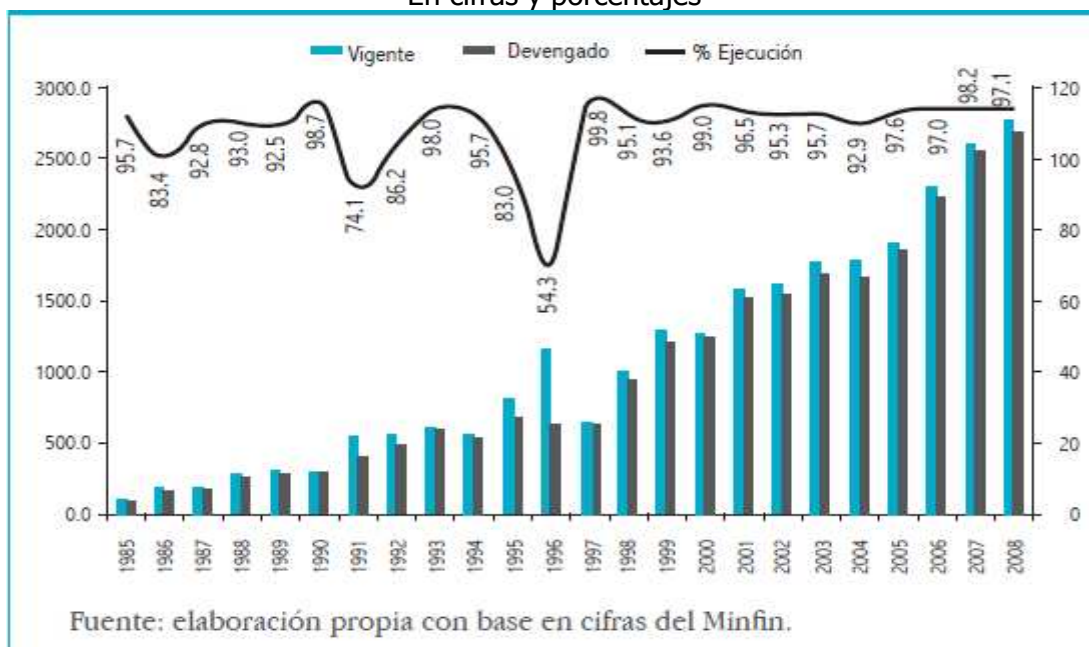
Igualmente, los indicadores que establecen la relación del gasto de salud con el gasto total del país, se pueden observar a continuación:

**Gráfica 16**



En cuanto al nivel de la gestión o ejecución del mismo en años anteriores, se observa que se alcanzan cifras de ejecución bastante altas; es decir, existe eficiencia en el uso de los recursos financieros asignados en el presupuesto respecto a su ejecución financiera.

**Gráfica 17**  
**Desempeño del presupuesto de salud en Guatemala**  
En cifras y porcentajes



Las cifras demuestran que, a partir del año 1998, el presupuesto vigente y devengado del MSPAS es prácticamente ejecutado en su totalidad, pues refieren porcentajes que no bajan del 90% entre 1998 y el año 2008, lo cual se debe a las carencias acumuladas por el sistema de salud.

Los datos del año 2009 muestran que el personal médico es el que menor número de personas cuenta con relación laboral permanente pues, de los números consignados, 43 médicos laboran bajo el renglón 011 o personal permanente, 34 trabajan bajo contrato 021, 4 médicos son contratados bajo el renglón 029. En lo que se refiere al resto de personal, la mayoría (fluctúa entre 77 y 100 personas), cuenta con una relación laboral permanente y las relaciones laborales temporales o por contrato son bastante bajas.

Adicionalmente se puede observar que, en materia de recursos humanos, existen brechas entre lo programado y lo ejecutado, principalmente en algunos departamentos del país en donde, en el caso de los médicos, se destaca un promedio de brecha del 49.4%; es decir, se deja de contratar alrededor la mitad de las personas programadas. En algunos casos esta cifra es altísima, como el caso de Sololá con el 87% de brecha, o la de Baja Verapaz con 71%.

En el caso de las enfermeras, la brecha es similar en promedio que la de los médicos (45.5%) y destacan los casos de Quiché (79%) y Baja Verapaz (73%). El promedio de brecha más baja se encuentra en el personal de auxiliares de enfermería con un 13.7%; a

pesar que existen brechas de no contratación de 24% en Totonicapán y 22% en Sololá y Baja Verapaz.

En lo que se refiere al Programa de Extensión de Cobertura (PEC), éste ha crecido relativamente poco en cuanto a la cantidad de municipios que el Programa cubre desde 1999, cuando inició con 176 municipios. En el año 2010 cuenta con un total de 205 municipios, es decir, creció en términos de magnitudes sólo en 29 municipios en 12 años, lo cual muestra avances poco significativos. Sin embargo, se ha ampliado el número de jurisdicciones (incluyen 10 mil habitantes cada una), las cuales pasaron de 252 jurisdicciones en 1999 a 404 en 2010; lo que implica un incremento de la cobertura en 152 jurisdicciones. Estos datos se incluyen en la gráfica siguiente.

En cuanto a una aproximación al presupuesto per cápita del MSPAS, éste presenta oscilaciones en su medición desde 1985 hasta el 2008, en donde su punto más bajo fue de Q.6.42 per cápita en 1997 y llegó hasta Q.12.10 en 1988.

**Gráfica 18**

Evolución del presupuesto devengado real del MSPAS *per cápita* (1985-2008) (en quetzales a precios de 1980)



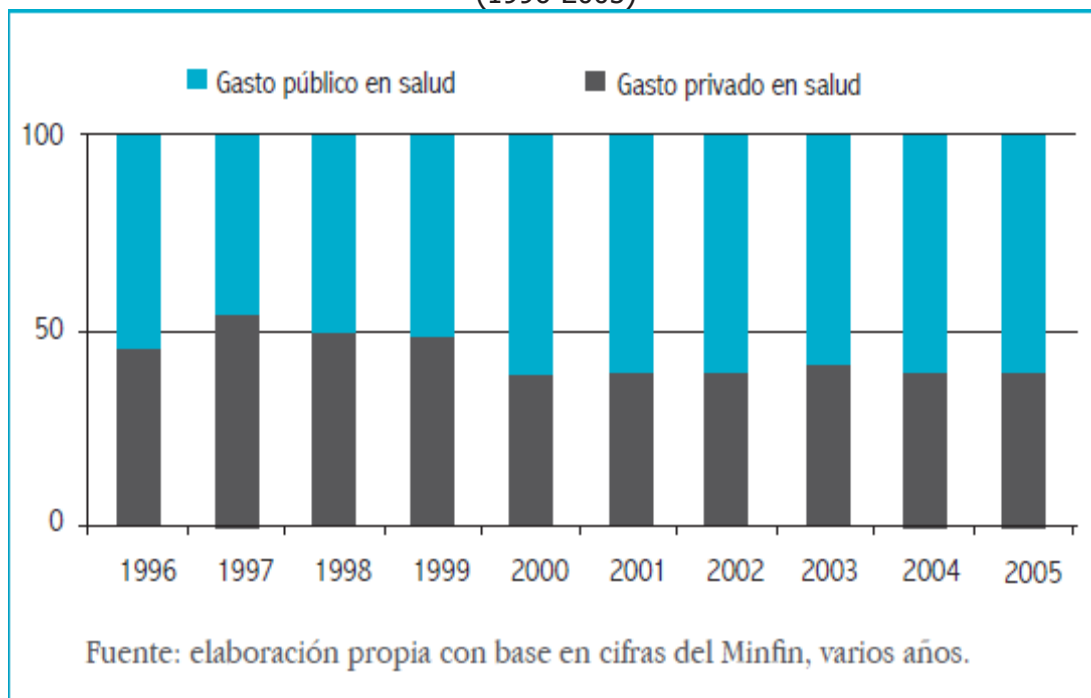
Fuente: elaboración propia con base en cifras del Minfin.

En lo que respecta a la relación entre **gasto público y privado en salud**, en Guatemala esta situación ha sido motivo de debate.

De acuerdo con las cifras presentadas por el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2010, el gasto privado en salud tuvo cierta mejoría entre los años 1996-1998, pero a partir de ahí inició su declinación; aunque llegó a significar arriba del 50% en relación al gasto público en 1997, bajó al siguiente año por debajo del 50% y luego, hasta el 2005, se ha mantenido en un promedio del 40%.

Mientras tanto, el gasto público en salud ha incrementado su participación, partiendo de un 40% en 1996, para mantenerse en un promedio del 60% entre los años 2000 y 2005, tal como se observa en la siguiente gráfica.

**Gráfica 19**  
**Gasto público y privado como porcentaje del gasto total en salud**  
 (1996-2005)



En lo que se refiere al destino del gasto en los hogares en materia de salud, se conoce que el gasto en salud es uno de los más significativos del gasto de los hogares debido a que el mismo implica, no sólo la visita a un centro de atención, sino adicionalmente la compra de medicinas y el pago de exámenes, por lo que el mismo se considera sensiblemente elevado.

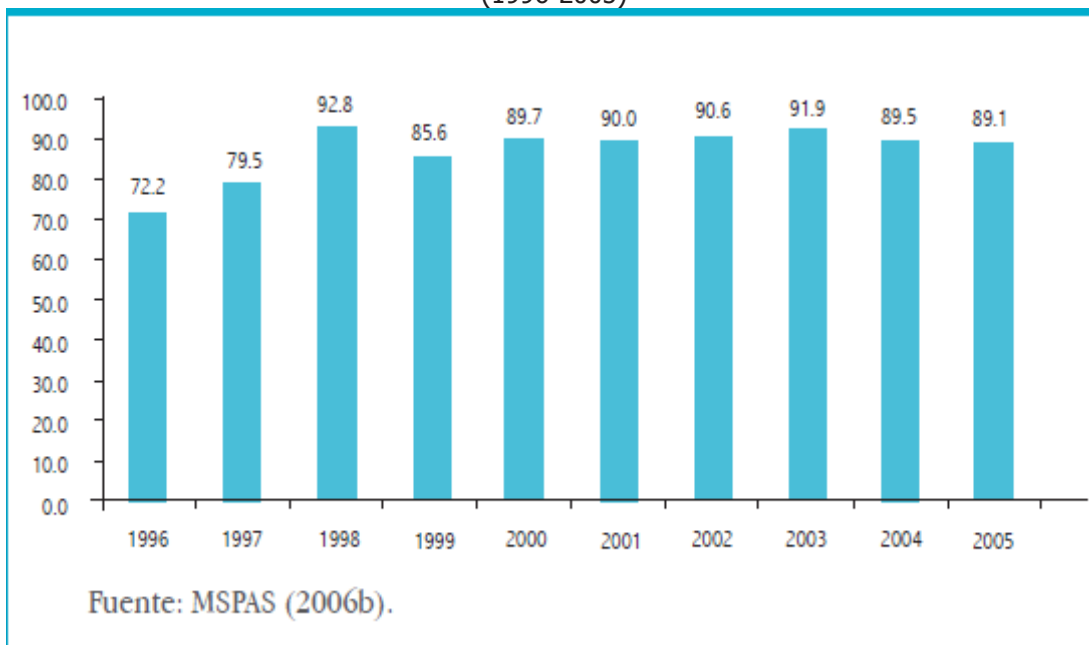
En la gráfica siguiente se observa que el gasto en salud, como porcentaje del gasto privado en salud, durante el primer año de la serie es de un 72.2% en 1996; sin embargo, el mismo ha mostrado una tendencia ascendente que lo ha llevado hasta un 89.1% en 2005; es decir, un crecimiento entre el primer y último año de la serie de 16.9%; incluso, en 1998 el gasto en salud repuntó hasta un 92.8%.

El promedio de la serie es de 87.1%, porcentaje que subraya la importancia e incidencia que tiene el gasto de salud en el gasto total de los hogares.

Estos datos sirven para reiterar la incidencia que tienen los indicadores de proceso y de resultado sobre la salud, pues si el nivel de gasto por hogar es en promedio alrededor del 87.1%, significa que las personas viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema, así como aquellos que se vinculan al mercado informal del trabajo y sin cobertura de la seguridad social, no cuentan con las posibilidades de cubrir el gasto en salud, por lo que requieren el apoyo de las instituciones de salud pública.

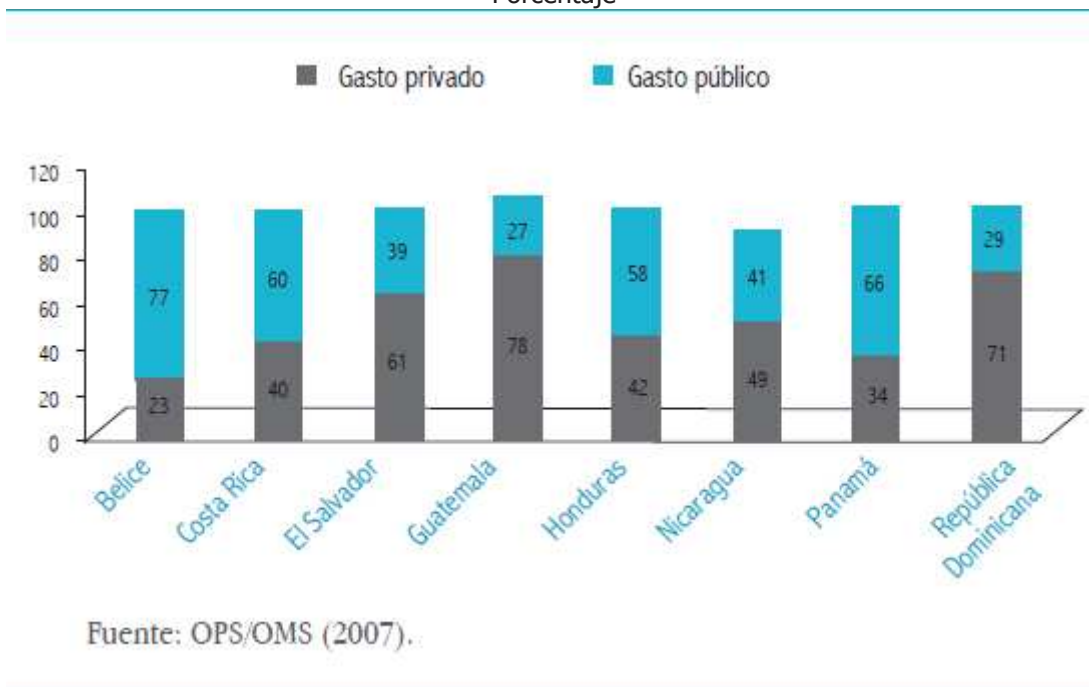


**Gráfica 20**  
**Gasto directo en salud de hogares, como porcentaje del gasto privado en salud**  
 (1996-2005)



Una comparación de la relación gasto público y privado en salud de Guatemala con otros países se incluye en la gráfica.

**Gráfica 21**  
 Proporción del gasto público y privado, países seleccionados de América Latina (2004)  
 Porcentaje



La cobertura de los servicios de atención en salud demuestran que la mayoría de personas se encuentran sin cobertura, hecho que revela las graves brechas que existen en materia de salud en el país: A pesar de la existencia del MSPAS, éste cubre hasta el año 2007 un 82% de la población, aunque apenas tenía un 25% desde 1989 hasta 1995.

Por otra parte, el IGSS presenta una cobertura declinante, pues aunque empieza en esta serie con 14% y sube hasta el 16% en el año 2000, luego cae hasta un 8% en el 2007.

El nivel de cobertura de entidades privadas también es decreciente, pues inicia con un 14% en 1992 y cae hasta el 4% en 2007.

En el caso del porcentaje de personas sin cobertura, se observa una tendencia favorable en el sentido que la misma declina desde un 46% en 1992 y registra un 6% en 2007, una situación positiva para el país y su población. Los datos se incluyen en la siguiente tabla.

**Tabla 6**  
Cobertura de atención en salud por subsector (1989-2007)  
Porcentaje

Institución	1989	1992	1995	2000	2003	2007
MSPAS	25	25	25	33	71	82
Igss*	14	15	15	16	8	8
Entidades privadas	ND	14	14	18	8	4
Subtotal cobertura	ND	54	54	67	87	94
Sin cobertura		46	46	33	13	6

Fuente: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan, 1991: 11); MSPAS (1993: 17); Friedrich Ebert Stiftung Guatemala (FES, 2000: 19-27); MSPAS (2005a: 12); MSPAS/CNE (2007: 529). \* Compare con datos de la gráfica 7.9

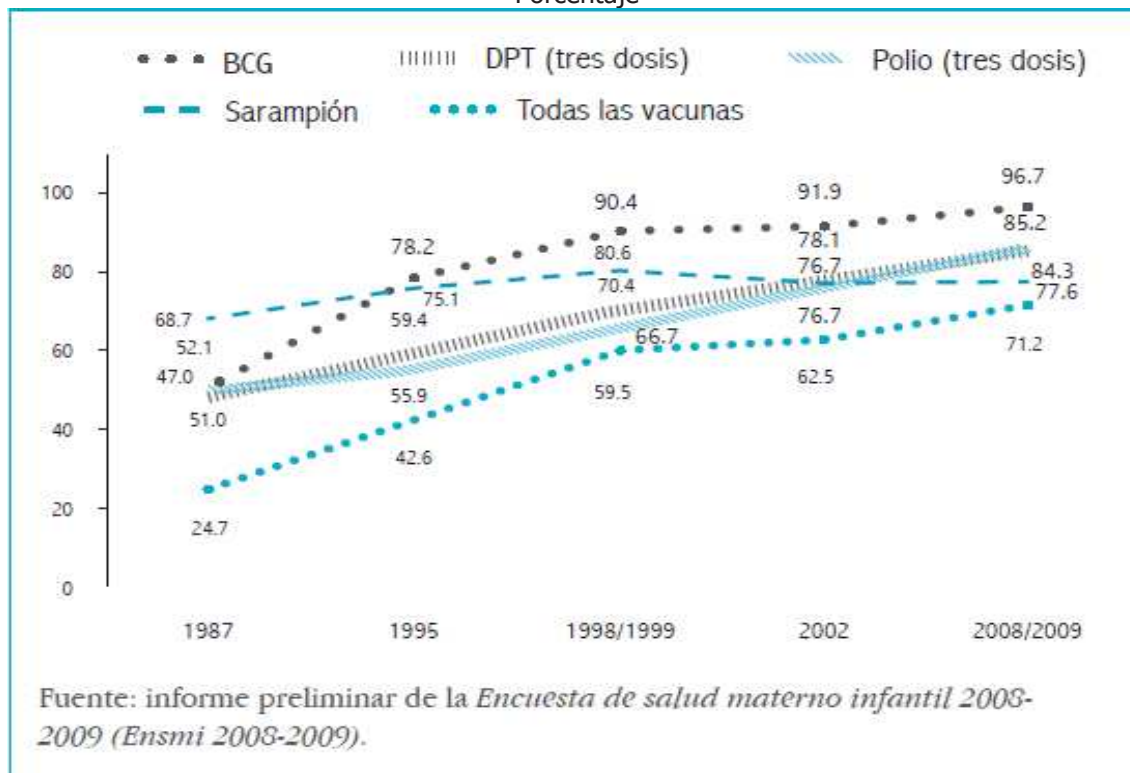
En relación al lugar al cual asisten las personas para su atención en salud, a nivel del país, el 57.3% de las personas asiste a un centro privado, mientras que un 42.7% asiste a un servicio público. Esta situación se acentúa en el área urbana, en donde el 64.4% se dirige a un centro privado, mientras que un 35.6% asiste a un servicio público.

En el área rural la relación se modifica, pero no significativamente, pues un 50.9% se dirige a un centro de atención público, mientras que un 49.1% se refiere en un centro privado.

En las áreas de población indígena, un 52.9% se ve obligado a acudir al sector privado, mientras que un 47.1% busca un centro público de atención en salud. En las áreas no indígenas la relación privado/público favorece al primero con un 60.3% contra un 39.7% en lo público.

**Coberturas de vacunación:** Las campañas de vacunación masivas buscan proveer de condiciones preventivas en la salud, principalmente de los niños entre 12 y 23 meses de edad, para que en su crecimiento no se vean afectados por enfermedades como la tuberculosis, la poliomielitis, el sarampión y otras similares.

**Gráfica 22**  
**Coberturas de vacunación en niños de 12 a 23 meses de edad (1987-2009)**  
 Porcentaje



Como se puede observar, en el primer año de la serie la cobertura de vacunación era significativamente baja en casi todas las vacunas, en donde la más alta era de 68.7% de cobertura de sarampión, mientras que el resto se encontraban cercanos al 50% (BCG, DPT y Polio); la medición promedio correspondiente a todas las vacunas se encontraba en un 24.7%.

Sin embargo, los datos para el año final de la serie, correspondiente a 2008/2009, muestra que el porcentaje más bajo es todavía la de todas las vacunas pero alcanzó el 71.2% y el resto de vacunas se observa una cobertura para los niños de 77.6% para Sarampión, 84.3% para DPT; 85.2% para la Polio y 96.7% para BCG. En este caso, si se puede señalar que ha habido una significativa mejoría en la cobertura de vacunación de los niños.

### 3.3 Indicadores de Resultado

Estos indicadores condensan toda la información sobre la situación de salud de un país, con lo cual se define el perfil de salud de una sociedad; muestran el estado de situación o la fotografía de las condiciones que sirven para demostrar cuál es el estado de la salud de una población.

En este sentido, es conveniente indicar que los indicadores de salud no muestran cambios significativos durante períodos cortos, sino los mismos son el resultado de esfuerzos permanentes de las autoridades de salud por erradicar, atenuar o eliminar determinados flagelos relacionados con la salud de las poblaciones; por ello los cambios en los indicadores de salud no se pueden apreciar de un régimen a otro, sino constituyen modificaciones que ocurren durante procesos relativamente largos de tiempo, es decir, en el mediano y largo plazo.

### 3.4 Causas estructurales que determinan la situación de la salud en Guatemala

Las condiciones de vida constituyen en que vive la mayoría de la población son las causas estructurales que determinan el lamentable estado en que el derecho a la salud se encuentra en Guatemala. Estas se encuentran en la matriz social caracterizada por la desigualdad como elemento fundamental de ésta; y de ahí sus expresiones de concentración de riqueza y poder, de pobreza y pobreza extrema y discriminación, exclusión y racismo.

En este sentido, uno de los flagelos de mayor incidencia en esa matriz social es la pobreza y la pobreza extrema, situación que no les permite a las personas cubrir sus necesidades básicas de alimentación; mucho menos pueden mantener sus gastos en materia de salud, con lo cual quedan a expensas de los servicios públicos de salud; si los mismos no cuentan con una cobertura universal y con carencias institucionales, de servicios de salud, de personal en salud, de medicamentos y de exámenes de laboratorio, entonces sus condiciones de acceso son sumamente reducidas.

Los datos e indicadores de pobreza permiten visualizar las cifras de esta problemática, tanto en la cantidad de habitantes, sus porcentajes con respecto al resto de la población y las condiciones particulares de las poblaciones que se encuentran en esa situación.

Gráfica 23  
Pobreza y pobreza extrema 2006  
En miles de habitantes y porcentajes

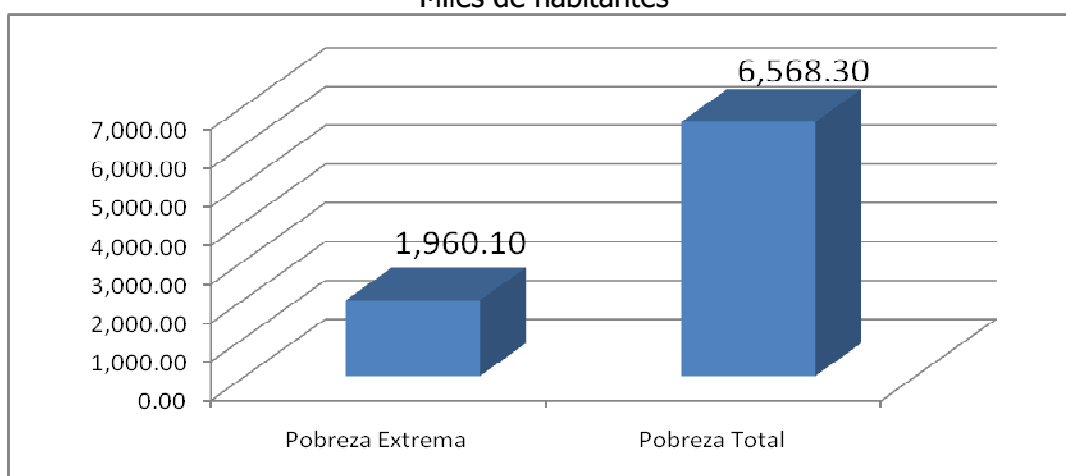
Concepto	Miles de habitantes		Porcentajes de población	
	Pobreza Extrema	Pobreza Total	Pobreza Extrema	Pobreza Total
Total del país	1,960.10	6,568.30	15.2	50.9
Sexo de la jefatura del hogar				
Masculino	1,744.40	5,578.70	16.7	53.3

Femenino	215.7	989.6	16.7	53.3
Área geográfica				
Urbana	331	1,866.80	5.3	30
Rural	1,629.10	4,701.50	24.4	70.5
Etnicidad				
Indígena	1,404.70	3,877.90	26.4	73
No indígena	555.0	2,684.30	7.3	35.5

Fuente: Informe Nacional de Desarrollo Humano, 2007/08. Guatemala

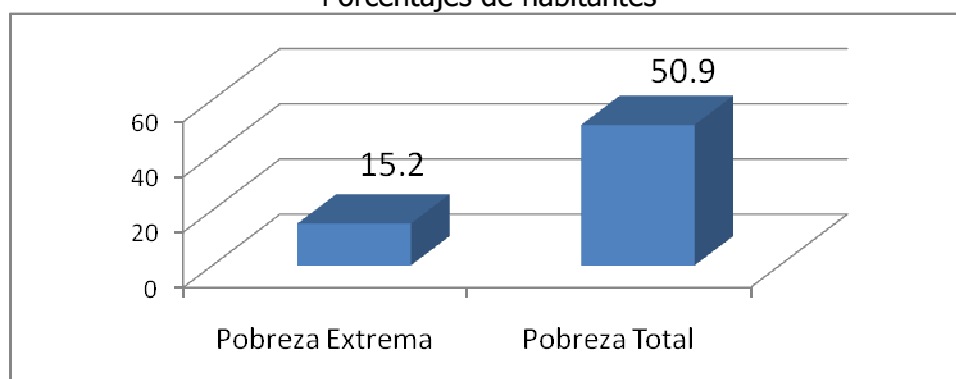
El hecho que exista 1.9 millones de personas en pobreza extrema y 6.5 millones de personas en pobreza total, significa que 8.4 millones de habitantes no consiguen cubrir sus necesidades básicas de alimentación y con ello se empiezan a mostrar los signos de la desigualdad que afecta seriamente las condiciones de salud de las personas.

**Gráfica 24**  
**Pobreza y pobreza extrema 2006**  
Miles de habitantes



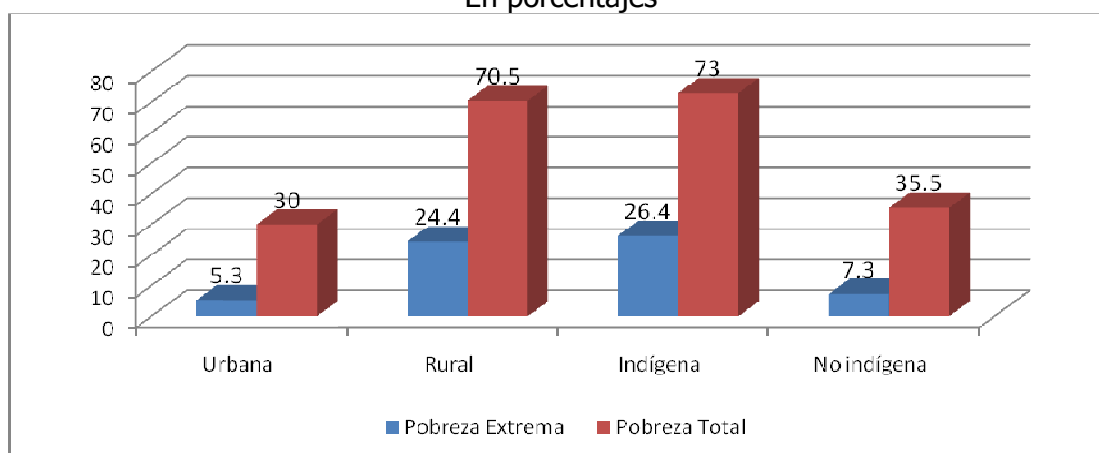
La representación porcentual de las cifras de la pobreza se incluye en la siguiente gráfica:

**Gráfica 25**  
**Pobreza y pobreza extrema 2006**  
Porcentajes de habitantes



Igualmente, la pobreza y extrema pobreza es diferente para las distintas regiones y realidades sociales en el país; las condiciones de vivir en el área rural, ser indígena y de condición vulnerable -niño, niña, mujer, anciano, viuda o discapacitado-, incrementa las debilidades de estas poblaciones y las aleja de las condiciones propias de la salud al no tener disponibilidad cercana de instituciones o de infraestructura de salud -puesto o centro de salud u hospital-, carencias de personal especializado -médicos, enfermeras, técnicos laboratoristas y otros similares- y escasa oferta de servicios de salud -insumos médicos, medicinas, exámenes de laboratorios y presupuesto en general-, con lo cual se condena a grandes contingentes de población, como los caracterizados, a encontrarse desprovistos de posibilidades concretas de salud y con ello el perfil de la salud de estos grupos se ve afectado en sus posibilidades de sobrellevar una vida digna y estable.

**Gráfica 26**  
**Pobreza y pobreza extrema 2006 por condiciones de la población**  
En porcentajes



Existen grandes diferencias entre la pobreza urbana y rural, tanto en sus expresiones de pobreza extrema, como de pobreza total e igualmente se puede constatar la diferencia entre la pobreza de los indígenas y de los no indígenas.

Otro de los rasgos críticos de la desigualdad es la informalidad en el mercado laboral. De hecho, muchas personas que no consiguen insertarse en la dinámica del mercado laboral formal, optan por realizar actividades fuera de aquél y de ahí su denominación de informal. Sin embargo, este mercado constituye el resultado de la exclusión de un sistema que, en lugar de absorber, rechaza y obliga a las personas a buscar formas alternativas de ganarse la vida.

Adicionalmente a las condiciones de pobreza, se puede indicar que existen otros aspectos que no contribuyen al perfil de salud de las personas, tales como la baja cobertura del seguro social en la mayoría de población y ello es aún más fuerte en la población rural e indígena. Por ello las tasas del seguro social para Guatemala, medidas en su relación con el PIB, constituyen una de las más bajas de la región centroamericana, tal como se puede observar en la siguiente tabla.

**Tabla 7**  
**Contribuciones a la seguridad social en Centroamérica**  
**Promedio 2000-2006**  
 Porcentajes del PIB

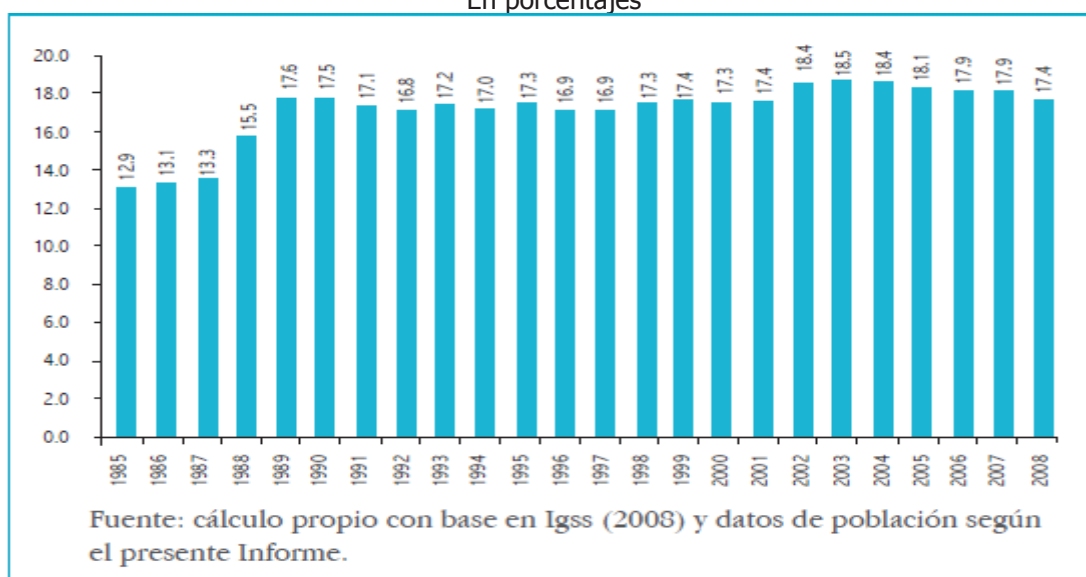
<b>Años/Países</b>	<b>Costa Rica</b>	<b>El Salvador</b>	<b>Guatemala</b>	<b>Honduras</b>	<b>Nicaragua</b>	<b>Panamá</b>
<b>2000</b>	5.9	2.1	1.5	n.d	n.d	6.4
<b>2001</b>	6.1	1.8	1.6	n.d	n.d	6.2
<b>2002</b>	6.3	1.8	1.4	n.d	3.9	5.9
<b>2003</b>	6.0	1.8	1.5	n.d	4.0	5.6
<b>2004</b>	5.9	1.7	1.7	1.4	4.0	6.1
<b>2005</b>	6.1	1.7	1.6	n.d	4.1	5.9
<b>2006</b>	n.d.	1.7	1.8	n.d	4.5	n.d
<b>Promedio</b>	<b>6.1</b>	<b>1.8</b>	<b>1.6</b>	<b>1.4</b>	<b>4.1</b>	<b>6.0</b>

Fuente: ICEFI

Los indicadores de las cuotas de seguro social sobre el PIB, indican que Guatemala junto con El Salvador (1.6% y 1.8%, respectivamente, como promedio en la serie), son los dos países que menos tasa de contribución a la seguridad social presentan, superados por el resto de países, en donde destaca el caso de Costa Rica, Panamá y Nicaragua con tasas promedio de 6.1%, 6.0% y 4.1%, respectivamente.

Igualmente, la baja cobertura de las tasas del IGSS en Guatemala, medido en términos de la población que se encuentra cubierta, se muestra en la siguiente gráfica:

**Gráfica 27**  
**Población total cubierta por el IGSS (1985-2008)**  
 En porcentajes



Los datos de cobertura de la gráfica anterior, muestran que el porcentaje más alto en la serie de 24 años es el 2003 con 18.5% de la población; sin embargo, este porcentaje se ha reducido paulatinamente a partir de ese momento y en el 2008 consigna un 17.4%. Igualmente, si se analiza toda la serie de casi un cuarto de siglo, coincidente con el período democrático, el nivel de cobertura pasó de 12.9% en 1985 a 17.4% en 2008, lo que significa que la cobertura ha crecido únicamente en un 4.5% en ese período, lo cual en términos de promedio implica un 16.8%.

**Desnutrición:** La desnutrición es uno de los flagelos de mayor vergüenza nacional. Esta condición de salud no ha dado muestras serias de revertirse a pesar que se ha creado legislación e instituciones que componen el Sistema Nacional, el Consejo Nacional y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y nutricional, a las que se les ha dotado de recursos financieros para atender esta situación social.

Las tasas de desnutrición crónica en el ámbito rural alcanzan en el 2008/2009 un 51.8%, lo cual denota que este flagelo constituye un resultado de una matriz social desigual y donde las realidades rurales, indígenas y de niños constituyen los sectores de población mayormente vulnerables.

Para profundizar más en las raíces sociales como sustento del fenómeno de la desnutrición, el hecho de que las personas no cuenten con educación agrava el problema. La tabla muestra un porcentaje del 62.9% en las personas sin educación y en la medida que las personas tienen mayor grado de escolaridad y se van adentrando en el ciclo educativo y sus diferentes niveles, los porcentajes de desnutrición crónica se reducen considerablemente.

En relación a la baja talla en niños menores de 5 años, comparado con indicadores de otros países y relacionados con el PIB per cápita, el caso de Guatemala es dramático, pues no sólo es alto en términos del porcentaje de niños menores de 5 años y con talla baja, sino además ubicado como uno de los países con menor PIB per cápita.

**Otros indicadores:** La salud en Guatemala, puede reflejarse en la serie de indicadores recolectados de diferentes fuentes y que permite evidenciar la gravedad de la situación en la materia, que se muestran en la tabla.



**Tabla 8**  
Indicadores de Salud de Guatemala

<b>Indicadores por Mortalidad</b>	<b>Indicadores de Resultado</b>
1. Mortalidad infantil (por c/1000 nacidos vivos)	34% (PNUD 2008/2009)
2. Mortalidad en mayores	50.2% (2000) MINSALUD
3. Mortalidad materna	153 por cada 100.0 niños nacidos vivos (2009) MINSALUD
<b>Indicadores de Natalidad y fecundidad</b>	
1. Natalidad	33.3% (2005) MINSALUD
2. Tasa global de fecundidad (país)	3.6 (ENSMI 2008/2009)
3. Fecundidad (urbana)	2.9 hijos por mujer (ENSMI 2008/2009)
4. Fecundidad (rural)	4.3 hijos por mujer (ENSMI 2008/2009)
5. Esperanza de Vida al Nacer	67.3 años (PNUD 2005)
<b>Indicadores de Morbilidad</b>	
1. Problemas infecciosos	
1.1 Diarrea	1er lugar país (PNUD 2008)
1.2 Infecciones respiratorias agudas	2o. lugar país (PNUD 2008)
1.3 Neumonías	3er. lugar país (PNUD 2008)
2. Enfermedades transmisibles	
2.1 Malaria	Endémica en 257 municipios del país (PNUD 2008)
<b>Indicadores de Enfermedades emergentes</b>	
1. VIH-SIDA (tasa nacional acumulada)	58.4% (1984-2004) (PNUD 2008)
2. Tuberculosis	3,313 casos nuevos y reincidentes (PNUD 2008) 27 por cada 100,000 habitantes (prevalencia)(PNUD 2008) 35% estimado de detección (OMS 2007)
3. Diabetes Mielitus	27,000 casos (PNUD 2008)
<b>Indicadores de Enfermedades Socioeconómicas</b>	
1 Desnutrición	
1.1 Retardo en talla en población pobreza extrema	63.5 % (PNUD 2008)
1.2 Retardo en talla en población en pobreza extrema	53.0 % (PNUD 2008)
1.3 Emaciación severa en población en pobreza extrema	3.9 % (PNUD 2008)

### 3.5 Mortalidad Materna

Uno de las expresiones de mayor debilidad en cuanto el estado de la salud en Guatemala es la mortalidad materna. La incidencia elevada de muertes de mujeres durante el proceso de parto, aunque ha venido mejorando en cuanto su reducción, todavía demuestra las grandes vulnerabilidades de la matriz de salud del país, del perfil de salud de la población y la mayor fragilidad en grupos como el de las mujeres, a lo cual habrá que sumar la condición de pobre e indígena, como elementos adicionales que configuran una situación sumamente difícil en el país.

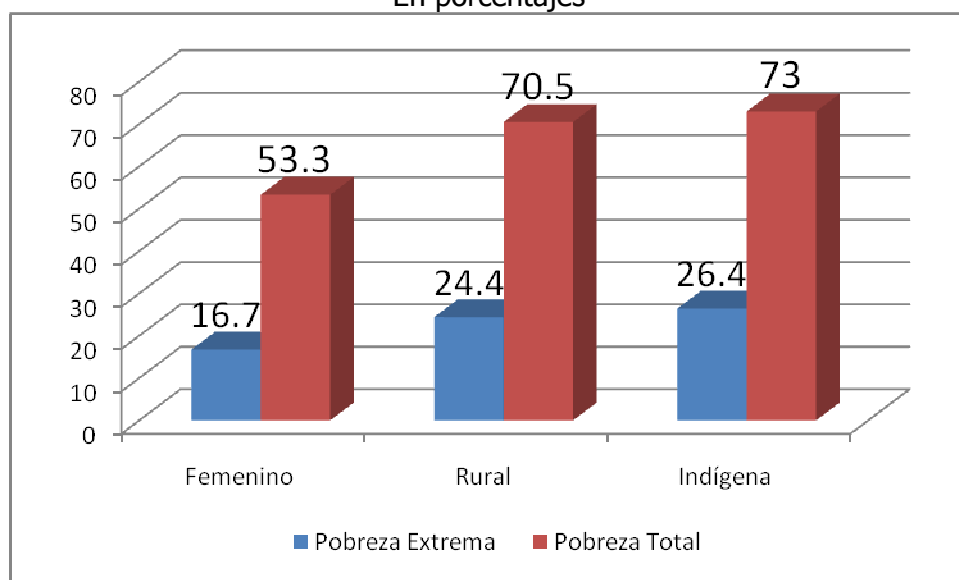
La problemática de la mortalidad materna no constituye un fenómeno que descansa en una sola causa, sino al contrario deviene de una conjugación de diferentes aspectos que inciden en el nivel de ocurrencia de la muerte materna.

El primer problema se inscribe en términos de la pobreza. De hecho, la mayoría de mujeres embarazadas del área rural no cuentan con los recursos que les permita movilizarse de su lugar de origen.

El 16.7% de la población femenina vive en condiciones de pobreza extrema, 24.4% de la población rural vive en pobreza extrema y 26.4% de la población indígena se encuentra en condiciones de pobreza extrema. El hecho de que el 53.3% de la población femenina del país vive en condiciones de pobreza, el 70.5% de la población rural tiene condiciones de pobreza y el 73% de la población indígena vive en pobreza está ligado directamente con la mortalidad materna.

**Gráfica 28**

Las mujeres como grupos vulnerables por diferentes condiciones socioeconómicas y de género  
En porcentajes



Walter Flores, un investigador especialista en la evaluación de inequidades de la salud, reflexionando acerca de la salud en Guatemala señala que: "...si se empieza a revisar el avance histórico del sistema de salud en varios país de América Latina, la mayoría pasó por la fase en que tuvieron una población excluida que poco a poco se fue integrando en el sistema y así fue como mejoraron sus sistemas de salud. Sin embargo, en Guatemala, eso no sucedió, no porque no se pudiera, sino porque intencionalmente no se le puso atención, porque quien sufre la exclusión es la población indígena y esta nunca ha sido tomada en cuenta en sus derechos ciudadanos (y económicos y sociales)<sup>2</sup>."

**Tabla 9**

Porcentaje de acceso y cobertura de servicios de salud en Guatemala

Acceso de la población guatemalteca a servicios de salud	89.7% (2004)
Cobertura de población con servicios del MSPAS	47.4% (2004)
Cobertura de población por Programas de extensión del MSPAS	23.7% (2004)
Cobertura de población por el IGSS	10.4% (2004)
Cobertura de población servicios privados	8.1% (2004)

Fuente: Elaboración propia en base al Informe Nacional de Desarrollo Humano. Diversidad Etnico-cultural; La Ciudadanía en un Estado plural. Guatemala, 2005.

De acuerdo al Relator Especial de Salud de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Anand Grover, después de su misión a Guatemala, en mayo de 2010, "Los tres aspectos en los que se observan importantes disparidades son: en el derecho a la salud de los pueblos indígenas, la salud de las mujeres, particularmente la salud sexual y reproductiva y el acceso a los medicamentos"<sup>3</sup>.

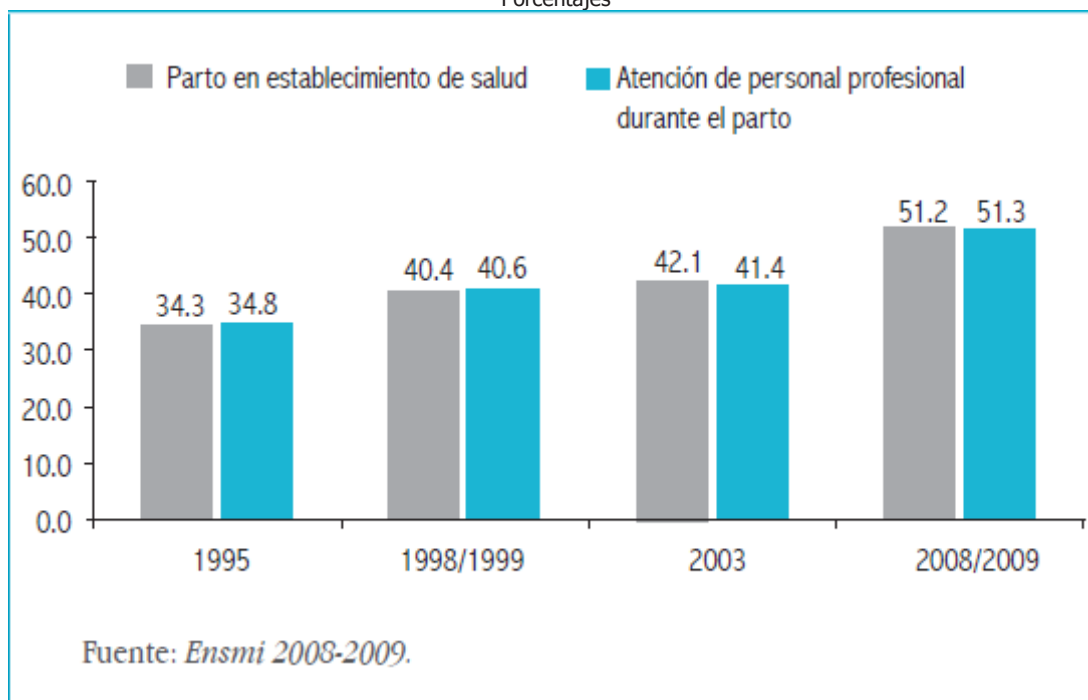
Otra grave dificultad para la población y al mismo tiempo negación a sus derechos, es la dificultad de acceso a los servicios de salud, lo cual alude al problema de la realidad rural, en donde los servicios se encuentran alejados del lugar de residencia de las mujeres.

Aunque la atención del parto en establecimientos de salud ha venido mejorando paulatinamente, todavía sus cifras son bastante bajas, lo cual demuestra que las condiciones de desigualdad como la pobreza, la situación de vivienda precaria, las carencias de servicios de drenajes, agua potable y la atención del parto fuera de las instalaciones del servicio de salud más cercano, sumado a la práctica del alumbramiento por personas no necesariamente capacitadas o con insuficientes herramientas y condiciones técnicas, configuran un espectro difícil de superar y del cual Guatemala todavía se resiente seriamente.

<sup>2</sup> Atrapados en la enfermedad. Nora Martínez. La Revista Diario de Centroamérica. Guatemala, 8 de julio de 2011.

<sup>3</sup> Ibídem.

**Gráfica 29**  
**Atención de parto en establecimiento de salud**  
 Porcentajes



Tal como se indicó, aunque la presencia de las mujeres embarazadas en establecimientos de salud del MSPAS y con atención profesional durante el parto ha subido considerablemente, todavía el nivel es bastante bajo. El porcentaje mayor muestra un 51% para los años 2008/2009, lo cual implica que ha mejorado en un 16%, a partir del año 1995, cuando empezó con 34%.

Ello significa que la mitad de las mujeres embarazadas todavía no asisten o no pueden acceder a un centro especializado de salud y mucho menos a la atención profesional de un médico tratante. Sobre este aspecto, de "...las mujeres embarazadas que siguen teniendo el parto en el hogar: un porcentaje pequeño es porque lo quisieron así; pero existe un índice de 40% de partos que continúan atendiéndose en los hogares, lo cual no garantiza condiciones óptimas de higiene y atención<sup>4</sup>".

En cuanto el acceso a los servicios de salud, éste es otro de los factores que inciden sobre la mortalidad reproductiva, pues además de las condiciones socioeconómicas de pobreza y pobreza extrema, la baja incidencia en términos de la educación en las áreas rurales, las regiones indígenas y en particular en las mujeres, se puede observar que el acceso a los servicios de salud también es complejo, costoso y conlleva tiempo.

El caso de la mortalidad materna constituye uno de los indicadores de salud que mayor relación tienen que ver con la temática social y cultural. Además, el índice de mortalidad materna es de 153 muertes de mujeres por cada 100 mil niños nacidos, la mortalidad

<sup>4</sup> *Ibíd.*

materna es tres veces más alta entre mujeres indígenas, el que presenta un indicador de 211 muertes maternas por 100 mil niños nacidos vivos, mientras la mujeres no indígenas tienen un indicador de 70 muertes maternas por 100 mil nacidos vivos.

El 52 por ciento de las muertes maternas ocurre el mismo día del parto y en siete departamentos del país, este indicador es superior al promedio nacional, con tasas que van de 266 a 162 casos por 100 mil nacidos vivos y cinco de esos departamentos tienen población mayoritariamente indígena.

Dentro de las complicaciones que inciden sobre la mortalidad materna se encuentran: la hemorragia, que puede producirse en ausencia de centros de emergencia, falta de acceso a los servicios de salud, carencia de bancos de sangre o los elevados costos para la mayoría de familias de acceder a servicios médicos y transporte eficiente.

A estos problemas se une la cuestión de falta de pertinencia en los servicios de salud, como por ejemplo la barrera del idioma, pues la mayoría de las mujeres indígenas son monolingües en un idioma maya y el Estado aún no implementa programas bilingües que respondan a sus necesidades culturales.

Otro aspecto que influye seriamente sobre los problemas de mortalidad materna, se inscribe en la poca incidencia que se ha mostrado en cuanto profundizar los esquemas preventivos de salud, en cuanto muchos de los indicadores de salud podrían reducirse considerablemente si se mejorara el planteamiento y tratamiento preventivo, el cual lleva aparejado un proceso de capacitación en salud sexual y reproductiva, tal es el caso del cáncer de cérvix, hecho que puede reducirse considerablemente por medio de jornadas de capacitación para su detección temprana.

En Guatemala, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN), se señala que más de 700 mujeres son diagnosticadas anualmente con cáncer de cérvix, que no tienen registros de los hospitales públicos y privados.

## **4. El derecho a la educación en Guatemala**

### **4.1 Importancia de la educación para el desarrollo**

La educación puede ser conceptualizada desde distintos ángulos. Denominador común en cualquier definición es su fundamental importancia para el desarrollo personal de los individuos y el desarrollo social y económico de un país.

Una apreciación considera a la educación como el proceso de socialización del conocimiento, hábitos y cultura de los individuos. Comprende no solo el aprendizaje de conocimientos sino también una concientización de la cultura y la conducta dentro de la sociedad y el mundo en

que vive. El proceso se expresa en habilidades y valores que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo.<sup>5</sup>

Por su parte, Jaques Delors, en un Informe de la Comisión Internacional sobre Educación para el Siglo XXI de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO)<sup>6</sup> plantea que los cuatro pilares de la educación son: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. El informe menciona el concepto de Educación para toda la Vida y dice que "La educación durante toda la vida se presenta como una de las llaves de acceso al siglo XXI. Esta noción va más allá de la distinción tradicional entre educación básica y educación permanente, y responde al reto de un mundo que cambia rápidamente..." y agrega... "Pero esta afirmación no es nueva, puesto que en anteriores informes sobre educación ya se destacaba la necesidad de volver a la escuela para poder afrontar las novedades que surgen en la vida privada y en la vida profesional. Esta necesidad persiste, incluso se ha acentuado, y la única forma de satisfacerla es que todos aprendamos a aprender."

Pero la educación no solo significa un baluarte para el desarrollo personal, sino también económico y social. Según el PNUD en su Informe sobre Desarrollo Humano 2010, la salud y la educación impulsan el desarrollo humano y "De hecho, siete países llegaron a los primeros 10 puestos gracias a sus logros en dichos ámbitos y, en muchos casos, en un contexto de crecimiento normal."<sup>7</sup>

Esa importancia de la educación para el desarrollo explica que, en septiembre de 2000, 189 Jefes de Estado y de gobierno adoptaron la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas en la que se incluyen compromisos de cooperación internacional en temas como desarrollo y erradicación de la pobreza; protección del medio ambiente; derechos humanos, democracia, gobernabilidad, entre otros.

La declaración planteó una serie de objetivos que se transformaron en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Los objetivos, y sus metas e indicadores asociados, son compromisos relacionados con el hambre y la pobreza extrema; la educación básica; la equidad de género; la mortalidad infantil; la salud materna; el VIH y el sida, el paludismo y otras enfermedades; la sustentabilidad ambiental; y las alianzas mundiales para el desarrollo.

Además de ser un derecho garantizado en las leyes nacionales e internacionales, no se duda de la importancia de la educación como herramienta indispensable para el desarrollo.

---

<sup>5</sup> Dra. Martha Arana Ercilla, MSc. Nuris Batista Tejeda, Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la Educación la Ciencia y la Cultura, *Educación en valores: una propuesta pedagógica para la formación profesional*, José Javier Castilla, *La Vulnerabilidad del menor X: la educación, aproximación al concepto*, y otras obras.

<sup>6</sup> Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, *La educación encierra un tesoro*. Informe a la UNESCO de la Comisión firmada por Jaques Delors, presidente de la Comisión.

<sup>7</sup> PNUD, Informe sobre Desarrollo humano 2010, *La verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano*, pp. 3 y 4.

## 4.2 Marco jurídico.

El derecho a la educación se garantiza jurídicamente en el marco normativo nacional e internacional. La Constitución Política de la República de Guatemala se refiere a este derecho en el artículo 2, y se regula en la sección cuarta del Título 2, artículos 71 al 81. La educación universitaria lo está en la sección quinta, artículos 82 hasta el 90 de la Constitución.

La Constitución en los artículos 74 y 75 expresa que la educación es un derecho; también que es una obligación de todos los guatemaltecos recibir la Educación Inicial, Preprimaria, Primaria y Básica por parte del Estado. Este se encuentra comprometido a la promoción de la Educación Diversificada, Especial y Extraescolar o Paralela.

El derecho a la educación se encuentra contemplado en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que además en el numeral 2 del mismo artículo, define también la característica principal de lo que posteriormente se desarrollará como la educación en derechos humanos. También el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), ambos, en su artículo 13, instituyen la obligatoriedad del Estado de proporcionar la enseñanza primaria asequible y gratuita.

En cuanto a la legislación específica en Guatemala, la Ley de Educación Nacional, Decreto Legislativo No. 12-91, entró en vigencia el 12 de enero de 1991. La Ley norma principalmente el acto educativo y se regula en el Reglamento de la Ley de Educación, también en el Estatuto Docente (Decreto No. 1485)<sup>8</sup> y la Ley de Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza y sus reformas.<sup>9</sup>

El Ministerio de Educación es la institución responsable de coordinar y ejecutar las políticas educativas, determinadas por el Sistema Educativo del país<sup>10</sup> y encargado de planificar, organizar, ejecutar, regular y evaluar los procesos de enseñanza que se dan a través de las escuelas, institutos públicos, privados o por cooperativa como modalidades por medio de las cuales se implementa el proceso educativo a nivel nacional. La Ley de Educación Nacional también expresa que la estructura del Sistema Educativo Nacional se integra por el Ministerio de Educación, la Comunidad Educativa y los Centros Educativos.<sup>11</sup>

## 4.3 Programas, proyectos y presupuesto del Ministerio de Educación

El Mineduc cuenta con programas y proyectos, lo cuales se ejecutan con un presupuesto general aprobado por el Congreso de la República que para 2011 es inicialmente de 9 mil 323 millones, 167 mil 893.00 quetzales. En junio el presupuesto vigente es de 9 mil 351 millones 667 mil 893.00 quetzales.

---

<sup>8</sup> Estatuto Provisional de los Trabajadores del Estado, Capítulo de la Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional, Decreto Legislativo 1485 aprobado el 31 de agosto de 1961. Regula especialmente el sistema de escalafón del magisterio nacional.

<sup>9</sup> Decreto Legislativo Número 17-95 reformado mediante Decreto Legislativo Número 55-2007 el 7 de noviembre de 2007.

<sup>10</sup> Artículo 8. de la Ley de Educación Nacional

<sup>11</sup> Ley de Educación Nacional, Artículo 5. Estructura.

Los mayores programas que tiene el Ministerio de Educación a su cargo son el de Educación Primaria y el Fondo Social Mi Familia Progresá. La priorización de la escuela primaria se ha dado luego de la firma de los Acuerdos de Paz y se explica por los compromisos contraídos sobre la prioridad de alcanzar la cobertura universal del nivel primario. El Programa Mi Familia Progresá es un proyecto implementado por el actual Gobierno y el presupuesto se utiliza para cubrir las transferencias condicionadas.

Lo anterior genera que exista falta de atención a los programas de Educación Preprimaria y Educación Básica, debido a la insuficiencia del Gasto Público para avanzar en la erradicación de los altos índices de pobreza, extrema pobreza, desnutrición, falta de educación y alfabetización, entre otras carencias de la población.

Ello afecta también el mandato constitucional de la gratuidad de la educación impartida por el Estado y los programas de alfabetización, pese a que ésta fue declarada de urgencia nacional,<sup>12</sup> a la enseñanza bilingüe que debe impartirse en las zonas de población indígena mayoritaria<sup>13</sup>, la promoción de la superación económica y cultural del magisterio y otras obligaciones constitucionales en materia educativa.

Los programas que tiene a su cargo el Ministerio de educación y el presupuesto asignado y ejecutado hasta el 29 de junio de este año se encuentra en la tabla 10.

El presupuesto del Ministerio de Educación se redujo inicialmente en 2011 respecto al último presupuesto vigente de 2010 (de 9 mil 349 millones, 594 mil ,610.99 quetzales), aunque aumentó de manera muy poco significativa en relación al ejecutado, ya que se ejecutaron 9 mil 162 millones 555 mil 754.76 (98.00%). En el mes de junio, con las modificaciones aprobadas, el presupuesto del Ministerio recuperó los niveles del año anterior e incluso es ligeramente superior al presupuesto vigente en diciembre de 2010.

El presupuesto ejecutado hasta el mes de junio por el Mineduc alcanzó el 48.11%, lo que significa un avance, pues en marzo apenas se había ejecutado el 15.02%. Al finalizar el semestre se puede decir que la ejecución del Mineduc en 2011 podría alcanzar el 100%, siempre que los programas que tienen baja ejecución mejoren sustancialmente su dinámica.

---

<sup>12</sup> Constitución, Artículo 75.

<sup>13</sup> Constitución, Artículo 76.



**Tabla 10**  
**Programas del Ministerio de Educación y su presupuesto**  
**Período enero-junio de 2011**  
 En moneda nacional

<b>Programa</b>	<b>Presupuesto Vigente junio 2011</b>	<b>Presupuesto devengado 29/06/2011</b>	<b>% Ejecución</b>
Actividades Centrales	354,480,901.00	154,435,492.45	43.57
Actividades comunes a los programas 11 y 12	98,099,066.00	42,284,738.35	43.10
Actividades comunes a los programas 12, 13 y 145	266,949,461.00	88,814,457.4	33.27
Actividades comunes a los programas 11, 12, 13 y 14	143,020,156.00	48,354,303.48	33.81
Educación Preprimaria	998,315,019.00	493,167,040.32	49.40
Educación Primaria	5,020,794,515.00	2,456,398,948.47	48.92
Educación Básica	836,090,969.00	329,009,025.80	39.35
Educación Diversificada	301,710,818.00	133,327,594.16	44.19
Educación Extraescolar	75,069,606.00	26,669,432.11	35.53
Educación Inicial	32,504,181.00	12,006,986.95	36.94
Fondo Social Mi Familia Progresá	1,026,242,450.00	625,692,619.10	60.97
Partidas No Asignables a Programas	198,390,751.00	88,895,005.63	44.81
<b>Total</b>	<b>9,351,667,893.00</b>	<b>4,499,055,644.29</b>	<b>48.11</b>

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Finanzas Públicas

El presupuesto del Ministerio de Educación, aprobado inicialmente por el Congreso de la República, ha sido tradicionalmente el más alto de todos los Ministerios. También tiene la característica de ser ligeramente progresivo en relación con el presupuesto nacional del período 2006-2011, aunque en 2010 y 2011 aumentó más que en años anteriores por las transferencias condicionadas. Sin embargo, no es progresivo considerando la relación del

presupuesto del Ministerio respecto al Producto Interno Bruto, pues en este caso ha tenido altibajos y el cálculo del PIB por el Ministerio de Finanzas Públicas, para elaborar la propuesta de presupuesto, fue estimado por debajo de lo que sería en realidad.

El gasto público en educación se ha estancado en menos del 1.5% del PIB. Los recursos no garantizan la existencia de escuelas y programas de enseñanza en cantidad suficiente y a disposición de todos los niños y niñas, jóvenes y adultos así como de la infraestructura adecuada y cantidad de docentes.

**Tabla 11**  
**Presupuesto anual del Ministerio de Educación**  
**y su relación con el PIB y el presupuesto total del Gobierno Central**  
 Período 2006-2011  
 En moneda nacional y porcentajes

<b>Año</b>	<b>PIB Estimado según presupuestos aprobados</b>	<b>Presupuesto Aprobado Educación</b>	<b>Presupuesto Nacional Aprobado</b>	<b>% respecto al PIB</b>	<b>% respecto al total del Gobierno central</b>
2006	414,743,481,273.00	5,217,410,830.00	37,703,952,843.00	1.26%	11.00%
2007	459,988,224,684.60	5,217,410,830.00	37,703,952,843.00	1.13%	12.20%
2008	531,693,190,575.00	6,500,046,382.00	42,535,455,246.00	1.22%	12.50%
2009	641,428,088,452.80	7,578,114,632.00	49,723,107,632.00	1.18%	12.90%
2010	512,179,809,400.00	7,578,114,632.00	49,723,107,632.00	1.48%	15.24%
2011	s/d	9,323,167,893.00	54,390,896,574.00	s/d	17.14%

Fuente: Elaboración propia con datos de los Presupuestos de Ingresos y Egresos del Estado de cada año.

Una mayor inversión continúa siendo el mayor reto de la educación, pues la educación pública necesita más recursos para avanzar en el combate a los rezagos estructurales y cubrir las nuevas necesidades que surgen cada año en el incremento de la cobertura y la calidad de la enseñanza.

#### **4.4 Situación de la educación**

Los rezagos de la educación en Guatemala son históricos y tienen una explicación estructural. Para mostrar esa aseveración, basta mencionar la situación en que se encontraba el derecho a la educación en Guatemala en el año 1986, cuando el alto índice de analfabetismo afectaba a más de un tercio de la población guatemalteca lo cual obligó la creación del Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA).

En 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz y se asumieron compromisos en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. En ese año los indicadores de educación expresaban una tasa neta de escolaridad (TNE) alrededor de 69.1 a 72.2%. Ya para el año 2006 alcanzaba el 93.9 a 95.5%<sup>14</sup>, en otros estudios se consideraba que en 2009 se había alcanzado el 98.3% en el nivel primario, lo que acerca al país a la cobertura universal.<sup>15</sup>

En cuanto a los aspectos de eficiencia del sistema educativo, en 2006 se podía apreciar ya un significativo avance en la reducción de la deserción escolar, aunque con problemas en el área rural y una aguda dificultad de repitencia escolar que generaban ineficiencia del sistema.

En 2006 la necesidad de mejorar la calidad educativa se hacía evidente. También mejorar las condiciones de las escuelas con el objetivo de propiciar un espacio adecuado para realizar el proceso educativo en mejores condiciones. Otro aspecto relacionado con la calidad residía en la necesidad de mejorar la formación y actualización docente y propiciar un mayor liderazgo por parte de los directores en materia de educación y relación con sus comunidades.<sup>16</sup>

Se observaba también que el sistema educativo reproducía y reproduce el patrón de desigualdad que caracteriza al país entero en relación al acceso, permanencia, calidad e inversión del Estado que afectaba principalmente a las familias pobres, del área rural, indígenas y a las niñas en todos los niveles y por tanto, también en el nivel primario, lo que propicia la reducción de posibilidades de ingresar y permanecer en la escuela, así como de tener un buen desempeño escolar.

En relación a la inversión se notaba, y todavía es notoria, una inversión por debajo de las necesidades de educación de la población y para alcanzar metas educativas más ambiciosas, como la cobertura universal, no solo del nivel primario, sino también en los niveles de preprimaria, básicos y diversificado.

#### **4.4.1 Persiste el abandono de la educación preprimaria, básica y diversificada**

La priorización del nivel primario explica por qué el Estado de Guatemala ha conseguido avanzar a un paso de lograr la cobertura universal de ese nivel, aunque adolece de insuficiente calidad.

Por su parte los avances en los programas de Educación Preprimaria, Educación Básica y Diversificada han sido insuficientes debido al reducido presupuesto con el que cuentan.

---

<sup>14</sup> USAID-AED, Estado del Sistema Educativo en Guatemala 2007 con fuente en Memoria de Labores 2006 del Ministerio de Educación.

<sup>15</sup> SEGEPLAN, Tercer Informe de Avances en el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sobre el Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.

<sup>16</sup> *Ibíd.*

En el ciclo escolar 2008, en el sector educativo de preprimaria, la cantidad de establecimientos de este nivel fue de 7 mil 993. La suma de población atendida por el sector público fue de 310 mil 818 personas; mientras la cantidad de alumnos que atendió el sector privado fue de 88 mil 985, lo que hace un total de 399 mil 803. Esto lleva a concluir que en el nivel preprimario se atendió sólo al 47.27% de la población comprendida en el rango de 5 y 6 años.

El sector de preprimaria bilingüe del sistema público está dando todavía los primeros pasos. Los datos proporcionados indican que en el nivel preprimario bilingüe sólo había 2 mil 818 establecimientos con 3 mil 243 maestros. En 2008 se atendieron en el sector público 76 mil 919 niños y niñas y en el sector privado 1 mil 198 para un total de 78 mil 117, cifra que muestra el escaso sector de población indígena atendido ese año. Los libros son caros y muy pocos se encuentran escritos en idiomas indígenas, lo que dificulta el aprendizaje y los maestros carecen de una preparación en educación bilingüe.

En el nivel medio, la población estimada que demanda educación en este nivel era de 1 millón 076 mil 183 entre los 13 y 15 años. El nivel medio o educación básica es poco atendido por el Estado en Guatemala, particularmente en el área rural. Se atendió en el sector público a 180 mil 565 estudiantes. Mientras, el sector privado atendió a 279 mil 456 estudiantes en toda la República y 153 mil 743 por institutos por cooperativa, lo que significa que el sistema educativo en general acogió a 613 mil 764 estudiantes, una cobertura total baja, el 57.03% de la población estimada en estas edades.

Una situación similar ocurre en el Ciclo Diversificado en donde el sector privado y por cooperativa tiene una cobertura importante. El sector público atendió a 53 mil 110 estudiantes, el privado a 224 mil 873 y los institutos por cooperativa a 11 mil 049. Esto hace un total de 289 mil 032 estudiantes en este nivel cubiertos por el sistema educativo en general, lo que significa el 29.51% (289 mil 032) de la población que demandó este servicio entre las edades de 16 a 18 años (979 mil 180). Esto muestra la grave deficiencia del sistema educativo en este sector.

El Ministerio de Educación debe hacer mayores esfuerzos por proponerse nuevas metas mucho más ambiciosas para lograr la cobertura total de estos niveles para que la educación pueda tener más cobertura y calidad.

#### **4.4.2 Perduran grandes carencias en la calidad de la educación**

La calidad educativa no ha sido mejorada, aunque se ha creado el Viceministerio de Diseño y Verificación de la Calidad Educativa y se cuenta con algunos diagnósticos e indicadores de calidad.

En 2008 fueron inscritos un total de 336 mil 114 alumnos repitentes en el sistema, que representa un 9.21% del total de alumnos inscritos ese año. Los alumnos no promovidos alcanzaron la cifra de 554 mil 510 alumnos, 15.19% de los inscritos. En ese mismo año se retiraron de sus estudios 262 mil 155 alumnos, 7.2% del total de inscritos.

Resalta que los niños y niñas, principalmente indígenas, abandonan la escuela preprimaria y primaria, lo que puede deberse a las migraciones temporales que realizan los jornaleros en los cortes de caña y café anualmente; también se infiere que no se ha encontrado una política adecuada para resolver este problema.

Los estudios realizados sobre la educación en Guatemala han detectado también la falta de planificación adecuada según los requerimientos de la política de gratuidad, la existencia de problemas en el modelo de gestión y atención de la educación en Guatemala, lo que se traduce en falta de políticas claras para hacer disponibles los servicios de apoyo para proveer las refacciones y los útiles escolares. El Procurador de los Derechos Humanos ha confirmado dicha situación en sus monitoreos de 2010 y 2011.

Por ello ocurre también el permanente atraso en el desembolso del Ministerio de Educación para la refacción escolar, los utensilios de limpieza, la entrega tardía de la bolsa de útiles, la falta de previsión ante el incremento y sobrepoblación estudiantil, los abusos, el maltrato y actos de discriminación por parte de personal de algunos centros educativos.

Las críticas sobre la existencia de retrasos y ausencia de avances en el proceso de educación sexual en el pensum de estudios y la falta de actualización de maestros en materia de computación, se está resolviendo, en parte, con algunas capacitaciones, pero no se ha avanzado en capacitaciones de maestros. El Ministerio de Educación, explicó en 2010 que para el proceso de capacitación se necesitan Q5 millones, pero que dicha entidad gubernamental no cuenta con suficientes recursos para hacerlo.

La falta de implementación de la educación sexual se traduce en que en Guatemala se produzca una gran cantidad de embarazos y embarazos no deseados en menores de edad, en niñas y adolescentes, que contribuyen a la deserción escolar de las niñas en Guatemala.<sup>17</sup>

Se debe recordar que en 2010, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señaló que Guatemala ocupa el lugar 98 entre 128 países en cuanto a calidad y acceso a la educación en un informe denominado “Llegar a los marginados”, informando que, a pesar de que la cobertura en el nivel primario ha alcanzado el 98 por ciento, el 37 por ciento abandona antes de haber terminado el sexto grado.

A su vez, en abril 2011 se conoció que Guatemala ocupa el puesto 130 de 138 países evaluados en la calidad educativa en matemática y ciencias, lo que incidió para que descendiera ocho puestos en el Índice Global sobre tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's) 2011, según el Foro Económico Mundial.

El informe presentado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), indica que Guatemala ocupa el puesto 94 de 138 países evaluados con una calificación de 3.51 de 7 puntos. Además, la mala calidad del sistema educativo en general (puesto 125 de 138

---

<sup>17</sup> Rita Cassini en la presentación del Informe de Seguimiento de la Educación Para Todos en el Mundo 2011, 18-19 de marzo de 2011.

países analizados) es otro de los aspectos en los que Guatemala debe mejorar para lograr avances en el Índice TIC's.<sup>18</sup>

También en mayo el Banco Mundial (BM) informó que la educación del país es la de menor nivel del Istmo Centroamericano. Los jóvenes guatemaltecos que ingresan en el mercado laboral tienen dos años menos de educación que los salvadoreños, y el país está en el último lugar de la región respecto de la enseñanza; además, tiene poca calidad y profesores mal calificados, según revela el estudio del Banco Mundial (BM).

El país está por debajo de otros de más bajos ingresos como Nicaragua y Honduras. El progreso de Guatemala, comparado con El Salvador, ha sido lento. El **promedio de escolaridad** en los guatemaltecos mayores de 25 años -para el 2010- fue de cinco (5) años, el más bajo de la Región, que en promedio es de 7.1 años, aunque Costa Rica llega a 8.3 y Panamá a 9.4 años.

La situación es peor en niños indígenas, ya que solo el 50 por ciento empezaron la primaria a los 7 años, contra el 75 por ciento de los otros estudiantes. El número de escolares con desempeño no satisfactorio se incrementó de 60 a 80 por ciento en lectura, y de 50 a 70 por ciento en matemática. A lo anterior se agrega que las credenciales de los maestros del país son las peores del Istmo: menos del 10 por ciento de los maestros de primer grado cuentan con licenciatura, contra el 90 por ciento en Costa Rica y El Salvador; 66 por ciento en Panamá y 22 por ciento en Nicaragua.<sup>19</sup>

#### **4.5 Acciones del Procurador de los Derechos Humanos**

A pesar de algunos avances, no se puede negar que la situación de la educación en Guatemala es lamentable. Este contexto del derecho de la educación en el país ha planteado al Procurador de los Derechos Humanos la búsqueda de caminos que obliguen al Estado a respetarlo, protegerlo y hacerlo efectivo.

Por ello, el Procurador emitió el 13 de septiembre de 2010, una resolución<sup>20</sup> en la que se declaró la violación del derecho humano a la educación y a la seguridad que es objeto la población guatemalteca por falta de programas encaminados a facilitar el acceso a una educación integral de calidad acorde a las necesidades actuales de la sociedad guatemalteca, por parte del Estado de Guatemala a través del Ministerio de Educación.

La resolución indica que esta conclusión se basa en que el Estado guatemalteco no garantiza ni proporciona la infraestructura adecuada para el total de alumnos que albergan los centros educativos nacionales; tiene dificultad para brindar la educación preprimaria, primaria, básica y diversificada y para llevar a cabo un control eficiente de los distintos centros educativos

---

<sup>18</sup> elPeriódico, La mala educación, lastre de Guatemala, 13/04/2011

<sup>19</sup> BM, informe Mejores empleos en Guatemala, el rol del capital humano.

<sup>20</sup> Procurador de los Derechos Humanos, Resolución REF.EXP.ORD.GUA.44-2007/DESC ACUMULADOS.

privados que operan sin la debida autorización que debe ser emitida por el Ministerio de Educación

No existe la implementación efectiva de programas educativos dirigidos a estudiantes de distintas edades de orientación psicológica y sobre temas de educación sexual, enfermedades de transmisión sexual y Derechos Humanos. Se requiere la revisión de los pensum de estudios, de los sistemas de evaluación actualmente utilizados en los distintos centros de estudio nacionales y privados, cobertura a niños con problemas de aprendizaje, eliminación de la discriminación racial, cultural y física en los centros educativos; también es necesaria la atención de niños con necesidades especiales y personal docente capacitado en los distintos niveles educativos, así como políticas integrales de capacitación pedagógica continua enfocadas a los maestros de educación primaria y básica para mejorar la calidad educativa.

En cuanto al apoyo a los estudiantes de escasos recursos, las políticas encaminadas a garantizar la totalidad de su educación a estudiantes con altos niveles académicos han sido muy débiles. La falta de programas de inclusión de niños, niñas y adolescentes y un control eficiente en la adquisición y entrega de textos y refacciones escolares deriva en incumplimiento del principio constitucional de la gratuidad escolar. Además se ha considerado que hay ineficiente cobertura de la seguridad dentro y fuera de los centros educativos.

Por esas razones, la resolución del Procurador, indica que existen indicios de responsabilidad de los Ministros de Educación y de Gobernación, y recomienda a los actuales ministros de esas carteras, la corrección de las situaciones mencionadas.

#### **4.5.1 Supervisión administrativa**

Entre las actividades recientes realizadas por el PDH en 2011 para velar por el respeto, protección y realización del derecho a la educación y para verificar el cumplimiento de las recomendaciones emanadas de la Supervisión Administrativa sobre Gratuidad Escolar realizada en 2010, así como de la resolución mencionada, se realizó en enero de 2011 un monitoreo a los centros educativos del nivel primario en el que se entrevistaron a 208 directores, 366 profesores y se hizo una observación sobre la infraestructura en 191 establecimientos (92% del total).

El monitoreo realizado pudo corroborar la persistencia de muchas deficiencias señaladas en la Supervisión administrativa de 2010 y en la resolución. Un resumen de los hallazgos encontrado por el Procurador se plantea a continuación:

**Cobertura educativa:** Se establece que las inscripciones, muy relacionadas con el acceso a la educación, a la cobertura educativa que brinda el Ministerio de Educación y la capacidad para hacer efectivo el derecho a la educación, tuvieron una cobertura en la que muy pocos alumnos se quedaron sin ser inscritos.

El 92.77% de maestros y un 91.83% de directores informó que no tuvieron problemas para inscribir a todos los alumnos que lo solicitaron, mientras que el 4.7% de maestros y el 8% de directores informó que sí los hubo, aunque sin precisar el número exacto de estudiantes que se quedaron sin inscripción.

Las respuestas de profesores y directores denotarían que existen diferentes condiciones de infraestructura, cantidad de maestros y celeridad con que son asignados los recursos para los distintos servicios que el Mineduc debe proporcionar a los establecimientos educativos, según el Acuerdo Gubernativo y Ministerial que se refieren a la gratuidad de la educación.

**Calidad Educativa:** En momentos en que se está cerca de alcanzar la cobertura total en el nivel primario, es necesaria mayor preocupación por los aspectos relacionados con la calidad. Por ello se toman en cuenta de forma especial los aspectos de infraestructura, la relación estudiantes por docente, la existencia de maestros indígenas en las escuelas para implementar la educación bilingüe, las capacitaciones y actualizaciones a los maestros, así como el conocimiento de directores y docentes sobre las normativas vigentes en relación a la evaluación educativa y los reglamentos o normativas de convivencia y disciplina en los establecimientos.

Las estadísticas que proporciona el Mineduc sobre el ciclo escolar 2008 mencionan que el promedio de alumnos por maestros en el nivel primario de niños en establecimientos públicos es de 31.25, siendo el promedio en el área urbana de 32.30 y en el área rural 30.97.<sup>21</sup> En la supervisión administrativa realizada a inicios de 2010, los profesores manifestaron que en un 24.24% atendían entre 26 y 29 estudiantes por aula o por profesor, que el 18.18% atendían entre 30 y 35 alumnos y que 15.15% entre 20 y 25. También que un alto porcentaje de casos (15.15%) atendía entre 40 y 45 estudiantes.

La mayoría de los directores (57%) informaron que es suficiente el número de profesores asignados al establecimiento, mientras que un 39% dice que existe insuficiencia de maestros en sus escuelas. Sin embargo, a pesar de que el promedio de alumnos por docente es aceptable, existen casos recurrentes en los que es necesario corregir la problemática que existe en los establecimientos de distintos departamentos donde el promedio es superior al de 30 alumnos por maestro.

Respecto a la infraestructura, como antecedente se tiene que, en la supervisión de 2010, el 100% de los establecimientos supervisados en el área urbana tenían techo, puertas, ventanales e inodoros; el 97.73% estaban pintados; el 93.18% tenían iluminación; 90.91% ventilación; 70.45% lavamanos y 56.82% mingitorios. Estos dos últimos aspectos generaban una preocupación importante por el déficit de los aspectos de infraestructura y servicios encontrado.

---

<sup>21</sup> Cuadro No. 4.00.36 del Anuario Estadístico 2008 del Ministerio de Educación (incluye PRONADE).



En el área rural, la supervisión había encontrado que la infraestructura de los establecimientos educativos tenía mayor insuficiencia que en el área urbana. Así, existía solamente 100% en el aspecto de iluminación, mientras 4.55% carecía de techo, puertas e inodoros; 9.09% de ventanales y pintura; 13.64% de ventilación; 59.09% de lavamanos y 68.18% carecía de mingitorios. Igual que en el área urbana se observó la despreocupación por la dotación de lavamanos y mingitorios en los establecimientos educativos.

En cuanto al mobiliario, la supervisión 2010 encontró en el área urbana insuficiencias de pizarrones (25.00%), almohadillas (29.55%), mesas (38.64%), escritorios (54.55%), sillas y marcadores (45.45%) y de yeso (15.91%). Mientras, en el área rural se reportó que hay suficiencia de escritorios, pizarrones y sillas, pero no en mesas donde hubo insuficiencia en un 9.09%, en almohadillas y marcadores (18.18%) y en yeso (77.27%).

Respecto a los servicios generales, en el área urbana se encontró que existían insuficiencias en servicios de energía eléctrica (18.18%); en servicio de agua potable (43.18%); en servicios de telefonía (15.91%) y de utensilios para limpieza (54.55%). En el área rural solo hubo suficiencia en la dotación de utensilios de limpieza, mientras que se informó que hay insuficiencia en energía eléctrica (4.55% de los casos), agua potable (13.64%) y servicios de telefonía (77.27%).

En el monitoreo realizado a inicios de 2011, respecto al mobiliario, se observó el estado de los escritorios, cátedras, pizarrones, mesas, sillas con que cuentan los establecimientos educativos. También los servicios sanitarios, principalmente inodoros, mingitorios y lavamanos

De los servicios generales con que cuentan los establecimientos, se prestó atención a la carencia o no de agua potable, energía eléctrica y telefonía. Las observaciones de estos aspectos arrojaron los resultados como indica la tabla.

**Tabla 12**  
**Supervisión a escuelas primarias**  
**Resultado de observación a la infraestructura,**  
**mobiliario, servicios sanitarios y generales**  
Enero 2011

<b>Aspecto observado</b>	<b>Bueno</b>	<b>%</b>	<b>Regular</b>	<b>%</b>	<b>Malo</b>	<b>%</b>
Infraestructura	106	55.50	72	37.70	13	6.80
Mobiliario	68	35.60	95	49.74	28	14.66
Servicios Sanitarios:	58	30.37	78	40.84	55	28.80
Servicios Generales	102	53.40	70	36.65	19	9.95
<b>Promedio General</b>	<b>83</b>	<b>44</b>	<b>79</b>	<b>41</b>	<b>29</b>	<b>15</b>

Fuente: elaboración propia con datos del monitoreo.

La infraestructura es el aspecto mejor calificado, pues la mayor parte de las instalaciones se describe como buena y regular (55.50% y 37.70 respectivamente), aunque hay un 13% de observaciones que la consideran mala. Los servicios generales resultan también relativamente bien calificados al considerarse que son buenos (53.40%), regulares (36.65) y malos (un 19%).

Los servicios sanitarios fueron los de más baja calificación, pues su estado fue considerado malo en 28.80%, un 40.84% regular y solo el 30.37% bueno. Igualmente, el mobiliario con que cuentan las escuelas es considerado malo en un 14.66% y regular con el 49.74%, mientras solo el 35.60% fue observado como bueno. Estos resultados son coherentes con los hallazgos reportados por la supervisión realizada en 2010.

Al analizar estas informaciones anteriores, se concluye y recomienda elaborar planes de mantenimiento sostenibles que dirijan sus acciones a reparar o sustituir los servicios sanitarios, mobiliario e infraestructura dañada, así como completar los apoyos a los servicios generales que son necesarios para llevar a cabo el acto educativo de manera más apropiada.

La educación bilingüe, aunque es uno de los aspectos más importantes surgidos de los Acuerdos de Paz y de las demandas de la población indígena guatemalteca en las últimas décadas, el Estado de Guatemala no ha cumplido con esos compromisos y se observa poca preocupación por la formación de un número adecuado de docentes que puedan impulsar esta educación.

Esta falta de voluntad política para atender esta temática también se observa en el abandono que se encuentra la Dirección General de Educación Bilingüe, considerando que, según el último censo, la población indígena representa aproximadamente el 40% del total.

En el monitoreo de 2011, los directores manifestaron la problemática que resulta de no contar con maestros indígenas. El 64.42% de los directores entrevistados, indica que no cuentan con maestros indígenas en su establecimiento, mientras que el 29.33% informa que sí cuentan con ellos. Esta situación es congruente con el resultado de diferentes estudios que señalan la poca preocupación del Estado de Guatemala por impulsar la educación bilingüe en el país,

Otro aspecto relacionado con la calidad educativa es la capacitación, perfeccionamiento y actualización de docentes, actividades que debieran ser un proceso continuo y permanente para asegurar la calidad educativa y realizar una adecuada promoción docente que contribuya a la investigación y desarrollo de la educación.

Sobre este tema, los directores manifestaron en el monitoreo en un 63.46% que las capacitaciones se realizaron para los docentes de su establecimiento, mientras que un 28.85% informó que no. Es importante que se busque completar las capacitaciones y actualizaciones, así como seleccionar las temáticas más adecuadas para que efectivamente puedan incidir en el mejoramiento de la calidad de la educación en Guatemala.

El proceso ordenado que debe regir las actividades escolares se ha traducido en la elaboración por parte del Ministerio de Educación de distintos reglamentos o lineamientos generales de evaluación que están vigentes para 2011, tanto en el ámbito general, como específico.

Sobre el tema del conocimiento de esos reglamentos por los directores y docentes, se encuentra que hay una noción y comprensión diferente, lo cual se podría justificar en que el cargo administrativo de los directores los obliga a conocer al detalle este aspecto, mientras los docentes no tienen esa preocupación. De todas formas, es importante su conocimiento en los docentes para su aplicación adecuada, pues el reglamento tiene relación directa con una parte del proceso educativo, en el que se decide la promoción o no de los estudiantes.

El Ministerio de Educación emitió en enero de 2011 el Acuerdo Ministerial No. 01-2011, Normativa de Convivencia Pacífica y Disciplina para una Cultura de Paz en los Centros Educativos con el objetivo de "Sensibilizar a la comunidad educativa del proceso educativo, promover la relación armoniosa y pacífica entre sus miembros, proveer de un ambiente seguro y propicio para formar ciudadanos a la sociedad".<sup>22</sup>

Sobre este tema, 70.67% de directores declaran conocer el nuevo reglamento de disciplina; mientras que 26.44% indican que no lo conocen. Por aparte, 41.77% de los maestros informaron que cuentan con un reglamento de disciplina para el ciclo escolar 2011, mientras que 52.61% indica lo contrario.

Se desprende de estos resultados que es necesaria una mayor divulgación de la normativa, sobre todo en los docentes, para que pueda aplicarse de manera homogénea las disposiciones y espíritu de la misma en todo el sistema educativo nacional.

**Apoyos a los estudiantes:** En cuanto al apoyo a los estudiantes, las inequidades son aspectos negativos que el sistema educativo replica en Guatemala en cuanto al acceso, permanencia, calidad e inversión educativa en perjuicio de los alumnos provenientes de familias pobres, del área rural, de idioma materno diferente al español y de género. Esto reduce las posibilidades de los sectores marginados a ingresar y permanecer en la escuela, así como lograr un mejor rendimiento escolar.

Tal situación ha sido considerada y se ha tratado de contrarrestar mediante incentivos a estos grupos vulnerables a través de distintas medidas como la implementación de la refacción escolar, dotación de becas y bonos de transporte.

Sin embargo, estas medidas contribuyen de alguna manera, al igual que las tomadas a finales de 2008 en relación a la gratuidad de la enseñanza, a posibilitar el acceso, permanencia y rendimiento escolar de los estudiantes del nivel primario.

---

<sup>22</sup> Artículo 2. de la referida Normativa.

En la supervisión administrativa realizada a inicios de 2010, los profesores consultados manifestaron que se daba la refacción escolar en sus establecimientos (97%) con una variedad de menús (94%). Sin embargo también indicaban que solo en el 68% de los casos se hizo una transferencia oportuna por parte del Mineduc para costear la refacción y que hubo retrasos en la entrega del aporte financiero durante el ciclo escolar 2009.

Asimismo, los padres de familia manifestaron casi el mismo criterio, pues el 94% de los consultados mencionaron que tenían conocimiento que recibían sus hijos la refacción escolar, aunque no tenían el mismo conocimiento sobre la variedad de los menús. Los padres de familia calificaron de diferente manera la cantidad y calidad de refacción que se da a sus hijos, aunque en términos generales la mayoría la calificaron de aceptable o buena.

En enero de 2011, el 92.79% de los directores informan que en el establecimiento que dirigen se proporciona la refacción escolar a los estudiantes mientras 6.25% indicaron que no. Mientras solo el 4.32% de los docentes manifestaron que en enero de 2011 ya se había entregado la asignación de la refacción escolar y 92.97% que no habían recibido los fondos.

La dotación de becas escolares todavía es un programa pequeño e insuficiente para atender a la cantidad de niños y niñas que la necesitan como incentivo para la permanencia escolar en el nivel primario.

Los directores, consultados sobre si en la escuela que dirigen se había proporcionado o asignado becas escolares, informan en su mayoría que no (83.17%), mientras 12.5% indican que sí. Como se puede observar, los beneficios de estos programas no llegan a todos los establecimientos escolares del nivel primario sino que solo a una parte de ellos.

Respecto al apoyo que representa el bono escolar de transporte, el 66.35% de los directores informaron que no recibieron dicho bono mientras que lo recibieron solamente 16.83%, lo que pone en evidencia que la política de impulsar este incentivo del bono escolar de transporte, para lograr la permanencia de los estudiantes en las escuelas, solo llega a una pequeña parte de establecimientos educativos.

**Gratuidad de la enseñanza:** En el año 2008 se emitieron los acuerdos gubernativo número 226-2008 y ministerial 1492-2008, que se refieren a la gratuidad de la educación y al sistema de desembolso de los fondos para cubrir las necesidades de los establecimientos públicos.

El 76% de directores de establecimientos afirman que no entregaron listado de útiles escolares a los padres de familia cuando se dio el proceso de preinscripción e inscripción, mientras el 24% afirma que lo hicieron. Congruente con lo anterior, 73.29% de maestros indicaron que no entregaron listado de útiles, 24% sí lo entregaron.

Esto demuestra que todavía existe un alto porcentaje de maestros y directores que no confían en la entrega oportuna de la bolsa escolar de útiles. Se pone de manifiesto que la problemática reside en que por los desembolsos tardíos del Ministerio de Finanzas y el actuar

de la burocracia estatal, el Mineduc no realiza sus acciones de manera eficiente y oportuna para dotar de útiles escolares a la niñez guatemalteca.

Los alumnos de primaria de las escuelas públicas solo reciben libros de texto de los cursos más importantes (inicialmente Matemáticas y Comunicación y Lenguaje). Desde 2004, los niños y niñas no son dueños de los libros gratuitos, ya que deben devolverlos al final del año, con el objetivo de que sean utilizados nuevamente por otros escolares en el año siguiente.

En el monitoreo 2011, la gran mayoría (80.29%) de los directores informan que no exigen libros de texto a los estudiantes y padres de familia, mientras el 17.3% sí lo hacen. También es congruente la respuesta de los profesores con la de los directores, pues 77.11% de maestros informaron que no solicitan obligatoriamente el libro de texto, mientras que 17.87% se manifestaron afirmativamente.

Respecto a las bolsas de útiles escolares, aparentemente el momento en que los mecanismos de desembolso y liquidación se implementan es cuando se entrega un aporte por medio del claustro de catedráticos o la dirección de la escuela a los padres de familia para que compren los útiles escolares.

El desembolso es de un monto de Q.50.00 por cada alumno, en el área urbana y Q 55.00 en el área rural. Aunque la cifra por alumno puede parecer limitada en función de la insuficiencia, el deterioro o pérdida de los diferentes útiles, la aportación es imprescindible para mantener la vigencia del programa de gratuidad.

En enero de 2011, 89.42% de directores manifestaron que les fueron asignados los fondos para las bolsas escolares a los alumnos en el ciclo escolar 2010 y 5.29% de los planteles visitados informaron que no. Los profesores respondieron, en un 11.65%, que recibieron la asignación para la bolsa escolar en 2011, mientras 83%, que no la había recibido.

Esto significa que hubo una mayor cobertura del programa en 2011, en relación al 2010, pero todavía no se ha llegado a cubrir el 100% de los establecimientos educativos y de la población escolar.

Sobre los gastos básicos, la supervisión administrativa en 2010 destacó que el sistema de desembolsos para los gastos básicos de los establecimientos públicos establecido en el Acuerdo Ministerial No. 1492-2008 había tropezado con dificultades en relación a los tiempos del inicio del ciclo escolar, que es el momento cuando se genera la mayor parte de esta problemática. Los ministerios de Finanzas y Educación acumulan en el inicio del ciclo escolar una serie de gastos contemplados en el Acuerdo Ministerial que anteriormente no lo estaban, costos en que incurrían los padres de familia en años anteriores a 2009.

Sobre la suficiencia del presupuesto asignado a los establecimientos, un 78.37% de los directores consideraron que el presupuesto en el ciclo escolar 2010 fue insuficiente para

cubrir las necesidades del plantel y con ello la gratuidad de la enseñanza; solo el 6.25% indican que fue suficiente.

El porcentaje de docentes que manifiestan que el plantel recibió un presupuesto insuficiente para cubrir todas sus necesidades fue 52.40%, el 1.31% informan que fue suficiente, mientras un total de 461 (46.29%) se abstuvieron de responder.

Pese a los avances que este presupuesto relacionado con la gratuidad ha manifestado en los años 2009 y 2010, en el inicio del ciclo escolar 2011 todavía se revelan problemas de insuficiencia y oportuno desembolso de ese presupuesto.

Los resultados de estos monitoreos del Procurador de los Derechos Humanos y sus respectivos informes ya han sido presentados al Ministerio de Educación para que tome en cuenta las recomendaciones y haga los mayores esfuerzos para proteger, respetar y hacer efectivo el derecho a la educación de la niñez y juventud guatemaltecas

#### **4.6 Sucesos más relevantes en el semestre**

Ante el nuevo ciclo iniciado en enero, se informó que el Ministerio de Educación (Mineduc) tiene insuficientes recursos para afrontar el incremento de la matrícula escolar en los distintos niveles educativos, reparar más de 656 escuelas destruidas por la inclemencia del invierno recién pasado y contratar a más de 30 mil nuevos maestros.

También en enero se informó que en el 2011 la compra de más de 5 millones de textos de matemáticas y lenguaje, a un costo de Q86 millones, quedará en manos de las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) autorizadas por el Ministerio de Educación, con el propósito de garantizar que lleguen a las escuelas en los primeros meses del ciclo escolar. Este cambio de modalidad podría hacer más eficiente la entrega de los textos.

Ya en marzo se observaban problemas de atrasos en las asignaciones como fue el caso de fondos para la refacción escolar, cuando el Mineduc hizo pública la espera para que el Ministerio de Finanzas le asignara Q45 millones para adquirir refacciones escolares. Por otra parte, los alumnos del Instituto Normal Mixto del Norte (INMN) de Cobán, apoyados por unos mil 400 estudiantes procedentes de otros municipios de ese departamento, solicitaron catedráticos a la Dirección Departamental de Educación, la cual aseguró que necesitaba cubrir 32 plazas en el departamento, debido al aumento de la población escolar.

El Mineduc emitió un nuevo reglamento, que resulta un valioso instrumento para prevenir el delito y mantener la seguridad en las escuelas; sin embargo, no cuenta con una visión pedagógica que logre un cambio real de conducta en los estudiantes. Entre otros aspectos, prohíbe los noviazgos a todo nivel dentro de las escuelas. Esta disposición puede parecer intrascendente, pero representa la imposición de un punto de vista y un retroceso en este aspecto.

En cuanto a la calidad de la educación, se informó que la mano de obra nacional posee baja escolaridad. Trabajadores guatemaltecos tienen un promedio de 5.5 años de estudio; en el área rural el promedio es de 3.8 años. Se ha considerado que el rezago educativo influye en

los altos niveles de pobreza. Este elemento ha sido estudiado y señalado en estudios anteriores y es un indicador útil para superar la situación actual.

También se observó que en Guatemala hay más de 100 mil profesionales egresados de las diferentes universidades, de los cuales más de 30 mil son humanistas y abogados, y 12 mil ingenieros, según los colegios de profesionales. Guatemala ocupa el puesto 126 entre 133 países evaluados, en cuanto a la calidad de la educación en ciencias y matemáticas.<sup>23</sup> Esta información podría servir para reorientar la educación superior a fin de incentivar el estudio de las áreas técnicas y de matemáticas que deben incentivarse desde los primeros años, pues si los ciudadanos no están bien preparados desde la educación primaria, difícilmente podrían afrontar los retos de la educación secundaria, terciaria y su desarrollo profesional.

Se informó que el Gobierno iniciará la Estrategia de Educación Integral en Sexualidad en las escuelas de seis departamentos (Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula, Totonicapán, Chimaltenango y Escuintla) como un plan piloto. El proyecto comenzaría a partir de abril, impulsado por la Unidad de Equidad de Género y Pertinencia Étnica del Mineduc. Esta ha sido una carencia señalada en anteriores informes y en la resolución del Procurador (REF.EXP.ORD.GUA.44-2007/DESC ACUMULADOS).

Una buena noticia la constituye el hecho de que el primer grupo de maestros del sistema educativo nacional de preprimaria y primaria, que ejercerá el cargo con título universitario, se graduará en julio próximo en la Universidad de San Carlos (Usac).

La primera promoción está integrada por dos mil 700 docentes que ocupan plazas en escuelas públicas de áreas urbanas y rurales. Se espera que la segunda promoción, integrada por cuatro mil 311 maestros, se gradúe el año próximo.<sup>24</sup>

A finales de junio fueron entregadas las Propuestas de Agenda Nacional para la Educación a candidatos a la Presidencia de la República y a los secretarios generales de los partidos políticos por la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Se plantean mecanismos que permitan la profesionalización docente, formación inicial, universalización de la educación, financiamiento, participación de la sociedad en la acción educativa.<sup>25</sup> La iniciativa académica busca lograr que los candidatos presidenciales cumplan con el compromiso hacia la ciudadanía de llevar a cabo las recomendaciones hechas en el Encuentro Universitario, a través de las políticas públicas que contribuyan a mejorar las condiciones educativas del país<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> Dato del Informe Global sobre Tecnologías de la Información y Comunicación 2010, publicado por el Foro Económico Mundial.

<sup>24</sup> Prensa Libre, Maestros se especializan con título universitario, 14/06/2011.

<sup>25</sup> Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Metas Educativas 2021: La educación que queremos para la generación de los bicentenarios.

<sup>26</sup> La Hora, Entregan propuestas educativas, 20/06/2011

## **5. Derecho a una Alimentación Adecuada**

### **5.1 Legislación**

Los elementos jurídicos que amparan el derecho a la Alimentación Adecuada y a la Seguridad Alimentaria y Nutricional parten de la Constitución Política de la República de Guatemala, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales (DESC) y otros tratados que implican nivel de vida adecuado, alimentación, vivienda, salud, familia, educación, derechos culturales, trabajo, condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, sindicales y de huelga, seguridad social, igualdad de derechos de hombres y mujeres, entre otros.

También son referentes en materia de alimentación la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, las resoluciones de la Conferencia Acabando con el Hambre Oculta, la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, los Objetivos y Metas del Milenio, el Codex-Alimentarius, el Convenio de Diversidad Biológica y el Código de Conducta para la Pesca Responsable.

En Guatemala se ha legislado en relación al derecho de la población para "...acceder a una alimentación que satisfaga las necesidades nutricionales y sociales, condición fundamental para el logro del desarrollo integral de la persona y de la sociedad en su conjunto...", según decreto No. 32-2005 del 6 de abril de 2005 y su Reglamento -Acuerdo Gubernativo No. 75-2006-, el cual fue modificado en marzo de 2008 según Acuerdo Gubernativo 100-2008, así como los convenios, protocolos e instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos y la cooperación internacional.

De manera complementaria y para apoyarse en el impulso de los planes, programas y acciones, existen leyes como la Ley General de Descentralización, la Ley de los Consejos Urbanos y Rurales de Desarrollo, el nuevo Código Municipal, Código de Salud, La Ley de Servicio Cívico, el Decreto 68-86, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, el Decreto 4-89, Ley de Áreas Protegidas, el Decreto Legislativo 101-96, Ley Forestal y otras.

A partir de la normativa nacional y los estándares internacionales, los derechos humanos y, entre ellos los derechos económicos, sociales y culturales y específicamente los derechos a la seguridad alimentaria y nutricional, el derecho a la alimentación, se conciben desde una perspectiva integral. De ello depende el ser humano para vivir una vida digna. Sus características generales, en el sentido de la obligación del Estado de respetar, proteger y realizar efectivamente el derecho, se aplican igual que a todo tipo de derechos (civil, político, económico, social y cultural).

Los derechos humanos son indivisibles, interdependientes, interrelacionados y de igual importancia para la dignidad humana, pues sólo a través de su cumplimiento pleno se puede realizar el ideal del ser humano libre y viviendo en condiciones de dignidad.

Según la Observación General No. 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que trata precisamente sobre el derecho a una alimentación adecuada, el derecho está reconocido en diversos instrumentos, pero de la manera más adecuada y más



extensamente que cualquier otro instrumento internacional el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto, se reconoce "el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia". En el párrafo 2 del artículo 11 se reconoce que posiblemente deberán adoptarse medidas más inmediatas y urgentes para garantizar "el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre" y la malnutrición. Este derecho, de carácter universal, posibilita el disfrute de todos los demás derechos.

El concepto de Seguridad Alimentaria y Nutricional es relativamente reciente, aún continúa su conceptualización; se considera que los conceptos más avanzados sobre este tema han sido abordados por los organismos internacionales y nacionales relacionados con la salud y nutrición.

En Guatemala, el Decreto Ley No. 32-2005, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en el Artículo 1, por ejemplo, expresa que es el "Derecho de toda persona a tener acceso físico, económico y social, oportuna y permanentemente a una alimentación adecuada, con pertinencia cultural, preferiblemente de origen nacional, así como a su adecuado aprovechamiento biológico, para mantener una vida saludable y activa".

La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional expresa el concepto como un derecho (DSAN), aspecto del que carecen los otros, por lo cual adquiere esta importante connotación.

En las Directrices Voluntarias para el Derecho a la Alimentación, aprobadas por el Comité de Seguridad Alimentaria de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) se dio un importante paso porque los Estados se pusieron de acuerdo en cuanto a cómo alcanzar la realización de este derecho humano. Aunque son voluntarias, serán de gran ayuda a los 155 países que forman parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para la realización de este derecho.

El respeto, protección y realización efectiva, como obligaciones del Estado, se refieren a una serie de compromisos que debe cumplir como garante del derecho. El respeto se asume como la abstención de conductas violatorias por parte del Estado de los derechos -en este caso de los derechos a la Seguridad Alimentaria y Nutricional y a la Alimentación-, no legislar contra estos derechos y evitar la omisión de los tribunales sobre la conducta o comportamiento del Estado contrarias a los compromisos y obligaciones contraídas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y otros convenios internacionales de derechos humanos.

La protección se refiere a tomar medidas administrativas para eliminar obstáculos para su efectivo cumplimiento, a remover la legislación contraria a los derechos, legislar para su realización, el diseño e implementación de políticas públicas, la vigilancia y control de conductas violatorias de terceros y que los tribunales competentes se apeguen al cumplimiento de la legislación que protege estos derechos.

En cuanto a la realización, el Estado se obliga a dedicar sus máximos esfuerzos y recursos para la consecución de los objetivos propuestos en los planes, programas, proyectos, políticas y estrategias para hacerlos efectivos y para toda la población.

Ante la precariedad en que vive una gran cantidad de guatemaltecos y guatemaltecas, la pobreza y extrema pobreza, la desnutrición crónica y aguda que hace imposible el acceso al derecho a la alimentación adecuada y a la seguridad alimentaria y nutricional, el Estado guatemalteco está en la obligación de respetar, proteger y satisfacer la seguridad alimentaria y nutricional de los mismos, haciendo todos los esfuerzos e invirtiendo todos los recursos posibles en atender esta problemática.

## **5.2 Institucionalidad**

La institucionalidad creada por la Ley para implementar el DAA y el DSAN está definida en el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN) y sus componentes: el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), la Instancia de Consulta y Participación Social (INCOPAS), el Grupo de Instituciones de Apoyo (GIA), recientemente constituido. Asimismo, es importante el Sistema de Información y Comunicación de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SICSAN), el cual aún no ha sido implementado de manera funcional para cumplir con el mandato de la Ley.

El CONASAN, órgano rector, está integrado por El Vicepresidente de la República, quien lo preside; los Ministros de 8 ministerios y Secretarios de 3 secretarías.<sup>27</sup> Respetando los principios de autonomía municipal y división de poderes, podrán ser miembros del CONASAN, si así lo consideran conveniente, el Presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) y el Presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Congreso de la República, quienes ya han asistido algunas veces a las reuniones del Consejo.

El Artículo 4 de la Ley menciona la coordinación de las diferentes instituciones que desarrollan actividades para promocionar la SAN de la población. También establece la Ley la creación de comisiones en los consejos de desarrollo urbano y rural, en sus distintos

---

<sup>27</sup> El Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, como Secretario del Consejo; el Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación; el Ministro de Economía; el Ministro de Salud Pública y Asistencia Social; el Ministro de Educación; el Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales; el Ministro de Trabajo y Previsión Social; el Ministro de Finanzas Públicas; el Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia; la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente; dos representantes del Sector Empresarial y cinco representantes de la Sociedad Civil.

niveles (nacional, regional, departamental, municipal y comunitario). En cuanto a las instituciones que conforman el SINASAN (SESAN, CONASAN, INCOPAS y GIA), cabe mencionar que se observa una falta de operatividad de los órganos que lo conforman y una debilidad de sus componentes, pues se avanzó muy lentamente en el impulso de las coordinaciones y planificaciones.

Los actores que están incorporados al Sistema y al Consejo son los que inicialmente contempla la Ley. La integración a dichas reuniones de SEGEPLAN debiera coadyuvar a una mejor organización de los planes, programas y proyectos. Podría ser funcional que el ministro o viceministro, representante del Ministerio de Economía, se apoye en algún funcionario de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO).

Esta institucionalidad, creada a partir de 2005, se ha mostrado débil, no ha sido capaz de consolidarse y coordinarse adecuadamente para cumplir con los fines, objetivos y metas que se trazaron en la Ley y en la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

### **5.3 Situación actual del derecho a la alimentación**

#### **5.3.1 Nutrición**

El hambre en Guatemala es un drama que vive cotidianamente la población pobre (51%) y extremadamente pobre (15.2%). El hambre y la desnutrición se dan en Guatemala en dos niveles con sus respectivas características. El hambre crónica que genera la desnutrición crónica, que padece la población y la niñez que vive precisamente en situación de pobreza y extrema pobreza y, el hambre estacional, que genera la desnutrición aguda, especialmente en algunas regiones del país y que se agudiza principalmente entre los meses de abril y agosto de cada año debido al agotamiento de las reservas de alimentos de la población rural y a la estacionalidad de las actividades agrícolas en algunas regiones.

Guatemala ocupa el primer lugar en desnutrición crónica infantil en menores de cinco años en Centroamérica (54%), seguido de Honduras (29%), Nicaragua (22%), El Salvador (19%) y Costa Rica (con únicamente el 6%)<sup>28</sup>. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos estima que de los países de la región de Latinoamérica y El Caribe, Guatemala es el país que registra la más alta prevalencia de niños con desnutrición crónica (49%), seguido de Honduras (29%) y Bolivia (27%).

Existen evidencias científicas y empíricas que demuestran que la desnutrición crónica en las niñas y niños menores de tres años tiene un impacto negativo durante todo su ciclo de vida. Los niños que se desnutren en sus primeros años están expuestos a mayores riesgos de muerte durante la infancia, y de morbilidad y desnutrición durante todo su ciclo vital. La desnutrición restringe su potencial de desarrollo físico e intelectual a la vez que limita su capacidad de aprender y trabajar en la edad adulta.

---

<sup>28</sup> Según el “Estado Mundial de la Infancia 2010” de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

Estudios sobre el costo económico y social de la desnutrición han revelado que la desnutrición impacta negativamente en la salud, la educación y la productividad de las personas e impide el desarrollo de los países de la región. Los efectos negativos se producen en el corto, mediano y largo plazo. Según un estudio sobre el tema para Centroamérica y la República Dominicana, los costos asociados a la desnutrición infantil ascendieron en el 2004 a más de 6 mil millones de dólares en los países estudiados.<sup>29</sup>

Los resultados de diferentes estudios demuestran que los promedios regionales y nacionales ocultan grandes disparidades entre países y al interior de los países; estas brechas se relacionan con factores étnico-culturales, geográficos y económicos que tienen una explicación histórica. Se demuestra que la desnutrición crónica infantil se concentra en las poblaciones pobres e indígenas de las zonas rurales más aisladas y en la periferia urbana, las que en su mayoría son herederas de condiciones socio-económicas desfavorables. En estas poblaciones la prevalencia de la desnutrición crónica supera el 70 por ciento. La mayoría de estos niños y niñas son víctimas del ciclo intergeneracional de pobreza y desnutrición.<sup>30</sup>

Las deficiencias de vitaminas y minerales, conocidas como deficiencias de micronutrientes generan también el “hambre oculta”, que constituye un problema nutricional severo y se relaciona directamente con la desnutrición crónica, en especial los desórdenes causados por las deficiencias de hierro, cinc, yodo y vitamina A.

El hambre estacional y la desnutrición aguda generaron en 2010 la muerte de 187 niños menores de 5 años por desnutrición según el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), pero murieron en realidad 6 mil 575 guatemaltecos y guatemaltecas de todas las edades por causas asociadas al hambre como señaló ese informe.

A inicio de 2011 (enero y febrero) las reservas de maíz y frijol de la población rural vulnerable se habían agotado en las regiones oriente y occidente según datos de la FAO, por lo que pueden haber muerto gran cantidad de niños y guatemaltecos y guatemaltecas de todas las edades por causa del hambre al no actuarse a tiempo.

La información proporcionada por el Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través de la Sala Situacional, destaca que en la 23ª. Semana epidemiológica del 5 al 11 de junio de este año, respecto a la desnutrición proteico energética (DPE) se han acumulado 3 mil 101 casos de desnutrición aguda moderada y 1 mil 952 de desnutrición severa en niños menores de cinco años, haciendo un total de 5 mil 053 casos.

---

<sup>29</sup> PMA/CEPAL, Costo del Hambre para Centroamérica y la República Dominicana. Panamá, junio de 2007.

<sup>30</sup> *Ibidem*.

También se informa que los casos de neumonías y bronconeumonías en menores de cinco años reportados son de 57 mil 455 y la cantidad de casos que se han reportado sobre diarreas en menores de cinco años es de 134 mil 756.

En el comparativo de la situación de desnutrición morbilidad y mortalidad por causas asociadas a la desnutrición que se hace en la Sala Situacional, en donde aparentemente hay una reducción de casos, tal situación no refleja la realidad, ya que dadas las condiciones de los estragos causados por factores climáticos, la escasez de alimentos y granos básicos, la reducción del empleo en determinadas áreas de producción estacional, el aumento del precio de los alimentos en el mundo y en Guatemala, el desempleo y subempleo que existe, no es posible que exista una mejoría.

Las estadísticas que muestran una reducción de casos en 2011 respecto a 2010 se explican debido a que la búsqueda activa de casos se ha reducido este año en relación al anterior. A partir de junio se inició el barrido nutricional o búsqueda activa de casos en tres áreas de salud (Zacapa, Chiquimula y El Progreso), mientras los 19 departamentos restantes aún no iniciaban acciones. Esa es la causa de que exista un subregistro de casos que no indica la situación real que se deseaba prevenir en el Cuarto Informe del PDH con sus recomendaciones al CONASAN.

Como se puede deducir, los casos deben ser mucho mayores debido a esos factores, lo que representa un retroceso en la aplicación de una medida que el Procurador de los Derechos Humanos ha solicitado en el Cuarto Informe en relación a fortalecer los sistemas de información para orientar adecuadamente las acciones del Estado en beneficio de la población más vulnerable.

### **5.3.2 Disponibilidad de los alimentos**

La crisis económica y financiera mundial iniciada en Estados Unidos en 2008 dio paso a un alza de los precios de los alimentos, que precipitó las protestas populares en 61 países y manifestaciones violentas en otros 23. Ya en 2009 la cantidad de hambrientos en el mundo había rebasado los mil millones de personas, situación generada por la especulación creada a través de los "comodities" en la agricultura y la presencia de grandes inversiones en la industria de agro combustibles, beneficiando a las transnacionales de productos agrícolas y a los especuladores que iniciaron una nueva ola de acaparamiento de tierras.

Agravaron esta situación los efectos generados por la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero y el consiguiente cambio climático, que genera pérdidas en la agricultura, principalmente por sequías e inundaciones. Hay un agotamiento del recurso tierra y agua que finalmente deriva en disputas por recursos y alza en el precio de los alimentos.

Lo que está en discusión es el modelo de producción y distribución que genera un aumento de los precios de los alimentos, derivado por una parte de la concentración de los recursos y el aumento de población que se debate en extrema pobreza y pobreza<sup>31</sup>.

En Guatemala, el auge de la producción de materias primas para la elaboración de agrocombustibles, como el etanol, ha creado un incremento de la producción de azúcar y palma africana y la utilización de tierras que antiguamente eran propiedad de pequeños y medianos agricultores, generando una mayor concentración del recurso.

En Guatemala la producción de etanol y biodiesel tiene varios años de existencia. Respecto al etanol, existen cinco destilerías que lo producen, las cuales cuentan con una capacidad instalada de 790 millones de litros al día (180 millones de litros anuales); actualmente más del 80% de etanol se exporta principalmente a Europa y Estados Unidos. El producto no es mezclado aún con la gasolina, pues existe una ley vigente (el Decreto 17-85, Ley del Alcohol Carburante) que lo impide. Los empresarios esperan que el uso de este oxigenante sea legislado, reglamentado y monitoreado para colocarlo en el mercado.

Por otra parte, el biodiesel es un combustible sustituto del gas-oil para motores diesel, el cual puede ser producido partiendo de materias primas agrícolas (aceites vegetales virgen o usado y/o grasas animales), posee las mismas propiedades del combustible diesel empleado como combustible para automóviles, camiones, ómnibus y puede ser mezclado en cualquier proporción con el diesel obtenido de la refinación del petróleo.

Las materias primas para la producción local pueden ser la palma africana, *Jatropha Curcas* (piñón), *reicinus communis* (higuerillo), aceites reciclados y grasas animales. La producción de palma africana en Guatemala se estima en 290 mil toneladas por año.<sup>32</sup>

Esta producción, cada vez mayor, está desplazando las áreas de terrenos aptos para la agricultura dedicadas a la producción de alimentos. Si a esto le sumamos que existe una producción de granos y alimentos que se exportan, se está incrementando una situación de déficit alimentario en Guatemala, lo cual es grave y necesita ser enfocado adecuadamente para resolver la falta de disponibilidad de alimentos en el país.

A estos factores debe unirse la amenaza que representa la temporada de huracanes, la que se puede traducir en posibles pérdidas en la agricultura. El 51% de los agricultores en el sur y el oeste de Guatemala perdió más del 50% de sus cosechas debido al huracán Ágatha en 2010 y el 90% de los agricultores reportaron daños en sus cosechas.<sup>33</sup>

Las lluvias en algunas regiones se producirá en los meses de junio y julio, en cantidades superiores a lo normal y las inundaciones ya se han presentado en mayo y junio, especialmente en zonas bajas como la Costa Sur, Alta Verapaz por el río Polochic hasta

---

<sup>31</sup> Oxfam, Cultivar un futuro mejor. Justicia alimentaria en un mundo con recursos limitados.

<sup>32</sup> *Ibidem*.

<sup>33</sup> Evaluación de Seguridad Alimentaria en Emergencias.

Panzós.<sup>34</sup> Estas lluvias afectarán a 14 departamentos de los cuales la mitad tiene contacto con el litoral Pacífico.

La escasez de alimentos se refleja en los precios de los mismos en el mercado nacional. La tendencia alcista del precio del maíz en este año se mantendrá; el 22 de junio el precio del quintal era de Q 225, lo que duplica el precio que se mantuvo el año anterior y posiblemente alcance entre Q 260 y Q 275 en el mes de agosto<sup>35</sup>. Esto afecta la seguridad alimentaria de miles de familias guatemaltecas y los pronósticos no son halagadores. La FAO indicó que los meses de junio, julio y agosto serán los más críticos pues la próxima cosecha del maíz se espera para el mes de septiembre y en el Altiplano, en noviembre.

Las causas del incremento se atribuyen a que las cosechas empezaron en el 2009, cuando hubo un invierno corto y poca lluvia, mientras que en el 2010, el invierno copioso destruyó parte de la cosecha. A esto se añade el aumento en el precio del transporte, debido al alza en petróleo y gasolinas. En otros años ocurrió que el grano trasgado de México ayudó a estabilizar el precio, pero este año se redujo notablemente por operativos anticontrabando en la frontera.

Las familias con producción de autoconsumo en oriente y occidente no cuentan con reservas desde febrero, según la FAO, mientras que los mercados locales presentan oferta normal o escasa dependiendo del tipo de grano, según el monitoreo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga).

En el caso del frijol, el MAGA indicó que se cotiza en junio en Q400, y se prevé que pueda llegar a Q475 en los próximos dos meses. En abril, el Sistema Mesoamericano de Alerta Temprana (MFEWS) indicó que al menos 96 mil familias de municipios del Altiplano y del Corredor Seco se encuentran en riesgo alimentario, debido a los precios altos y a la baja en las cosechas, asociada con el clima<sup>36</sup>. En su boletín fechado en junio, MFEWS informa que se presenta una situación en deterioro encontrándose en Estrés (IPC Fase 2) y algunos hogares en Crisis (IPC Fase 3), muy similar para la región del Altiplano que es más crítica debido a que la cosecha se realiza hasta noviembre. También aprecia que la poca disponibilidad de maíz en los mercados a nivel nacional, a comparación de otros años, aunada a la especulación, sigue dando lugar al aumento de precio para este grano<sup>37</sup>

Ante esta situación hubo algunas intervenciones de la comunidad internacional, entre ellas la establecida en marzo a través del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Occidente (Planocc) que prioriza los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Totonicapán y Huehuetenango para realizar intervenciones en seguridad alimentaria que aborden las causas estructurales de la desnutrición crónica infantil. Este Plan estaría financiado principalmente por la Unión Europea con Q 600 millones.

---

<sup>34</sup> Siglo Veintiuno, 06/06/2011. 1.5 millones de personas en riesgo por el invierno, Información de David De León, vocero de Conred.

<sup>35</sup> Según la FAO, el promedio del precio del maíz en 2010 fue de Q214.

<sup>36</sup> Prensa Libre, Tendencia alcista del maíz se mantendrá, 21/06/2011.

<sup>37</sup> Sistema Mesoamericano de Alerta Temprana (MFEWS).

En el departamento de Quiché, el gobierno de Estados Unidos y gobiernos de Europa estarían apoyando un plan para impulsar la seguridad alimentaria a partir de una reunión del G-8 en 2009, ofreciendo una mayor inversión en la agricultura y el desarrollo rural como herramientas para combatir la inseguridad alimentaria. Estas acciones se realizan como parte del plan Alimentar el Futuro. De estas acciones surgiría un plan más ambicioso para el Occidente del país y aún a nivel nacional.

El Programa Mundial de Alimentos también intervino en algunos municipios de Chiquimula, donde apoyaron 1 mil 111 niños menores de cinco años con desnutrición aguda, moderada y leve con la entrega de lotes de maíz, frijol, harina y aceite<sup>38</sup> cada mes con el apoyo de la SESAN, el MAGA y las municipalidades.

El proyecto "36 meses cero desnutrición" se realiza en siete municipios vulnerables de los departamentos de Totonicapán y Chiquimula<sup>39</sup> desde 2009 y tiene como propósito mejorar los hábitos alimenticios de niños menores de 36 meses, mujeres embarazadas y lactantes. El plan de acción es producto del esfuerzo de la SESAN, el MSPAS, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Centro de Comunicación para el Desarrollo (Cecode) y termina en junio de este año.

Sin embargo todos estos proyectos son un paliativo para las regiones y municipios afectados, dada la envergadura de la inversión que debe hacerse para resolver los problemas estructurales que generan la desnutrición, lo que implica mayor compromiso del Estado guatemalteco con el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional.

Hay otros factores que agravan la situación como la generada por la debilidad del presupuesto del Programa de Cohesión Social que realizó nuevamente movimientos intrapresupuestarios, como medida para sostener los programas sociales en vista de la falta de recursos con que cuenta el Estado para financiar los programas, y a que en su oportunidad no se logró consensuar una reforma tributaria.

También los afectará la reducción del presupuesto por la falta de aprobación de algunos préstamos en el Congreso, lo que podría generar recortes presupuestarios que perturbarán estos programas. Se conoció que ya hubo despidos y atrasos en los pagos de promotores de la bolsa solidaria, los cuales protestaron por la medida.

Estos programas han sido criticados no en función de su implementación, sino porque han sido ejecutados en algunos casos en áreas de clase media en la ciudad capital y en el Altiplano y no en las comunidades más vulnerables ya identificadas en los mapas de pobreza y vulnerabilidad nutricional y por no contar con un presupuesto sostenible. Por ello cuentan con recursos para dar cobertura a los beneficiados hasta julio o septiembre, dependiendo si se trata de la Bolsa Solidaria, las transferencias monetarias de Mi Familia Progresiva u otro

---

<sup>38</sup> 110 libras de maíz, 31 de frijol, 31 de harina y tres litros de aceite cada mes. Prensa Libre, 29/03/2011.

<sup>39</sup> San Bartolo, Santa María Chiquimula y Santa Lucía La Reforma, Totonicapán; Olopa, Jocotán, Camotán y San Juan Ermita, Chiquimula. elPeriódico 30/03/2011.



beneficio. Pese a las deficiencias en su ejecución, la falta de recursos para estos programas afectaría a sectores de la población que se apoyan en ellos para mejorar su situación alimentaria.

El Banco Mundial decidió desobligar un financiamiento para combatir la pobreza en las áreas rurales debido a la falta de aprobación del Congreso de un proyecto denominado Expandiendo Oportunidades para Grupos Vulnerables, que contemplaba una inversión de US\$114.5 millones para combatir la pobreza en las áreas rurales de Guatemala, fue cancelado por el directorio del Banco Mundial (BM) debido a que los diputados opositores bloquearon la aprobación de dicho préstamo por parte del Congreso.

El préstamo estaba dirigido, principalmente, a financiar los servicios de salud materno infantil, programas de nutrición y seguridad alimentaria, el programa Mi Familia Progres, la construcción de caminos y carreteras rurales, proyectos de riego y drenaje, administración de justicia, servicios, infraestructura rural y otros destinos.

Esto trae a cuenta la necesidad de que los programas tengan una sostenibilidad en el futuro que no afecte los recursos destinados a otros programas y a la necesidad de mejorarlos en cuanto a la selección de beneficiarios y a la publicación de resultados.

Una decisión positiva que coadyuvaría a la disponibilidad de alimentos puede emanar del Congreso que está analizando una propuesta de la Confederación de Cooperativas de Guatemala para reactivar los silos del Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (INDECA), que están ubicados en puntos estratégicos del país para optimizar la distribución de granos básicos en casos de emergencia.

El objetivo inicial de INDECA en la década de 1970 era apoyar la estabilización de precios en el mercado nacional y garantizar el abastecimiento de productos agrícolas de consumo básico por todo el país en tiempos de necesidad. Desde 1997, el INDECA fue responsable de la administración de los alimentos donados por el Programa Mundial de Alimentos. Ahora podría cumplir esas funciones y las nuevas que se sugiere le sean asignadas.

La propuesta crearía el Instituto Nacional de Granos que compraría granos durante la época de la cosecha y los vendería a precios razonables en épocas de escasez. Esto posibilitaría amortiguar el impacto del clima en las áreas más afectadas.

Respecto a legislación, la Ley de Aguas, la Ley del Sistema de Desarrollo Rural Integral y de Ley de Granos Básicos no se han discutido aún en el Pleno del Congreso. El avance de la propuesta de Ley del Sistema de Desarrollo Rural Integral, conocida como la iniciativa 40-84, se encuentra en fase de ponencias públicas ante la Comisión de Agricultura.

Hay una postura favorable a la iniciativa de todos los sectores sociales y al parecer de la mayoría de diputados de la Comisión de (seis a favor y dos en contra de la iniciativa).

La aprobación de la Ley del Sistema de Desarrollo Rural Integral facilitaría una mayor atención a la población rural, contribuiría a aumentar la producción y la disponibilidad alimentaria en el país.

### **5.3.3 Acceso de los alimentos**

La reducida accesibilidad económica y social a los alimentos de la gran mayoría de la población guatemalteca está relacionada con la pobreza, los ingresos insuficientes que no cubren el costo de la canasta básica de alimentos y de la canasta básica vital, pues en Guatemala se tiene un salario mínimo para 2011 para el sector agrícola y no agrícola en Q63.70 diarios (Q 1 mil 911.00 más la bonificación incentivo de Q 250.00 según Decreto Legislativo No. 37-2001 para totalizar Q 2 mil 161 mensuales) y para los trabajadores de maquila se estableció en Q 59.45 diarios (Q 2 mil 033.00 mensuales sumada la bonificación). Este salario mínimo ha sido rebasado de manera sustancial por el crecimiento del costo de la canasta básica de alimentos. Para la población del área rural especialmente, esta situación se complica al no hacerse efectivo el salario mínimo y no existir una estructura del Ministerio de Trabajo capaz de supervisar y sancionar a las empresas agrícolas que incumplen con la Ley.

La inflación interanual medida por el índice de precios al consumidor (IPC) en mayo se estima en 6.39%, supera actualmente las estimaciones para todo el 2011 del Banco de Guatemala (6.36%). Por ello, el costo de la canasta básica de alimentos (CCBA) se calculó a finales de mayo en Q 2 mil 262.00; mientras que el costo de la canasta básica vital (CCBV) es de Q 4 mil 127.74.

Esto provoca que la relación entre salarios e ingresos de los asalariados, jornaleros, campesinos, micro, pequeños y medianos campesinos respecto al costo de la canasta básica de alimentos y la canasta básica vital sea tan distante, lo que repercute en el estado nutricional de sus hijos y su familia pues la relación entre ingresos y gastos en alimentación es directa.

La inequidad y la discriminación contribuyen a agudizar esta situación para algunos sectores. Podría decirse que en Guatemala la desigualdad es paradigmática, debido al contraste que existe entre ricos y pobres. La desigual distribución de la tierra, del ingreso y de la riqueza hacen de Guatemala uno de los países con mayor inequidad del mundo, pues 3.2% de las fincas ocupan 65.4% de la superficie de las tierras agrícolas; mientras 45.2% de las fincas ocupan apenas 3.2%.

En Guatemala, los ingresos de los hombres son mayores que los de las mujeres; los ingresos de la población en el área urbana son superiores a los del área rural. También los de la población no indígena son mayores que los ingresos de la población indígena. La discriminación hacia la mujer, el indígena y el habitante del área rural es notoria.

Aunque las estadísticas de pobreza, empleos e ingresos se actualizará este año, cuando se realice la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) y la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) 2011, la ENEI 2010, realizada en octubre de ese año por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), confirmó la brecha entre los salarios de las mujeres

respecto de los trabajadores hombres y la desigualdad en las retribuciones de la población no indígena frente a los indígenas.

El salario promedio mensual de una mujer en el área urbana metropolitana es de Q2 mil 034.82, mientras que el de un hombre es de Q2 mil 766.47 al mes, según la ENEI 2010. Mientras que el salario promedio de un indígena en el área metropolitana es de Q1 mil 608.21, un no indígena devenga Q2 mil 570.91 al mes. Según la Encuesta, las diferencias se reducen en el resto del área urbana y rural nacional.

En 2010 de una población total de 14.4 millones, la PEA se estimó en 5 millones 769 mil 262 y de una población ocupada de 5.5 millones de trabajadores, apenas 2.1 millones (el 36.2 por ciento de la PEA) tiene un empleo formal. De acuerdo a estos datos, la informalidad estaría ubicada en 63.8%

Los datos de la ENEI 2010 deben confrontarse con los anteriores, según los cuales la población ocupada en el sector informal representaba más del 75% de la población económicamente activa (PEA), siendo más pronunciado el fenómeno entre la población indígena que alcanzaba el 87.6%, mientras que la no indígena representaba el 65.1%.

Según el Informe de Desarrollo Humano 2007, en 2006 se calculaba la informalidad en 71.3% del total de la población total ocupada, en donde el 75.7% son mujeres; 85.1% del sector informal se ubica en el área rural; el 85.9 % son indígenas y 92.1% se ubica en niños y jóvenes que se encuentran entre 10 y 17 años.

La ENEI 2010 revela que la tasa de desempleo se ubica en 3.5 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), unas 202 mil 876 personas, superior a los 156 mil 186 desempleados reportados en la última encuesta de 2004.

La ENEI 2010 reveló que el principal problema de la población económicamente activa de Guatemala no es el desempleo, sino el subempleo (personas que trabajan y ganan menos de lo que quisieran o que están sobre calificadas para las labores que desempeñan).

En el caso del subempleo visible (las personas que laboran menos de la jornada normal de trabajo), pasaron de 811 mil 136 en 2004 a más de 1.2 millones en 2010; un incremento del 16.21% a 21.03% de la PEA durante los últimos 6 años anteriores a la Encuesta.

Asimismo, se contabilizan más de 2.2 millones de personas en subempleo invisible (personas que ganan menos del salario mínimo o trabajadores que están sobrecalificados para el puesto que desempeñan actualmente).

La tasa de subempleo ya estaba en un nivel alto, a los que se agregarán más de 400 mil personas que no encuentran un empleo que llene sus expectativas de ocupación y de ingresos, lo que refleja una insuficiencia, falla e incapacidad de la economía guatemalteca y de su mercado laboral que no ofrece suficientes puestos ni de calidad a la población laboral.

La Encuesta dejar ver también que el promedio de los salarios en el sector público es de Q2 mil 973.12 al mes y en el sector privado de Q1 mil 526.41, lo que estaba por debajo del salario mínimo vigente en 2010 (Q 1,950 mensuales).

Pero además de las condiciones laborales y de vida de la población, el incumplimiento de las leyes laborales genera que los sectores que viven de un salario o ingreso fijo. Es tan grave esta situación que el Gobierno de Estados Unidos ha señalado esa problemática en los últimos meses, ya que el Estado de Guatemala ha incumplido el capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR.CAFTA),

Ante el riesgo de que se aplique a Guatemala una fuerte sanción por aproximadamente quince millones de dólares por incumplimiento del capítulo del Tratado de Libre Comercio señalado, el Gobierno dio a conocer que enviaría al Congreso dos propuesta de ley para modificar el Código de Trabajo y el Decreto 29-89 Ley de Actividad Exportadora y realizó un informe que entregó el embajador de Guatemala en Washington en marzo.

Las propuestas más importantes contenidas en la reformas al Código de Trabajo tienen el propósito de fortalecer la Inspección General de Trabajo (IGT) a fin de otorgarle capacidad de imponer sanciones a las empresas que incumplan con las leyes laborales. También se establecería el pago de una fianza para las empresas calificadas bajo el régimen 29-89 para cubrir el pago de prestaciones laborales de los trabajadores en caso de quiebra o cierre de una compañía.

Además del incumplimiento de los salarios mínimos en la ciudad y el campo, los desalojos violentos son objeto de señalamientos graves por lo que ha representado tradicionalmente: la pérdida de tierras ancestrales de los campesinos y la muerte de dirigentes y miembros de las comunidades desalojadas. Además, los desalojos se realizan sin garantizar los derechos a la alimentación, a la salud, a la vivienda y al trabajo de los campesinos.

En cuanto al desalojo de familias en Panzós, alta Verapaz, las autoridades no atendieron adecuadamente la expulsión de campesinos por parte de los propietarios y autoridades judiciales en ese departamento. Las familias desalojadas deben considerarse "grupos vulnerables" y la acción de destruir las siembras de cultivos alimentarios, como ocurrió en este caso, distorsiona el modo de vida de 525 familias, por lo que el Estado debe generar una red de protección inmediata que incluya albergue, asistencia en salud, insumos mínimos de higiene, agua segura y alimentación desde que se da el desalojo hasta la resolución del conflicto o reasentamiento de las familias desalojadas.

Las comunidades afectadas no recibieron asistencia alguna por parte del Estado de Guatemala. No se previeron condiciones de albergue, ni siquiera para los niños, niñas, mujeres y ancianos. El incumplimiento de la Realización inmediata del Derecho a la Alimentación en esos casos se dio en esta situación concreta.

### **5.3.4 Aprovechamiento biológico, seguridad de los alimentos y protección al consumidor**

Debido a las condiciones higiénicas, falta de servicios básicos, agua potable y saneamiento ambiental y la de desnutrición, los casos que se han reportado sobre diarreas en menores de cinco años es de 134 mil 756.

No existe un plan coordinado de acción entre el Ejecutivo y las municipalidades del país, lo que genera diferentes procesos con resultados diferentes, de lo cual no existe una sistematización de la información a nivel nacional.

Sin embargo, por falta de fortalecimiento del MSPAS para impulsar y exigir que se realicen las acciones de saneamiento y mejoramiento del medio, la provisión de servicios integrales más allá de los servicios básicos y la promoción de estilos saludables de vida, las estadísticas de morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles todavía son altas.

Otra problemática resulta de la actividad minera en relación a la contaminación ambiental que provoca su actividad y en la salud de las comunidades cercanas a dichas explotaciones mineras, como fue señalado durante el semestre en distintos casos. La Comisión de Paz y Ecología (Copae) de la Diócesis de San Marcos, expresó su preocupación por las descargas de aguas industriales de la actividad minera en Sipacapa, las cuales desfogaron en el río Cuilco y aunque supone que las descargas son autorizadas, los habitantes y organizaciones sociales expresaron que existen dudas sobre si hay plena seguridad de que se cumplen con las normas establecidas o si sólo se confía en lo que la empresa minera informa sobre el hecho de que no hay contaminación.<sup>40</sup>

En este tipo de actividades ocurren hechos considerados como falta de respeto a los derechos humanos de los habitantes de los municipios afectados. La suspensión de los trabajos en la mina de oro, dictada el año pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no fue acatada. El Gobierno en su informe señaló que la mina puede continuar sus operaciones porque no se descubrieron químicos tóxicos que afecten a las comunidades y al ambiente de la zona.

Finalmente, en este semestre, la problemática fiscal ha creado una situación de inestabilidad en el impulso de programas y proyectos de infraestructura, servicios básicos y de salud, lo que contribuye a agudizar la problemática de morbilidad y seguramente de mortalidad por causas prevenibles.

### **5.4 Cuarto Informe SAN y su impacto en la atención a la seguridad alimentaria y nutricional**

El Cuarto Informe del Procurador de los Derechos Humanos en seguimiento a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, fue presentado el 10 de marzo de este año en reunión del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Palacio Nacional de la Cultura.

---

<sup>40</sup> Prensa Libre, Copae preocupada por descargas de aguas de actividad minera, 22/06/2011

En el Informe se destacó la situación de inseguridad alimentaria y nutricional que vive gran parte de la población en Guatemala y que el país se encuentra a las puertas de un riesgo nutricional que podría derivar en un estado de emergencia nutricional con las consecuencias de muertes por desnutrición que se producirían por hambre.

El Cuarto Informe del Procurador de los Derechos Humanos en seguimiento a la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Gobierno de Guatemala mencionó que la violación del derecho a la alimentación se relaciona directamente con la violación del derecho a la vida, por ello, no atender con responsabilidad a la población que vive en pobreza, extrema pobreza y desnutrición (crónica y aguda), no cumplir con los compromisos plasmados en la Constitución Política de la República de Guatemala, el irrespeto a los pactos y convenios internacionales, la desatención al mandato establecido en la Ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el hacer caso omiso a las recomendaciones del PDH en materia alimentaria nutricional, situaciones que conducen a la muerte por hambre pueden considerarse también un crimen, por su caudal de muerte y subdesarrollo.

Ante la crisis que se percibía ya en los meses de febrero y marzo de este año por el hambre estacional y la desnutrición aguda en algunas regiones y comunidades del país, el Procurador de los Derechos Humanos llamó la atención al CONASAN sobre que "Se avecina una crisis recurrente técnicamente conocida como *hambre estacional*, y esta estacionalidad es previsible y debe ser atendida de inmediato", y que "Es de vital importancia que las recomendaciones de este y los anteriores informes sean atendidas de manera urgente por el Conasan y la Sesan para prevenir escenarios de muerte por hambre".

Tal prevención no ha sido atendida adecuadamente por el CONASAN, pues pese a que se declaró la situación de riesgo nutricional y un Plan Emergente 2011, las acciones propuestas no fueron puestas en práctica porque dicho plan, aprobado por el CONASAN en sesión del 15 de abril, no fue concebido ni implementado adecuadamente, argumentando falta de recursos, pero también se percibe que es por falta de voluntad política de la institucionalidad creada para combatir la desnutrición.

El Cuarto Informe tuvo la virtud de convertirse en generador de unidad en torno al tema y por lo menos transitoriamente ha incidido en mejorar el funcionamiento de la institucionalidad del SINASAN y el CONASAN. Se logró que se reuniera con más frecuencia para revisar los documentos del Procurador y ha tomado en cuenta algunas de las recomendaciones.

Entre otras reacciones positivas generadas por el Informe se encuentra la prioridad dada por el G-4 (del cual forma parte el Procurador, el Rector de la USAC, el Arzobispo de la Iglesia Católica y el Presidente de las Iglesias Evangélicas) al tema de alimentación y seguridad alimentaria y nutricional al igual que al tema de seguridad ciudadana, puesto que la inseguridad alimentaria y nutricional produce gran cantidad de muertes de niños, jóvenes, adultos y de la tercera edad. También maestrías de derechos humanos, asociaciones empresariales (ASAZGUA), el sector iglesias, el sector académico y Naciones Unidas han analizado las propuestas del Informe. Los medios de comunicación han atendido en gran

medida la situación de crisis alimentaria, hambre y desnutrición. La cooperación internacional ha mostrado sensibilidad ante la temática y ha aumentado su apoyo en recursos a la Política y al Plan Estratégico de de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El Informe también pretende sensibilizar a los partidos políticos para que el tema sea prioritario en sus planes de gobierno y no un tema marginal porque, cuando esto se produce, hay menos inversión y atención a la desnutrición y seguirá reproduciéndose y profundizándose el proceso de desnutrición, hambre y muerte.<sup>41</sup>

#### **5.4.1 Fallas en la implementación de las recomendaciones del Cuarto Informe**

El Plan Emergente 2011 adolecía de fallas de concepción y de integralidad, pues no fueron tomadas en cuenta todas las recomendaciones del Cuarto Informe y de los anteriores. En un examen realizado por la PDH se observó que en el Plan solo se habían atendido 3 recomendaciones -declaración de riesgo nutricional, elaboración de un plan emergente y la constitución del Grupo Interinstitucional de Apoyo (GIA)- y 14 fueron ignoradas.

La primera recomendación fue atendida parcialmente, pues la declaratoria de riesgo nutricional conlleva también algunos aspectos no atendidos; el Protocolo de Evaluación Sanitaria Rápida en Situaciones de Emergencia, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se utilizó como referente para el IV informe, establece como prerequisites mínimos de actuación los siguientes aspectos:

- i) Determinación de la población y de las zonas afectadas y de riesgo;
- ii) Identificación de las causas principales;
- iii) Información sobre el acceso actual a los alimentos y disponibilidad alimentaria prevista para el futuro;
- iv) Información sobre el estado nutricional de los niños y los adultos, inclusive las carencias de micronutrientes;
- v) Información sobre la mortalidad infantil reciente (incluidas las causas); y
- vi) el resumen de la capacidad de respuesta existente, identificando las deficiencias y posibles áreas donde es necesario actuar rápidamente, inclusive procediendo a un fortalecimiento institucional e impartiendo formación de forma inmediata. Contar con información veraz es tan importante como contar con recursos económicos y humanos para reaccionar en favor de la población guatemalteca más vulnerable a la inseguridad alimentaria.

Al momento no se conocen acciones del CONASAN tendientes a cumplir con los seis requisitos que menciona el Protocolo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por consiguiente se deduce que el Consejo declaró un estado de riesgo nutricional sin iniciar las acciones necesarias orientadas por el protocolo y las normas internacionales.

Puede observarse en el Plan Emergente aprobado que el 85% de los Q. 324 millones 836 mil 561.94, destinados a la ejecución del Plan, no tiene financiamiento y el restante 15% se constituye de fondos existentes previamente dentro de las acciones habituales de los

---

<sup>41</sup> Procurador de los Derechos Humanos, El Defensor del Pueblo No. 50, Pp. 3.

Ministerios y Secretarías que conforman el CONASAN. Este desfinanciamiento consta en la página 07 del Plan Emergente, lo que en las actuales circunstancias políticas que existen en el país y en el Congreso de la República hace inviable su operatividad.

En anexo III del Plan Emergente, referente al Cronograma General de Ejecución, presenta un grave problema técnico: si se realiza la intervención como está en el cronograma, el calendario estacional de eventos críticos en seguridad alimentaria haría necesario un mayor esfuerzo financiero y humano que la intervención preventiva en el período enero-marzo, debido a que el mayor stress alimentario lo viven las familias vulnerables al hambre en el período abril-agosto de todos los años. Hacerlo después desvirtúa la acción preventiva lo cual significaría mayor cantidad de víctimas.

También se acordó en la Resolución del CONASAN número 01-2011 del 15/04/2011, en la que se declaró "Situación de Riesgo Nutricional", que la SESAN debe presentar a los órganos del SINASAN un informe semanal sobre los avances en la ejecución del mismo. De tal acuerdo solo se conoce el informe presentado el 17 de mayo y, luego, ni una sola convocatoria o informe se ha dado a la fecha.

En el literal a.2 del Informe Circunstanciado solicitado por el Procurador al CONASAN se menciona que se concluyó la entrega de asistencia alimentaria al departamento de Zacapa, pero sin tomar en cuenta la recomendación del IV informe del PDH en cuanto a utilizar criterios verificables para realizar esa actividad. No hubo evidencia de los mecanismos de transparencia, participación ciudadana y no discriminación que se utilizaron en esa acción.

Muestra de la utilización de criterios parciales lo constituye la distribución que se asigna al departamento de San Marcos (cero recursos), que en la semana 21 registra 616 casos de desnutrición aguda, mientras que Zacapa registra 213 casos. Zacapa como departamento recibió la mayor cantidad de recursos (2 millones 352 mil 480 quetzales), mientras San Marcos no recibió recurso alguno. La intencionalidad de la atención prioritaria no queda clara en las acciones emprendidas como se deduce de dicho informe.

En el literal a.3 del Informe Circunstanciado del CONASAN hay una aceptación contundente de incumplimiento de deberes del Consejo cuando se refiere a las gestiones ante el Congreso de la República, al afirmar: "Señor Juez, cabe indicar que para la implementación del Plan Emergente dos mil once (2011), es indispensable contar con los recursos financieros que permitan su ejecución, y siendo que el Organismo Ejecutivo no cuenta con los recursos necesarios para cubrir la totalidad de los montos estimados en dicho Plan..."

Pero también lo expresado en el párrafo contraviene lo dispuesto en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria Nutricional, Decreto 32-2005, que en su artículo 12 dice: "El CONASAN será el ente rector del SINASAN. Será responsable de impulsar las acciones que promuevan la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el ámbito político, económico, cultural, operativo y financiero del país." y el Artículo 15 de la misma Ley, que al referirse a las atribuciones del CONASAN, en su literal d, menciona textualmente: "Estudiar y aprobar



políticas, planes y estrategias de SAN y velar por la disponibilidad y asignación de recursos humanos y financieros para hacer efectiva su implementación;” en ambos casos la gestión de los recursos financieros es una responsabilidad del CONASAN.

La Unión Europea expresó su apoyo el 13 de abril, cuando se declaró la situación de riesgo nutricional y aprobó el Plan Emergente 2011, ofreciendo 6.5 millones de euros (Q72 millones) adicionales para complementar 40.3 millones de euros (Q 450 millones), para impulsar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional; pese a lo anterior, el Plan no ha sido impulsado con la celeridad que el caso requiere, dado que las reservas alimentarias en oriente y occidente estaban agotadas desde febrero.

Por estas condiciones se explica que en cuanto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el tema de la pobreza extrema no registre cambios sustanciales debido al paso lento con el que se trabaja en la consecución de este objetivo y meta; el cumplimiento de los ODM está relativamente lejos de cumplirse a pesar de que en algunas de las metas se ha avanzado. El hecho de no disminuir la desnutrición crónica y la pobreza contrarresta cualquier tipo de mejora que se haga en otros puntos.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destacó que la desnutrición crónica en Guatemala es sufrida por el 47% de la población menor de cinco años. El índice oficial del país señala que el 15.7% de la población se encuentra bajo el flagelo de la pobreza extrema.

El PNUD concluye en que es muy difícil que se pueda cumplir con este objetivo que afecta en gran medida el cumplimiento de los otros. El alto índice de desnutrición en la niñez perjudica también la enseñanza primaria y la salud materna.<sup>42</sup>

## **6. Derechos de los migrantes**

### **6.1 Marco jurídico vigente y la institucionalidad del Estado guatemalteco encargada de atender la problemática migratoria**

El artículo 26 de la Constitución regula la libertad de locomoción y estipula que toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia sin más limitaciones que las establecidas en la ley, así como que no podrá expatriarse a ningún guatemalteco, ni prohibírsele la entrada al territorio nacional o negársele pasaporte u otros documentos de identificación.

La nacionalidad guatemalteca, según la Constitución Política de la República de Guatemala, capítulo II sobre Nacionalidad y Ciudadanía se reconoce por tres razones: la nacionalidad de

---

<sup>42</sup> Pobreza, desnutrición y calidad educativa afectan los Objetivos de Desarrollo del Milenio, La Hora, 22/06/2011.

origen que se obtiene al haber nacido en el territorio guatemalteco; la nacionalidad por naturalización, para quienes por voluntad propia y cumplan con los requisitos de ley la pueden obtener, y el artículo 145 específico respecto a la nacionalidad de los centroamericanos, a quienes por ese mandato debe considerarse guatemaltecos de origen si adquieren domicilio en el país y manifiestan ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos.

Los guatemaltecos nacionalizados, dice la Constitución, adquieren los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones establecidas en la misma. El artículo 147 expresa que son ciudadanos guatemaltecos los mayores de dieciocho años de edad, los cuales tienen los derechos de ciudadanía sin más limitaciones que los establecidos en la Constitución y la ley.

Guatemala suscribió la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares el siete de septiembre del 2000 y la ratificó el 14 de marzo del 2003. La Convención reivindica el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de los trabajadores migratorios y de sus familiares entre los Estados que la ratificaron. Cada Estado debe rendir un informe oficial y sectores de la sociedad civil pueden presentar informes alternativos ante el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares. Este informe debería de haberse presentado por parte del Estado guatemalteco en el año 2008, sin embargo, fue presentado y conocido oficialmente hasta el 4 de agosto de 2010 al igual que la sociedad civil que hizo público su propio informe el 16 de diciembre del 2010.

Por la situación que viven los migrantes en la actualidad, son muy importantes los instrumentos denominados Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de personas, especialmente mujeres y niños, Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementan la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, entre otros que Guatemala ha ratificado.

El Estado de Guatemala participa de iniciativas de coordinación regionales para la gestión migratoria como la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), la Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM), el Grupo de Alto Nivel México-Guatemala de Seguridad Fronteriza (GANSEF).

Facilita la libre locomoción el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) que en julio del 2006, posibilitó el acuerdo de libre movilidad CA-4 que permite el libre ingreso, tránsito y permanencia de ciudadanos provenientes de Salvador, Honduras y Nicaragua por un período no mayor de 90 días con solo presentar el documento de identificación de su país; igual derecho tienen los guatemaltecos para transitar por esos países.

La Sección IV de la Ley de Desarrollo Social (Decreto No. 42-2001) contiene la Política de Desarrollo Social y Población en materia de Migración, la cual tiene como finalidad promover el desarrollo integral de grupos familiares que viven en el área rural, para incentivar la permanencia en sus lugares de origen, a través de la creación y fomento del empleo y actividades productivas, y servicios de educación y salud. Esta Ley se complementa con la Política de Desarrollo Social y Población, aprobada por el Gobierno en abril de 2002.

La Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA), Decreto No. 46-2007, establece que este Consejo es el ente gubernamental que coordina, define, supervisa y fiscaliza las acciones y actividades de los órganos y entidades del Estado responsables de proteger, atender y brindar asistencia y auxilio a los migrantes guatemaltecos y sus familias en Guatemala, así como los migrantes que se encuentre en territorio nacional.

Complementarias a esta legislación están la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, la Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición, el Decreto No. 37-2007, sobre la Visa Única Centroamericana, el Acuerdo Gubernativo No. 528-2003, Reglamento de autorización del trabajo de personas extranjeras a empleadores del sector privado; el Acuerdo Gubernativo No. 381-2007, Competencia del Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares y el Acuerdo Gubernativo No. 383-2001, Reglamento para la protección y determinación del Estatuto de Refugiados en el territorio del Estado de Guatemala.

Existen también acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales relación a los migrantes siendo estos en materia de salud en la región fronteriza (con México), de combate de la trata y tráfico de personas (con El Salvador, Estados Unidos de América y México), acuerdos en relación con cooperación consular y regularización migratoria (con Perú, Francia y El Salvador), acuerdos sobre focalización de cruces fronterizos (con México), acuerdos en relación a repatriación de migrantes (con la Organización Internacional para las Migraciones -OIM- para un digno y seguro retorno de guatemaltecos fallecidos en situación de vulnerabilidad en el exterior). También se tienen memorándum de entendimiento con los gobiernos de Centroamérica y México para la repatriación digna, ordenada, ágil y segura de migrantes centroamericanos.

Sin embargo, para atender la problemática de los migrantes centroamericanos que residen o están de paso por Guatemala de manera adecuada a las circunstancias actuales y en correspondencia con los tratados internacionales en la materia ratificados por el Estado, se hace necesaria la armonización de la legislación interna, cambios y reformas legislativas para una protección efectiva de los derechos de los migrantes en su estadía permanente o temporal en el país.

El Código de Trabajo, en el artículo 13 de ese ordenamiento legal establece los porcentajes de trabajadores guatemaltecos y extranjeros en las empresas de la siguiente manera: "Se prohíbe a los patronos emplear menos de un 90% de trabajadores guatemaltecos y pagar a

éstos menos el 85% del total de los salarios que en sus respectivas empresas se devenguen, salvo lo que sobre el particular establezcan leyes especiales". Hay otros artículos que establecen los compromisos de obligatorio cumplimiento de la legislación nacional dentro del país y en el extranjero para las empresas naturales guatemaltecas.

La Ley de Migración y su reglamento, contenidas en el Decreto No. 95-98 y el Acuerdo Gubernativo No. 529-99 establecen categorías migratorias para los extranjeros que ingresen al país: Residentes (temporales y permanentes) y No residentes (en tránsito y turistas visitantes). La Ley establece lo que puede y no hacer un migrante de acuerdo a su categoría. La Ley define los delitos y faltas que pueden cometerse en materia migratoria como ingreso ilegal de personas; tránsito ilegal de personas; transporte de ilegales; ocultación de ilegales y contratación de ilegales.

Como resultado de lo descrito anteriormente se concluye en que pese a la existencia de una legislación amplia en la materia, la problemática del marco jurídico consiste en la falta de actualización y adecuación de estas leyes a los requerimientos de nuestros tiempos. Por ello diferentes sectores han planteado reformas a importantes leyes migratorias.

En agosto del 2009, la Comisión de Migrantes del Congreso de la República inició un proceso de discusión y análisis, con sectores de la sociedad civil e iglesia, para la elaboración de una propuesta única o conjunta de reformas a la Ley de Migración y su Reglamento, dado que existían tres proyectos diferentes elaborados por la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG). Resultado de este esfuerzo es la Iniciativa 4126, que cuenta con dictámenes favorables de las Comisiones de Migrantes y Gobernación y fue conocida por el pleno del Congreso el 18 de febrero del 2010 como Ley Nacional de Migración y que fue aprobada en primera lectura, sin que hasta la fecha haya prosperado el proceso para su aprobación en pleno.

Estas reformas, en caso de aprobarse, podrían conducir a la regularización de miles de inmigrantes radicados en el país desde hace años, garantizar el respeto al debido proceso, una perspectiva integral de no discriminación, un plazo determinado de detención, priorizar el combate a la trata y el tráfico de personas, respetar el principio de no devolución, el derecho a interponer un recurso, garantías y protección de la niñez, disposiciones claras sobre centros de aseguramiento o albergues, un nuevo régimen disciplinario para combatir la corrupción en la Dirección General de Migración (DGM) y crear una partida presupuestaria para el funcionamiento de la DGM, así como una definición clara y precisa de los conceptos utilizados. Tiene la deficiencia de que no se establece claramente en ella que debe estar armonizada completamente con los convenios internacionales en la materia.

En el tema laboral, es susceptible de revisión el Reglamento para la Autorización del Trabajo de Personas Extranjeras a Empleadores del Sector Privado (Acuerdo Gubernativo N° 383-2001) pues sólo favorece a un sector de trabajadores extranjeros, gerentes, directores, administradores, superintendentes, y jefes generales de empresas, técnicos en ramas que no existan en el país, personas casadas o unidas legalmente con guatemaltecos o

guatemaltecos y quienes tengan hijos guatemaltecos, así como las personas reconocidas como refugiadas resultan favorecidos por este instrumento.

La Organización Internacional para las Migraciones, en su Informe de 2010, expresa que “La migración es un fenómeno constante y dinámico que exige una diversificación cada vez mayor de la intervención normativa con el fin de aprovechar al máximo sus posibles beneficios y reducir al mínimo los costos conexos para los países de origen y de destino, y para los propios migrantes. Es indispensable poseer mejores conocimientos y capacidades en diferentes esferas normativas para asegurar la protección de los migrantes, facilitar la migración legal, promover la integración de los migrantes en el país de destino, prestar apoyo para el retorno voluntario sostenible y promover una mayor vinculación entre la migración y el desarrollo.”

Atendiendo estas orientaciones, fruto de la experiencia internacional en la materia, el Estado guatemalteco debe profundizar y aprobar estas reformas a la normativa existente para adecuar el marco jurídico a la realidad actual, a los requerimientos de la dinámica de los migrantes y a los convenios internacionales suscritos y ratificados.

## **6.2 Marco Institucional**

La institucionalidad del Estado guatemalteco encargada de atender los derechos de los migrantes y la problemática migratoria se concentra especialmente en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, del Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General de Migración, la cual atiende la situación de los migrantes deportados de Estados Unidos y México y a los inmigrantes de diversos países que se encuentran en Guatemala. También en el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX), entidad con mayores recursos y programas destinados a la atención de la población guatemalteca residente, de manera regular o irregular, en el exterior, principalmente en Estados Unidos.

Interviene el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) al crearse el Programa Nacional de Población Migrante, lo que permite al Ministerio ser miembro de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG), que facilita la articulación de esfuerzos de las instituciones, organizaciones y personas miembro para la atención y la defensa de los derechos humanos de la población migrante y familiares.

Participa en el apoyo y la defensa de los derechos de los migrantes la Procuraduría de Derechos Humanos que cuenta con la Defensoría de la Población Desarraigada y Migrante, la cual aborda los fenómenos sociales de esta población, incide en espacios para articular esfuerzos para la defensa, protección, promoción y difusión de sus derechos humanos.

En el año 2007, para mejorar la atención a la problemática de los migrantes que viven, trabajan y residen en el extranjero, y apoyar sus demandas y necesidades también en el contexto nacional, el Congreso de la República emitió el Decreto No. 46-2007, Ley del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, publicado el 8 de noviembre de 2007.

El Consejo, denominado CONAMIGUA, es el ente gubernamental que debe coordinar, definir, supervisar y fiscalizar las acciones y actividades de los órganos y entidades del Estado que protegen, atienden y brindan asistencia y auxilio a los migrantes guatemaltecos y sus familias en Guatemala, así como a los migrantes que se encuentran en territorio nacional. Se emitieron ya los reglamentos: el Reglamento de la Ley para desarrollar los preceptos de la Ley del CONAMIGUA mediante Acuerdo Gubernativo No. 106-2009 del 7 de abril de 2009 y el Reglamento Interno del Consejo Asesor del CONAMIGUA, mediante Acuerdo de ese Consejo número 01-2009 del 17 de junio de 2009, donde se establecen sus funciones, su organización y funcionamiento.

El Consejo se instaló el 17 de octubre de 2008, casi un año después. Es hasta el año 2010 en que comienza a realizar algunas acciones como la creación de sedes regionales (en 2010 el Consejo abrió sedes regionales en Sacatepéquez y Alta Verapaz) y elaboración de proyecto de protocolo.

Por ello, la existencia del Consejo no ha significado ningún logro o avance en materia de atención a la situación, condiciones e intereses de la población migrante. El Consejo tiene sede en el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que limita su papel fiscalizador de las entidades que deben atender la situación de los y las migrantes.

### **6.3 Políticas, planes y programas para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de los migrantes**

Sobre las políticas generales, la Constitución Política de la República de Guatemala establece en el artículo 183, inciso o), que corresponde al Presidente de la República... “dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución”. Esto se realiza a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX), lo que se complementa en el aspecto legislativo con la aprobación de los tratados internacionales por el Congreso de la República.

En Guatemala, como política pública migratoria, solo se han implementado lineamientos, programas, normas, acciones y proyectos que responden a las demandas y necesidades circunstanciales y dirigidas a la atención de los migrantes guatemaltecos en el exterior, sin que hasta el momento se haya elaborado como tal una política pública congruente con la realidad contemporánea y las necesidades actuales, tanto nacionales como internacionales y compatibles con el respeto de los derechos humanos.

En relación a la defensa y promoción de los derechos de los migrantes connacionales en los Estados Unidos, hasta el momento, ninguna administración gubernamental ha sido capaz de incidir ante el Gobierno de los Estados Unidos para el otorgamiento del Estatuto de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) a los guatemaltecos migrantes en ese país. Pese a la solicitud de reiteración que el Estado guatemalteco presentó ante las autoridades de Estados Unidos en febrero de 2011, hasta la fecha sin resultados, a pesar de

las numerosas gestiones y eventos realizadas por organizaciones de migrantes para la obtención del mencionado estatus migratorio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, según su Reglamento Orgánico Interno, artículo 38, inciso d) tiene entre sus funciones “coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a la negociación de convenios... derecho internacional... migración...”. La Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios se divide en la Dirección de Asuntos Consulares y la Dirección de Asuntos Migratorios; contando también con un Centro de Atención al Migrante.

Guatemala tiene embajadas en Estados Unidos de América, en los Estados Unidos Mexicanos, Canadá y en todos los países de Centroamérica con los que brindan servicios diversos para quienes desean viajar por diversas razones o realizan transacciones comerciales y económicas con el país. Guatemala mantiene 11 consulados en Estados Unidos de América y 11 en los Estados Unidos Mexicanos, los más recientes fueron los instalados en Acayucan, Veracruz, y Arriaga, Estado de Chiapas, en 2010, así como el de Tuxtla Gutiérrez, abierto en abril de 2011.

Los Lineamientos de la Política Exterior de Guatemala para el Período 2008-2012 hasta ahora se ha mostrado incapaz de ofrecer la cobertura y eficacia requerida por la problemática de los y las migrantes de Guatemala en América del Norte. Las demandas son muchas y la mayoría insatisfechas.

La institucionalidad creada por el Estado guatemalteco hasta la fecha ha sido rebasada por la realidad y las necesidades de orden migratorio de ingentes cantidades de connacionales que viven en los países de Norteamérica, especialmente en Estados Unidos, así como los que para lograrlo cruzan el territorio mexicano. Entre las razones de mayor peso y que se visualizan en entrevistas con los migrantes están la falta de capacitación de los funcionarios asignados en los consulados guatemaltecos, así como con la existencia de recursos y presupuesto asignado a los rubros específicos debido a la problemática de insuficiencia del presupuesto nacional para atender las necesidades de los guatemaltecos y guatemaltecas.

#### **6.4 La migración de guatemaltecos al exterior y la importancia de las remesas**

La Encuesta sobre Remesas 2010 y Protección de Niñez y Adolescencia, llevada a cabo por la OIM y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), reporta que el 51.7% de guatemaltecos migra internacionalmente en busca de mejorar sus condiciones económicas, pues sus ingresos en Guatemala no respondían a las expectativas de vida deseadas, el 37.2% lo hizo en busca de un empleo, ya que se encontraban desempleados en Guatemala cuando partieron. 3.2% declaró que fue por reunificación familiar, 1.6% viajó con la expectativa de construir una vivienda, 1.6% se fue por conflictos familiares, 0.8% con la finalidad de poner un negocio, 0.6% viajó por problemas de violencia, 0.2% viajó por tener problemas con las autoridades (Policía Nacional Civil, Alcaldes, etc.), 1.7% por otras causas (desastres naturales, etc.) y el 1.4% no pudieron responder esta pregunta.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> OIM y UNICEF,

La OIM indica que durante el período 2002-2010, ha acumulado experiencia en la medición de las remesas. Con esa práctica, en el 2010 estima que en Guatemala hay aproximadamente 1 millón 323 mil 139 receptores de remesas, siendo mayoritariamente mujeres (65.5%) que hombres (34.5%). Aproximadamente 1 millón 409 mil 548 son remitentes de remesas y estima que 1 millón 263 mil 764 hogares son beneficiados con las remesas, así como 4 millones 510 mil 290 personas lo son de forma directa e indirecta.

Sobre la frecuencia con que reciben remesas los destinatarios se estima así: el 65.4% recibe remesas mensualmente, el 6.8% cada seis meses, el 4.9% cada cuatro meses, el 4.0% cada dos meses, el 3.7% cada tres meses y el 12.5% reciben remesas con otras frecuencias.

Es digno de mencionar que el 2.9% de los hogares receptores de remesas tienen un año de recibirlas, el 27.7% tienen entre dos y cuatro años recibiendo remesas, el 36.1% entre cinco y nueve años, el 18.2% entre diez y catorce años, el 9.7% hasta un año de recibir remesas, el 10.7% desde quince años y más. Esto indica que las remesas son más constantes en los primeros diez años de recepción, después de este período inician un descenso marcado. OIM y UNICEF consideran que esto podría deberse a que en ese período inicial aún están presentes compromisos de la manutención de los hijos y posteriormente se quedan las remesas, en la mayoría de los casos, vinculadas con los padres de los remitentes.

El volumen anual de las remesas estimadas por el estudio de OIM-UNICEF para el 2010 es de US\$ 4mil 487 millones 671 mil 734, lo que difiere con relación a lo reportado por el Banco de Guatemala durante el año 2010 (US\$ 4 mil 126 millones 784.1mil). La diferencia es de 8.7%, lo cual se explica porque los receptores de remesas estimaron que les podrían a enviar más remesas en diciembre y/o porque la encuesta capta otras formas de recepción de remesas.

**Tabla 13**  
**Guatemala: Ingreso de Divisas por Remesas Familiares**  
**Años: 2008 - 2011**  
- En miles de US dólares -

<b>Meses</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011*</b>
Enero	314,606.7	290,240.3	246,129.3	283,348.1
Febrero	318,307.0	281,951.4	274,512.7	304,621.2
Marzo	340,459.5	344,145.6	369,953.3	384,120.4
Abril	385,252.4	339,687.3	344,408.9	371,286.6
Mayo*	397,982.9	332,603.3	357,017.2	415,324.7
Junio	384,331.8	348,577.8	394,289.7	



Julio	409,667.1	365,551.1	384,612.4	
Agosto	373,536.2	337,449.4	377,358.3	
Septiembre	371,836.0	332,103.7	359,310.5	
Octubre	367,727.7	327,523.1	339,374.1	
Noviembre	311,685.4	287,928.3	331,384.6	
Diciembre	339,337.9	324,525.5	348,433.1	
<b>TOTALES</b>	<b>4,314,730.6</b>	<b>3,912,286.8</b>	<b>4,126,784.1</b>	<b>1,758,701.0</b>

Fuente: Mercado Institucional de Divisas.

El envío de remesas del exterior por el creciente número de guatemaltecos y guatemaltecas que han emigrado al exterior (Estados Unidos) ha generado un aporte fundamental para la economía nacional en cuanto al crecimiento en años anteriores a la crisis, durante y luego de ella. Este aporte no consiste solo en el crecimiento del monto de divisas con que cuenta el Banco de Guatemala como reservas monetarias internacionales, sino también se refleja en la dinamización de la economía con el incremento del consumo, la inversión, la creación de empresas familiares y el incremento de la producción, del crédito y la reducción de la pobreza.

Según los datos reportados, las remesas han aumentado en 2011 en los meses de marzo y mayo en relación a los mismos meses de 2008, año en el que se ha producido el mayor volumen de remesas del exterior.

## 6.5 Situación de los migrantes guatemaltecos que viven en Estados Unidos

La OIM estima que, en el año 2010, existía una población guatemalteca que reside en el exterior de 1 millón 637 mil 119. También calcula que el promedio anual de guatemaltecos que viajan al exterior buscando mejores condiciones de vida en el período 2002-2010 es de 44 mil 440 personas y una tasa de emigración durante ese mismo período que oscila entre 10.5% y 11.4% con una tendencia creciente en cantidad y en la tasa de emigración, pese a la existencia de mayores controles migratorios y los riesgos que representa cruzar el Estado mexicano.<sup>44</sup>

El informe dice que en año 2010, los guatemaltecos que vivían en el exterior y que envían remesas a sus familiares son 1 millón 409 mil 548, de los cuales el 72.4% son hombres y el 27.6% mujeres. El 0.9% son niños de entre diez y catorce años de edad; el 77.7% son jóvenes comprendidos entre 15 y 34 años de edad y la mayoría son hijos de los jefes de hogar a quienes envían remesas.

<sup>44</sup> OIM y UNICEF, *Encuesta sobre Remesas 2010, Protección de la Niñez y Adolescencia*, Cuadernos de Trabajo Sobre Migración.

Los guatemaltecos que viajan en busca de mayores oportunidades son originarios principalmente de los departamentos de Guatemala (19.4%), San Marcos (10.5%), Huehuetenango (8.4%) y Quetzaltenango (6.1%). En menor proporción son de los departamentos de Jutiapa, Escuintla, Alta Verapaz, Chiquimula e Izabal pues migran entre el 5% y el 4.4%. Los menos tienen un porcentaje que oscila entre 3.5% y 1.3%.

Viajan especialmente a los estados de California (33.8%), New York (12.1%), Florida (7.4%) y Texas (9.8%). El 3.3% cambian de ciudad y de estado de residencia en busca de empleo o porque las autoridades migratorias persiguen menos a los indocumentados.

Los migrantes guatemaltecos tienen un grado de escolaridad diferenciado de la siguiente manera: con algún grado de primaria (45.5%), con algún grado de educación secundaria (22.4%); con algún grado de educación universitaria (26.3%); sin ninguna instrucción (2.8%). La población guatemalteca en el exterior se ha diversificado en cuanto a sus ocupaciones: ha bajado el porcentaje de trabajadores no calificados y trabajadores de servicios y vendedores; se ha incrementado el de los agricultores, técnicos y profesionales del nivel medio, los operarios y artesanos con lo cual los guatemaltecos en el exterior han obtenido más trabajos calificados en comparación con el año 2009.

Los migrantes guatemaltecos que viven en América del Norte, especialmente en Estados Unidos todavía sufren las secuelas de la crisis y sus graves repercusiones de desempleo que alcanzó el 9.4% en 2009 y 9.0% en 2010, el desempleo de los hispanos en diciembre de este último año era del 13%.<sup>45</sup> Tal situación afectó a los guatemaltecos que viven y laboran en ese país.

Para 2010 se tuvo un crecimiento económico endeble de Estados Unidos y Canadá, un crecimiento que no garantiza una continuidad pues esa debilidad no abona a la reducción de las altas tasas de desempleo.

**Leyes antimigrantes.** Otra problemática consiste en que las autoridades estatales en Estados Unidos han endurecido las medidas antimigrantes y la perspectiva no es nada halagüeña para los migrantes guatemaltecos en ese país. La ley antiinmigrante SB1070 firmada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, dejó de ser un asunto estatal para convertirse en tema de debate nacional en Estados Unidos, generó marchas manifestaciones de protesta de migrantes y organizaciones de derechos humanos, sin embargo, la autoridad estatal continuó adelante con la Ley.

Existen denuncias de que aunque la SB1070 fue bloqueada en sus partes medulares, la policía detiene a muchas personas y las cuestiona sobre su estatus migratorio si sospecha que son indocumentadas.

---

<sup>45</sup> OIM, Informe sobre las migraciones en el mundo 2010, Pp. 162.

Existen estudios que consideran que la sola aprobación de la ley SB1070, que aún no se aplica como fue concebida, causó que en el último año un número de entre 100 mil y 200 mil abandonaran Arizona hacia otros estados y que en concepto de pérdidas por el bloqueo contra Arizona reportaba a noviembre de 2010 más de \$140 millones, de acuerdo con un estudio del Centro para el Progreso Americano (CAP, siglas en inglés), con sede en Washington D.C.<sup>46</sup>

Existen en la actualidad varios estados en el gran país del norte, que han aprobado más de 50 leyes antiinmigrantes. Algunas de estas prohíben ofrecer empleo a indocumentados y otras impiden que alquilen o renten casas.<sup>47</sup>

En Hazleton, Pensilvania, se aprobó una de las más duras leyes que contemplan multas de 1 mil dólares a los empleadores y propietarios de casas que den trabajo o renten vivienda a los inmigrantes ilegales.

En el sentido de encontrar soluciones a esta problemática, la reforma migratoria prometida por el Presidente Obama no ha caminado en su período de gobierno y tal parece que el tema estará vigente en el período de elecciones que se aproxima, sin garantía de que los ofrecimientos se hagan realidad. Los migrantes se preguntan si las leyes locales y estatales seguirán vigentes en caso de que el Congreso resuelva las diferencias entre el Senado y la Cámara de Representantes y apruebe una nueva ley federal de inmigración, la cual podría ser la solución a la problemática.

**Guatemaltecos deportados.** Además, como producto de las leyes y medidas antiinmigrantes y contra los indocumentados, Estados Unidos ha deportado, vía aérea hacia Guatemala hasta junio de 2011, una cantidad de 15 mil 355 guatemaltecos y guatemaltecas. El año pasado, el total de deportados por vía aérea fue 27 mil 222. Si la tendencia continúa igual que en el primer semestre, a finales de 2011 se tendrá una cantidad superior a la deportada el año anterior.

En cuanto a los indocumentados centroamericanos deportados desde México por vía terrestre, de enero a junio de 2011, se tiene la cantidad de 31 mil 755. En 2010 se deportaron 62 mil 998, con lo cual la tendencia es ligeramente superior a la del 2010.

La afirmación de que, pese a las medidas contra los migrantes que se han tomado en Estados Unidos y México, el fenómeno de la migración de guatemaltecos y centroamericanos hacia el país del norte continúa creciendo como en años anteriores.

---

<sup>46</sup> <http://blog.inmigrantetv.com/?p=5636>

<sup>47</sup> Página Abogados de Inmigración 1-888-226-4232.

[http://www.abogada.com/abogados/Inmigracion/Lawyers/Nuevas\\_Leyes\\_Anti\\_Inmigrantes/](http://www.abogada.com/abogados/Inmigracion/Lawyers/Nuevas_Leyes_Anti_Inmigrantes/)

## 6.6 Riesgos para los migrantes en el paso por México hacia Estados Unidos

Según las convenciones, pactos y convenios internacionales, los trabajadores migrantes y migrantes en general tienen una serie de derechos entre los cuales se puede enumerar, entre los principales, los siguientes:

- Derecho al trato humano y digno
- Derecho a igual trato y no discriminación
- Reconocimiento de la dignidad del niño y la niña
- Prohibición de detención de personas especialmente vulnerables
- Protección a la integridad personal
- Condiciones dignas de detención
- Garantías procesales
- Acceso a la información y a las instalaciones de los centros de privación de libertad
- Derecho a reparación

Sin embargo, en la búsqueda de mejores oportunidades de vida y de trabajo, los migrantes guatemaltecos y centroamericanos tienen que pasar una serie de dificultades para llegar a Estados Unidos a través del territorio mexicano. A las tradicionales violaciones a los derechos de los migrantes a que son sometidos durante su travesía, se han acumulado nuevas formas de violencia contra ellos ejercida por grupos del crimen organizado que operan en ese país.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) elaboró un Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México el 22 de febrero de 2011. En él reconoce que la "situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes es extrema, sobre todo, ante casos de secuestro en los que se viola su dignidad personal y los derechos inherentes a ésta. El hecho afecta no solo a las víctimas, sino también a sus familias y comunidades. Se trata de un delito que atenta directamente contra el derecho a la seguridad pública. Vulnera, además, los derechos humanos de los migrantes a la libertad, a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad, a la seguridad personal y, en algunos casos incluso, el derecho a la vida."<sup>48</sup>

La Comisión especificó en su Informe Especial los sitios en los que se corre el riesgo de ser víctimas de la delincuencia. Estos puntos se localizan en: Baja California, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Se señala también 71 municipios con tramos carreteros y ferroviarios en donde en algunas zonas se han documentado secuestros, maltratos, extorsiones, robos y ataques sexuales a migrantes.

En la presentación del Informe, la CNDH indicó que no han sido suficientes los esfuerzos del Gobierno de México por disminuir los índices de secuestro en perjuicio de la población

---

<sup>48</sup> Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México. México, 22 de febrero de 2011, Pp. 3.

migrante, pues en ese momento tenía conocimiento de 11 mil 333 inmigrantes secuestrados entre abril y septiembre de 2010.

La Comisión advirtió en abril de 2011 que no existen criterios claros y homologados en la Procuraduría General de la República (PGR) ni en las diversas procuradurías o fiscalías generales de Justicia de las entidades federativas y el Distrito Federal para la sistematización, seguimiento, intercambio de información, generación de registros y estadísticas delictivas respecto del secuestro de migrantes.<sup>49</sup>

Un ejemplo de ello es el hecho de que cuando solicitó información sobre los casos de secuestro de migrantes en el período junio 2009-junio 2010, la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la PGR, dijo tener conocimiento de solo cuatro casos. Pero la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la información que proporcionó, señala que en ese período intervino en 13 eventos de secuestros; 11 de los cuales los hizo del conocimiento del Ministerio Público Federal, y en dos del fuero común, lo que no coincide con la información proporcionada por la PGR.<sup>50</sup>

El Estado mexicano ha optado por realizar reformas a su legislación. Las más importantes son las reformas a la Constitución de la República que entraron en vigencia en junio de 2011, y cuyo énfasis más trascendente recae en lo relativo al respeto los derechos humanos. Así mismo, el pasado 28 de abril en el Senado de la República se aprobó, por unanimidad, reformar la Ley General de Población para despenalizar la migración de indocumentados y evitar su criminalización.

Esa medida ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados desde el 4 de septiembre del 2007, mediante lo cual se garantiza el respeto a los derechos individuales de miles de centroamericanos que en condiciones sumamente difíciles pasan por territorio mexicano.

Las reformas a la Ley General de Población modifican los artículos que penalizan con severidad la migración indocumentada, se distancian de las exigencias sociales, criminalizan la pobreza y la búsqueda de oportunidades, representan una política contraria al derecho penal democrático y el respeto a los derechos humanos de los migrantes.

Con anterioridad, ingresar a México sin documentos estaría tipificado como delito en la Ley General de Población (LGP) y según su Artículo 123 se impondría pena de hasta dos años de prisión y multa de 5 mil pesos al extranjero que se interna ilegalmente al país y la pena de hasta 10 años de prisión al extranjero que, habiendo sido expulsado, se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido acuerdo de readmisión o que no exprese u oculte su condición de expulsado.

La citada Ley ha sido objetada por algunas organizaciones de derechos humanos y de migrantes que señalan que aún no se ajusta totalmente a los convenios internacionales, que

---

<sup>49</sup> <http://www.jornada.unam.mx/2011/04/25/politica/007n1pol>

<sup>50</sup> *Ibidem*.

todavía no se ha operativizado porque no se ha creado su reglamento y a que, para hacerla efectiva, debe mostrarse la voluntad política de combatir y erradicar el crimen organizado.

Mientras, los secuestros de migrantes han continuado. El caso más conocido, de los ocurridos en 2011, sucedió el 24 de junio en un tren de mercancías, en cuyo techo viajaban 200 migrantes indocumentados entre la ciudad de Ixtepec en el estado de Oaxaca, rumbo a Medias Aguas, en el estado de Veracruz.<sup>51</sup>

Algunos de los testigos del secuestro que lograron escapar regresaron, tras el ataque, al albergue "Hermanos en el Camino", dirigido por el Padre Alejandro Solalinde Guerra, defensor de los derechos de los migrantes, denunciando el secuestro ante las autoridades. Según los testigos, entre los secuestrados hay mujeres y niños.

No se puede olvidar que en agosto de 2010 se lamentó el hallazgo de 72 cadáveres de migrantes ilegales en una hacienda de San Fernando, Tamaulipas, México, por una denuncia de un sobreviviente ecuatoriano. Entre las víctimas de esa masacre, según datos de que dispone la PDH, había 13 guatemaltecos y guatemaltecas. La masacre fue condenada por diferentes gobiernos, organizaciones de derechos humanos y pro inmigrantes de distintos países y por organismos mundiales.

Se capturó a supuestos responsables de esa masacre y el gobierno mexicano se comprometió a esclarecer los hechos. En el mes de junio de 2011 se conoció que la policía federal arrestó a un militar desertor, presunto miembro del cártel de los Zetas, sospechoso de participar en la masacre de 72 migrantes cerca de la frontera norte y del secuestro de autobuses de pasajeros en el mismo lugar, quien fue identificado como Edgar Huerta Montiel y su pareja Brenda Acevedo.<sup>52</sup>

Se puede concluir que, aunque hay avances en materia jurídica en México, pasar por ese territorio significa todavía un alto riesgo para los centroamericanos que utilizan este país para llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida y de trabajo.

## **6.7 La situación de la niñez y adolescencia de las familias de los migrantes**

En un estudio realizado por CEPAL-CELADE sobre Migraciones, vulnerabilidad y políticas públicas se mencionan los riesgos que provoca la realidad migratoria en la niñez y la adolescencia, los cuales no son exclusivos de ellos, pues están presentes y afectan la vida familiar y el contexto de la crianza y educación de los niños. Estos riesgos son los siguientes:

1. Inestabilidad económica. No siempre trae las soluciones esperadas, además se pierde parte del capital social existente y acumulado en el lugar de origen.
2. Incertidumbre. La emigración implica la apertura de un nuevo plano de vida para la familia que trae aparejada la incertidumbre.

---

<sup>51</sup> Diarios locales.

<sup>52</sup> CNN, El Demócrata y AP.

3. Desintegración familiar. La cohesión familiar, que en muchos casos ya atravesaba por dificultades, se ve sometida a una fuerte presión cuando el jefe de familia o ambos miembros de la pareja emigran.
4. Pérdida de referentes. Los niños sufren particularmente el desarraigo, que implica un cambio o una ruptura con sus referentes: abuelos, amigos, vecinos, ídolos locales.
5. Dificultades escolares. Algunas veces el acceso a la educación (por problemas de documentación) puede llegar a dificultarse. La adaptación hace que el niño se desinterese de la vida escolar, entre en apatía, la repetición del curso y el abandono de la escuela. También se ha comprobado que, cuando el niño no emigra y lo hace uno o sus dos progenitores, el rendimiento escolar se resiente.
6. Sobrecarga de la figura materna. La emigración masculina deja a la mujer con una sobrecarga de tareas que muchas veces no puede sobrellevar.
7. Nuevas construcciones familiares. La emigración de uno o de los dos jefes del hogar es posible en muchos casos debido a que los progenitores de los emigrantes son los que adquieren la responsabilidad de la crianza de esos hijos. Estos abuelos no siempre responden en la pre-adolescencia a las necesidades educativas de los niños, niñas y adolescentes.
8. Precariedad al instalarse. La urgencia y la desinformación con que se mueven a veces los migrantes los hacen tomar decisiones equivocadas al momento de instalarse en su nuevo destino.
9. El riesgo de la urgencia. La imperiosa necesidad de obtener ingresos que justifiquen la inversión migratoria hace que el migrante se vincule rápidamente a empleos informales, insalubres o de baja remuneración, asociándose a áreas de riesgo social.<sup>53</sup>
10. Falta de recursos. La instalación en un nuevo medio hace que el migrante o la familia deje atrás el capital social acumulado por él o su familia.
11. Aceleración de la adultez. La llegada a un nuevo medio lleva a que niños y adolescentes se incorporen tempranamente al mercado de trabajo, sin terminar los ciclos educativos correspondientes y sin la capacitación profesional deseable.
12. Anomia. La distensión de la cohesión familiar, la instalación en un marco de incertidumbre y de precariedad, el aumento del estrés al interior de la familia, provocan debilidad en las normas de crianza, que en la adolescencia puede transformarse en comportamientos anómicos.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> OIM-UNICEF, Cuaderno de Trabajo No. 28, PP. 11..

<sup>54</sup> Desorden neuropsicológico caracterizado por la dificultad para recordar los nombres de las cosas.

13. Aumento de la vulnerabilidad infantil. Todo lo anterior pone al niño emigrante en una situación de alta vulnerabilidad

Estos riesgos son una muestra de las dificultades y procesos generados por la desintegración familiar que el estudio detalla pormenorizadamente. En Guatemala, los niños y adolescentes están protegidos por instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, así como de instituciones encargadas de ello, que en la práctica poco efecto procuran para proteger a la niñez involucrada en el fenómeno migratorio.

La responsabilidad de los familiares en la crianza y educación de los niños y adolescentes que quedan bajo su custodia, dadas las características de la mayor parte de las familias de los migrantes, queda librada a la capacidad de estos familiares o personas para enfrentar los fenómenos derivados de la migración.

### **6.8 Algunas acciones del Procurador de los Derechos Humanos ante la situación de los migrantes en el exterior y en Guatemala**

El Procurador de los Derechos Humanos ha dado continuidad a los procesos de seguimiento a la situación de los derechos de los migrantes dentro y fuera de Guatemala. Entre las acciones más importantes realizadas en el semestre se encuentran las siguientes:

1. Atención de casos y denuncias: La PDH recibió 18 denuncias sobre migrantes guatemaltecos que se encuentran detenidos o que han desaparecido en su trayecto a los Estados Unidos de América, enfrentándose a innumerables peligros como asaltos, robos, violación sexual, extorsión, mutilaciones, enfermedades, asesinato, muerte por enfermedad y/o accidente, entre otros. En el caso de las personas que se presume puedan haber desaparecido en territorio mexicano, se elaboraron 31 expedientes que fueron remitidos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, la cual apoyará las investigaciones para dar con el paradero de los guatemaltecos y guatemaltecas que se encuentran en esa situación.
2. Preparación de Informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: En coordinación con la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, México, y organizaciones de la sociedad civil de ese país, así como de Honduras y El Salvador, se elaboró un informe de adhesión a la solicitud de medidas cautelares para las familiares y testigos de las personas desaparecidas en territorio mexicano. El Informe fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
3. Selección de casos y elaboración de documental: Selección de 15 casos de guatemaltecos presuntamente desaparecidos en México, en los cuales sus familiares brindarán testimonio con relación al impacto que ha tenido en ellos la desaparición de su ser querido, las repercusiones que ha tenido y los problemas que han enfrentado en los aspectos social, económico, emocional y familiar. Calendario para efectuar las visitas y realización de video-documental.



4. Acciones de seguimiento a los deportados guatemaltecos de la redada de Postville, Iowa, EEUU: 20 testimonios sobre violaciones a los derechos humanos sufridos por deportados de la redada de la procesadora de carne Agriprocessors Inc Postville, Iowa, EEUU, con el objetivo de sustentar los casos presentados por la abogada Sonia Parras en Estados Unidos a fin de obtener el beneficio de la Visa U para los familiares de quienes sufrieron dichas violaciones. La Procuraduría de los Derechos Humanos contó con el apoyo ad-honorem de profesionales del derecho para la legalización de la documentación, misma que fue entregada al Ministerio de Relaciones Exteriores para su traducción y envío al bufete que gestiona el caso en los Estados Unidos. En este marco personal de la institución del Procurador, coordinó con el cineasta Luis Argueta y la Abogada Parras la entrevista de 4 jóvenes que no obtuvieron la visa U y en cuyos casos puede presentarse una apelación. La acción también incluye la elaboración de perfil psicológico que pueda consolidar la documentación sobre violación a los derechos humanos a que fueron sometidos en la empresa norteamericana en el Estado de Iowa.
5. Apoyo a migrantes en condiciones de dificultad, como el traslado e identificación de familiares de una persona originaria de El Petén. En coordinación con las Auxiliaturas de San Marcos y de Coatepeque se gestionó que el Hospital Nacional de Coatepeque atendiera a la persona afectada, quien se encontraba en estado grave, trasladado inicialmente, desde el Hospital Nacional de Chiapas, México, donde permanecía en Sala de Cuidados Intensivos, al Hospital Nacional de Malacatán y a Coatepeque. Se transmitió información del caso por la red de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FEGER) en todo el país y por telenoticiarios, hasta identificar a la familia que es originaria de Poptún, Petén.

## **7. Derecho a un ambiente sano**

Una mayoría de guatemaltecos no dispone de agua potable, le afecta la disposición inadecuada de los desechos sólidos y sufre los problemas generados por el cambio climático.

Los tres son problemas que afectan a todos y su solución requiere tanto de la participación del Estado como de todos los ciudadanos, modificando su actitud hacia el ambiente.

Guatemala posee aún abundantes recursos hídricos, pero se desperdicia el agua y se utiliza en forma inadecuada, generando escasez. Prueba de ello son las demandas frecuentes de vecinos que no tienen agua, de agricultores que se quejan de ríos y nacimientos secos y habitantes en las orillas de ríos y lagos que deben soportar olores fétidos y consumir un líquido contaminado.

Los ríos llevan no solo las aguas residuales, también arrastran toda la basura tirada en calles y barrancos. Tanto el problema del agua sucia como el de la basura tienen soluciones técnicas adecuadas, que requieren una mayor conciencia ciudadana y planificación en inversión por parte de las autoridades correspondientes.

Está demostrado que se gasta más en tratar de recuperar la salud deteriorada por la contaminación de agua, basura y aire que lo que se invertiría en eliminarla y prevenirla.

En Guatemala es indispensable mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático. El incremento de la temperatura en las tierras bajas, la ampliación del Corredor Seco, las inundaciones en durante la estación lluviosa y las heladas en el altiplano son un efecto evidente. El costo se manifiesta en las vidas y los bienes perdidos por los frecuentes derrumbes en vías de comunicación, en las enfermedades como dengue, que en la actualidad afecta también a habitantes de tierras altas y la capital. La mayor parte de los daños en la infraestructura causados por Ágatha y la serie de tormentas tropicales que azotaron al país durante 2010, siguen sin ser reparados, con un gran impacto negativo en los derechos humanos de la población afectada.

### **7.1 Agua: contaminación y escasez**

Según información ofrecida por la Organización Mundial de la Salud (OPS) en Guatemala, el 78.7% de la población tiene acceso a fuentes de agua mejoradas, mientras que un 33% de hogares en el área rural se ven obligados a acarrear agua desde un chorro público o privado, pozo, río lago o manantial. Sin embargo, hay que hacer notar que el acceso presenta irregularidades y tiende a reducirse en muchas comunidades, particularmente durante la estación seca, además de deficiencias en la potabilización del líquido vital.

El principal contaminante de las aguas superficiales en todo el país proviene de los sistemas de drenaje de aguas servidas de los centros poblados, los cuales se descargan directamente hacia los cauces de ríos y lagos.

Como consecuencia de este deterioro, durante el primer semestre de 2011 se han registrado denuncias y protestas relacionadas con escasez o falta de agua en muchas comunidades, contaminación de los acuíferos, desvío de ríos en la Costa Sur por empresas agrícolas, disminución del caudal de ríos importantes, con riesgo de extinción en casos extremos, y falta de mantenimiento y dragado de ríos y lagos.

El desabastecimiento de agua que afecta a miles de personas y amenaza con extenderse, afecta los derechos económicos y sociales de la población y es fuente de conflictos, particularmente durante la estación seca que abarca los primeros cinco meses del año.

El aumento de la temperatura en verano, que excede los 30 grados en algunas zonas, la reducción en los niveles de los ríos y la falta de acciones para proteger zonas de recarga hídrica y la carencia de redes adecuadas de distribución, son los factores detonantes de la crisis del agua en diferentes áreas del país. A ello se agrega la contaminación de los ríos y lagos por residuos químicos y orgánicos, poniendo en evidencia la deficiencia en el tratamiento de aguas y la falta de responsabilidad en este tema de municipalidades y empresas, tanto agrícolas como industriales.

El 15 de febrero, habitantes de Cuilapa denunciaron que el beneficio de café El Molino contamina con sus aguas mieles el río del mismo nombre, que desemboca en Los Esclavos, afectando a 20 mil pobladores. Una comisión formada, con apoyo del MARN, constató que en la ribera del afluente existe un alto grado de degradación, según el alcalde de la localidad.

En la quinta reunión del Comité para el Manejo Sostenible de la subcuenca del río Cahabón, que se celebró en Cobán, la tercera semana de marzo, se abordó la situación de los ríos Cahabón y Polochic y las consecuencias para el Lago de Izabal en el mediano plazo.

Según el Plan Maestro de la subcuenca del río Cahabón, los residuos sólidos que arrastran estos afluentes equivalen al 70 por ciento de la contaminación que llega a río Dulce y al Lago de Izabal.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), explicó que los ríos Cahabón y Polochic desembocan en el Lago de Izabal luego de recorrer 13 de los 17 municipios del departamento, y transportan los desechos sólidos de los pobladores. La deforestación de estas subcuencas contribuye a que la basura desemboque en el lago. Las acciones a corto plazo para evitar más contaminación incluyen la reforestación de las riberas del Cahabón y la aplicación de planes de producción de agua más limpia. Entre ellos, evitar que los beneficios de café viertan la pulpa a los ríos. De no aplicarse estas medidas, en 50 años la erosión podría hacer del Lago de Izabal un pantano.

A principios de abril fue denunciada la emanación de olores fétidos del río Jalapa, que pasa por la cabecera del mismo nombre, principalmente en la época de calor. En años anteriores el río tenía mayor caudal y abastecía la planta de agua potable del municipio. La causa de la contaminación es la utilización del río como vertedero de desagües y de sangre de reses sacrificadas en el rastro municipal. Existe un proyecto para la construcción de una planta de tratamiento de agua para el año 2012, por parte de la municipalidad. Mientras tanto, los vecinos siguen sufriendo los efectos en el ambiente y el derecho a la salud.

El río Huista, que atraviesa cuatro municipios de Huehuetenango -Concepción Huista, San Antonio Huista, Santa Ana Huista y Unión Cantinil- se encuentra en riesgo de desaparición, ya que está perdiendo su caudal y presenta altos índices de contaminación.

Anteriormente el agua del río era cristalina y era utilizada para diferentes fines por los habitantes, sin poner en riesgo la salud. Sin embargo, los proyectos de riego desarrollados por fincas y agricultores particulares han ocasionado la disminución del caudal en forma alarmante. La situación se agrava por la **deforestación** en la cuenca del río.

Por otra parte, beneficios de café de la zona lanzan al afluente la miel de los granos de este producto y la pulpa es vertida a la corriente en época de cosecha; además, muchas personas utilizan las riberas como letrinas, lo que sumado a la descarga de aguas servidas, genera un alto grado de contaminación del afluente. No obstante, los habitantes no tienen otra opción que usar esta agua para lavar ropa, utensilios de cocina, bañarse, limpieza doméstica, lavar los sanitarios y hasta consumo.

En Quetzaltenango, entidades ambientales y habitantes de cinco municipios, reportaron el 30 de abril que los basureros constituyen un riesgo para los mantos acuíferos subterráneos y manantiales de la región. Según las autoridades, los mantos hídricos están expuestos a la polución, por la mezcla de agua de lluvia con lixiviados, composición tóxica que emana de la basura y contamina las aguas subterráneas.

Un estudio publicado en el 2009 por el MARN revela que la ciudad de Quetzaltenango produce 179 toneladas de desperdicios al día, y el área rural 103, lo que pone en riesgo nacimientos, ríos y bosques. Debido a la falta de programas y plantas de tratamiento de desechos sólidos, las municipalidades usan los bosques como vertederos y debido a que allí se encuentran los puntos de recarga hídrica, la probabilidad de contaminación de los nacimientos es muy alta.

Como resultado de este proceso, durante la época lluviosa se elevan las enfermedades gastrointestinales en niños menores de 5 años en la región afectada, debido al consumo de agua contaminada y el problema es mayor si está cerca de un basurero. Quemar la basura es uno de los métodos que usan las municipalidades para eliminarla; sin embargo, este proceso genera humo tóxico y varios químicos que contaminan el aire y dañan los bosques. Esto pone en evidencia la urgencia de contar con una disposición adecuada y plantas de tratamiento de los desechos sólidos en todos los municipios para preservar el derecho a la salud de todos los habitantes.

Otro factor agravante lo constituye el hecho de que el proceso de purificación de agua en el país afronta serias deficiencias. Por ejemplo, el director del Área de Salud de Huehuetenango denunció en el mes de abril que 16 de 32 municipalidades de este departamento no purifican el agua que distribuyen. Una de las consecuencias es que la segunda causa de morbilidad en este departamento son las diarreas causadas por bacterias, particularmente por la especie denominada coliforme fecal.

Según el funcionario, de 210 muestras de agua que examinaron en lo que va de este año, 121 resultaron contaminadas con heces; durante el 2010 se analizaron tres mil 660 muestras de 747 sistemas de agua, y se detectaron bacterias en mil 861.

En el país, el 95 por ciento de fuentes naturales está contaminado, en gran parte por desechos industriales. Solo el 11 por ciento de 400 empresas monitoreadas en el área metropolitana cumplen con la primera fase del **Reglamento de Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos**; el resto lanza desechos líquidos contaminados, según informó el MARN el 21 de marzo.

En la primera etapa de aplicación del reglamento, las empresas deben reducir los sólidos suspendidos y pasar de tres mil 500 miligramos por litro de agua a 600; para mayo del 2015, deberán bajar a 400. En la siguiente etapa, que vence en mayo del 2020, reducir a 150; y en la última etapa, que concluye en mayo del 2024, llegar a cien miligramos por litro. Para los ecologistas, la ley es como una autorización para seguir contaminando durante 15 años, pues carece de fuerza coercitiva.

**Desvío de ríos.** Los ríos del país no sólo sufren de contaminación y uso indiscriminado como desagües de todo tipo de residuos, sino también son desviados, especialmente por empresas agropecuarias, con el consiguiente daño para el ambiente y las comunidades aledañas; el problema se incrementa durante el invierno por la falta de bordas e infraestructura de protección contra inundaciones.

En el mes de enero, los habitantes de Masagua denunciaron que un ingenio extrae arena y piedras del río Guacalate, desviando el cauce del mismo, lo que podría poner en riesgo el

recién construido puente; el anterior fue destruido por el río durante la temporada de lluvia de 2009.

Según la denuncia, los trabajadores y máquinas del ingenio desviaron el río para facilitar el riego de los cañaverales, y además construyeron una represa artesanal que redujo el flujo de agua y perjudicó a los agricultores y ganaderos que tienen terrenos aguas abajo. Debido a la ausencia de barreras para el agua, durante el invierno la corriente podría destruir los aproches y bases del puente.

En otro caso, el desvío de los caudales de los ríos Pacayá, Ocosito, El Rosario y Naranjo dejó sin agua a los campesinos de Coatepeque, según denuncia del 22 de marzo; empresarios de palma africana, banano y hule, desvían los ríos a través de la construcción de presas, quíneles, bordas y checadoras. Existe una comisión integrada por MAGA, MARN Y CONRED que conoce el caso, pero han transcurrido meses sin respuesta.

Como resultado del desvío de los ríos, las comunidades ubicadas en la parte baja de los mismos se inundan en el invierno, mientras que en el verano sufren de la escasez de agua; además, la infraestructura construida en las fincas tiene un efecto contaminante en los afluentes.

En Chiquimuilla, a principios del mes de julio, CONRED, la institución del Procurador de los Derechos Humanos y autoridades municipales realizaron un recorrido por varias aldeas afectadas por inundaciones, provocadas por los quíneles contruidos por diferentes empresas cañeras. Las aldeas visitadas fueron La Ceiba, Las Posas, El Paradero, La Rubia, El Arenal, Matamoros, La Bomba, el Aguacate y el Corosito, las cuales son afectadas cada invierno desde que se empezó a sembrar caña en el sector.

Las empresas han construido quíneles que cruzan por la orilla de la calle de las aldeas citadas; durante el verano, los quíneles son utilizados para llevar el agua del río Los Esclavos a las fincas; en el invierno no son utilizados, pero se desbordan con la lluvia recibida, inundando las calles de las aldeas y las viviendas. Otro problema generado es el mal estado de las calles provocado por los camiones que transportan la caña, que se mantienen llenos de agua, dificultando el acceso a las aldeas. Los presidentes de los COCODES de la región han pedido una respuesta favorable a esta serie de problemas que los afecta cada invierno.

En Nueva Concepción, pobladores de 20 comunidades manifestaron a mediados de febrero su preocupación porque las autoridades les comunicaron que no tienen proyectos de dragado en el río Coyolate, ni de construcción de bordas que los protejan de las correntadas durante el invierno, por lo que las posibles futuras inundaciones pondrían en riesgo a más de 20 mil pobladores. Durante la época de lluvia del año pasado, el río Coyolate causó daños que dejaron pérdidas humanas y millonarias en infraestructura y agricultura.

Una comitiva de vecinos visitó el Congreso de la República el 3 de febrero, y expuso las necesidades de las comunidades; pero no existe financiamiento para ese tipo de obras.

Las comunidades de La Gomera tienen el mismo riesgo con los afluentes Ancome y Seco; Santa Lucía Cotzumalguapa, con el Pantaleón; Masagua, con el Achiguate y el Guacalate; Puerto San José, con el Achiguate y el Naranjo, y Puerto de Iztapa, con el María Linda.

Hombres y mujeres de varias comunidades de Nueva Concepción emprendieron la construcción de una borda de dos kilómetros de largo a la orilla del río Coyolate, previendo posibles desastres en la próxima temporada de lluvias. La ONG “Acción contra el Hambre” decidió reparar la borda y, a cambio, solicitó la mano de obra de los vecinos, quienes recibieron un pago por su trabajo.

El 14 de marzo, pobladores de 31 comunidades de Retalhuleu, Quetzaltenango y San Marcos amenazaron con bloquear carreteras si las autoridades no solucionaban el conflicto originado por el desvío intencional del cauce de los ríos Ocosito, Pacayá y Naranjo, que ha causado inundaciones en varios poblados.

La disminución del caudal en los ríos en el país se confrontó en el primer semestre del año y se acentuó durante el mes de abril. Según el INSIVUMEH en el 2010, varios fenómenos incrementaron la sequedad del suelo y evitaron que se filtrara la humedad al subsuelo: la lluvia se suspendió a mediados de octubre, frentes fríos secaron la tierra y hubo ausencia de nubes.

El bajo caudal de los ríos en la estación seca también obedece a que el agua es desviada desde las montañas, poniendo en riesgo la existencia de las corrientes. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó durante el mes de abril que los principales ríos del país habían reducido casi en el 90 por ciento su caudal máximo, como se muestra en la siguiente tabla:

**Tabla 14**  
**Reducción del caudal de ríos del país en el mes de abril**

<b>Río</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Nivel máximo (m.)</b>	<b>Nivel 5 de abril (m.)</b>
Ocosito	Retalhuleu	2.25	0.25
Sis	Cuyotenango, Suchitepéquez	2.25	0.56
Achiguate	Siquinalá, Escuintla	1.50	0.09
Guacalate	San Juan Alotenango, Sacatepéquez	1.00	0.08
Ostúa	Asunción Mita, Jutiapa	2.00	0.18
Polochic	Panzós, Alta Verapaz	2.25	1.71
Chixoy	Chisec, Alta Verapaz.	3.00	0.10

Fuente: Insivumeh

Es necesario aplicar medidas urgentes para el manejo de agua ante la disminución del recurso hídrico superficial; a mediano y largo plazos se debe planificar la infraestructura adecuada para capturar el agua de lluvia, además de detener la deforestación y el desvío indiscriminado de ríos para el monocultivo.

La reducción del caudal de los ríos representa también una grave limitación para combatir los incendios forestales, ya que cuando los mismos sobrepasan la capacidad de las brigadas contra incendios, es necesario lanzar agua desde helicópteros.

### **7.1.1 Casos de escasez y contaminación de agua**

El resultado de la falta de cuidado y mantenimiento de las fuentes de agua y el daño ambiental en general, mantienen al borde de una crisis a amplios sectores de la población del área metropolitana y de la provincia, durante la estación seca.

El primero de abril, residentes de las zonas 1, 2 y 4 de la cabecera de Totonicapán denunciaron que llevaban más de un mes sin servicio de agua entubada, con el consiguiente brote de enfermedades, por lo que exigieron a la comuna la solución del problema.

El 3 de abril, residentes de San Pedro Ayampuc, realizaron una manifestación contra la municipalidad local, protestando por irregularidades en el servicio de agua entubada; los vecinos han enfrentado este problema desde hace varios años. La Policía Nacional Civil disolvió con bombas lacrimógenas la manifestación, en el kilómetro 15 de la ruta a San Pedro Ayampuc, con el saldo de una manifestante herida.

La carencia del líquido en este municipio es aguda, sobre todo en el verano, y los vecinos tienen que comprarla en toneles, a precios mayores. Las colonias afectadas son Lo de Reyes, Las Brisas y San Luis. El alcalde ha ocupado el cargo cuatro períodos, sin resolver el problema.

Dada la tendencia creciente a la escasez y contaminación del agua, los conflictos por el uso del vital líquido pueden ser parte de un escenario futuro en el país. Esto ya se observa en la contienda que sostienen las comunidades Chirzamazá, de Nahualá y el caserío La Esperanza, de Santa Catarina Ixtahuacán, en Sololá, por dos nacimientos de agua y obras de infraestructura. El conflicto se remonta varios años atrás y ha habido enfrentamientos entre los pobladores, a pesar de la mediación de varias instituciones, entre ellas la Auxiliatura departamental de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Sololá.

El 1 de abril, la conexión del servicio de agua entubada en la colonia San Bartolomé Becerra, Antigua Guatemala, generó un enfrentamiento entre vecinos beneficiados y habitantes de la aldea del mismo nombre. Estos últimos se oponían a la conexión, ya que la empresa constructora del proyecto no incluyó el servicio de agua potable, según los vecinos.

**Tabla 15**  
**Diversos casos y denuncias sobre escasez de agua**

<b>Lugar</b>	<b>Problema reportado</b>
Coatepeque	El río Pacayá bajó su caudal y sus aguas no pueden ser utilizadas para consumo, a causa de la contaminación industrial y orgánica.
Suchitepéquez y Sololá	Uno de cada cinco nacimientos de la cuenca del río Iztacapa se ha secado, afectando el abastecimiento de agua de San Bernardino, San Pablo Jocopilas y nueve comunidades en la bocacosta de Sololá. La escasez se atribuye al monocultivo, que utiliza el agua de manantiales para riego.
Chimaltenango	Los mantos tienen bajo caudal y varias colonias reciben poca agua
Cabecera de Jalapa	Los ríos locales se están secando y son insuficientes para abastecer a la población.
Colonia el Limón, zona 18, ciudad de Guatemala	Vecinos sólo reciben agua por la madrugada
Diferentes colonias de Mixco, Guatemala	El servicio de agua entubada es deficiente. Los pozos tienen bajo caudal. Empresas abastecedoras de agua en cisterna o embotellada tienen pozos propios y le pagan a la comuna Q. 150 al año.

Fuente: elaboración propia con información hemerográfica.

Con orden emitida por el juez de Asuntos Municipales de Antigua Guatemala, se empezaron a abrir zanjas para conectar la tubería que suministraría agua a 60 familias de la referida colonia. Los residentes de la aldea, al iniciarse el zanjeado, impidieron que se ejecutara la orden municipal.

### **7.1.2 Asolvamiento de ríos y canales**

La sedimentación y el asolvamiento naturales son importantes para el desarrollo y mantenimiento de numerosos hábitats costeros, lagunas, estuarios y manglares que requieren de aportes de sedimentos. De hecho, la reducción en las tasas naturales de sedimentación puede poner en peligro la integridad de estos hábitats, pero también pueden hacerlo las cargas excesivas de sedimentos, como está ocurriendo en Guatemala.



La movilización de sedimentos y la sedimentación por causa del ser humano, se deben, entre otras, a las actividades de construcción, las relacionadas con la explotación forestal, las maniobras de dragado, las prácticas agrícolas y mineras. Estas actividades generan efectos ambientales negativos, tales como la erosión costera o el desequilibrio hidrológico. La deforestación y erosión están entre los factores principales que afectan a las cuencas hidrológicas, ya que tienen un efecto directo sobre las corrientes de agua.

En Guatemala, se presentan varios casos de asolvamiento de ríos y corrientes de agua, agudizadas por las tormentas tropicales desde el 2005, con graves consecuencias para comunidades y poblaciones que subsisten de la pesca y el turismo o cuyas viviendas son destruidas. Es de señalar la falta de respuesta o lentitud de las autoridades correspondientes, particularmente el Ministerio de Comunicaciones y Vivienda, para dar el mantenimiento preventivo a ríos y canales.

El Canal de Chiquimulilla ha sufrido un proceso de asolvamiento debido a la basura y lodo que acarrear los ríos y la arena que saca el mar, lo que dificulta la salida al océano de los pescadores y pobladores de la región que atraviesa el canal. Además, el sedimento provoca que el agua fluya fuera del mismo, inundando las comunidades aledañas. El canal corre paralelo a la costa del Océano Pacífico, desde La Gomera, Escuintla, hasta Moyuta, Jutiapa, pasando por tres municipios de Santa Rosa. Cincuenta y cuatro comunidades y una cabecera departamental han sido afectadas por el asolvamiento del Canal de Chiquimulilla.

En la aldea Rama Blanca fueron destruidas dos viviendas y una iglesia evangélica. El asolvamiento también ha generado el surgimiento de plantas acuáticas y los peces no crecen por la falta de oxígeno. Hasta el mes de marzo, por lo menos, los trámites de diferentes autoridades locales para que fuera dragado el canal, habían sido infructuosos.

En marzo, pescadores y comunitarios de tres departamentos por donde pasa el Canal de Chiquimulilla manifestaron su preocupación por el asolvamiento de su cauce. El asolvamiento del canal, causado por basura, arena, lodo y plantas, daña las hélices de los motores de las lanchas y en algunos casos, el agua estancada ha causado socavamientos, destruyendo viviendas.

El turismo es afectado, porque el lodo que genera el asolvamiento altera el paisaje. Cuando la marea baja la basura se queda en el cauce, y cuando sube, flota en el canal.

En Iztapa, el canal dejó de ser navegable debido al lodo y la arena, resultado de un dragado deficiente, realizado después de la tormenta Ágatha. La fauna también es afectada, porque los peces no crecen a causa de la falta de oxígeno y las condiciones no son apropiadas para la sobrevivencia de los camarones.

**Tabla 16**  
**Comunidades afectadas por asolvamiento del Canal de Chiquimulilla**

Escuintla	La Gomera, Puerto San José e Iztapa
Santa Rosa	Taxisco, Guazacapán, Chiquimulilla
Jutiapa	Pasaco y Moyuta
Gomera	Seis comunidades
Taxisco	14 localidades
Moyuta	Siete aldeas
Pasaco	Una aldea
Guazacapán	Cinco localidades
Chiquimulilla	Ocho localidades

Fuente: elaboración propia con fuente hemerográfica

Diferentes sectores de Iztapa, Escuintla (comerciantes, pescadores artesanales y líderes comunitarios), solicitaron el 6 de abril el dragado en el Canal de Chiquimulilla y en la bocabarra La Choca, asolvados desde hace cinco años, después de la tormenta Stan, con un colapso tras el paso de Ágatha; el canal está asolvado unos cinco kilómetros y en la bocabarra se perdió más de medio kilómetro de playa, afectando la pesca y el turismo.

El 7 de junio, estos mismos sectores de siete comunidades de Iztapa, aledañas al Canal de Chiquimulilla, manifestaron de nuevo su preocupación ante la indiferencia de las autoridades para atender la petición de dragar dos kilómetros del canal, ya que están expuestos a inundaciones, por la intensa lluvia y al menos dos mil familias que viven de la pesca en el Puerto de Iztapa podrían resultar afectadas por inundaciones.

Durante los años anteriores las inundaciones arrastraron toneladas de sedimentos, debido a la falta de mantenimiento del Canal de Chiquimulilla. Además, la tala inmoderada de manglares ha eliminado la barrera natural que protegía a las comunidades Buena Vista, El Carrizo, Santa Cecilia, Santa Marta, Blanca Cecilia y Puerto Viejo, Iztapa, lo que las ha dejado expuestas a inundaciones, por el desborde del canal o los altos oleajes.

En San Marcos también se presentan problemas de asolvamiento y falta de dragado por parte de las autoridades correspondientes. Los pobladores de ocho comunidades y del casco urbano de Ocosingo, San Marcos, solicitaron al Gobierno, el 4 de abril, el dragado de la bocabarra donde desemboca el río Naranjo, debido a que el agua subió de nivel y socava el terreno y destruye viviendas cercanas a la playa.

Al menos 15 viviendas fueron destruidas, debido al socavamiento y varias familias evacuaron sus casas porque se hundieron varios metros de la playa, a lo largo de dos kilómetros. Las comunidades más afectadas son los caseríos Tilapa, Almendrales, Isla de Pilar, Cerritos, Los Laureles, Los Faros y Óscar Méndez; hasta 10 mil hogares estarían en riesgo de perder su vivienda, según un miembro del COCODE del caserío Los Faros. La mayoría de damnificados

son lancheros y pescadores, que carecen de recursos para trasladarse. El problema surgió desde la tormenta Stan, en el 2005, por la ausencia de dragados preventivos.

Ocós es atravesado por los ríos Naranjo y Suchiate, y el cauce que se forma por las desembocaduras de estos afluentes no puede fluir de forma normal, debido a que la bocabarra está bloqueada por sedimentos, lo que causa las inundaciones.

Según el coordinador del Proyecto Cuencas Suchiate/Naranjo, el socavamiento de las playas de Tilapa y Ocós, en donde desembocan los referidos ríos, se debe principalmente a la deforestación que hay en la parte alta y media de la cuenca del Naranjo.

La falta de manejo y conservación de suelos de las laderas de esta cuenca generan cada año un promedio de 40 toneladas por hectárea de sedimentos erosionados, los cuales son arrastrados durante el invierno hacia la parte baja de la misma, lo que causa asolvamientos y con ello el alza del nivel del estero en la bocabarra y del cauce de los ríos.

La primera semana de julio, líderes de 16 comunidades de Retalhuleu, Quetzaltenango y San Marcos se reunieron con el director de Conred, en el parcelamiento Chiquirines, Ocós, para solicitar el dragado de tres ríos: Ocosito, Pacayá y Naranjo, que cada invierno se desbordan e inundan comunidades y cultivos.

En Champerico, alrededor de 700 pescadores artesanales decidieron cambiar de oficio o migrar a EE. UU., debido a que el asolvamiento que tiene la dársena del puerto les impide navegar con normalidad<sup>55</sup>. Durante el mes de junio, los habitantes no salieron a pescar, debido al asolvamiento en la bocabarra de la dársena. La construcción de la obra fue iniciada durante el gobierno anterior y fue inaugurada el 17 de agosto del 2009. Anteriormente los pescadores bajaban sus lanchas en un muelle e iban a pescar; ahora, con la construcción del rompeolas, el muelle quedó casi seco, lo que les impide salir al mar. Es fundamental establecer y deducir las responsabilidades correspondientes por las deficiencias de esta obra.

### **7.1.3 Deterioro de lagos y lagunas.**

Un caso grave lo constituye la laguna de Calderas en Amatitlán, que se ha visto afectada por los fenómenos naturales que la asolvieron en 2010, como la erupción del Volcán de Pacaya, que generó ceniza y lodo que descendieron a causa de la lluvia. La laguna recibió además un excedente de agua en el pasado invierno, lo que ocasionó que el nivel del agua subiera cuatro metros, inundando viviendas y áreas aledañas.

Como resultado, muchas de las letrinas quedaron anegadas, lo que ha contaminado la laguna; en el mes de enero de este año se reportó que el lugar fue invadido por un alga y una nata verde. Esta laguna es de vital importancia, ya que abastece a 22 comunidades de Amatitlán y tres de San Vicente Pacaya.

---

<sup>55</sup>Dársena: especie de rompeolas que permite que las embarcaciones ingresen y regresen al mar. El rompeolas impide la llegada del agua al muelle antiguo.

Como un caso positivo, puede mencionarse la limpieza de la laguna Chichoj ubicada en Alta Verapaz, que presenta un alto grado de contaminación por los residuos de actividades domésticas, industriales y agropecuarias. El Tribunal Latinoamericano de Agua advirtió que 12 años eran suficientes para ver el sitio convertido en pantano si no se tomaban las medidas adecuadas.

Desde el año pasado se trabaja en la recuperación y limpieza de la cuenca y, según el MARN, han retirado cerca de mil toneladas de sedimentos, principalmente ninfas, gramíneas y basura.

El proceso de limpieza es el resultado de la cooperación entre varias organizaciones de la sociedad civil, autoridades municipales y el MARN y es parte de proyecto “Salvemos al río Cahabón” que guarda relación con este cuerpo de agua y permitirá en un breve plazo el reinicio de actividades turísticas, de recreación y pesca en el cuerpo lacustre.

Por otra parte, en las lagunas Itxacoa, Jalapa y San Juan, Jutiapa, comenzaron los trabajos de limpieza.

En otro esfuerzo por reducir la contaminación en el lago de Atitlán, cuatro plantas más para el tratamiento de aguas residuales -adicionales a las siete existentes- se construyen alrededor del lago, según el director de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno (Amsclae).

Las nuevas plantas se edifican en Sololá, San Andrés Semetabaj, San Juan La Laguna y Panajachel. Las procesadoras son construidas en el marco del programa Unidos por el Lago, que reúne a autoridades, empresarios, organizaciones y la sociedad civil en la lucha por la salvación del cuerpo lacustre. El plan prevé edificar 15 plantas de tratamiento de aguas residuales alrededor del lago antes de finalizar el año, lo cual deberá verificarse oportunamente. En abril, la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Santa Cruz La Laguna, Sololá, estaba abandonada por falta de fondos o por problemas técnicos.

La planta que se construye en Panajachel, tendrá capacidad para procesar 37 litros de agua por segundo y dará servicio a un 50% de la población del municipio. En febrero del 2011 entró en vigencia el **Reglamento de Descarga de Aguas Residuales en la Cuenca del Lago de Atitlán**, Acuerdo Gubernativo 12-2011, cuyo plazo para cumplir con la primera etapa –contar con sistemas para reducir la concentración de materia orgánica, metales pesados y coliformes fecales- finaliza el 31 de agosto de este año. Actualmente, los entes generadores deben elaborar un cronograma y estimación de inversiones para eliminar sedimentos, reducir materia orgánica y mejorar la calidad del agua que fluye al lago.

En un plazo de dos años, se debe eliminar el fósforo y el nitrógeno, que son los que alimentan la cianobacteria. Según el MARN, los pequeños hoteleros alrededor del lago ya cuentan con biodigestores. Además, se trabaja en la búsqueda de jabones biodegradables, lo que reduciría el impacto del fósforo en las aguas.

No obstante las medidas que se han tomado, el 10 de mayo se reportó el reaparecimiento de la cianobacteria en la parte norte del Lago de Atitlán. La mancha generada por la

cianobacteria cubrió desde la bahía Tzanjuyú, Panajachel, hasta las playas públicas de San Antonio Palopó y Santa Catarina Palopó.

Estudios efectuados por biólogos determinaron que la cantidad de nutrientes que ingresan en el lago son principalmente derivados de agua contaminada con heces, orina, jabón, residuos de fertilizantes que introducen fósforo y favorecen el crecimiento de la cianobacteria. Aunque el funcionamiento de nuevas plantas de tratamiento ha disminuido el flujo de aguas servidas hacia el lago, hay esfuerzos que aún no han dado resultado, como el ingreso de residuos de abono, según *Todos Juntos por el Lago*.

## **7.2 Acción del Procurador: Supervisión por inundaciones en Lago de Amatitlán**

En el mes de Agosto de 2010 fue interpuesta una denuncia ante el Ministerio Público (MP) y la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), contra el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), por su presunta responsabilidad en el incremento del nivel del lago de Amatitlán.

De acuerdo con la denuncia, el INDE construyó una compuerta que controla el nivel del agua en el lago y regula el flujo de agua hacia la planta hidroeléctrica Jurún Marinalá. La denuncia señala que desde 1988 el INDE ha provocado inundación en los alrededores del lago, para acumular más agua en la planta. Los denunciantes consignaron que con el paso de Ágatha, el INDE mantuvo las compuertas cerradas hasta que el zanjón Malena se azolvó y fue imposible abrirlas. El efecto de las inundaciones ha sido daño en las viviendas, pérdida de bienes materiales y cultivos, así como riesgo de proliferación de enfermedades.

El Procurador de los Derechos Humanos, emitió una resolución el 19 de Agosto de 2010,<sup>56</sup> por violación del derecho humano a un ambiente sano de los habitantes de la cuenca del Lago de Amatitlán y lugares circunvecinos.

El Procurador declaró la violación del derecho humano a la seguridad, propiedad y a un ambiente sano de la población que habita la cuenca del río Villalobos, río Michatoya y del Lago de Amatitlán, y como responsable de dicha violación señaló al Estado de Guatemala, a través del Instituto Nacional de Electrificación, INDE.

En la resolución, la PDH ordenó al gerente del INDE y al alcalde de Amatitlán tomar una serie de medidas para contrarrestar los daños así como también dio recomendaciones al gobernador departamental, al Ministerio Público, a los ministros de Salud y de Agricultura, para tomar las medidas necesarias para prevenir futuros desastres.

Para dar seguimiento a esta resolución, el Procurador de los Derechos Humanos realizó una supervisión administrativa sobre la situación del lago de Amatitlán, durante la cual recibió informes circunstanciados de las diferentes instituciones relacionadas con la problemática del lago.

---

<sup>56</sup> Procurador de los Derechos Humanos, EXP.ORD.GUA.4618-2010/DESC

**Conclusiones** de la supervisión son las siguientes:

1. La extensión geográfica de la cuenca, la multiplicidad de factores causales y la variedad de instituciones involucradas, reviste de gran complejidad el desborde y contaminación del lago de Amatitlán y los ríos Michatoya y Villalobos. Además, en este problema convergen fenómenos de distinta índole: meteorológicos, hidráulicos, de suelos, económicos, sociales, administrativos y demográficos.
2. Los valores extremos de lluvia que corrió en la cuenca del Lago de Amatitlán durante la Tormenta Ágatha, es un antecedente de suma importancia.
3. Los sectores declarados de alto riesgo comprenden las cuencas hidrográficas del río Villalobos, lago de Amatitlán y río Michatoya, en un sector que se extiende a una distancia de 100 metros horizontales a cada lago de cada río, zanjón y quebrada existente.
4. El arrastre de sedimentos en el zanjón Malena -afluente del Michatoya- es resultado de la extracción de arena, legal e ilegal en la cuenca de este zanjón y de la deforestación de la misma. El asolvamiento del zanjón, parece ser la principal causa inmediata del desborde del río Michatoya y del lago de Amatitlán.
5. También pueden señalarse otros factores como la deforestación en la cuenca del lago de Amatitlán y del río Michatoya y la basura que es arrastrada desde basureros clandestinos y del basurero de Bárcenas y la existencia de las compuertas del INDE sobre el río Michatoya, para regular el caudal de agua en la planta de Jurún Marinalá.
6. De acuerdo con el INDE, la utilización del lago de Amatitlán como embalse natural, genera beneficios importantes relacionados con el suministro de energía eléctrica y el plan de manejo de las compuertas se ha ejecutado durante diez años, de acuerdo con el comportamiento de variables definidas.
7. El informe del INDE indica que gran parte de la población de Amatitlán está expuesta a los riesgos de inundación debido a la poca capacidad de conducción hidráulica del cauce del río Michatoya y a que la población y el lago se encuentran al mismo nivel topográfico.
8. La alta tasa de impermeabilidad de la cuenca y los altos coeficientes de escorrentía con tiempos muy cortos de respuesta de la misma cuenca, hizo que los altos valores de precipitación provocaran caudales que en muy poco tiempo llenaron completamente la capacidad del lago.
9. El flujo de caudales desde el lago de Amatitlán se detuvo en particular por el asolvamiento del cauce del Michatoya, dado el material arrastrado por el zanjón Malena.
10. El esfuerzo por bajar el nivel del agua del lago, ha sido bastante difícil de conseguir debido principalmente al asolvamiento del cauce del Michatoya provocado por los arrastres de sedimentos que se acarrean desde el zanjón Malena y sus tributarios, depositándose en el cauce principal.
11. No existe un efectivo control sobre las areneras ubicadas en la cuenca de este zanjón y del río Michatoya por parte de las instituciones competentes, como lo son el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
12. Siete areneras afectan la cuenca del río Michatoya y todas se ubican en los alrededores del zanjón Malena. De acuerdo con el MEM, existen 16 licencias de extracción de arena, de las cuales doce se encuentran activas y cuatro tienen influencia directa en la cuenca del río Michatoya.

13. Las medidas de mitigación exigidas por el MARN para reducir el efecto que generan las areneras, plan de 60 días, no se han cumplido o lo han sido sólo en forma parcial por tres areneras.
14. La debida intervención de las autoridades competentes es inexistente, a pesar de que se ha determinado la presencia de actividades productivas ilegales.
15. El caudal del agua de los ríos que desembocan en el Lago de Amatitlán se ha incrementado principalmente debido al crecimiento poblacional en la cuenca, lo que implica mayor cantidad de aguas servidas y desechos.
16. Las Municipalidades no tienen control del daño y contaminación al medio ambiente en la cuenca causado por crecimiento urbano, puesto que estas autorizan los proyectos de urbanización sin tomar en cuenta los estudios técnicos y de factibilidad pertinentes.
17. Plantas de tratamiento de aguas residuales no son contempladas en los proyectos de urbanización que se realizan en las comunidades aledañas, lo cual trasciende en la contaminación de los ríos y lagos de la cuenca.
18. No se da el estricto cumplimiento al Acuerdo Gubernativo 179-2001, en lo que se refiere al Ordenamiento Territorial; hay construcciones inadecuadas en las orillas de los ríos.
19. La municipalidad de Amatitlán no ha realizado los trabajos de infraestructura necesarios en el cauce del río Michatoya para proteger a la población de posibles desastres, ni ha realizado un ordenamiento territorial del municipio.
20. La problemática tiene un importante componente social, debido a la pobreza y falta de políticas de vivienda popular. Uno de los mayores problemas que se enfrenta es la construcción inadecuada de viviendas y negocios a orillas del Lago de Amatitlán.
21. Existe una gran deforestación en la zona y no existe un programa de reforestación permanente en la cuenca del lago, aunque sí esfuerzos dispersos, principalmente por parte de AMSA y la Gobernación Departamental. No se realizan los trabajos adecuados del dragado de los ríos Mico, Zanjón Malena y Platanitos.
22. No se realiza un trabajo interinstitucional, en forma coordinada y permanente, puesto que a pesar de que existe cierto acercamiento, no se ha realizado la agenda correspondiente de las acciones prioritarias que deberían de ser tomadas en cuenta por cada una de las instituciones y dependencias involucradas.
23. En los ríos Villalobos y el Michatoya, se observan algunas deficiencias en los trabajos que realiza tanto AMSA, como las municipalidades responsables; supuestamente las deficiencias se deben a la falta de recursos financieros.
24. Los sectores declarados de alto riesgo comprenden las cuencas del río Villalobos, lago de Amatitlán y río Michatoya, a una distancia de 100 metros horizontales a la orilla de cada río, zanjón o quebrada. El río Mico es otro foco de riesgo para la población del municipio de Amatitlán. En la ribera del río Michatoya, hay personas que se encuentran viviendo en áreas de alto riesgo.
25. No se realizan los trabajos de prevención, atención y tratamiento adecuado que requiere la Cuenca del Lago de Amatitlán, como la dársena en el río Villalobos.
26. Aunque se han realizado diversos trabajos de coordinación interinstitucional, estos no han sido efectuados en una forma responsable y permanente. Así mismo, a pesar de haberse realizado reuniones, con los representantes de las entidades gubernamentales y con los representantes de las comunidades de la sociedad civil, tanto afectadas como circunvecinas, no se han podido realizar mayores acciones de relevancia.

27. A pesar de que se han realizado las recomendaciones correspondientes a las instituciones involucradas en la Problemática del Mantenimiento y Tratamiento del Lago de Amatitlán, por parte de AMSA, estas no han sido atendidas en forma oportuna y eficiente.
28. Gobernación Departamental sirve como enlace o conciliador institucional. Las campañas y planes de concientización no se realizan en forma permanente ni adecuada, debido principalmente a la falta de recursos financieros, humanos y materiales.
29. El basurero que se encuentra ubicado en Bárcenas, Villa Nueva, prácticamente se encuentra colapsado, con efectos negativos por el arrastre de basura durante eventos como la tormenta Ágatha.
30. Los daños causados por Ágatha en ciertas poblaciones no han sido reparados.
31. Dependiendo del cambio climático, la infraestructura habitacional podría nuevamente verse afectada en las colonias circunvecinas al lago, que se encuentran en una zona considerada de alto riesgo (el Casco Urbano de Amatitlán, la Colonia Villas del Río; en la aldea Agua de la Mina, las colonias, San Juan, Altamira, Las Cañadas, Villa Alejandra y Milagro).
32. La elevación del nivel del agua, del Lago de Amatitlán, así como su conversión en pantano es una posibilidad permanente. Lo primero, por las circunstancias actuales y lo segundo, en el largo plazo, al depositarse de manera progresiva los derivados de la erosión y los desechos sólidos.

### **7.2.1 Recomendaciones de la supervisión sobre el Lago de Amatitlán.**

- Evaluar con profundidad los efectos y alcances de la extracción de arena en la cuenca del lago de Amatitlán.
- Es necesario prescindir de las areneras ilegales en la cuenca del lago y exigir planes de control y mitigación a las areneras con licencia, eliminando los efectos negativos que provocan. Es fundamental que los planes de reducción de asolvamiento del zanjón Malena sean fielmente cumplidos.
- Es necesario que se tome en cuenta el Decreto 179-2001, para evitar la existencia de viviendas en áreas de alto riesgo, desarrollando planes de vivienda adecuados para la población afectada y evitando asentamientos humanos a menos de 100 metros de distancia de ríos y del Lago.
- Se hace necesaria una evaluación interinstitucional exhaustiva respecto de la capacidad hidráulica del río Michatoya, tomando en cuenta todos los factores que intervienen, como lo es el asolvamiento de su cauce y el desprendimiento de taludes.
- Deben incrementarse y mejorarse los trabajos de dragado del río Michatoya.
- Los Programas de las Compuertas y de los Caudales, deben realizarse en forma más oportuna y eficiente.
- Las instituciones involucradas en el tema, principalmente MARN e INAB deben realizar planes de reforestación efectivos en toda la cuenca del lago.
- Continuar y reforzar las campañas de educación y concientización realizadas por varias instituciones entre los habitantes de la cuenca, ampliando la conciencia sobre los problemas, causas y soluciones del deterioro del lago de Amatitlán y los ríos tributarios.
- El manejo integral de la cuenca del Lago de Amatitlán, en coordinación con las autoridades ediles, debe realizarse integralmente con participación de las siguientes



instituciones: Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, sobre todo en previsión de nuevos desastres de causa natural, pero que multiplican sus efectos por las condiciones descritas en el presente informe.

- Las municipalidades circunvecinas a la Cuenca del Lago, deben:
  - Realizar estudios y planes de ordenamiento territorial.
  - Habilitar más plantas de tratamiento.
  - Introducir o mejorar el manejo adecuado de la basura.
  - Controlar que en los proyectos de urbanización se incluyan planes de prevención de desastres y del funcionamiento adecuado de los drenajes y desechos
- El gobierno central debe dotar de los recursos necesarios a las instituciones involucradas en el manejo de la cuenca del Lago de Amatitlán, particularmente AMSA, INDE, MARN, por la importancia que la misma tiene para el país y el bienestar y los derechos ambientales de los habitantes de la ciudad de Guatemala y municipios circunvecinos.

### **7.3 Incendios forestales**

Debido a los efectos del cambio climático y el descuido de diferentes personas, los incendios constituyen una amenaza para los bosques, la flora y la fauna del país, y un riesgo para la seguridad humana, particularmente durante la época seca de cada año.

Los departamentos más afectados por 103 incendios, de noviembre de 2010 a febrero de 2011, fueron Quiché, Sololá, Jalapa y Quetzaltenango, los cuales sufrieron entre 10 y 20 siniestros cada uno; otros departamentos con menos cantidad de incendios en este período fueron Baja Verapaz, Huehuetenango, El Progreso, Totonicapán, San Marcos y Guatemala.

Por otra parte, la flora y la fauna del Volcán Tajumulco, en San Marcos, están en riesgo de extinción a causa de las bajas temperaturas, provocadas por el cambio climático, según Víctor Manuel Solano Flores, coordinador del Proyecto Cuenca Naranjo/Suchiate, el 20 de enero. Otra amenaza la constituyen los incendios forestales, causados por el mal manejo de fogatas y rozas.

El 49.58 % de los incendios fueron intencionados, es decir, provocados por mano criminal, el 19.33 % por quemas agrícolas, el 12.61 % por quema de basura, el 10.08 % por quema de pastos, mientras que el resto (8.4 %) por otras causas.

Hasta el 11 de abril, se habían registrado 411 incendios forestales, de los cuales 62 ocurrieron en Quiché, 52 en Jalapa, 44 en Baja Verapaz, 30 en Chimaltenango, y 29 incendios forestales en Zacapa.

En Jalapa y Chimaltenango se registró un incremento de los incendios forestales durante el verano pasado, pues hasta el mes de abril se habían reportado 72 siniestros en el primer departamento y 53 en el segundo, los cuales consumieron mil 351 hectáreas de bosque.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) había contabilizado – hasta abril- 72 fuegos forestales en Jalapa, que consumieron mil 273.5 hectáreas. La 2ª

semana de abril los siniestros destruyeron 386 hectáreas; los puntos más críticos fueron la cabecera departamental, San Pedro Pinula y San Carlos Alzatate.

Los incendios en la región oriente del país, además de otros factores, son uno de los elementos que están incrementando el proceso de desertificación de la zona. En lugares como Antigua Guatemala, la falta de recursos impide a los bomberos acudir a sofocar fuegos en el área rural y existen problemas para encontrar recursos hídricos que permitan abastecer unidades contra incendios.

Técnicos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) en Quiché advirtieron, a finales de mayo, sobre el riesgo de que este año se incrementen los deslaves en 17 de los 21 municipios de este departamento, debido a que aumentó la cantidad de incendios forestales y estos debilitaron el suelo.

Según la Conred, en el verano los incendios forestales arrasaron más de dos mil hectáreas de terreno boscoso en Quiché, lo que facilita que las lluvias debiliten el suelo y causen deslaves y derrumbes, que afectarán principalmente a las comunidades rurales; los bosques amortiguan la caída de lluvia y las raíces de los árboles favorecen la filtración de agua en el suelo, lo cual evita el movimiento de la tierra.

Los municipios con mayor riesgo son Canillá, San Bartolomé Jocotenango, Nebaj, Sacapulas, Joyabaj y Santa Cruz del Quiché, ya que en estos se ha producido la mayoría de incendios forestales. Las comunidades más vulnerables son las que se encuentran en terrenos con pendiente.

Las causas más recurrentes de incendios forestales en Quiché son los ocasionados de manera intencional, además de los provocados por el mal control de las rozas efectuadas por agricultores en la preparación de la tierra para la siembra y por la quema de pasto.

También son responsables leñadores y madereros que buscan aprovechar los troncos; los apicultores, por el mal manejo de las quemadas de colmenas y pobladores y autoridades, por la quema descontrolada de basura.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró a finales de mayo “alerta roja” en el departamento de Petén, debido al incremento de incendios forestales que amenazaban las reservas naturales de esa zona.

El 3 de junio, CONRED reportó que la temporada de incendios forestales 2010-2011 aún se encontraba activa en el país, registrándose siniestros en el departamento de El Petén. A nivel nacional hubo 694 incendios forestales, la mayoría de ellos en el departamento de Quiché, con un monto de 125 siniestros. En Jalapa, se combatieron 87, en Baja Verapaz 83, en Petén 56, en Chimaltenango 48 y 40 en Zacapa.

#### **7.4 Disposición de desechos sólidos**

La disposición inadecuada de los desechos sólidos es un problema serio que afecta el derecho a la salud de innumerables comunidades y municipios del país. Durante el primer semestre del año, se conocieron varias denuncias y casos relacionados con la falta de

sistemas de recolección de basura, rellenos sanitarios y plantas recicladoras de desechos sólidos.

El vertedero municipal, en la ruta de Coatepeque a La Reforma y El Quetzal, San Marcos, ha representado un atentado al derecho a la salud para los habitantes de la región. Debido a la incineración de desechos, las áreas aledañas al vertedero se nublan con humo, lo cual se convierte en un riesgo para los pobladores de los vecindarios San Isidro, los barrios Jardín e Independencia, y la lotificación Nuevo Coatepeque. El basurero tiene más de un kilómetro de largo y provoca riesgo de accidentes de tránsito.

En otro caso de violación del derecho a un ambiente sano, la municipalidad de Tecún Umán utiliza un terreno a lo largo de la ribera del río Suchiate para depositar los desechos sólidos generados en el área urbana, con un promedio de 10 toneladas diarias de basura, la cual es incinerada periódicamente. Pobladores de las cercanías utilizan el río para bañarse y lavado de ropa, ya que carecen de servicio de agua domiciliar. Cuando la basura es incinerada, el ambiente se contamina con gases tóxicos y el daño ambiental de este vertedero se extiende a la fauna acuática y terrestre.

Río abajo del Suchiate hay más comunidades establecidas que también utilizan el agua contaminada y el ganado bebe de la misma. Ese lugar ha sido utilizado por la comuna desde hace 20 años y aún no hay soluciones para instalar una plana de tratamiento de desechos sólidos.

El 10 de febrero, el vertedero de basura de Jalapa fue clausurado por la municipalidad para trasladarlo a una zona alejada del área urbana, ya que desde hace varios años los vecinos lo han solicitado, por la contaminación que genera. Si embargo, la comuna debe adquirir aun el terreno para la nueva ubicación.

En el mes de marzo, vecinos de los barrios Indeca y Segunda Notificación de Santa Elena, Petén, expresaron su protesta por la proliferación de vertederos clandestinos en áreas cercanas. Los residentes reportaron por lo menos cinco botaderos de desechos, con tendencia al crecimiento, que afectan la salud de las familias asentadas en el lugar.

A finales de marzo, vecinos del área urbana de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, denunciaron la abundancia de basura en las calles, y responsabilizaron a la comuna por no contar con un tren de aseo. Según un vecino, la comuna no impide la formación de vertederos clandestinos en la vía pública.

## **7.5 Desertificación**

Según José Miguel Leiva, ex director de Mecanismo Global contra la Desertificación de las Naciones Unidas, el Corredor Seco del oriente del país ha avanzado en 21 municipios, tradicionalmente boscosos. Se trata de siete municipios de Quiché, cuatro de Huehuetenango, tres de Totonicapán y seis de San Marcos.

La mayoría de los 20 municipios afectados presentan hasta el 80 por ciento de índice de pobreza, el cual empeorará aún más con la degradación de los suelos, ya que la cosecha de

maíz por cuerda ha descendido en forma dramática, incrementando la crisis alimentaria. La mayoría de las familias que se encuentran en riesgo nutricional viven en estas áreas.

**Tabla 17**  
**Municipios del país donde avanza la desertificación**

<b>Municipio</b>	<b>Departamento</b>
Quiché	Quiché
Sacapulas	Quiché
Joyabaj	Quiché
Pachalum	Quiché
Uspantán	Quiché
San Pedro Jocopilas	Quiché
San Bartolomé Jocotenango	Quiché
San Andrés Sajcabajá	Quiché
Nentón	Huehuetenango
Cuilco	Huehuetenango
Aguacatán	Huehuetenango
Chiantla	Huehuetenango
Momostenango	Totonicapán
Santa Lucía La Reforma	Totonicapán
San Bartolo	Totonicapán
Concepción Tutuapa	San Marcos
San Miguel Ixtahuacán	San Marcos
Sipacapa	San Marcos
Comitancillo	San Marcos
Río Blanco	San Marcos
Ocos	San Marcos

Fuente: MARN

El proceso de desertificación se debe a la deforestación, a los incendios forestales y al cambio de uso de suelo, ya que al desaparecer la cobertura boscosa, la tierra fértil se lava con la lluvia y las tormentas.

Entre 1991 y el 2003, Guatemala perdió anualmente 16.4 millones de toneladas métricas de tierra agrícola, y la situación empeoró en el 2009, ya que ascendió a 149 toneladas métricas de tierra cultivable. Se calcula que el país pierde 250 millones de dólares al año por uso inapropiado del suelo y la ausencia de obras de conservación de este recurso.

## **7.6 Cambio climático y deforestación**

Según investigadores de la Universidad Rafael Landívar, el cambio climático en Guatemala será abrupto. La temperatura aumentará en las próximas décadas entre 3 y 7.5 grados, por lo que vastas extensiones se van a cubrir con vegetación seca. Para el período 2020-2050, el centro de El Petén, la Franja Transversal del Norte y los sistemas montañosos, entre otros, sufrirán niveles críticos de cambio, con una extinción masiva de especies en el país.

Como consecuencia de sequías y deforestación, el peligro de incendios forestales y más sequías va en aumento. Esto a su vez desemboca en menos lluvia, más sequías y por lo tanto en más contaminación

Guatemala produce anualmente 21 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, de las cuales más de la mitad son causadas por la deforestación y los incendios forestales, lo que afecta al país con desastres ambientales y sociales, según señaló la organización Rainforest Alliance, el 4 de abril; quien además indicó que la prioridad debe ser la adaptación a los trastornos del clima y eso incluye frenar la deforestación, así como dejar de producir energía eléctrica a base de carbón o petróleo e impulsar la utilización de hidroeléctricas.

Agregó que la mayor parte de la deforestación es causada por el monocultivo, que deja sin espacios a la agricultura de subsistencia, obligando al campesino a emigrar a áreas boscosas donde quema y tumba bosque. También la ganadería está causando deforestación. Sin embargo, en el país empezaron a darse pasos para reducir la deforestación, como la Asociación de Comunidades Forestales de Petén o los programas forestales de las municipalidades de San José y San Francisco en este mismo departamento.

Las talas inmoderadas preocupan a varias instituciones ambientalistas de Quetzaltenango, por lo que se reunieron durante el mes de abril en este departamento para buscar solución al problema.

De acuerdo con el delegado regional del INAB, la deforestación en el departamento ha crecido en un 95 por ciento, debido principalmente a la extracción ilegal de leña, carbón, ocote y resina, entre otros productos forestales. Para contrarrestar este problema, las autoridades formarán una mesa sectorial que velará por la prevención y control y además se buscarán medidas para impartir educación ambiental. Uno de los municipios donde está más acentuado el problema de la deforestación es San Carlos Sija.

El Instituto Nacional de Bosques (Inab), informó en febrero que, según estimaciones de la entidad, el país pierde anualmente Q. 2,200 millones como consecuencia de la tala ilegal.

Según información de la entidad, en un esfuerzo por detener el corte inmoderado de árboles y castigar a los responsables de dicho delito se ha trabajado en un plan conjunto con 13 instituciones, entre las que figuran los ministerios de Gobernación, Defensa, de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio Público. La existencia del plan ha permitido reunir un número importante de denuncias, que incluyen desde la tala hasta el transporte y la industria ilegal de madera, las cuales ya están bajo investigación del Ministerio Público.

Anualmente invierten Q. 160 millones en la recuperación de áreas boscosas. No obstante, la brecha aún es grande, tomando en cuenta lo que el Estado deja de percibir.

Aunque ha habido avances en torno a la recuperación de las áreas boscosas, los esfuerzos han sido insuficientes, pues, de continuar la tala inmoderada, en aproximadamente 30 años el país ya no tendría una superficie de bosques, según expertos del tema.

La Reserva de la Biósfera Maya, por su parte, enfrenta importantes desafíos para su conservación: invasiones agrícolas y ganaderas, explotación ilícita del bosque, saqueo arqueológico y pistas clandestinas para el narcotráfico.

A pesar de la presencia de estas actividades depredadoras, aún se mantiene el 79 por ciento de la cobertura de selva tropical, dato que es importante para mantener el cuidado de la zona. En los últimos tres años ha habido avances significativos: uno de los principales es la recuperación de más de 110 mil hectáreas de territorio que estaba invadido. Además, se ha incrementado el patrullaje para fortalecer la presencia estatal en la zona, pero la falta de recursos pone en desventaja a los guardias.

Este bosque tropical es el hábitat de más de tres mil especies de flora y fauna, pero es también el entorno de unos 180 sitios arqueológicos mayas, muchos de ellos aún poco explorados.

La política estatal que impulsó la población de este territorio para “desarrollarlo” terminó por revertirse. La llamada “zona de amortiguamiento”, que permite el asentamiento de población a lo largo de 15 kilómetros de territorio, al sur de la Biósfera, se encuentra prácticamente depredada, pues el plan original se distorsionó. Las concesiones comunitarias otorgadas para aprovechamiento forestal, fueron vendidas a finqueros, según la directora de Conap en Petén.

El estudio de cobertura forestal presentado por dos universidades, el Inab y el Conap en mayo de 2011 mostró que entre el 2001 y el 2006, El Petén ha sufrido una marcada pérdida de bosque de 306 mil hectáreas y la recuperación ha sido sólo de 37 mil hectáreas.

El problema se agrava por la impunidad en materia legal. Según la organización ambientalista Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas), en el 2010, de 116 casos presentados como delitos forestales, solo cuatro fueron tipificados como tales y en la mayoría se lograron medidas sustitutivas. Además, aunque el saqueo arqueológico persiste, no se conoció ni un solo caso de delito contra el patrimonio cultural.

El Conap ha recuperado en los últimos 36 meses 110 mil 653 hectáreas de área protegida en concesiones como La Colorada y San Miguel, las cuales estaban invadidas por fincas ganaderas.

Actualmente, existen 13 Centros de operaciones conjuntas (Coc), donde el Ejército, la PNC y el Conap trabajan para controlar la Biósfera. También se cuenta con el Batallón de Infantería de la Selva, formado por 250 soldados que desde hace un año resguardan Laguna del Tigre.

A pesar de ello, los incendios forestales provocados y la deforestación siguen en aumento. La gobernabilidad de la zona es un desafío, dada la extensión del territorio, la presión de la población y la presencia de grupos criminales.

Actualmente, Mariela López, directora del Conap en Petén y el gobernador departamental, Rubén Álvarez, tiene medidas cautelares de protección, pues ambos han sido objeto de amenazas por su trabajo en defensa de la zona.

En el departamento de Izabal, un informe del Calas, de finales de junio, establece que la narcogranadería, el crimen organizado y el trasiego de madera han talado el 39% de bosque virgen del río Sarstún, Sierra Caral, Lagunita Salvador y Sierra Santa Cruz; con este ritmo de depredación, en 10 años el departamento de Izabal podría perder la totalidad de su cobertura forestal.

Según el informe, estas actividades ilícitas genera un cambio en el patrón de lluvia, la contaminación de cuerpos de agua con el río Motagua, Lago de Izabal, Bahía de Amatique y el río Sarstún, así como alto riesgo de incendios forestales.

## **7.7 Conflictividad social**

### **7.7.1 Minería**

El tema minero sigue generando fuertes polémicas en el país, con denuncias y protestas de diferentes instituciones y organizaciones. El tema de la propuesta del reglamento para el proceso de consulta del Convenio 169 de la OIT, provocó rechazo y movilizaciones campesinas durante el primer trimestre del año. La explotación minera tiene implicaciones ambientales y está en el foco de posibles confrontaciones sociales.

El relator Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, criticó el 5 de marzo el marco jurídico que intenta crear el Gobierno para reglamentar las consultas comunitarias, ya que los pueblos indígenas no fueron consultados en la discusión del mismo.

La propuesta, presentada el 23 de febrero por el Poder Ejecutivo, pretende reglamentar el proceso de consulta del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Sin embargo, las organizaciones campesinas rechazaron la propuesta por omisión de consulta o falta de consenso.

Como resultado, grupos de campesinos de Quetzaltenango y San Marcos bloquearon el 23 de marzo varias carreteras en la provincia, y efectuaron una marcha en la capital contra el reglamento.

En la Corte de Constitucionalidad (CC) los manifestantes presentaron un amparo en contra del presidente Álvaro Colom, porque, según ellos, se elaboró el reglamento sin consultar a los pueblos indígenas.

En Casa Presidencial entregaron una carta dirigida al Presidente y al Vicepresidente de la República, en la cual expresan el rechazo al referido reglamento. Rubén Herrera, de la Asamblea Departamental por los Recursos Naturales (ADH), de Huehuetenango, indicó que dicho reglamento es una forma de desacreditar las consultas y limitar la organización comunitaria.

El Gobierno dio 30 días hábiles, contados a partir del jueves 24 de febrero pasado, para que los interesados puedan presentar sugerencias y opiniones para concretar la versión final del reglamento, pero las organizaciones esperan que la CC otorgue el amparo para suspender el proceso.

Según una investigación del Centro Sobre Investigación y Comercio (CEICOM), hecha pública en el foro "La minería metálica y la criminalización a la resistencia antiminera en Centroamérica", empresas canadienses se benefician del 14 por ciento del suelo de Centroamérica.

La mayoría de mineras que se encuentran en suelo centroamericano son de capital canadiense, y existen cerca de 400 concesiones para dichas empresas a través de diversos proyectos. En los últimos 10 años el precio del oro ha incrementado en cerca del 300% y actualmente la onza de oro se cotiza arriba de 1400 dólares.

Por otra parte, alrededor de siete mil personas de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa participaron el 7 de marzo en una caminata pacífica contra los trabajos que efectúa una minera en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, que afectarían el agua del río Los Esclavos.

El tema de la explotación minera en lugares fronterizos, ha generado reacciones en los países vecinos. Por ejemplo, la mina de Cerro Blanco, Asunción Mita, Santa Rosa, recibió una denuncia de la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador por el peligro de contaminación de los recursos naturales. Según la PDH del país vecino, esta actividad minera tiene impactos nocivos en el medio ambiente y por ende en la salud de la población salvadoreña, ya que las aguas del proyecto desembocan en el lago de Güija.

### **7.7.2 Conflicto en el Polochic**

El 15 de marzo, fuerzas de seguridad del gobierno desalojaron violentamente a campesinos que habían invadidos fincas del Ingenio Chabil Utzaj en Panzós, Alta Verapaz.

Según representantes campesinos, el proceso de negociación para resolver la conflictividad agraria del Valle del Polochic se inició a principios de año a través de una Comisión de Alto nivel con representación del Registro de Información Catastral (RIC), de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (COPREDE), la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), el Sistema de Diálogo Permanente Nacional, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), FONTIERRA, representantes de 12 comunidades del Valle del Polochic, el Comité de Unidad Campesina (CUC) y representantes de la empresa Chabil Utzaj. Se realizó la última reunión, con un acuerdo de solucionar el conflicto a través del diálogo. Ese compromiso se rompió el día 15 de marzo con los desalojos en Miral Valle y Aguacaliente en Panzós, Alta Verapaz.

A las 8:45 de la mañana, se produjo el ingreso de 50 patrullas de la Policía Nacional Civil y 5 camionetas del ejército, con un total aproximado de 1,000 elementos entre policías, soldados, elementos del Ministerio Público y agentes de particular armados con arma corta.

A las 9:20 ingresó un grupo de policías con agentes del Ministerio Público para advertir a la comunidad que tenían una hora para desocupar el área. La policía asumió el compromiso de no destruir los cultivos de maíz, y de esperar que los campesinos se retiraran.

En la retirada, la policía, persiguió a los campesinos con bombas lacrimógenas, hasta un terreno privado, en el cual entraron a la casa de una campesina, golpeándola a ella y a otros tres que se encontraban allí. Los nombres de los agredidos son: María Elena Pau, herida de



una pierna, quien era dueña de la casa, José Tun, herido en la cabeza y Rafael Suy, herido de un brazo.

Antonio Beb Ac, herido con arma de fuego en la cabeza, falleció 30 minutos después en el área. Concepción Tut Coy fue herida por intoxicación, Federico Caal fue herido en la pierna derecha por escopeta, Emilio Xol Yat y Hugo Leonel Caal Caal fueron heridos con bombas de gas lacrimógeno y 51 familias se quedaron sin la cosecha y sin casas. El 20 de marzo, fue herido Carlos Cuc Cuc.

Por su parte, el 21 de marzo, el jefe del Ejecutivo anunció el cumplimiento de todas las órdenes de desalojo y captura relacionadas a invasiones de fincas y el congelamiento de todo espacio de diálogo con organizaciones sociales que impulsen esas medidas, hasta que las mismas sean levantadas.

El ingenio Chabil Utzaj (en alianza con el Grupo Pellas de Nicaragua) anunció el 8 de abril, que prevé levantar su primera zafra en febrero del 2012, luego de la reestructuración del préstamo por Q150 millones que obtuvo del Banco Centroamericano de Integración Económica.

Según un funcionario del ingenio Chabil Utzaj, el objetivo es llegar a cultivar cinco mil hectáreas de caña de azúcar, para lo que cuentan con tres mil 600 hectáreas propias o arrendadas. Como parte inicial del proyecto tendrán que sembrar la caña de azúcar y continuar con la siembra en el resto del área de la finca.

En abril se registró un nuevo hecho de violencia en la zona. El campesino Oscar Reyes fue asesinado el 21 de mayo de 2011 por hombres armados. Además se reportaron otros cinco campesinos heridos de gravedad, identificados como Santiago Soc, Mario Maquin, Miguel Choc, Marcelino Ical Chub y Arnoldo Caal Rax. Las víctimas eran habitantes de las comunidades Agua Caliente y El Sauce Inup, Panzós, Alta Verapaz.

El día 4 de junio fue asesinada María Margarita Chub Ché, lideresa de la comunidad de Paraná, municipio de Panzós, por hombres fuertemente armados, que llegaron en una moto y le atacaron en el patio de la casa en donde se encontraba, en presencia de sus dos niños pequeños; hecho de sangre que se suma a todos los hechos de violencia que se han dado en la zona.

El 14 de julio se anunció la firma de un acuerdo de mediación entre la empresa productora de caña de azúcar Chabil Utzaj y 34 familias de Panzós, Alta Verapaz, sobre el Punto 15 que abarca un área de 47 manzanas. En este lugar y durante los próximos seis meses se respetará el cultivo de maíz existente. El Registro de Información Catastral será la entidad encargada de emitir un dictamen sobre el área en disputa.

## 8. Seguridad y justicia

### 8.1 Presupuesto

**Crisis presupuestaria.** El primer informe trimestral de este año, el Procurador hizo ver la crisis presupuestaria de las instituciones responsables de la seguridad y la justicia. Se señaló la situación de malversación de los recursos del Estado y los altos índices de violencia contra los operadores de de justicia, así como la responsabilidad del Ejecutivo en garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de las entidades encargadas de la administración de justicia.

La prolongación de esta crisis resulta grave y preocupante frente a los altos índices delincuenciales en que vive el país, porque inhabilita la reacción efectiva de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia, y permite que los índices de violencia se mantengan o aumenten.

En el contexto de la crisis presupuestaria, según cálculos oficiales en abril, las instituciones de justicia necesitaban dotarse de Q1, 450 millones para poder funcionar; según los jefes del Ministerio Público, Organismo Judicial, Ministerio de Gobernación y el Instituto de la Defensa Pública Penal. De lo contrario por la falta de presupuesto para continuar funcionando, las instituciones de justicia se verían en la necesidad de recortar servicios en detrimento de una administración de justicia eficiente y un buen servicio policial<sup>57</sup>.

La Mesa de Transparencia en Seguridad y Justicia conoció entre febrero y abril los déficits y las necesidades presupuestarias de las entidades encargadas de la seguridad y la justicia, según la cual la Policía necesita Q592 millones 738 mil 872; Migración Q10.4 millones, y el Sistema Penitenciario, Q165 millones 16 mil 615. También se conocieron las dificultades presupuestarias del Ministerio de la Defensa Nacional. Las consideraciones de la Mesa eran que “los Acuerdos de Paz ya habían determinado previamente un 0.66 por ciento, y las necesidades en este momento de ejecución del ejército con las responsabilidades de resguardar las fronteras y sobre todo con el aumento de crímenes transnacionales como el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico ilícito de armas, amerita que se fortalezca a la institución”.

Igualmente, la implementación de leyes como la normativa protectora de los niños o la Ley del Sistema Alba-Keneth y otras leyes ordinarias en el área de niñez, adolescencia, mujer maltratada y personas de la tercera aumentan los costos operacionales de la administración de justicia. Otra ley que causa aumento en las necesidades según declaraciones oficiales es la Ley de Extinción de Dominio, en vigencia a partir de julio 2011. A finales de marzo, se dio a conocer que el Ministerio Público tiene un déficit presupuestario de 419 millones de quetzales, mientras el Organismo Judicial reporta 250 millones de quetzales.

---

<sup>57</sup> Véase: *Urgen recursos para el sistema judicial*, en <http://cicig.org/index.php?page=0017-20110406>. Recuperado el 7 de julio de 2011.

**Ampliación del presupuesto.** Se reportaron algunos signos positivos en medio de la crisis presupuestaria, como los diálogos o discusiones sobre el fortalecimiento presupuestario de las instituciones del sector seguridad y justicia en los últimos meses, a través de la Mesa de Transparencia, Rendición de Cuentas y Calidad del Gasto Público en Seguridad y Justicia del Congreso de la República, con la participación de un buen número de sectores sociales; el dictamen favorable de la Comisión de Finanzas del Congreso en junio para la ampliación presupuestaria por Q2 mil 167 millones y la aprobación de préstamos por Q3 mil 225 millones, que demanda el Ejecutivo; las nuevas discusiones sobre las Iniciativas de Ley: de Enriquecimiento Ilícito, Antievasión II y la que elimina el secreto bancario, que de aprobarse por el Congreso estarían fortaleciendo los recursos del Estado, y en consecuencia, se fortalezcan financieramente las instituciones del sector seguridad y justicia. Se toma en cuenta además, el apoyo (donaciones) que el Ministerio Público ha tenido de la Cooperación Española, para el fortalecimiento de la investigación criminal; las donaciones de la Unión Europea para apoyar el funcionamiento del “Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala” a través del convenio de donación firmado entre el director para las Américas del Servicio de Acción Exterior de la UE y las autoridades del sector justicia, el 24 de junio, entre otras.

Declaraciones reiteradas sobre posibles reducciones presupuestarias a las instituciones públicas: seguridad, justicia, educación, salud, incluida la Universidad de San Carlos de Guatemala, si el Congreso no aprueba la ampliación presupuestaria y los préstamos solicitados por el Ejecutivo. Situación que sería inaudita, cuando se hace imperativo el fortalecimiento de recursos para el buen funcionamiento de las instituciones del sector seguridad y justicia, así como al sector educación y salud, y demás instituciones.

Por ello, el hecho importante de la vigencia de la Ley de Extinción de Dominio, a través de la urgente aprobación de su reglamento, así como el funcionamiento del juzgado creado para conocer con exclusividad los casos de extinción de dominio. En el mismo sentido, se interpreta la importancia de las demás iniciativas de leyes como la de Antievasión II, la de Enriquecimiento Ilícito, y la que ley elimina el secreto bancario.

## **8.2 Agenda legislativa en seguridad y justicia**

**Ley de Extinción de Dominio:** La Ley de Extinción de Dominio (LED), Decreto 55-2010 entró en vigencia el 29 de junio del 2011, luego de haberse cumplido el plazo de seis meses establecidos para su entrada en vigencia a partir de su publicación en el Diario de Centro América el 29 de diciembre del 2010.

En la medida de su efectiva aplicación, esta ley puede permitir al Estado la propiedad y uso de bienes confiscados a quienes los obtuvieron de manera ilícita. Incluyen estos los decomisados por delitos de corrupción o comunes como la estafa, pero también los característicos del crimen organizado, de ellos secuestros, extorsiones y tráfico de estupefacientes.

Tiene pendiente la aprobación de su reglamento, el cual debe ser elaborado por el Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, presidido por la Vicepresidencia, en un plazo de 90 días a partir de que el Consejo inicie sus funciones (30 días después de entrada en vigencia la LED)<sup>58</sup>

También el funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio, creado el 29 de junio de 2011 por el Acuerdo 18-2011<sup>59</sup> de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el que tendrá competencia exclusiva para conocer y resolver las acciones relacionadas a la extinción de dominio.

Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia han indicado que este juzgado aún no funcionará por falta de recursos. El mismo Acuerdo 18-2011 indica en su parte transitoria que mientras el Ministerio de Finanzas Públicas no asigne los recursos necesarios para el funcionamiento del mismo, serán competentes para conocer en esta materia los juzgados Quinto, Octavo y Décimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala. No obstante, el Estado debe priorizar recursos para el funcionamiento de este juzgado, ya que su funcionamiento puede ser muy retributivo para los recursos de las demás instituciones implicadas en seguridad y justicia. Por otro lado, no es nada positivo sobrecargar nuevos casos a otros juzgados ya con sobrecarga de trabajo.

Fue anunciado el traslado de 12 millones de quetzales hacia diferentes instituciones del sistema de justicia para el cumplimiento de la LED. Según declaraciones, esta cantidad estaría distribuida de la siguiente forma: 8 millones de quetzales para la Corte Suprema de Justicia, 1 millón para la Procuraduría General de la Nación, y 3 millones para el Ministerio Público.

Desde un inicio, la LED tuvo la aprobación de varios sectores nacionales e internacionales Embajadores (Estados Unidos de Norteamérica y España), quienes oportunamente dieron una calificación positiva a la LED a través de sus representantes. Sin embargo, algunos sectores le observan irregularidades y hasta inconstitucionalidades.

El mismo día que el Decreto 55-2010 cobró vigencia, el Colegio de Abogados, en asamblea general, entró a considerar una inconstitucionalidad parcial de esta Ley, buscando la impugnación de varios artículos que refieren nuevas multas por incumplimiento de no presentar el testimonio especial de una escritura en el Archivo General de Protocolos del Organismo Judicial. Los argumentos del gremio se sostienen en que la economía de los profesionales que no cobran el arancel se verá afectada con las multas que impone la LED.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> LED, Decreto 55-2010, artículos 55 y 56.

<sup>59</sup> Publicado en el Diario de Centroamérica el 30 de junio de 2011.

<sup>60</sup> Véase artículo 69 de la LED, Decreto 55-2010.

La nueva multa que fija la LED en su artículo 69 y que modifica el artículo 100 del Código de Notariado, resulta rigurosa toda vez que el profesional incumpla con sus obligaciones. En este caso, con las obligaciones de cumplir con los plazos y procedimientos notariales. En este sentido, la LED busca evitar el incumplimiento de obligaciones y reafirmar al gremio en sus obligaciones legales y profesionales, apegado además a una ética profesional suscrita.

También se tuvo conocimiento a finales de abril sobre una acción de amparo presentada ante la Corte de Constitucionalidad (CC), para que los artículos 3, 4, 5, 6, 10, 58, 71, 72 y 73 de la ley fuesen declarados inconstitucionales. Según lo dio a conocer el diario La Hora en su edición del 29 de abril de 2011, el interponente indicó que los artículos referidos criminalizaban a las sociedades anónimas, aduciendo que el legislador supuso que todas ellas provienen de hechos criminales, lo cual también restringía la libertad de industria, comercio y trabajo. Esta acción de amparo no procedió, puesto que la LED aun no cobraba vigencia en ese momento.

Esta acción de amparo lleva a un punto delicado, desde luego si se comprueba que efectivamente la ley viola derechos individuales como el de presunción de inocencia o la libre empresa; acciones que en definitiva, llegado el caso, tendrán que ser resueltas por la Corte de Constitucionalidad, y aclarar cualquier punto que ponga en cuestión la plena vigencia de los derechos humanos, en vistas de que la LED está en plena vigencia y además reclamada por amplios sectores sociales para su aplicación.

**Ley contra el Enriquecimiento Ilícito.** En el marco de la agenda legislativa en seguridad y justicia, este año el Congreso retomó las discusiones sobre la Iniciativa 3894 que dispone aprobar la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, y que cuenta con dictamen favorable desde diciembre de 2008<sup>61</sup>.

El proyecto de ley se perfila ahora con un nuevo nombre: el de “Ley Anticorrupción”, por los alcances que tiene para afrontar la corrupción y la impunidad. La amplitud de este proyecto de ley abarca, además de trabajadores públicos, a empresarios y ONG’s que administren fondos del Estado; contempla delitos como el de testaferro, tráfico de influencias, simulación de ofertas, enriquecimiento ilícito para funcionarios y el de enriquecimiento ilícito para particulares.

Sin embargo, a pesar de las enmiendas y reformas que retoman y reorientan esta iniciativa de ley, existe la incertidumbre en el Congreso ya que muy probablemente será incluida en la agenda del próximo periodo.

Es importante señalar que la penalización del enriquecimiento ilícito es algo positivo para la justicia, principalmente para el combate a la corrupción que tanto desgaste financiero, político e institucional provoca al Estado de Guatemala. Este es un tema que el Estado está

---

<sup>61</sup> Véase también Iniciativa 3919 y 3963.

obligado a regular, en consonancia a la ratificación el 12 de junio de 2001, de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

**Ley de Secreto Bancario.** Aspectos de legislación financiera relacionados con la corrupción, la impunidad y su consecuente implicación con el crimen organizado en el país, recaen sobre el “secreto bancario” existente aún en Guatemala.

Todas las entidades involucradas como el Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Ministerio de Economía, y representantes del Congreso de la República, manifiesten la “urgencia” en aprobar la iniciativa de Ley que elimina el Secreto Bancario, en coherencia con las necesidades de detener los delitos derivados de los ilícitos financieros actuales. A esta disposición se suma además la incidencia de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en los últimos meses para acelerar este proceso. Sin embargo, la iniciativa de ley ha quedado detenida en el Congreso desde inicios de este año en que se planteó en general su necesidad y urgencia<sup>62</sup>.

Existe generalizado consenso nacional en que Guatemala no merece seguir en listados negros por su falta de transparencia en temas financieros. La buena voluntad política para regular y transparentar estos problemas en la brevedad de tiempo, es clave para el buen funcionamiento y el fortalecimiento institucional que repercuta positivamente en brindar seguridad, justicia, y bienestar social. Derechos humanos fundamentales que garantizan la realización de muchos otros derechos.

Guatemala cuenta con las condiciones sociales, políticas y económicas para estar dentro de los estándares internacionales en materia de fiscalización y transparencia financiera. En este sentido, la necesidad de la transparencia financiera es congruente política y legalmente sobre todo con los compromisos asumidos en instrumentos internacionales como la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificadas en el 2000, 18 de septiembre de 2003, y 12 de junio de 2001, respectivamente.

**Ley Antievasión II.** La otra iniciativa de ley ubicada en consonancia con la de “eliminación del secreto bancario”, es el proyecto de Ley Antievasión II, que busca fortalecer el Presupuesto del Estado a través del fortalecimiento de la recaudación tributaria. Esta iniciativa cuenta con el dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. La aprobación de esta iniciativa de ley, al igual que la del “secreto bancario”, se plantea con carácter de urgencia dado la crisis financiera que el Estado ha venido arrastrando. Las repercusiones de esta crisis financiera son negativas para el buen funcionamiento de las instituciones responsables de la seguridad y la justicia. Se hace

---

<sup>62</sup> Véase Iniciativa de Ley 4326, presentada por el Ejecutivo en enero 2011, que dispone aprobar reformas al decreto 6-91 del Congreso de la República, Código Tributario y al Decreto 19-2002 del Congreso de la República, Ley de Bancos y Grupos Financieros. (Secreto Bancario). Conoció pleno el 05/04/2011

imperativa una mejor administración tributaria para que Guatemala pueda superar la situación de atraso que tanto desfavorece al desarrollo nacional.

**Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.** El 1 de mayo se publicó en el Diario de Centro América el Acuerdo Gubernativo 166-2011, que contiene el Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. Su objeto es desarrollar la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad creada bajo el Decreto 18-2008 de marzo 2008 y ratificada por el Organismo Ejecutivo en abril del mismo año.

Este reglamento ha sido aprobado extemporáneamente, tomando en cuenta que la Ley Marco establecía que el reglamento debía aprobarse dentro de “cuarenta y cinco días” calendario a partir de la entrada en vigencia de dicha Ley<sup>63</sup>, quiere decir que si esta entró en vigencia el 15 de julio de 2008, su respectivo reglamento debió haberse aprobado a más tardar en septiembre del mismo año.

Con la existencia del reglamento, si este cumple su finalidad, debe viabilizar la aplicación de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, así como el funcionamiento pleno de las dependencias determinadas por la misma.

La Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, Decreto 18-2008 del Congreso de la República de Guatemala, fue publicado el 15 de abril de 2008 en el *Diario de Centro América*. Esta Ley crea el Consejo Nacional de Seguridad, presidido por el Presidente de la República e integrado por el Vicepresidente de la República, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Gobernación, el Ministro de la Defensa Nacional, el Secretario de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE) y el Procurador General de la Nación.

También crea el Sistema Nacional de Seguridad (SNS) que consiste en el marco institucional, instrumental y funcional del que dispone el Estado para hacer frente a los desafíos en materia de seguridad e integrado por la Presidencia de la República, los ministros de Relaciones Exteriores, Gobernación y Defensa Nacional, la Procuraduría General de la Nación, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE) y Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS).

El Decreto 18-2008 reforma además la Ley del Organismo Ejecutivo al crear la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE) en sustitución de la Secretaría de Análisis Estratégico de la Presidencia de la República. A su vez, el decreto en referencia acentúa que la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI), creada por el Decreto 71-2005, es dependencia del Ministerio de Gobernación que actuará conforme lo establecido en su ley orgánica y reglamentos.

---

<sup>63</sup> Véase: Artículo 43. *Reglamentación*. Decreto 18-2008 Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.

**Reglamento de la Ley de Armas y Municiones.** El otro instrumento legal, también aprobado a destiempo, es el reglamento de la Ley de Armas y Municiones. Este debió aprobarse entre mayo y junio de 2009, según lo establecía la referida Ley de Armas<sup>64</sup>, sin embargo, dicho reglamento no fue aprobado sino hasta en marzo del presente año<sup>65</sup>, a través del Acuerdo Gubernativo 85-2011, publicado el 1 de marzo de 2011 en el Diario Oficial.

La aprobación de este reglamento es plausible toda vez que haga efectiva la aplicación de la Ley de Armas, y contribuya a la reducción de la criminalidad acrecentada por la tenencia y uso descontrolado de armas de fuego en nuestra sociedad. La problemática de uso de armas de fuego y su incidencia en las muertes violentas u homicidios, se aborda en el apartado específico en este informe.

**Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura:** La Comisión de Derechos Humanos del Congreso, convocó a las postulaciones de interesados como candidatos para integrar la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes, como primer paso para la aplicación de la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes, Decreto no. 40-2010 aprobado por el Congreso de la República, publicado en el Diario de Centro América el 9 de noviembre de 2010 y vigente a partir del 16 del mismo mes y año. El mecanismo nacional tendrá la competencia de supervisar hospitales psiquiátricos y otros centros de internamiento de personas con discapacidad, emitir recomendaciones sobre las situaciones y hallazgos obtenidos, y remitir a las autoridades pertinentes los casos en que haya indicios de graves violaciones de los derechos humanos de las poblaciones internas. La conformación del mecanismo de prevención, deberá incluir entre sus miembros también a personal con la experiencia y conciencia requerida acerca de la situación de pacientes psiquiátricos y personas que por su discapacidad se encuentran internadas.

### **8.3 Fortalecimiento institucional y casos emblemáticos**

Relacionado al caso que implica al exministro de Gobernación Carlos Vielman Montes, la Audiencia Nacional Española declaró procedente la solicitud guatemalteca para su extradición. El tribunal español reformó los delitos de ejecución extrajudicial y asociación ilícita de los cuales le acusa la fiscalía guatemalteca, por el delito de asesinato, debido a que los hechos ilícitos no son contemplados por el tratado de extradición entre ambas naciones. Las acciones emprendidas por el MP y la CICIG fue desistir de la acción de extradición de Carlos Viemann, argumentando la falta de independencia judicial. La jueza competente denegó dicha solicitud, argumentando que el Organismo Judicial, goza de total independencia.

Relacionado a estos casos, el Tribunal Estatal de Austria dictó arresto domiciliario contra el ex subdirector de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) Javier Figueroa y fijo una

---

<sup>64</sup> Véase: Artículo.147. Reglamento. Decreto15-2009, Ley de Armas y Municiones.

<sup>65</sup> Acuerdo Gubernativo 85-2011, publicado el 1 de marzo de 2011.



fianza de 15 mil euros. La fiscalía de Austria pidió que se mantuviera la prisión preventiva por indicios justificados de evasión. Situación que esta pendiente de resolverse.

Estos procesos jurídicos relanzan el tema de la cooperación internacional en el tema de la justicia, los mecanismos de cooperación judicial que se torna actual e importante debido a los casos relacionados al narcotráfico y el crimen transnacional.

El 9 de mayo del presente año, el tribunal Primero de Mayor Riesgo dictó sentencia condenatoria contra 8 de los 10 sindicados por el asesinato del ex asesor del Ministerio de Gobernación Víctor Rivera. Este es uno de los casos en que el uso de las interceptaciones telefónicas aportó elementos de prueba para que los jueces dictaran la sentencia condenatoria.

El caso Maskana, es uno de los procesos penales más paradigmáticos ya que supone la complicidad de diferentes funcionarios de alto nivel. Relacionado a este caso, el ex asesor del Ministerio de Gobernación José Aníbal Hernández Nova, fue declarado culpable de los delitos de concusión y lavado de dinero y sentenciado a 10 años de prisión. El ex ministro de Gobernación Raúl Velásquez también enfrentará juicio por los delitos de abuso de autoridad, concusión, lavado de dinero y estafa propia.

El empresario Rodrigo Lainfiesta Rímola, acusado de los delitos de conspiración para la estafa, estafa propia y lavado de dinero, fue vinculado al proceso del ex presidente Alfonso Portillo por las declaraciones de José Armando Llorit Quiteño. La Sala Primera de Apelaciones impuso una caución económica de 20 millones de quetzales.

En el caso por el asesinato de los empresarios Marjorie Musa Maldonado y Khalil Musa Bassila, el Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal dictó las sentencias a los colaboradores eficaces Lucas Josué Santiago López y Adelino Morales Pérez, quienes brindaron información de ambos crímenes al Ministerio Público.

**Fortalecimiento institucional:** Los procesos judiciales hacen frente a dos tipos de situaciones: aquella en la que los detenidos promueven y están a la espera de una sentencia que dilucide su situación jurídica; y otra en la que el retraso del proceso penal a través de acciones procedentes o improcedentes, es la norma.

Si bien es cierto que la fragilidad existente en el sistema de justicia, aún no permite mayor eficiencia en todas las acciones legales, sí cuenta en la actualidad con mejores instrumentos (ver el apartado sobre agenda legislativa pendiente) para su eficacia. Tal ha sido el caso de la figura de la colaboración eficaz y la Declaración por medios audiovisuales, decreto ley 17-2009 Ley de Fortalecimiento de la Persecución Penal.

Por otra parte, el decreto 7-2011 vigente desde el 29 de junio del presente año, reforma una serie de artículos del decreto 51-92 Código Procesal Penal, entre las modificaciones más relevantes esta el que los auxiliares fiscales que sean abogados intervengan en todas las instancias del proceso penal, sin restricción alguna y sin el acompañamiento del agente fiscal.

Se establece el término de 15 días para que el MP informe a la víctima sobre lo actuado y se instituye un mecanismo de control y agilización de investigación, por medio de Juez de Paz quién pedirá al Fiscal que informe sobre lo actuado, en su defecto le fijará un término de 30 días para que informe de nuevos avances en la investigación, o explique las circunstancias que impiden que pueda avanzar en la misma, apercibiéndole que en su defecto certificará al régimen disciplinario del MP. La normativa en cuestión permitirá la agilización en la investigación de la comisión de delitos. Los Jueces de paz comunitarios deberán recibir la capacitación necesaria para cumplir con la labor que la normativa señala.

Se establece un procedimiento simplificado aplicable a aquellos casos iniciados por flagrancia o por citación u orden de aprehensión, en donde no se requiere investigación posterior o complementaria.

**Aplicación de la Ley contra el Femicidio:** El Organismo Judicial (OJ) dio a conocer los primeros resultados derivados de la instalación de los Juzgados de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, que atienden además casos de violencia contra la mujer, violencia económica y violencia sexual en algunos municipios de Guatemala, en Chiquimula y Quetzaltenango.

Entre septiembre del 2010 y febrero del 2011, el Juzgado Especializado de Chiquimula, uno de los departamentos con los mayores índices de femicidio, recibió 23 casos sobre violencia contra la mujer, mientras que el de Quetzaltenango conoció 47 sobre femicidio y 13 por otras expresiones de violencia.

La sala que atiende los procesos de Villa Nueva, Mixco y Amatitlán, contabilizó 14 casos durante el citado periodo. En el ámbito nacional, en el 2010, el Organismo Judicial reportó 153 procesos sobre femicidio, 35 de los cuales alcanzaron una sentencia, sin especificar el tipo; sólo el Juzgado de Quetzaltenango cuenta con un traductor kakchiquel.

**Juzgado y tribunal de Alto Riesgo.** Los recientes casos de alto impacto en el sistema de administración de justicia han provocado que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estableciera un nuevo juzgado y un tribunal para casos de Mayor riesgo. Los nuevos jueces provienen de un listado de seis jueces que propuso el Consejo de la Carrera Judicial, previa evaluación de idoneidad y estudio del expediente laboral en que consta el desempeño laboral.

La creación de estos juzgados de Mayor Riesgo fortalece la administración de justicia ante el aumento de casos de alto riesgo, la conformación colegiada de los mismos aboga por la transparencia, el fortalecimiento de los argumentos y razonamientos jurídicos de las sentencias y la protección de los juzgadores.

**Mora Judicial:** Ante el atraso en la resolución de los procesos penales, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, por Acuerdo número 3-2011 delegó funciones al Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Municipio de Villa Nueva (liquidador) y al Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el ambiente de la Villa de Mixco (liquidador) para que conozca y resuelva todos los procesos

que se tramitan en las sedes judiciales de 24 horas de la Villa de Mixco y Villa Nueva del departamento de Guatemala, correspondientes al período comprendido del año 1997 al año 2009.

Por acuerdo 13-2011 se creó el Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, este juzgado conocerá los procesos penales que se encuentran pendientes de resolver en los Juzgados de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, ingresados del año 2008 y años anteriores.

También por la Cámara Penal, se implementó la gestión oral del despacho judicial, con la finalidad de reforzar, relanzar la oralidad del proceso penal y agilizar los procesos.

**Pertinencia cultural para fortalecimiento de la justicia:** Con la aprobación de la Comisión Nacional de Fortalecimiento de la Justicia, en el departamento de Totonicapán se implantó el primer proyecto piloto de una policía comunitaria, integrada por vecinos honorables de sus mismas localidades entrenados por la Policía Nacional Civil. El señor Romeo Tiu presidente de los 48 cantones indicó: "En Totonicapán el 97 por ciento de la población es maya quiché. Los funcionarios debieran tener esas características de relación con la población. Si quieren hacer efectivo eso que el país es multicultural y multilingüe pues que se traduzca en política institucional", agregó.

**Sistema Penitenciario.** Como acciones encaminadas a retomar el control de los Centros de Detención para controlar y erradicar la corrupción en el sistema, las autoridades del Sistema Penitenciario hasta mayo del presente año han presentado un total de 847 denuncias ante el Ministerio Público, por delitos de lesiones, tenencia de drogas y extorsión. De estas denuncias 820 han sido presentadas contra internos del sistema carcelario y las otras 27 contra guardias y personal administrativo por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, encubrimiento y cohecho.

## **9. Situación de criminalidad vinculada al narcotráfico en Guatemala**

Una de las más graves situaciones de la seguridad ciudadana en Guatemala es la criminalidad que se relaciona con el narcotráfico. Es un problema nacional-transnacional que se superpone a las políticas de seguridad comunes y a las capacidades del Estado para brindar seguridad y garantía de los demás derechos humanos inherentes contenidos en la Constitución Política de Guatemala.

Los casos de homicidios y/o asesinatos en ascenso vinculados con el narcotráfico perpetrados de forma continuada, provocó el temor y repudio generalizado de la población, así como la barbarie de los 27 campesinos decapitados en la finca Los Cocos, municipio La Libertad en el departamento de El Petén el 14 de mayo, entre ellas dos mujeres. La represalia frontal al sistema de justicia con el asesinato del fiscal Allan Stowlinsky Vidaurre,

hecho ocurrido en Cobán, Alta Verapaz el 24 de mayo, apenas tres meses de terminado el Estado de Sitio.

En este contexto, el Procurador de los Derechos Humanos hizo un llamado a la unidad nacional frente al crimen, a través del comunicado de prensa con fecha 25 de mayo de 2011, en donde señaló que la violencia y la criminalidad no solo se habían salido de control, sino que los criminales estaban acudiendo a prácticas brutales, cuyo propósito era someter a la nación al imperio del terror y la impunidad, doblegar la voluntad del país para mantenerlo como rehén de actividades ilegales conectadas con el crimen organizado transnacional<sup>66</sup>.

La eficacia de decretar Estados de Sitio no siempre está asegurada. En particular, para dar respuesta en materia de seguridad ciudadana no se cuenta con la capacidad de anticipación, lo cual tiene que ver más con la prevención. No solamente por la falta de personal calificado para la investigación de inteligencia civil, sino también por la presencia de la corrupción al interior de la estructura gubernamental. Según información hemerográfica, días antes de decretarse el Estado de Sitio en Alta Verapaz, los supuestos narcotraficantes tuvieron el tiempo y la logística para retirar la mayoría del armamento, dinero y droga.

La reciente Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, organizada por el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) realizada el 22 y 23 de junio, en la que participaron los presidentes de Centroamérica, México, Colombia y la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, analizando la magnitud del problema, asumen una “corresponsabilidad” de apoyo para la reducción de la violencia y los delitos que generan el crimen organizado y el narcotráfico en la región centroamericana.

El Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 2009-2010<sup>67</sup> ponía en relieve todas las amenazas posibles de violencia para la seguridad ciudadana en la región centroamericana, pero especialmente para Guatemala, que por su ubicación, es el teatro principal de: “la guerra abierta entre los carteles por el control de las rutas de droga”. El informe visualizaba dos rutas de operación en el país: la del norte, controlada por los carteles de Izabal y Zacapa, aliados tradicionales del Cartel del Golfo, y la del sur occidente, administrada por carteles más cercanos a la Federación de Sinaloa.

En este tema, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, agencia especializada de Naciones Unidas, en su informe del 2 de marzo de este año, señaló que dada su ubicación geográfica la región de América Central y el Caribe sigue utilizándose como zona de tránsito para el contrabando de drogas ilícitas en gran escala. El extenso litoral de la región, la porosidad de las fronteras y la limitada capacidad de los organismos de

---

<sup>66</sup> Procurador de los Derechos Humanos, comunicado de prensa: *Unidad nacional frente al crimen y el terror*. Guatemala, 25 de mayo de 2011.

<sup>67</sup> Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. *Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010 Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el desarrollo humano, La Narcoactividad* (Págs. 102-107). PNUD, Colombia, 2009.

represión y de las instituciones han facilitado las actividades de tráfico, lo cual ha agravado la repercusión de la delincuencia relacionada con las drogas.

El Informe Mundial sobre las Drogas de 2010, indica que el año pasado en el “Triángulo Norte” se registraba la tasa de asesinatos más elevada del mundo, así como altos índices de otras formas de delincuencia. Entre otros elementos se indica que los Zetas controlan el negocio del narcotráfico en El Petén, Alta Verapaz, Izabal y Zacapa. Controlando el narcotráfico en el territorio nacional y haciendo el trasiego anual de entre 250 y 300 toneladas de cocaína.

Información hemerográfica señala que en el año 2010 el mapa del narcotráfico en Guatemala había cambiado dramáticamente. De estar dividido entre el Cartel del Golfo (en el Norte y el Atlántico) y el Cartel de Sinaloa (en el Sur y el Pacífico), los Zetas entraron a copar los espacios del Golfo<sup>68</sup>.

Este tipo de información hemerográfica podría considerarse, en ocasiones, exagerada, sino fuera confirmada por los hechos como lo fue: el conocido asesinato de Juan León “Juancho” en marzo de 2008 en Zacapa, en el que perecieron 11 personas. Por las características del enfrentamiento, la utilización de armas de grueso calibre y las detenciones realizadas por la Policía Nacional Civil, el crimen parece un arreglo de cuentas entre supuestos narcotraficantes.

El segundo hecho sangriento llegó ocho meses después, cuando los Zetas se enfrentaron a un grupo de Sinaloa en una frustrada carrera de caballos, en Huehuetenango, el saldo: 17 muertos. En abril de 2009, mataron a cinco policías quienes habrían intentado un decomiso de droga en una bodega en Amatitlán rentada por supuestos Zetas<sup>69</sup>. En octubre de 2010 reaparecieron presuntamente para recobrar un cargamento oculto en El Naranjo, Petén, en una finca del supuesto sucesor de Juancho, quien fue asesinado ese mismo año.

Según el análisis de informaciones públicas extraoficiales, pueden actualizarse las rutas o la expansión de los grupos narcotraficantes en el país, de sur a norte, por los departamentos de Jutiapa, Zacapa, Izabal, Alta Verapaz, Quiché y El Petén, en particular bajo el control del denominado grupo de los Zeta. En tanto que la ruta, en la misma dirección por los departamentos de la costa sur estaría dominada por los aliados a los también mexicanos grupos de Sinaloa. Esto es confirmado por estudios e informes como los elaborados por el Centro Internacional Woodrow Wilson y por la consultoría privada de Estados Unidos Stratfor y documentos de la Drug Enforcement Administration (D.E.A. por sus siglas en inglés).

---

<sup>68</sup> Véase: artículo periodístico: *Narcotráfico: el ocaso de los Lorenzana*. De fecha 29 de abril, 2011. Periódico Plaza Pública. Recuperado el 16 de junio 2011 de: [http://plazapublica.com.gt/plazapublica/index.php?option=com\\_content&view=article&id=404%3Anarcotrafico-el-ocaso-de-os-lorenzana-catid=41%3Aguatemala&Itemid=54](http://plazapublica.com.gt/plazapublica/index.php?option=com_content&view=article&id=404%3Anarcotrafico-el-ocaso-de-os-lorenzana-catid=41%3Aguatemala&Itemid=54)

<sup>69</sup> CICIG, comunicado de prensa número 001, de fecha 21 de enero de 2010. <http://cicig.org>

**Procesos de extradición sobre casos vinculados al narcotráfico.** La justicia guatemalteca se ha enfrentado a varios casos vinculados al narcotráfico en los últimos años. Los más recientes son el caso Juan Alberto Ortiz López y el caso Lorenzana Lima, y previo a ellos, el caso de Mauro Salomón Ramírez capturado en octubre del año pasado. Todos capturados y sometidos a procesos de extradición a requerimiento de la justicia de los Estados Unidos de América, por sus supuestos vínculos con el tráfico de drogas.

Los procesos de extradición fueron retrasados por la defensa de los acusados, basándose en que el convenio firmado en 1903, modificado en 1923 no regula delitos enmarcados en la Ley contra la Narcoactividad, sin embargo, en realidad el Estado de Guatemala firmó el 20 de febrero de 1940 la Convención suplementaria al Tratado de Extradición de 1903, ratificada por el Congreso de la República el 20 de junio de 1940, con el agregado del delito de tráfico de estupefacientes a la lista de delitos susceptibles de extradición.

Los casos mencionados, tienen como antecedentes la captura y extradición de los guatemaltecos Arnoldo Vargas, Byron Berganza, Otto Herrera, Jorge Mario Paredes y los hermanos Juan Ramón, Joaquín Anselmo y Renato Fernando, de apellidos Frías Rivera. Todos ellos se encuentran sometidos a la justicia de los Estados Unidos por sus implicaciones en delitos de narcotráfico.

También el caso de Daniel Pérez Rojas, alias el “Cachetes” reclamado por las autoridades mexicanas. La extradición cuenta con autorización por el tribunal competente guatemalteco, no obstante, la resolución relacionada indica que Pérez Rojas puede ser trasladado a México, una vez solvente su situación jurídica en Guatemala. Actualmente Pérez Rojas cumple una condena de 43 años de prisión por tráfico de droga, asociación ilícita, traslado de municiones y armas de fuego ofensivas. Fue detenido en Guatemala después del asesinato de 11 personas, en marzo de 2008 en Zacapa.

**Caso Juan A. Ortiz López.** Juan Alberto Ortiz López alias *Chamalé* o *Juanito*, fue capturado el 30 de marzo en la ciudad de Quetzaltenango. Según declaraciones oficiales, su captura obedece a una petición de extradición por parte de los Estados Unidos de América. El Ministerio Público vinculó a Juan Alberto Ortiz como el jefe de Mauro Salomón Ramírez Barrios, también capturado por narcotráfico y cuya extradición también está pendiente.

A Juan Ortiz se le sospecha de controlar el narcotráfico entre Suchitepéquez, Retalhuleu, Quetzaltenango, Huehuetenango y San Marcos; así como de contactos con narcotraficantes en Colombia y México, con capacidad para trasegar drogas por aire, mar y tierra.

El Gobierno de los Estados Unidos, reclama y sindic a Juan Chamalé por los delitos de conspiración para traficar cocaína y conspiración para distribuirla, señala que éste tiene vínculos con el cartel de Sinaloa, liderado por el mexicano Joaquín Guzmán.

**Caso Lorenzana Lima.** Waldemar Lorenzana Lima de 71 años, alias el “Patriarca”, fue capturado por las Fuerzas Especiales Policiales –FEP- y de la Policía Nacional Civil –PNC- el 26 de abril del presente año. La orden de detención en contra de Lorenzana Lima estaba

lista desde marzo de 2009, fue suspendida por un lapso de tiempo luego de una acción de amparo promovida por los abogados de éste ante la Corte de Constitucionalidad, pero nuevamente cobró vigencia el 13 de abril de 2011. Lorenzana Lima podría ser sindicado de cometer delitos en Guatemala, aunque según declaraciones oficiales fue capturado por la solicitud de extradición de los Estados Unidos.

La jueza de turno del Tribunal Tercero de Sentencia, indicó que el detenido es acusado por los delitos de conspiración para el tránsito internacional de drogas, con petición de extradición solicitada por una Corte de la justicia estadounidense. La jueza dictó prisión preventiva y ordenó su traslado a la cárcel de alta seguridad Fraijanes II.

La acusación indica que Lorenzana es responsable de trasegar miles de toneladas de droga hacia Estados Unidos desde 1990; los cargamentos partían de Colombia, pasaban a El Salvador, y su organización delictiva aseguraba el transporte terrestre hacia territorio mexicano con rumbo hacia Estados Unidos. Se le acusa de tener conexiones con el Cartel de Sinaloa liderado por Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada (también perseguidos por la justicia estadounidense).

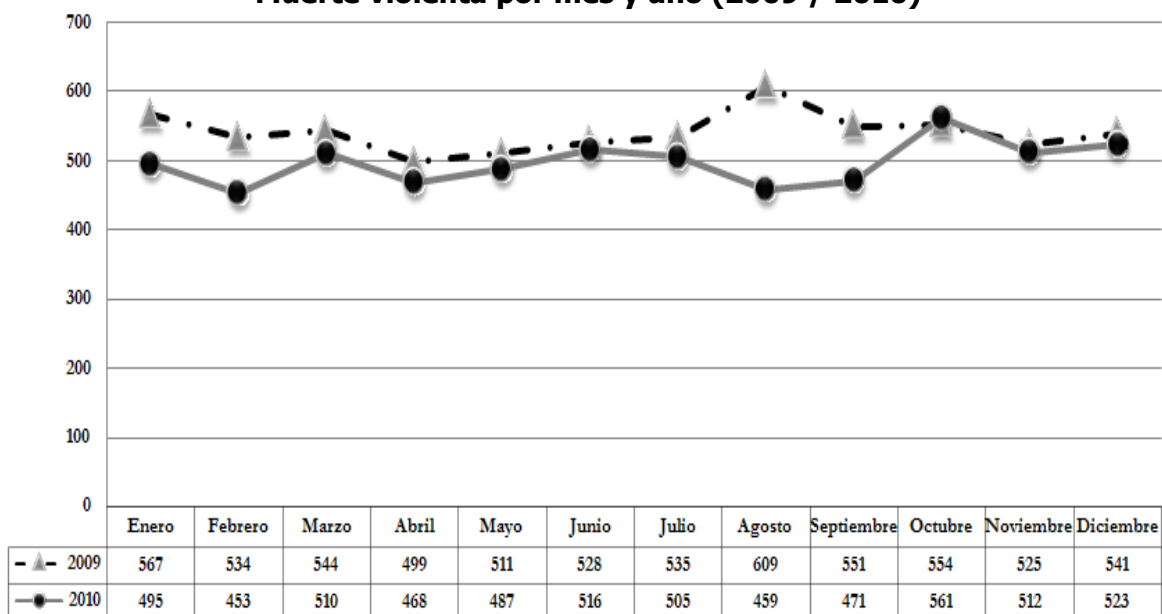
Autoridades guatemaltecas informaron, que están pendientes las capturas, también con fines de extradición, de tres miembros de la familia Lorenzana Lima, incluidos dos hijos de Waldemar, asociados al control y distribución de drogas en los departamentos de Zacapa, Chiquimula y El Progreso.

## **10. Muerte violenta – violación del derecho a la vida**

Para comparar los índices de muerte violenta en este primer semestre del año, vale tomar como punto referencial el año 2009 por ser el año con el mayor índice de homicidios en la última década. Ello para comparar e identificar la variación del número de muerte violenta entre los primeros seis meses de los años 2009, 2010 y 2011, utilizando para ello la base de datos de la Policía Nacional Civil (PNC).

La importancia de tomar en cuenta los primeros semestres de los dos años atrás, sirve para visualizar los cambios positivos o negativos en el presente año, pero también porque ofrecen algún indicativo de los sucesos en el segundo semestre, donde ambos años muestran que la frecuencia de muertes violentas se mantiene y con mínimas variaciones a lo largo del año. Puede afirmarse que lo sucedido en un primer semestre no necesariamente va a determinar al segundo, es evidente como se verá a continuación, que en los dos últimos años el número de muertes violentas ha tenido similar comportamiento en el primero y segundo semestre.

**Gráfica 30**  
**Muerte violenta por mes y año (2009 / 2010)**



La línea de tendencias de la gráfica muestra que en ambos casos sucede algo similar a lo largo del año, exceptuando agosto, septiembre y octubre donde las líneas reflejan una mayor variación. De cualquier forma, en ambos casos se aprecia que los segundos semestres reportan una mínima diferencia en relación a los primeros.

Al revisar los promedios mensuales, nuevamente se observa un mayor número de muertes violentas para el segundo semestre en ambos casos. En el caso de 2009 el promedio mensual está siempre por arriba de 530 en ambos semestres, con una variación máxima de 23 muertes violentas entre el primero y segundo semestre. En el caso del año pasado, el promedio mensual se mantiene generalmente por debajo de 500, con una variación máxima de 17 muertes violentas entre el primero y segundo semestre.

Debe señalarse que el análisis fija su atención en el primer semestre del presente año, involucrando para su mejor interpretación los primeros semestres de los dos años anteriores. Es decir, se incluyen los 18 meses en el análisis y, se realiza para ello tres tipos de comparaciones: en primer lugar, entre los primeros semestres de 2009 y 2010; en segundo lugar entre 2010 y 2011, y consecuentemente, marcar de último la diferencia entre el primer semestre del año pasado con los primeros seis meses del presente año. El siguiente cuadro presenta las 3 tablas, a través de las cuales se visualizan las tres variaciones:



### Cuadro 1 Muerte violenta por mes y año 2009-2010-2011

**Tabla 1**  
**Muerte violenta por mes y año**  
Año 2009 y 2010 de enero a junio  
Frecuencia

Mes	2009	2010	Variación absoluta
Enero	567	495	-72
Febrero	534	453	-81
Marzo	544	510	-34
Abril	499	468	-31
Mayo	511	487	-24
Junio	528	516	-12
<b>Total</b>	<b>3,183</b>	<b>2,929</b>	<b>-254</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de la PNC

**Tabla 2**  
**Muerte violenta por mes y año**  
Año 2009 y 2011 de enero a junio  
Frecuencia

Mes	2009	2011	Variación absoluta
Enero	567	497	-70
Febrero	534	478	-56
Marzo	544	500	-44
Abril	499	473	-26
Mayo	511	547	36
Junio	528	407	-121
<b>Total</b>	<b>3,183</b>	<b>2,902</b>	<b>-281</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de la PNC

**Tabla 3**  
**Muerte violenta por mes y año**  
Año 2010 y 2011 de enero a junio  
Frecuencia

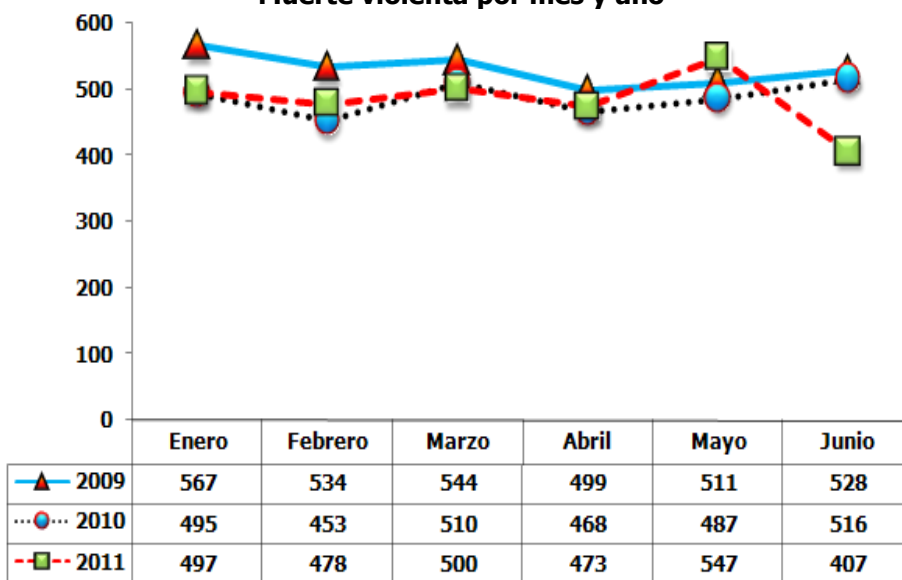
Mes	2010	2011	Variación absoluta
Enero	495	497	2
Febrero	453	478	25
Marzo	510	500	-10
Abril	468	473	5
Mayo	487	547	60
Junio	516	407	-109
<b>Total</b>	<b>2,929</b>	<b>2,902</b>	<b>-27</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de la PNC

La tabla 1 muestra que entre el primer semestre de 2009 y 2010 el número de muertes violentas tuvo una variación de menos 254 (-254), en números absolutos. Esta disminución de muertes violentas sigue representándose en el segundo semestre de 2010 con la misma frecuencia (para noviembre, esta disminución se establecía en 520 y para diciembre en 538) y que de similar la misma forma se sigue representando en este primer semestre de 2011, aunque en menor número.

En la tabla 2, se compara el primer semestre de 2009 con el primer semestre 2011. La variación absoluta de muertes violentas entre estos dos años es de menos 281 (-281). Esto quiere decir que la disminución de la muerte violenta en el primer semestre de 2011 es mayor al primer semestre del año pasado, con una diferencia de menos 27 (-27) como lo muestra la tabla 3.

**Grafica 31**  
**Muerte violenta por mes y año**



La primera conclusión que puede establecerse es que el número de muertes violentas ha venido en descenso en los últimos tres semestres (2010-2011) en relación al año 2009. Aunque no con la misma frecuencia. Se observa en la siguiente gráfica, utilizando una medida lineal. La línea gruesa marca sus variaciones con un triángulo y corresponde al primer semestre de 2009; la entrecortada con guiones marca sus variaciones con un cuadrado correspondiente al primer semestre de 2010; la línea punteada que marca sus variaciones con un círculo corresponde al primer semestre del presente año.

La tendencia descendente de las muertes violentas, puede observarse de diferentes modos en la gráfica. Por ejemplo, si se observa por mes, sea enero, febrero, marzo, abril, mayo o junio correspondientes a los tres años de análisis, siempre se marca una disminución entre 2009 a 2011. Exceptuando febrero y mayo del presente año en que la tendencia se invierte temporalmente. En el caso de febrero, el número de muertes violentas presenta una diferencia de 25 mayor al año pasado, pero siempre menor al año 2009; y, en el caso de mayo, las ascendencia numérica es de 60 en relación al año pasado, superando incluso a mayo de 2009 con una diferencia de 36 muertes violentas. Esta sería la única vez en que el número de muertes violentas supera los altos índices que presentó el 2009.

En cuanto a las líneas que representan a 2010 y 2009, a parte que se mantienen por debajo de la línea que representa el 2009, ambas líneas representan un comportamiento muy similar de muertes violentas en tendencia y en número, para estos dos primeros semestres de análisis, separándose notoriamente en mayo y en junio por su comportamiento asimétrico, primero mayo con una escalada ascendente alcanzando un número similar a marzo de 2009 (uno de los más altos), y luego mostrando un descenso rotundo que viene a marcar el número más bajo de los 18 meses involucrados en este análisis.

La tercera forma de ratificar este descenso es a través del promedio de muertes violentas por mes, de acuerdo a la sumatoria de todo el primer semestre, según corresponde a cada año. Así, para el año 2009 el promedio de muertes violentas es de 530 por mes; para el 2010 el promedio es de 488 por mes; y, para el presente año, el promedio es de 484 muertes violentas por mes. Nuevamente, estos promedios indican una disminución de 42 muertes violentas por mes entre 2009 y 2010, y de escasamente 4 menos por mes entre el año pasado y el presente año. La principal variación que observamos de esto la encontramos entre 2009 y 2010.

### 10.1 Muerte violenta y lesiones

Las estadísticas de muerte violenta para este primer semestre de 2011 identifican a junio como el mes menos violento de todos. Lo cual viene a coincidir también con las lesiones, que también disminuyen en el mes de junio.

La frecuencia y los porcentajes de los casos, tanto de muerte violenta como de lesionados, son similares en este semestre que va del año. Y entre ambos reportan que enero y mayo han sido los dos meses más violentos, el primero determinado por el mayor número de lesionados (579) y el segundo determinado por el mayor número de homicidios (547).

**Tabla 18**  
**Muerte violenta y lesiones por mes**  
Frecuencia y porcentaje - enero a junio 2011

Mes	Homicidios		Lesionados		Total	
	F	%	F	%	F	%
Enero	497	17.13	579	18.42	1,076	17.80
Febrero	478	16.47	509	16.19	987	16.32
Marzo	500	17.23	498	15.84	998	16.51
Abril	473	16.30	570	18.13	1043	17.25
Mayo	547	18.85	535	17.02	1082	17.90
Junio	407	14.02	453	14.41	860	14.22
<b>Total</b>	<b>2,902</b>	<b>100.00</b>	<b>3,144</b>	<b>100.00</b>	<b>6,046</b>	<b>100.00</b>

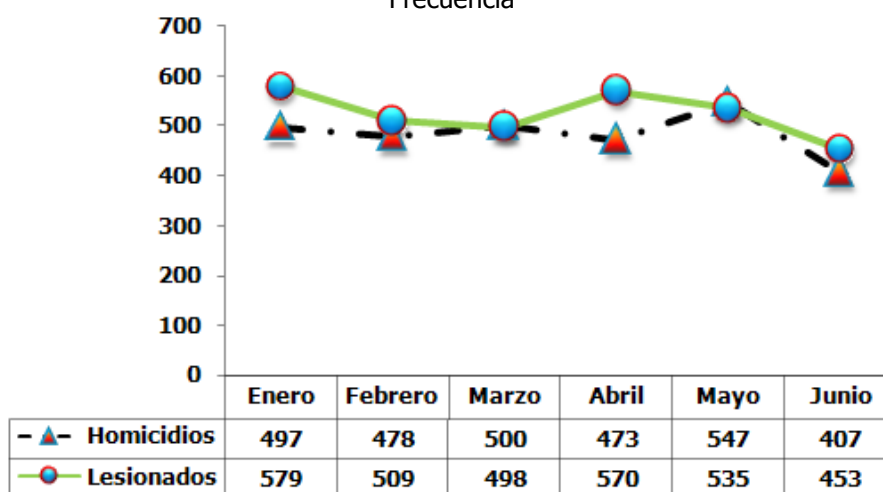
Fuente: Elaboración propia con datos de la PNC

El uso de medidas lineales completa la interpretación de los datos de la tabla anterior, haciendo más visible la posición de los números de casos. La gráfica 32 indica la variación y la tendencia de muerte violenta y de lesionados en este semestre del año.

**Gráfica 32**  
**Muerte violenta y lesiones por mes**

Enero a junio 2011

Frecuencia



La línea gruesa que marca la tendencia con un círculo corresponde a los casos de lesionados, y la otra línea entrecortada marca la tendencia con un triángulo y representa los casos de homicidios.

Como se puede ver, la línea que representa los casos de lesionados se mantiene por encima de la línea que representa los casos de homicidios, reflejando una mayor separación en los meses de enero y mayo por la variación de casos que ya señalados arriba.

**Tabla 19**  
**Muerte violenta y lesiones**  
**Medio utilizado por el victimario**

Enero a junio 2011

Medio utilizado	Homicidios		Lesionados		Total	
	F	%	F	%	F	%
Arma de fuego	2,372	81.74	2,165	68.86	4,537	75.04
Arma blanca	315	10.85	764	24.30	1079	17.85
Arma contundente	108	3.72	170	5.41	278	4.60
Estrangulamiento	68	2.34	0	0.00	68	1.12
Explosión	13	0.45	35	1.11	48	0.79
Otro	26	0.90	10	0.32	36	0.60
<b>Total</b>	<b>2,902</b>	<b>100.00</b>	<b>3,144</b>	<b>100.00</b>	<b>6,046</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de la PNC

El otro dato interesante que presenta la gráfica es a través de la atracción de ambas líneas hacia abajo en el mes de junio. Como ya se señala arriba, junio es el mes que reporta el número más bajo de muertes violentas en los 18 meses analizadas. La siguiente gráfica, muestra también en junio el número más bajo de lesionados en todo el semestre.

En consecuencia, puede entenderse que esa similitud adquiere relevancia en consideración al medio utilizado, donde el 75% de la totalidad de casos entre muerte violenta y lesionados han sido ocasionados por arma de fuego.

Resulta evidente, y por mucho, que el medio más utilizado por el victimario en los casos de homicidios y de lesionados es el arma de fuego que abarca el 75% de los casos. Le sigue el arma blanca que abarca el 17.85% como el medio secundario utilizado por el victimario.

Los picos de violencia representados en las gráficas anteriores pueden estar determinados por muchas razones, sea estructurales o circunstanciales como el mayor o menor número de detenciones, las incautaciones de armas, el establecimiento de un estado de excepción, la reproducción y metamorfosis del crimen organizado, Etc., pero de lo que no queda duda, según los datos analizados, es que existe en la sociedad guatemalteca una gran cantidad de gente portadora de armas de fuego y que éstas siguen siendo para el delincuente el medio más eficaz para la comisión de crímenes en menoscabo del derecho a la vida de miles de ciudadanos y ciudadanas, y en perjuicio de la paz social y el desarrollo.

En este sentido, no es extraño que la Dirección de Control de Armas y Municiones (DIGECAM) registre un incremento de mujeres armadas en los últimos cinco años. A la fecha cerca de ocho mil mujeres estarían armadas, entre ellas 934 con licencia para portarla y el resto con permiso de tenencia en su residencia<sup>70</sup>.

El Reglamento de la Ley de Armas y Municiones (que debió haberse aprobado entre mayo y junio de 2009, según lo mandaba la referida Ley de Armas<sup>71</sup>), fue aprobado en marzo de 2011<sup>72</sup>.

**Sexo de la víctima.** La mayoría de víctimas de registradas se concentra notablemente en la población masculina, abarcando el 86.47% de de la totalidad de casos entre homicidios y lesionados; y un 13.53% sobre la población femenina.

---

<sup>70</sup> Prensa Libre, 7 de julio de 2011.

<sup>71</sup> Véase: Artículo.147. Reglamento. Decreto15-2009, Ley de Armas y Municiones,

<sup>72</sup> Acuerdo Gubernativo 85-2011, publicado el 1 de marzo de 2011.

**Tabla 20**  
**Muerte violenta y lesiones**  
**Sexo de la víctima**

Frecuencia y porcentaje de enero a junio 2011

Sexo	Homicidios		Lesionados		Total	
	F	%	F	%	F	%
Femenino	340	11.72	478	15.20	818	13.53
Masculino	2,562	88.28	2,666	84.80	5,228	86.47
<b>Total</b>	<b>2,902</b>	<b>100.00</b>	<b>3,144</b>	<b>100.00</b>	<b>6,046</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de la PNC

Muertes violentas según edad de las víctimas: A continuación, los cinco principales rangos de edad indican la medida en que los homicidios y las lesiones se distribuyen. Visto en retrospectiva, al igual que el año pasado, la frecuencia de estos casos en el primer semestre del 2011 sigue representando a la población joven comprendida entre 18 y 25 años de edad como la más afectada, ocupando el 31.66% de casos, seguida del rango que comprende las edades entre 26 y 35 años y que ocupa el 29.62% de casos. Esto establece un patrón de comportamiento de muerte violenta y lesiones que se viene repitiendo del año pasado a la fecha<sup>73</sup>.

**Tabla 21**  
**Muerte violenta y lesiones**  
**Rango de edad de las víctimas**  
**Enero a junio 2011**

Rango de edad	Homicidios		Lesionados		Total	
	F	%	F	%	F	%
00 - 17	217	7.48	412	13.10	629	10.40
18 - 25	904	31.15	1010	32.12	1,914	31.66
26 - 35	882	30.39	909	28.91	1,791	29.62
36 - 59	704	24.26	683	21.72	1,387	22.94
60 - 89	113	3.89	101	3.21	214	3.54
Se desconoce	82	2.83	29	0.92	111	1.84
<b>Total</b>	<b>2,902</b>	<b>100.00</b>	<b>3,144</b>	<b>100.00</b>	<b>6,046</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de la PNC

<sup>73</sup> Véase: Procurador de los Derechos Humanos. *Estadísticas de muerte violenta 2010*, en Informe Circunstanciado Situación de los Derechos Humanos en Guatemala. PDH, Guatemala, enero 2011.

**Tabla 22**  
**Homicidios**  
**Rango de edad de las víctimas**

Frecuencia y porcentaje por año (Enero 2004 – diciembre 2008\*)

Rango de edad	2004	2005	2006	2007	Total 2004-2007		2008*
	F	F	F	F	F	%	F
00 - 05	23	19	15	18	75	0.35	20
06 - 10	22	20	16	20	78	0.36	26
11 - 15	111	110	134	110	465	2.16	143
16 - 20	812	915	989	899	3,615	16.83	958
21 - 25	1,018	1,220	1,398	1,286	4,922	22.91	1,318
26 - 30	717	891	1,044	1,092	3,744	17.43	1,137
31 - 35	485	610	661	690	2,446	11.39	777
36 - 40	371	464	496	496	1,827	8.51	558
41 - 45	280	305	334	345	1,264	5.88	380
46 - 50	192	217	256	275	940	4.38	286
51 - 55	151	150	160	165	626	2.91	211
56 - 60	108	111	118	124	461	2.15	141
61 - 65	71	65	70	64	270	1.26	90
66 - 70	44	37	43	47	171	0.80	47
71 - 75	26	22	33	27	108	0.50	39
76 - 80	17	15	23	12	67	0.31	21
81 - 85	9	10	7	7	33	0.15	9
86 - 90	2	6	4	2	14	0.07	2
91 - 95	1	1	0	1	3	0.01	2
96 - 100	0	0	1	1	2	0.01	0
101 - 105	0	0	0	0	0	0.00	0
S/d	47	120	82	100	349	1.62	127
<b>Total</b>	<b>4,507</b>	<b>5,308</b>	<b>5,884</b>	<b>5,781</b>	<b>21,480</b>	<b>100.00</b>	<b>6,292</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de la PNC

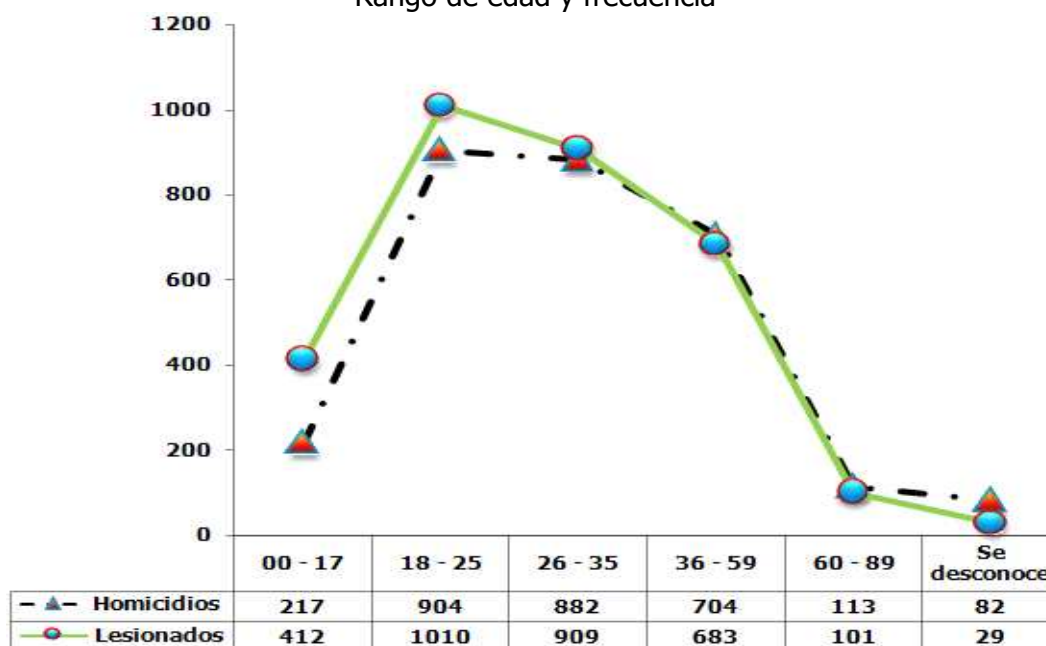
Si el parámetro de comparación fuera más atrás de 2010, se observa que la población más afectada de todas es aquella comprendida entre los 18 y 35 años de edad, pero principalmente la comprendida entre 20 y 30 años de edad.<sup>74</sup>

Se trae a colación la referencia anterior, en la medida que se muestra el patrón establecido del año pasado a la fecha sobre la población mayormente afectada por los casos de muerte violenta y lesiones, también pueden identificarse varios años atrás y que permitiría establecerlo, al menos desde el 2004 al presente año. La tabla 22 ilustra, por ejemplo, el caso de homicidios de 2004 a 2008.

Como se observa, los cuatro rangos sombreados concentran los mayores números de homicidios, con los rangos de edades que van desde los 16 a los 35 años de edad, representado mayormente los rangos comprendidos entre 21 y 25, y entre 26 y 30 años de edad.

En lo ocurrido en los seis primeros meses del presente año, se presenta en la siguiente gráfica que muestra el pico o alcance de este patrón de muertes violentas y de lesionados que se ha señala. Nuevamente, la línea gruesa que marca la tendencia con un círculo corresponde a los casos de lesionados, y la otra línea entrecortada que marca la tendencia con un triángulo, representa los casos de homicidios.

**Gráfica 33**  
**Muerte violenta y lesiones**  
**Rango de edad de las víctimas**  
**Enero a junio 2011**  
Rango de edad y frecuencia



<sup>74</sup> Procurador de los Derechos Humanos, Informes anuales de situación, 2007 a 2010.

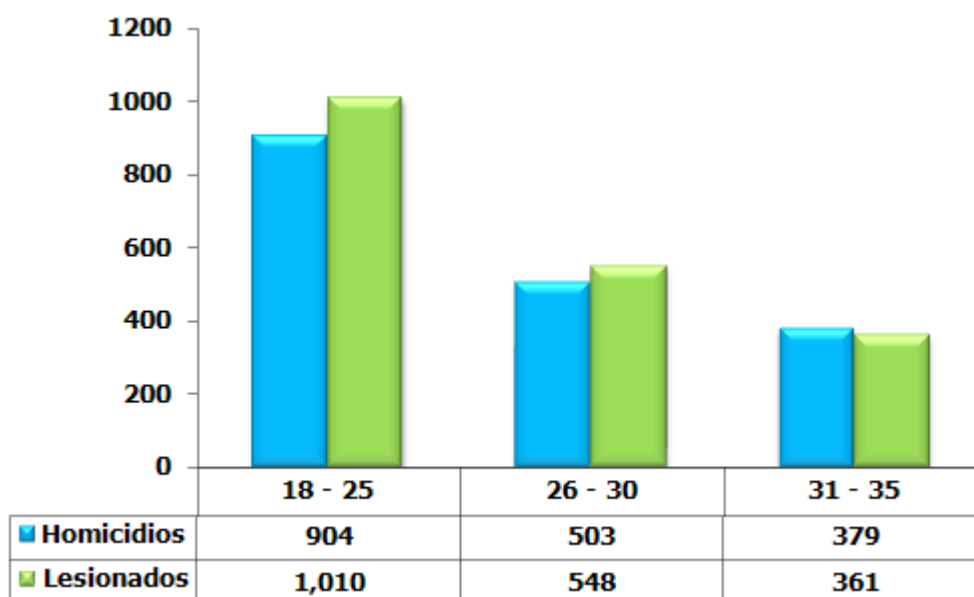


El dato que se visualiza evidentemente y que se acentúa en esta gráfica, es la escalada que toma la línea una vez tocando el rango comprendido entre 18 y 25 años de edad que reporta 1010 lesionados y 904 homicidios, mostrando un leve descenso en el rango comprendido entre 26 y 35 años de edad con 909 lesionados y 882 homicidios, para marcar relevantemente la tendencia descendente en el rango que comprende las edades entre 36 y 59 años con 683 lesionados y 704 homicidios.

A partir de aquí se establece que la población menos afectada por estos casos de homicidios y lesiones es la comprendida entre 60 y 89 años de edad. Mucho menor a la población comprendida entre 0 y 18 años de edad, en relación a los números de casos que reportan la tabla número 7 y la gráfica 4 analizadas.

Los rangos más relevantes señalados a través de la medida lineal de la gráfica 4 (edades de 18 a 35 años), puede focalizarse aún más a través de la siguiente gráfica de barras:

**Gráfica 34**  
**Muerte violenta y lesiones**  
**Víctimas en el rango de 18 - 35 años**  
**Enero a junio 2011**  
Rango de edad y frecuencia



En la medida que los rangos de edades van en ascenso, cada vez concentran un menor número de casos de homicidios y lesionados. Representando nuevamente a la población más joven como la más afectada, en relación a los números de casos de muerte violenta y lesionados que concentra. En la gráfica, sobresale más la barra que indica la altura de los números de casos del rango comprendido entre 18 y 25 años de edad.

La siguiente tabla muestra las frecuencias y los porcentajes de estos números, donde es posible observar que la población joven destacada ocupa el 51.66% de los casos, en relación a los otros dos rangos tomados en cuenta.

**Tabla 23**  
**Muerte violenta y lesiones**  
**Víctimas en el rango de 18 - 35 años**

Enero a junio 2011

Frecuencia y porcentaje

Rango de edad	Homicidios		Lesionados		Total	
	F	%	F	%	F	%
18 - 25	904	50.62	1,010	52.63	1,914	51.66
26 - 30	503	28.16	548	28.56	1,051	28.37
31 - 35	379	21.22	361	18.81	740	19.97
<b>Total</b>	<b>1,786</b>	<b>100.00</b>	<b>1,919</b>	<b>100.00</b>	<b>3,705</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de la PNC

La tendencia que se remarca en estas tablas y gráficas relacionadas al análisis de muertes violentas y de lesionados, según el rango de edad, es que conforme los rangos van abarcando una edad adulta mayor, así van desconcentrando el número de casos; como se observa en los datos que ofrece la siguiente tabla:

**Tabla 24**  
**Muerte violenta y lesiones**  
**Víctimas en el rango de 36 - 59 años**

Enero a junio 2011

Frecuencia y porcentaje

Rango de edad	Homicidios		Lesionados		Total	
	F	%	F	%	F	%
36 - 40 años	287	40.77	243	35.58	530	38.21
41 - 45 años	155	22.02	190	27.82	345	24.87
46 - 50 años	123	17.47	104	15.23	227	16.37
51 - 55 años	82	11.65	97	14.20	179	12.91
56 - 59 años	57	8.10	49	7.17	106	7.64
<b>Total</b>	<b>704</b>	<b>100.00</b>	<b>683</b>	<b>100.00</b>	<b>1,387</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de la PNC

La tendencia se sigue viendo en los rangos subsiguientes, vista en una nueva tabla, pero siempre representado las frecuencias y los porcentajes en el mismo sentido de lo ya descrito, es decir, menor número de casos conforme más adulta la población.

**Tabla 25**  
**Muerte violenta y lesiones**  
**Víctimas en el rango de 60 - 89 años**

Enero a junio 2011

Frecuencia y porcentaje

Rango de edad	Homicidios		Lesionados		Total	
	F	%	F	%	F	%
60 - 69 años	75	66.37	72	71.29	147	68.69
70 - 79 años	28	24.78	23	22.77	51	23.83
80 - 89 años	10	8.85	6	5.94	16	7.48
<b>Total</b>	<b>113</b>	<b>100.00</b>	<b>101</b>	<b>100.00</b>	<b>214</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de la PNC

**Muerte violenta y lesiones según departamento:** Es importante analizar cómo se distribuyen los casos de muerte violenta y lesiones en cada departamento del país. En la tabla correspondiente se ordenan los departamentos de arriba hacia abajo según el mayor número de casos que concentra, partiendo de los casos de homicidios, y luego en consideración al mayor número de lesionados.

Claramente se muestra a Guatemala como el departamento más violento en el país, ocupando casi el 50 por ciento de la totalidad de casos entre muertes violentas y lesionados ocurridos. En el caso de los homicidios, el departamento de Guatemala ocupa el 38.15 por ciento, y por el lado de los lesionados el 51.99 por ciento.

El departamento que sigue a Guatemala es Escuintla, reportando el 6.63 por ciento de la totalidad de casos entre muertes violentas y de lesionados. Le siguen los departamentos de El Petén, Izabal, Chiquimula, Jutiapa y Santa Rosa, con porcentajes que oscilan entre el 4 y 5 por ciento de la totalidad casos en todo el país.

De acuerdo a los demás datos de la tabla, los departamentos que menor número de casos de muertes violentas y de lesionados reportan son Baja Verapaz, El Progreso, Retalhuleu, El Quiché, Totonicapán y Sololá, con porcentajes que oscilan entre 0 al 1 por ciento de la totalidad de casos registrados en el país.

**Tabla 26**  
**Muerte violenta y lesiones**  
**En departamentos de Guatemala**  
Frecuencia y porcentaje de enero a junio 2011

<b>Departamento</b>	<b>Homicidios</b>		<b>Lesionados</b>		<b>Total</b>	
	<b>F</b>	<b>%</b>	<b>F</b>	<b>%</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Guatemala	1107	38.15	1,603	50.99	2,710	44.82
Escuintla	260	8.96	141	4.48	401	6.63
El Petén	173	5.96	119	3.78	292	4.83
Izabal	150	5.17	102	3.24	252	4.17
Chiquimula	142	4.89	162	5.15	304	5.03
Jutiapa	140	4.82	58	1.84	198	3.27
Santa Rosa	134	4.62	114	3.63	248	4.10
Huehuetenango	103	3.55	83	2.64	186	3.08
Quetzaltenango	99	3.41	103	3.28	202	3.34
Zacapa	97	3.34	89	2.83	186	3.08
San Marcos	90	3.10	74	2.35	164	2.71
Suchitepéquez	70	2.41	64	2.04	134	2.22
Jalapa	66	2.27	61	1.94	127	2.10
Chimaltenango	56	1.93	86	2.74	142	2.35
Alta Verapaz	49	1.69	74	2.35	123	2.03
Sacatepéquez	35	1.21	51	1.62	86	1.42
Baja Verapaz	32	1.10	27	0.86	59	0.98
El Progreso	26	0.90	33	1.05	59	0.98
Retalhuleu	25	0.86	39	1.24	64	1.06
El Quiché	25	0.86	32	1.02	57	0.94
Totonicapán	13	0.45	16	0.51	29	0.48
Sololá	10	0.34	13	0.41	23	0.38
<b>Total</b>	<b>2,902</b>	<b>100.00</b>	<b>3,144</b>	<b>100.00</b>	<b>6,046</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de la PNC

Tomando en cuenta que el departamento de Guatemala concentra más del 25 por ciento del total de la población, resulta lógico pensar que su alto índice de violencia se relaciona de acuerdo a su gran cantidad de habitantes (estimado entre 3 y cuatro millones de los 14, 713,763 que proyecta el INE a la fecha<sup>75</sup>). Sin embargo, no necesariamente puede concluirse que sea tan determinante dado a que este índice de violencia se posiciona en un 45 por ciento en relación al conjunto restante de departamentos. Se indica que por mucho, el departamento guatemalteco sigue siendo el más violento del país.

**Antecedente de la víctima.** De la totalidad de casos registrado por la PNC entre muertes violentas y lesionados, un 92 por ciento de las víctimas no reportan antecedentes. Del resto de las víctimas que sí registran antecedentes tenemos que un 4.30 por ciento se relaciona con pandillas, el 2.98 con asaltos, el 0.33 con extorsiones y el 0.13 por ciento de víctimas con hechos relacionados al narcotráfico.

## **10.2 Detenidos por homicidio y lesiones**

Tomando en cuenta la cantidad total de homicidios y de lesionados en estos primeros seis meses del año, la relación entre los números absolutos de muertes violentas y lesionados con los números de detenidos guardan una distancia muy grande. Eso indica a primera vista la enorme cantidad de casos de violencia que quedan impunes.

De ahí se observa que de 2,902 homicidios registrados, se han dado 97 detenciones por esa causa, entre ellos 91 hombres y 6 mujeres. De estas 97 detenciones, 56 pertenecen al área urbana y 41 al área rural.

En el caso de las víctimas por lesiones, de 3144 casos, se dieron 270 detenciones, entre ellos 256 hombres y 14 mujeres. Del total de detenciones, 127 pertenecen al área urbana y 143 al área rural.

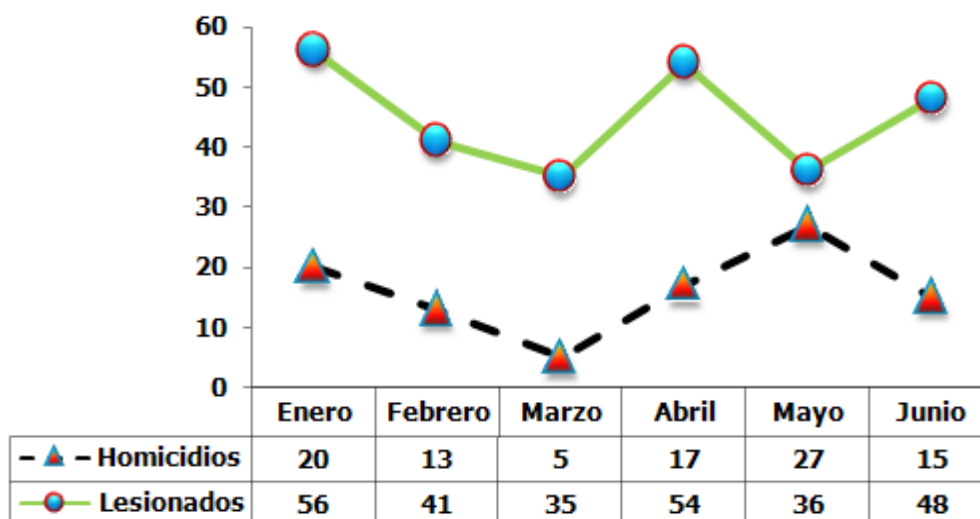
La gráfica 35 muestra que el mayor número de detenidos por homicidio se dio el mes de mayo, lo cual podría tener relación con la cantidad mayor de homicidios que reportó dicho mes en relación al resto del semestre. Y en el caso de los detenidos por lesiones, se dio mayormente en el mes de enero.

---

<sup>75</sup> Véase: Instituto Nacional de Estadística. Proyección de Población 2011República de Guatemala en: <http://ine.gob.gt/np/poblacion/index.htm>

**Gráfica 35**  
**Detenidos por homicidio y lesiones**

Enero a junio 2011  
Frecuencia



Un dato que debe subrayarse se encuentra en los rangos de edad que concentran la mayoría de detenidos. Estos rangos son el comprendido entre 18 y 25 años de edad, y el comprendido entre las edades de 26 y 30 años.

El análisis que se deriva de estos datos es que la población joven no sólo representa la población mayormente victimizada por los hechos de violencia, sino que a la vez representa el lado de los victimarios. Esto es muy notable si se revisan las frecuencias y los porcentajes que ocupan los rangos sombreados en la tabla, principalmente el rango comprendido entre 18 y 25 años que ocupa el 35.69 de las detenciones por la totalidad de homicidios y lesionados. Dato que coincide con los rangos de edades juveniles mayormente afectadas por la violencia, como ya se señaló arriba.

En conclusión, la interpretación de estos datos no es positiva para la sociedad en su conjunto, en consideración a lo que la población juvenil representa para el futuro del país. Se ven claramente las falencias del Estado en cuanto a que no ha sabido garantizar la seguridad ciudadana que implica la garantía y realización de los derechos fundamentales como la vida, la educación, la alimentación, la salud, el empleo, Etc., principalmente en la niñez y juventud de Guatemala.

**Tabla 27**  
**Detenidos por homicidio y lesiones**  
**Rango de edad del detenido**

Enero a junio 2011

Frecuencia y porcentajes

Rango de edad	Por homicidio		Por lesiones		Total	
	F	%	F	%	F	%
13 - 17 años	4	4.12	12	4.44	16	4.36
18 - 25 años	41	42.27	90	33.33	131	35.69
26 - 30 años	17	17.53	52	19.26	69	18.80
31 - 35 años	15	15.46	41	15.19	56	15.26
36 - 40 años	8	8.25	22	8.15	30	8.17
41 - 45 años	5	5.15	17	6.30	22	5.99
46 - 50 años	1	1.03	19	7.04	20	5.45
51 - 55 años	2	2.06	6	2.22	8	2.18
56 - 59 años	0	0.00	1	0.37	1	0.27
60 - 69 años	3	3.09	6	2.22	9	2.45
70 - 79 años	1	1.03	1	0.37	2	0.54
Se desconoce	0	0.00	3	1.11	3	0.82
<b>Total</b>	<b>97</b>	<b>100.00</b>	<b>270</b>	<b>100.00</b>	<b>367</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de la PNC

Se hace evidente que la situación de víctima y victimario de violencia en que se desgasta la juventud actualmente no es desde ningún punto de vista un mensaje positivo para nuestra sociedad. La juventud no solo se condena a un futuro caótico como generación, sino que también condena a las generaciones que nacen actualmente, porque no propicia el ambiente ni el horizonte correcto para el mejor desenvolvimiento de quienes apenas empiezan a vivir quienes luego trasladarán su sufrimiento, abandono y condena a las generaciones futuras.

El Estado no sólo debe reconocerlo, sino que también responsabilizarse conforme a sus deberes prescritos. Hoy por hoy, los deberes del Estado de garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, no solo plantea la mayor preocupación histórica sino el mayor

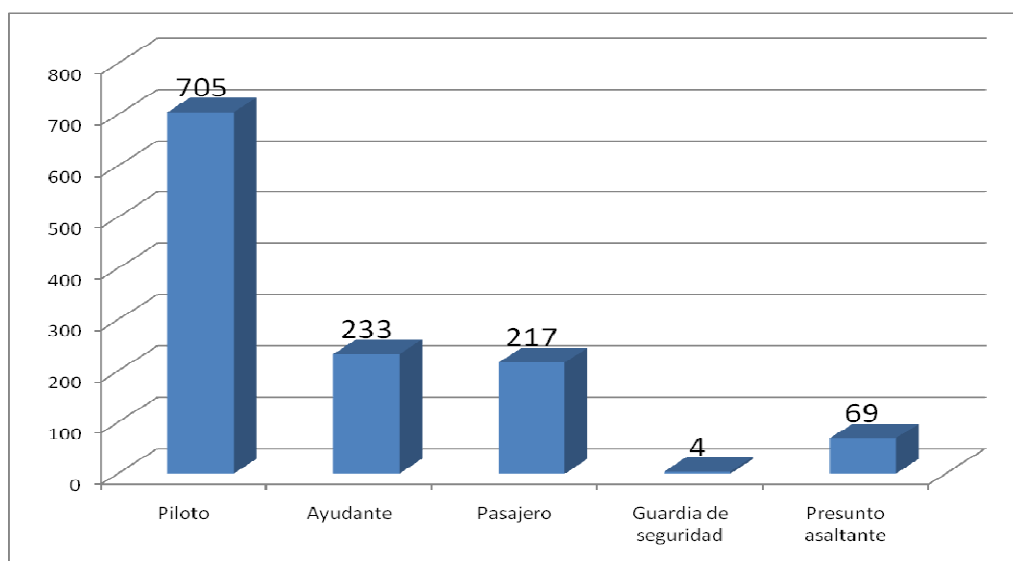
desafío, sin discriminación, con inclusión y con especial atención hacia las personas que están naciendo y las adolescentes que buscan la mejor orientación y oportunidad de su vida.

### 10.3 Muertes violentas relacionadas con el transporte público

La ola de violencia es generalizada. Los hechos de violencia vinculados al transporte urbano y extraurbano, permanece con ocurrencia grave.

Las víctimas más notorias de la violencia en el ámbito del transporte público, han sido los pilotos de las unidades de transporte, mayormente expuestos a grupos delincuenciales vinculados a la extorsión. El registro de hechos con el número de pilotos asesinados durante los años de 2006 hasta junio de 2011, se presenta en la gráfica.

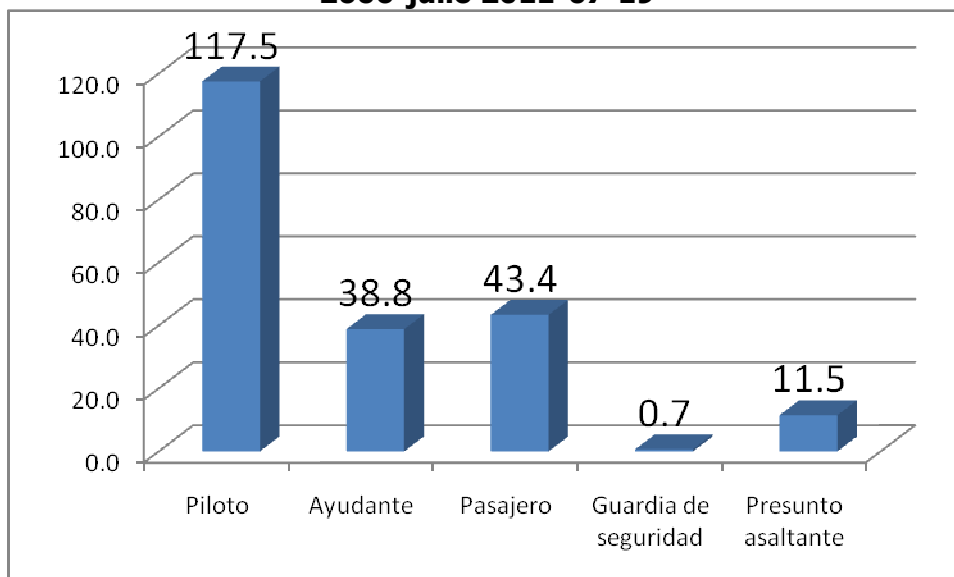
**Gráfica 36**  
**Víctimas totales de la violencia relacionada con el transporte público**  
No. de homicidios acumulados 2006 a 2011



Tal como se señaló anteriormente, los pilotos de las unidades de transporte constituyen el mayor número de víctimas, pues durante la serie 2006-julio de 2011, han sido asesinados 705 pilotos, 233 ayudantes, 217 pasajeros, 4 guardias de seguridad y 69 presuntos asaltantes. Estas cifras en términos de promedio en la serie por víctimas se presentan a continuación:



**Gráfica 37**  
**Promedio de víctimas**  
**2006-julio 2011-07-19**



Estos datos dan cuenta que se han asesinado un promedio de 117.5 pilotos por año en la serie presentada; siguiéndole dentro de este análisis el pasajero con 43.4 por año, luego los ayudantes con 38.8 anuales y el resto, en donde destaca el homicidio de 11.5 pasajeros anuales en promedio.

Cuando se hace una relación del total de víctimas por año y se calcula su promedio mensual se tienen los siguientes datos:

**Tabla 28**  
**Número de víctimas por año, porcentaje sobre el total y su variación anual**  
 En números y porcentajes

<b>Años/Víctimas</b>	<b>Sumas</b>	<b>% sobre total</b>	<b>% variación anual</b>
2006	111	9.0%	0
2007	133	10.8%	19.8%
2008	216	17.6%	62.4%
2009	318	25.9%	47.2%
2010	298	24.3%	-6.3%
2011	152	12.4%	-49.0%
<b>SUMAS</b>	<b>1228</b>	<b>100.0%</b>	

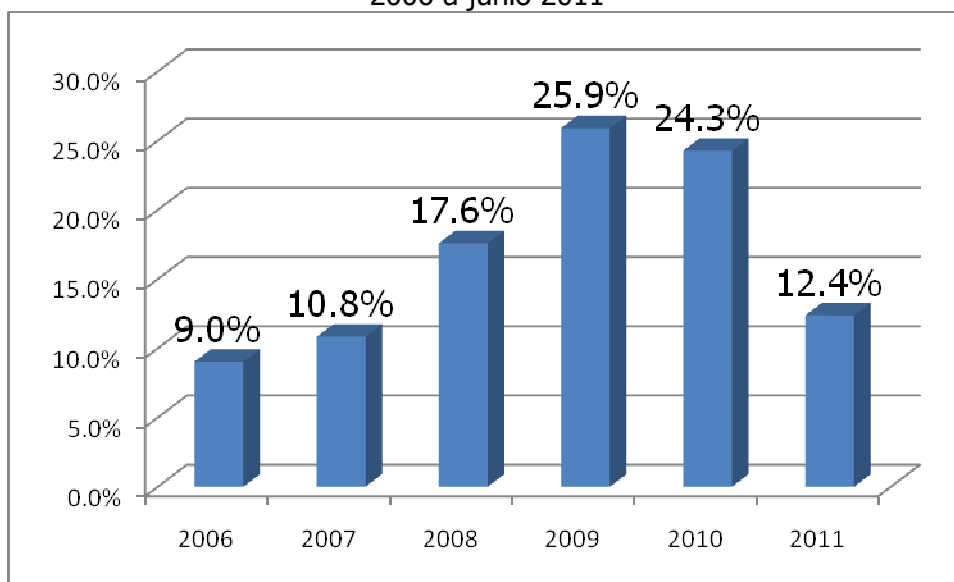
Fuente: Elaboración propia con datos de archivo hemerográfico.

En la tabla se puede observar que el año que representó mayor cantidad de víctimas en términos absolutos y relativos fue el 2009 con 318 personas que constituyen el 25.9% del total de víctimas en toda la serie, le sigue el año 2010 con 24.3% (un 24.3%); lo cual implica que en ambos años se alcanzó el 50.2% del total de víctimas en la serie 2006-junio 2011.

Es importante destacar que en el año 2011, se ha llegado en un semestre a un porcentaje equivalente al 12.4%; situación que podría implicar que si la violencia persiste, principalmente agudizada por la violencia derivada del contexto electoral, la cifra podría llegar casi al 25%, aunque es pertinente indicar que no toda la violencia tiene un carácter lineal o exponencial, pero pueden ocurrir múltiples sucesos relacionados con la violencia en el transporte público, que incrementarían significativamente el porcentaje aludido.

Los datos consignados en la tabla anterior, se presentan en la gráfica siguiente:

**Gráfica 38**  
**Porcentaje de víctimas por año dividido entre el total de víctimas**  
2006 a junio 2011

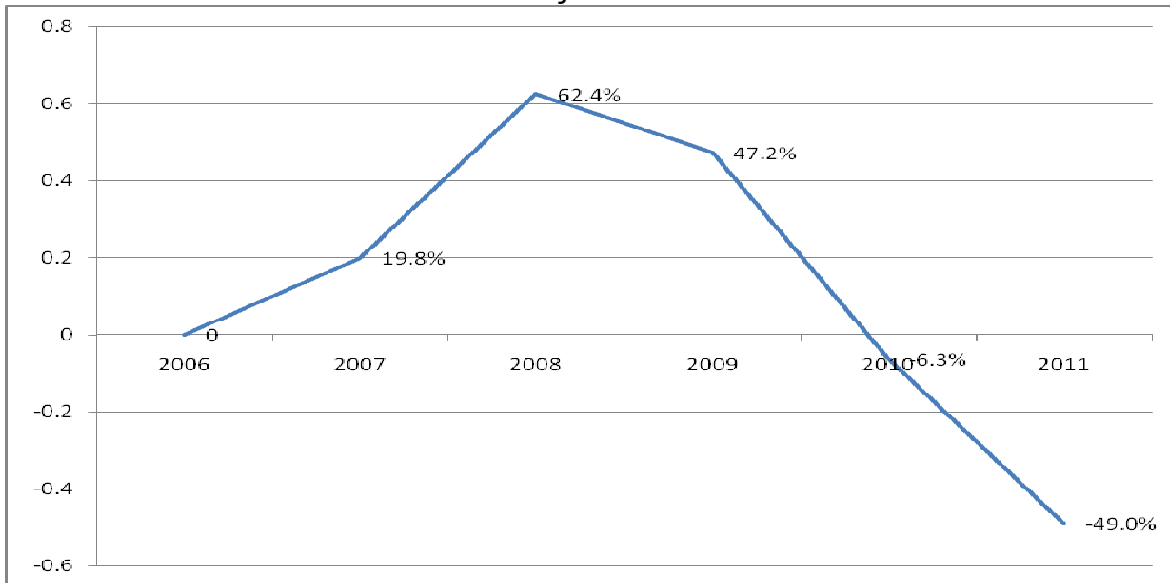


El 57.4% de las víctimas relacionadas con el transporte público, durante la serie 2006-junio de 2011 son los pilotos, siguiéndole en su orden los ayudantes con 19%; luego los pasajeros con 17.7%; un 0.3% está constituido por guardias de seguridad y un 5.6% lo representan los presuntos asaltantes.

La tasa de variación anual de la serie 2006-junio 2011, correspondiente a la totalidad de homicidios relacionados con el transporte público.

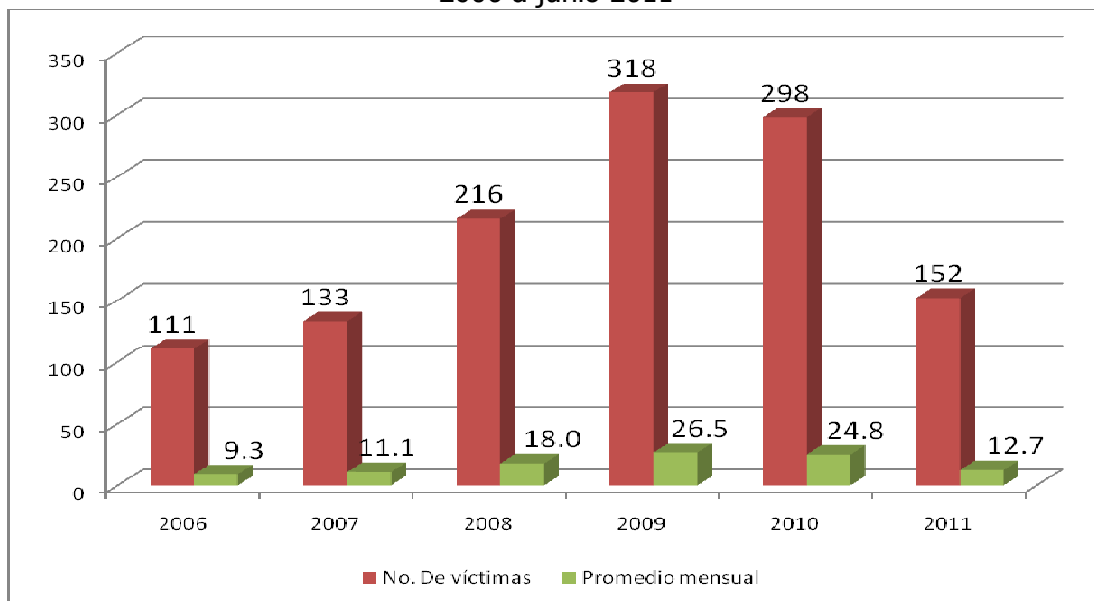
La gráfica muestra una tendencia ascendente entre el 2006 y 2008, en donde alcanza el pico máximo en la serie con un crecimiento de 62.4%, para luego mostrar tendencias hacia la baja en el año 2009, en donde llega al 47.2%, y luego caer a -6.3% en el 2010; finalmente alcanza una caída hasta el -49% en el 2011, señalando que en este año únicamente se incluyen los hechos del primer semestre.

**Gráfica 39**  
**Tasa de variación interanual víctimas de la violencia**  
**relacionada con el transporte público**  
 2006-junio 2011



Debe aclararse que el mayor repunte en el 2008, no es igual al repunte en términos absolutos, pues lo que se da es que entre cada año ocurre un crecimiento relativo; es decir, medido en términos porcentuales que es mayor que el subsiguiente.

**Gráfica 40**  
**Número total de víctimas por año y promedio mensual**  
 2006 a junio 2011



Es fácil percibir que durante el año 2009, se alcanzó la mayor cantidad de víctimas con un total de 318 personas víctimas fatales de la violencia en el transporte público; lo cual

significó un promedio mensual de 26.5 personas por mes; un dato considerablemente elevando, pues prácticamente resulta una persona diaria.

También es importante destacar la caída constante que se aprecia a partir del año 2009, aunque –tal como se señaló anteriormente, el promedio mensual del año 2011, se estima que puede repuntar estos datos.

Sin embargo, a pesar de esta tendencia descendente entre el 2008 y 2011, todavía el número de víctimas es superior con respecto el menor año de la serie que es el 2006 con 111 homicidios relacionados con el transporte público. Ello implica que todavía no se ha alcanzado el dato más bajo en la serie, aún con los resultados positivos que muestran una reducción paulatina en este flagelo de la violencia.

Para mostrar la diferenciación de la violencia en términos de las diferentes víctimas se ha preparado la siguiente tabla que permite recoger diferentes datos al respecto.

**Tabla 29**  
**Víctimas de la violencia relacionada con el transporte público en Guatemala**  
Promedios mensuales  
2006 a junio 2011

<b>Años/Víctimas</b>	<b>Piloto</b>	<b>Ayudante</b>	<b>Pasajero</b>	<b>Guardia de seguridad</b>	<b>Presunto asaltante</b>
2006	6.9	2.2	0.00**	0.1	0.1
2007	5.7	2.3	2.3	0.1	0.8
2008	10.9	3.7	2.6	0.0	0.8
2009	16.0	4.2	4.3	0.1	1.9
2010	13.0	4.5	6.1	0.1	1.2
2011 (a junio)	12.5	5.3	5.7	0.0	1.8
<b>Sumas</b>	<b>65.0</b>	<b>22.1</b>	<b>20.9</b>	<b>0.3</b>	<b>6.7</b>
<b>Promedio en la serie</b>	<b>10.8</b>	<b>3.7</b>	<b>3.5</b>	<b>0.1</b>	<b>1.1</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de archivo hemerográfico.

Las mayores víctimas de este tipo de violencia son los pilotos con promedios mensuales más altos en toda la serie de 65 pilotos en promedio y el promedio de los promedios muestra un dato de 10.8 pilotos por año. El resto de víctimas son ayudantes, con 22.1 (3.7 en promedio), pasajero con 20.9 (3.5 en promedio), mientras que los guardias de seguridad y los asaltantes son los más bajos. Es decir, las víctimas más notables dentro de este espectro de la violencia en general resultan ser los pilotos, los ayudantes y los pasajeros.

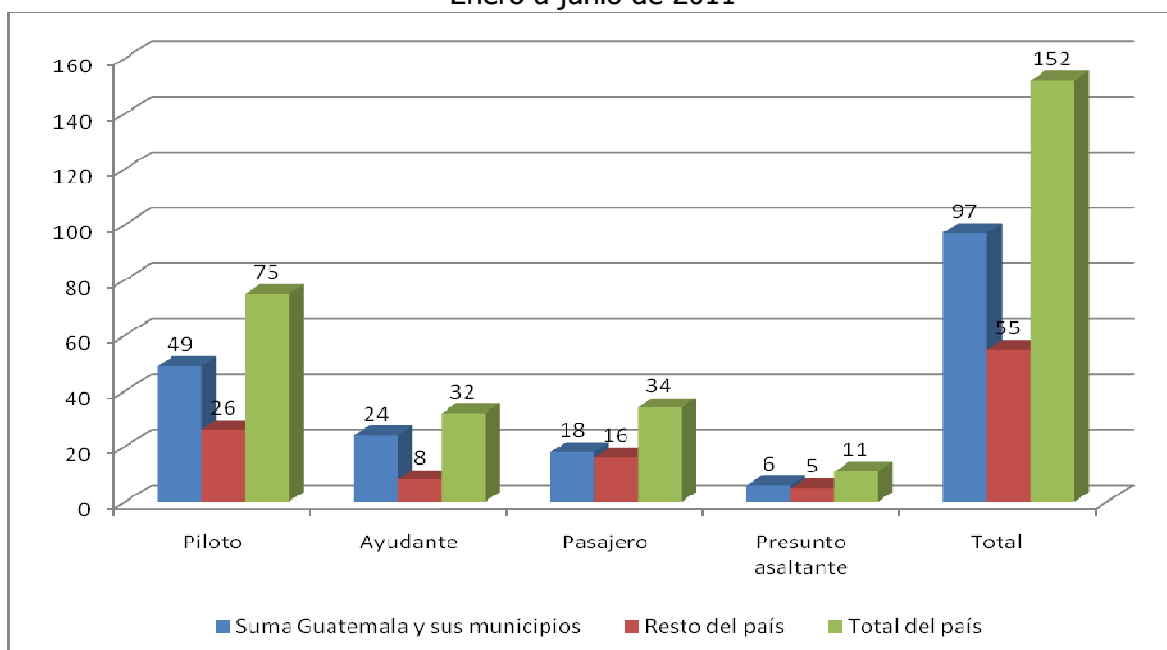
**Tabla 30**  
**Víctimas de la violencia y algunos indicadores**  
2006-junio 2011

<b>Años/Víctimas</b>	<b>Piloto</b>	<b>Ayudante</b>	<b>Pasajero</b>	<b>Guardia de seguridad</b>	<b>Presunto asaltante</b>	<b>Sumas</b>
2006	83	26	0**	1	1	111
2007	68	27	27	1	10	133
2008	131	44	31	0	10	216
2009	192	50	52	1	23	318
2010	156	54	73	1	14	298
2011	75	32	34	0	11	152
<b>SUMAS</b>	<b>705</b>	<b>233</b>	<b>217</b>	<b>4</b>	<b>69</b>	<b>1228</b>
<b>Promedio en la serie</b>	<b>117.5</b>	<b>38.8</b>	<b>43.4</b>	<b>0.7</b>	<b>11.5</b>	
<b>Porcentaje sobre total</b>	<b>57.4%</b>	<b>19.0%</b>	<b>17.7%</b>	<b>0.3%</b>	<b>5.6%</b>	<b>100.0%</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de archivo hemerográfico.

Por otra parte, la violencia distribuida por los diferentes espacios geográficos del país muestra, durante el primer semestre de este año, las siguientes cifras:

**Gráfica 41**  
**Víctimas de la violencia relacionadas con el transporte público**  
Enero a junio de 2011



Como se puede colegir fácilmente, el departamento de Guatemala es el que mayor cantidad de hechos violentos presenta durante el primer semestre de este año, con un total de 97, mientras que en el resto de departamentos han ocurrido 55 hechos de la violencia vinculada al transporte público, para un total de 152 casos de violencia con resultados fatales.

La tendencia de los años anteriores, persiste durante el año 2011, pues se observa que los pilotos son los principales sujetos de la violencia con 75 fatalidades en todo el país, de los cuales 49 ocurren en el departamento de Guatemala y 26 en el interior del país.

Le siguen en su orden, los usuarios del transporte público con 34 sucesos en todo el país; de los cuales 18 ocurren en el departamento de Guatemala y 16 en el resto de departamentos del país; una situación que motiva mayor análisis, pues prácticamente se tiene la misma cauda de víctimas en ambos espacios geográficos.

Luego los ayudantes son las otras víctimas de mayor incidencia con 32 decesos derivados de este tipo de violencia, de los cuales 24 acaecieron en la capital, mientras que 8 sucedieron en el interior.

La siguiente tabla permite ejemplificar la situación de la violencia relacionada con el transporte público en el país.

**Tabla 31**  
**Violencia relacionada con el transporte público**  
**Diferentes datos e indicadores**

<b>Datos e indicadores/Víctimas</b>	<b>Piloto</b>	<b>Ayudante</b>	<b>Pasajero</b>	<b>Presunto asaltante</b>	<b>Total</b>
<b>Suma Guatemala y sus municipios</b>	49	24	18	6	97
<b>Resto del país</b>	26	8	16	5	55
<b>Total del país</b>	75	32	34	11	152
<b>Guatemala/Total del país</b>	65.3%	75.0%	52.9%	54.5%	63.8%
<b>No. De veces Guatemala con resto de país</b>	1.88	3.00	1.13	1.20	1.76
<b>Promedio mensual Guatemala 1er semestre 2011</b>	8.2	4.0	3.0	1.0	16.2

Fuente: Elaboración propia con datos de archivo hemerográfico.

En general, Guatemala es el centro de ocurrencia de la violencia vinculada al transporte público, pues prácticamente 2/3 partes de víctimas y hechos (63.8%) se desarrollan en el departamento de Guatemala. En términos de número de veces, en el departamento de Guatemala ocurren 1.88 veces más muertes de pilotos, que en el interior de la república. En el caso de los ayudantes es de 3 veces más en el departamento de Guatemala, 1.13 veces más en el caso de los pasajeros; 1.2 veces más en el caso de los presuntos asaltantes y 1.76 veces más en el caso del total de víctimas en relación al resto de departamentos.

En términos de promedios mensuales, (el total de hechos dividido entre 6 meses), en el departamento de Guatemala, se puede observar la muerte violenta de 8.2 pilotos por mes;

4.0 ayudantes por mes; 3 pasajeros por mes; 1 presunto asaltante por mes y un promedio global de 16.2 personas por mes, con respecto el resto del país.

Ello significa que en un 4.5% del territorio nacional, ocurren un 63.8% de hechos fatales relacionados con la violencia dentro del transporte público; sobre un total de 95.5% del territorio nacional, en donde ocurren el 36.2% de dichos sucesos violentos.

La concentración de ataques violentos relacionados con el transporte público en el departamento de Guatemala, se puede apreciar en la siguiente tabla, en donde se pueden apreciar datos interesantes para el análisis posterior.

**Tabla 32**  
**Víctimas de la violencia en el transporte público**  
**Departamento de Guatemala**  
Enero a junio de 2011

<b>Víctimas departamento Guatemala</b>	<b>Piloto</b>	<b>Ayudante</b>	<b>Pasajero</b>	<b>Guardia de seguridad</b>	<b>Presunto asaltante</b>	<b>Total</b>	<b>Porcentaje s/total Guatemala</b>
Guatemala, Guatemala Z.7	3	2	12	0	1	<b>18</b>	<b>18.6%</b>
Guatemala, Mixco	8	6	3	0	0	<b>17</b>	<b>17.5%</b>
Guatemala, Guatemala Z.5	4	3	0	0	1	<b>8</b>	<b>8.2%</b>
Guatemala, Guatemala Z.6	5	1	2	0	0	<b>8</b>	<b>8.2%</b>
Guatemala, Guatemala Z.18	3	2	0	0	0	<b>5</b>	<b>5.2%</b>
Guatemala, San José Pinula	5	0	0	0	0	<b>5</b>	<b>5.2%</b>
Guatemala, Villa Canales	1	4	0	0	0	<b>5</b>	<b>5.2%</b>
Guatemala, Guatemala Z.24	4	1	0	0	0	<b>5</b>	<b>5.2%</b>
Guatemala, Guatemala Z.1	2	1	0	0	0	<b>3</b>	<b>3.1%</b>
Guatemala, Guatemala Z.12	1	2	0	0	0	<b>3</b>	<b>3.1%</b>
Guatemala, Petapa	3	0	0	0	0	<b>3</b>	<b>3.1%</b>
Guatemala, San Juan Sacatepéquez	2	1	0	0	0	<b>3</b>	<b>3.1%</b>
Guatemala, Guatemala Z.9	0	0	0	0	2	<b>2</b>	<b>2.1%</b>
Guatemala, Guatemala Z.19	1	0	0	0	1	<b>2</b>	<b>2.1%</b>
Guatemala, Santa Catarina Pinula	2	0	0	0	0	<b>2</b>	<b>2.1%</b>
Guatemala,	1	0	0	0	0	<b>1</b>	<b>1.0%</b>

Amatitlán							
Guatemala, Chinautla	1	0	0	0	0	<b>1</b>	<b>1.0%</b>
Guatemala, Fraijanes	1	0	0	0	0	<b>1</b>	<b>1.0%</b>
Guatemala, Guatemala	1	0	0	0	0	<b>1</b>	<b>1.0%</b>
Guatemala, Guatemala Z.4	0	1	0	0	0	<b>1</b>	<b>1.0%</b>
Guatemala, Guatemala Z.10	0	0	1	0	0	<b>1</b>	<b>1.0%</b>
Guatemala, Palencia	1	0	0	0	0	<b>1</b>	<b>1.0%</b>
Guatemala, Villa Nueva	0	0	0	0	1	<b>1</b>	<b>1.0%</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de archivo hemerográfico.

Si se hace un pequeño ejercicio aritmético y se suma la primera fila de la columna de porcentajes, hasta donde se ha resaltado la fila y columna correspondiente, se podría observar que el 73.2% de los hechos que ocurren en el departamento de Guatemala se concentran en los lugares correspondientes a zonas periféricas de la ciudad (zonas 5, 6, 7 y 18), al municipio más poblado Mixco y a Villa Canales y San José Pinula.

#### 10.4 Muerte Violenta por Linchamientos

El análisis sobre muerte violenta por linchamientos se realiza en base a los registros hemerográficos sobre este tipo de muertes. La tabla a continuación muestra el número de casos de linchamiento ocurridos del año 2004 a junio 2011.

**Tabla 33**  
**Casos de linchamiento**  
Número de casos por año  
Año 2004 a junio de 2011

<b>Casos de Linchamiento</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011*</b>
Número de casos	25	32	81	72	61	107	126	75

Fuente: Elaboración propia con datos de archivo hemerográfico.

La tabla consolida los datos de linchamiento durante 7 años y medio, a partir del año 2004 a junio 2011, en toda la República de Guatemala.

El año 2004 representa el menor número de linchamientos respecto al resto de años, con un reporte de 25 casos durante todo el año en toda la República de Guatemala.



A medida que los linchamientos aumentan el color de la tabla se modifica de acuerdo a la escala cromática<sup>76</sup>.

El año 2005 se marca con un leve aumento en el número de linchamientos que asciende a 32 casos. El año 2007 marcado en color amarillo, reporta un número de 72 casos de linchamientos ocurridos ese año. Esta tendencia ascendente marca un color anaranjado claro para 2006 con 81 casos de linchamientos, y un color naranja para 2009 con 107 casos, siendo el color rojo fuerte del año 2010 el que representa el mayor número de casos de linchamientos en relación a todos los años anteriores, con 126 casos registrados.

La siguiente tabla analiza los casos de linchamientos, según los promedios que se registran por mes en cada uno de estos años que se analizan.

**Tabla 34**  
**Casos de Linchamientos**  
**Promedio por mes**  
Año 2004 a junio de 2011

<b>Linchamientos mensuales</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011*</b>
Número de casos en promedio	2.08	2.67	6.75	6.00	5.08	8.92	10.50	12.50

Fuente: Elaboración propia con datos de archivo hemerográfico.

Los años 2004 y 2005 representan los períodos con menor cantidad de linchamientos por mes, en el 2004 hay 2 linchamientos por mes y en el 2005 un aproximado de 3 linchamientos mensuales. En el año 2006 aumenta el número de linchamientos respecto al 2004, llegando a casi 7 linchamientos por mes. El año 2007 disminuyó a 6 linchamientos por mes, un caso menos de linchamiento respecto a 2006.

El año 2008 muestra un promedio de 5 linchamientos por mes, con una disminución de 2 y 1 caso por mes respecto a los años 2006 y 2007.

A partir del año 2009 se inicia un aumento exponencial de casos de linchamientos por mes, tomando el año 2004 como referente con 2 linchamientos por mes, el año 2009 aumenta a casi 9 casos de linchamientos mensuales. El 2010 es el que tiene el número más alto de linchamientos con 11 casos ocurridos en ese lapso.

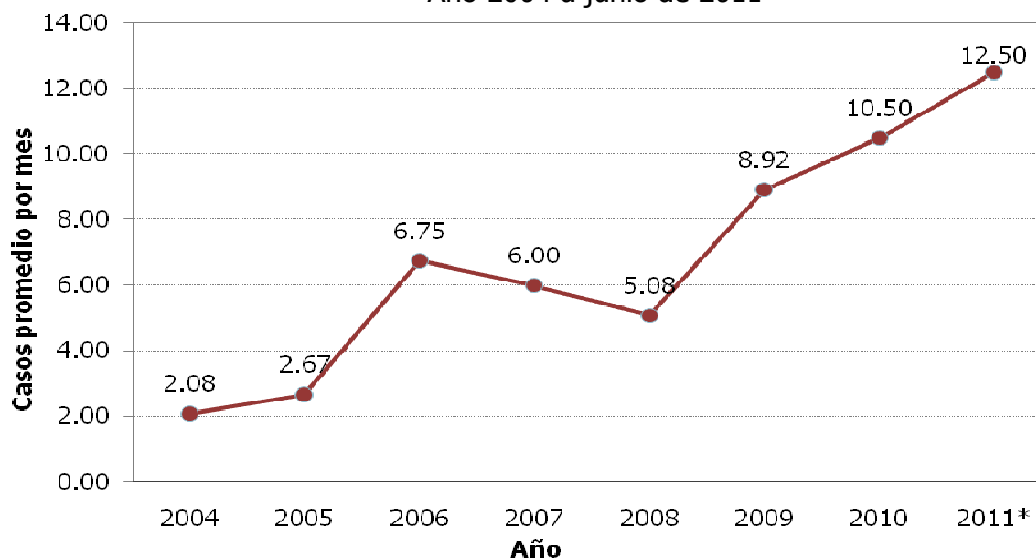
Ahora bien, el año 2011 llama mucho la atención tomando en cuenta que en solo 6 meses ya se contabilizan casi 13 linchamientos por mes, lo que implica que de seguir sin medidas preventivas el año 2011 podría duplicar el número de linchamientos del año 2010, que hasta ahora es el más violento.

---

<sup>76</sup> Degradación que existe de un color primario a un secundario y viceversa. (Esta explicación es valida para todas las tablas que se detallan posteriormente en este informe.)

Los datos reportados por las tablas, se pueden visualizar mejor en la gráfica 42.

**Gráfica 42**  
**Linchamientos mensuales**  
**Casos promedio por mes**  
Año 2004 a junio de 2011



La gráfica muestra el promedio del número de casos de linchamientos mediante el uso de una medida lineal, que va indicando las tendencias anuales y los promedios mensuales. En la línea horizontal se identifica los años de la base de datos 2004-2011 y en la línea vertical el número de casos de linchamientos en promedio ocurridos por mes. Por ejemplo en el año 2006 ocurrieron 86 casos de linchamientos, esto significa que cada mes del año 2006 (de enero a diciembre) sucedieron 6.75 casos de linchamientos.

En otro nivel de análisis, es importante ver el número de personas heridas y las fallecidas a consecuencia de estos linchamientos.

**Tabla 35**  
**Personas heridas y fallecidas en linchamientos**  
Año 2004 a junio de 2011

<b>Casos de Linchamiento</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011*</b>
Número de casos	25	32	81	72	61	107	126	75
<b>Heridos/fallecidos en linchamiento</b>								
Heridos	50	46	113	97	113	128	156	95
Fallecidos	4	18	22	20	18	43	44	32

Fuente: Elaboración propia con datos de archivo hemerográfico.

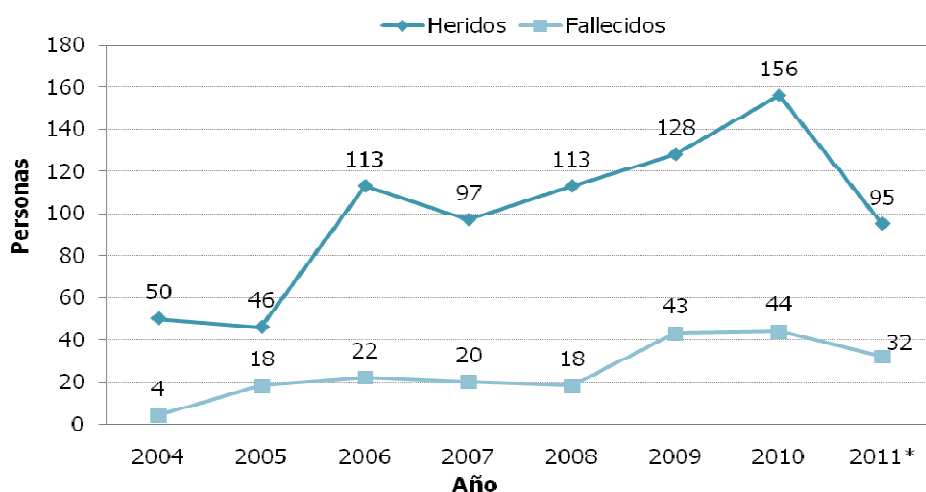
La tabla muestra la cantidad total de linchamientos en toda la República, el número de personas heridas y fallecidas durante el año, en los diferentes casos de linchamientos. En el 2004 ocurrieron 25 casos de linchamiento. El resultado de estos hechos violentos, fue de 50 personas heridas y 4 fallecidas.

El 2005 muestra una progresión significativa en el número de víctimas mortales, en ese año sucedieron 32 casos de linchamientos, resultaron heridas 46 personas y fallecieron 18. Ambos años 2004 y 2005, considerando el número de linchamientos en esos años (25 y 32) respecto al resto de años, muestran un alto número de personas heridas, así como el año 2006 en el que ocurrieron 81 casos de linchamientos y el número de heridos se multiplica por 2.26 respecto a las 50 personas heridas en el año 2004. El año 2006, casi triplica el número de linchamientos respecto al 2005, a pesar de ello, el número de fallecidos en el 2006 (22 personas) es relativamente similar al año 2005 (18 personas).

Respecto al 2006, los años 2007 y 2008 muestran un leve descenso en los casos de linchamientos. Sin embargo, el número de personas fallecidas -20 fallecidos en el 2007 y 18 fallecidos en el 2008, permanece alto. Así como las personas lesionadas, los años 2006 y 2008 tienen el mismo número de lesionados -113 personas- esto a pesar que en el año 2008 hubo 20 linchamientos menos que en el año 2006. El año 2007 reportó 97 personas lesionadas. En el año 2009 se dan 107 casos de linchamiento, la cantidad de personas lesionadas es de 156 y el número de fallecidos es de 43 personas. El año 2010 es el año más violento de la base de datos con 126 casos de linchamientos, 44 personas fallecidas y 156 personas heridas.

De acuerdo a estos datos, es de considerar el 2011, a pesar de que solamente hayan transcurrido 6 meses del año, con 75 casos de linchamiento, con 95 personas heridas y 32 fallecidos, se visualiza como uno de los años más violentos de la base acumulada de linchamientos.

**Gráfica 43**  
**Personas heridas y fallecidas en linchamientos**  
Año 2004 a junio de 2011



La gráfica muestra la tendencia del número de lesionados y el número de fallecidos durante los años del 2004 a junio del 2011. En la línea horizontal se encuentran los años que conforman la base de datos y en la línea vertical el número de personas heridas o fallecidas durante los linchamientos. En la gráfica se identifica el número de personas fallecidas en los linchamientos.

**Tabla 36**  
**Personas heridas y fallecidas en linchamientos**  
 Por sexo y por año  
 Año 2004 a junio de 2011

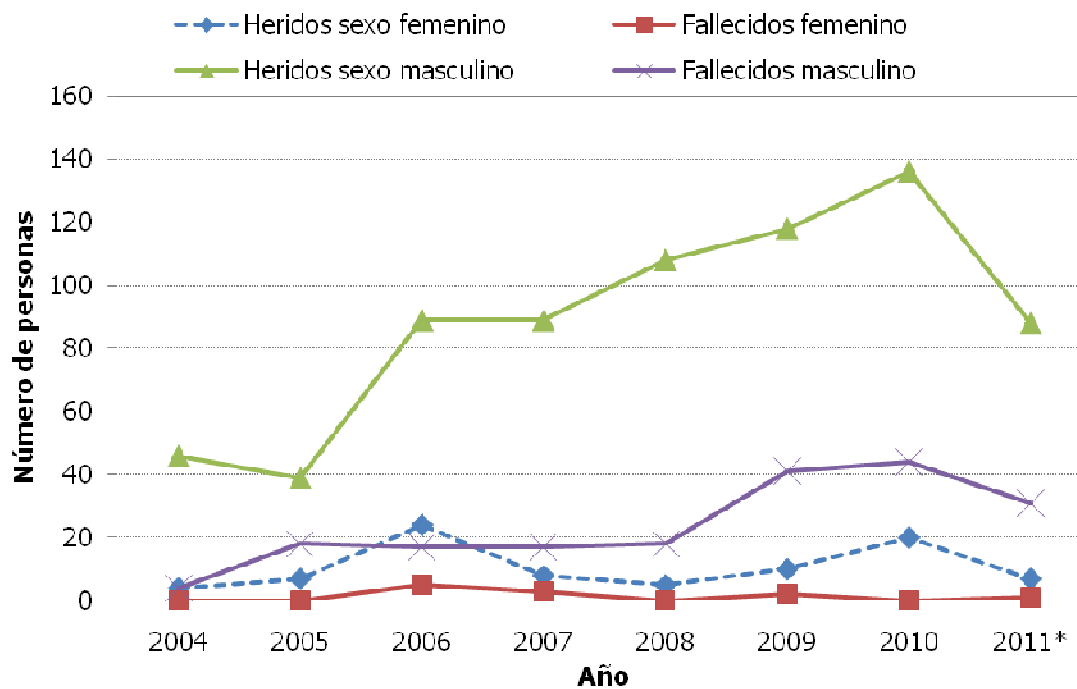
<b>Personas en linchamiento</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011*</b>
Heridos sexo femenino	4	7	24	8	5	10	20	7
Heridos sexo masculino	46	39	89	89	108	118	136	88
Fallecidos femenino	0	0	5	3	0	2	0	1
Fallecidos masculino	4	18	17	17	18	41	44	31
<b>Total</b>	<b>54</b>	<b>64</b>	<b>135</b>	<b>117</b>	<b>131</b>	<b>171</b>	<b>200</b>	<b>127</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de archivo hemerográfico.

En cuanto al sexo de las personas heridas y fallecidas durante los diferentes casos de linchamientos, en los años del 2004 al 2011, son los hombres las principales víctimas mortales, sin embargo, a partir del año 2006 las féminas comienzan a ser también víctimas mortales.

La gráfica representa el número de personas heridas y fallecidas en los casos de linchamientos y el sexo al que pertenecía la víctima. La línea con pequeños cuadros, identifica a las mujeres fallecidas durante los linchamientos. La línea con rombos, identifica el número de mujeres lesionadas. Por ejemplo, en el año 2004 resultaron heridas 4 mujeres en los casos de linchamientos ocurridos ese año. Ninguna mujer falleció de los años del 2004 al 2011. En el 2006, 24 mujeres resultaron heridas, la línea con rombos se encuentra por encima de la línea marcada con el número 20, el mayor ascenso de heridas en relación a los demás años. También este año reporta el mayor número de fallecidas con 5.

**Gráfica 44**  
**Personas heridas y fallecidas en linchamientos**  
 Por sexo y por año  
 Año 2004 a junio de 2011



En el caso de los hombres, los datos se identifican en la línea con "x" las personas fallecidas y con el pequeño triángulo los hombres heridos. En el 2010 con 200 casos de linchamiento fallecieron 44 hombres, y resultaron heridos 136, y mujeres heridas 20. En el 2011, hasta el mes de junio, los fallecidos hombres fueron 31, y una mujer; mientras heridos hombres 88 y mujeres que resultaron heridas 7. Los casos de linchamiento en los primeros seis meses del año fueron 127, por lo que de continuar la tendencia al final del año los casos podrían superar gravemente los acaecidos en el año anterior.

### 10.5 Contexto de violencia en el proceso electoral

El clima de violencia que ha caracterizado el proceso electoral 2011 se incrementó en el mes de junio, con nuevos atentados a candidatos a alcaldías o corporaciones municipales, principalmente en San José Pinula.

En este municipio, fueron asesinados 2 candidatos a concejales; otros dos aspirantes a la alcaldía recibieron amenazas y sufrieron actos intimidatorios, creando un clima de temor y zozobra entre los participantes en el proceso electoral y la población. Las autoridades capturaron al precandidato a la alcaldía por el partido Libertad Democrática Renovada - LIDER-, Luis Marroquín supuesto responsable de la ola de ataques a candidatos a alcalde de San José Pinula, y quien había sufrido un supuesto atentado el 18 de junio, calificado como autoatentado por las autoridades.

**Tabla 37**  
**Hechos de violencia relacionados con el proceso electoral 2011**  
1 de enero a 30 de junio de 2011.

Fecha	Nombre víctima	Cargo o Relación	Tipo de Acción Violenta
14/01/2011	Hilario Antonio López	Delegado del TSE en Jutiapa	Atentado Mortal
20/01/2011	Edgar Antonio Almengor	Ex diputado del Partido Patriota	Atentado mortal en la capital
24/01/2011	Byron Fernando Corado	Hijo del alcalde del Puerto de San José, de la UNE	Atentado mortal en la capital
07/02/2011	Lauro Méndez	Alcalde Moyuta, Jutiapa	Sufrió atentado cuando viajaba hacia Jalpatagua.
19/02/2011	Mayra Verónica Lemus Pérez	Precandidata a la alcaldía de Moyuta, Jutiapa y siete acompañantes	Atentado mortal con 8 víctimas
27/02/2011	Glendy Angélica Dávila Navarizo	Hija del alcalde de San Juan Tecuaco, Santa Rosa	Secuestrada y liberada; se recuperó el rescate de Q50,000.00
04/03/2011	Pedro Pablo Muñoz Alvarado	Hermano de candidato a alcalde de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa	Atentado Mortal
06/03/2011	Norma Esperanza López	Mujer simpatizante de la UNE haciendo propaganda en la capital	Herida leve
10/03/2011		10 activistas de la UNE y el PP, en Zacualpa, Quiché	Heridos en enfrentamiento por interferencia en propaganda electoral
24/03/2011	Olga María Morales Núñez e Isaías Guerra Fabián	Ex concejal cuarto de Masagua, Escuintla y su guardaespaldas	Atentado mortal en Masagua

30/03/2011	Francisco Jocop	Precandidato a la alcaldía de San Juan Sacatepéquez por el partido CREO	Atentado mortal en Salamá, Baja Verapaz
25/03/2011	Aurelio Salza Tay	Alcalde de Santo Domingo, Suchitepéquez	Vapuleado por querer retomar el cargo después de ser acusado por falsedad material e ideológica
31/03/2011	María Eugenia Villagrán	Presidenta del Tribunal Supremo Electoral - TSE -	Amenazas de muerte contra ella y su familia
31/03/2011	Empleados del TSE	10 delegados del TSE	Amenazas
02/05/2011	Miguel Ángel Solares	Precandidato a la alcaldía de San José Pinula por el PP.	Baleada su residencia.
02/05/2011	Ernestina Polanco Sandoval	Tesorera de la comuna de Agua Blanca, Jutiapa y candidata a ese municipio por la UNE-GANA	Baleada su residencia.
04/05/2011	Wilson Antonio y compañeros	Activistas del Partido Patriota	Agredidos por agentes de la PMT del municipio de Guatemala; uno sufrió lesiones
05/05/2011		Sede del partido CREO de Xelajú, Quetzaltenango	Robo de equipo de cómputo y destrozo de mobiliario
10/05/2011	Darwin Adolfo Gallardo Recinos	Precandidato a la alcaldía de Atescatempa, Jutiapa por el partido CREO	Atentado Mortal
10/05/2011	Miguel Solís Rojas	Director del Registro de Ciudadanos del TSE	Amenazas
10/05/2011	Jorge Mario Grajeda	Asistente del Director de Organizaciones Políticas del TSE	Amenazas

12/05/2011	Jacinto Santiago Ramírez	Ramírez y otros tres activistas de la UNE	Insultos, golpes y robo de sus escaleras, en Santa Cruz del Quiché, Quiché.
14/05/2011	Nicolás Pú y Marcos Pú	Dos simpatizantes de VIVA	Retenidos por el Sr. Pú Tojín durante seis horas al colocar propaganda sobre la del Partido Patriota, en Sacapulas, Quiché.
17/05/2011	Herlindo Aguilar Peña	Presidente del Cocode de Santa María Ixhutatán.	Asesinado. Apoyaba la reelección del actual alcalde de Santa María Ixhutatán, Santa Rosa
20/05/2011	Padres y tía de Manuel Baldizón	Familiares de Manuel Baldizón, candidato presidencial por LIDER	Amenazados de muerte en Flores, Petén.
21/05/2011	Ramiro Guerra	Candidato a alcalde de Agua Blanca, Jutiapa por el PP	Sufrió disparos cuando se desplazaba en una carretera de terracería
24/05/2011	Blanca Floridalma Juárez	Delegada del TSE de Quetzaltenango	Amenazada y agredida por Manuel Conde Orellana
25/05/2011	Miguel Ángel Juárez Merlos	Secretario de municipalidad de Sansare, El Progreso, coordinador de la campaña del actual alcalde por la UNE	Fue acribillado en su vehículo. Había recibido amenazas.
30/05/2011	Pablo Puac y Amelia Coj	Candidatos a alcaldía y concejo municipal de Tecpán por Viva y EG.	Amenazados a través de llamadas telefónicas y carta.
04/06/2011	Orlando Orcini Calderón y 3 acompañantes	El alcalde de San Carlos Sija y 3 acompañantes, de LIDER	Fueron agredidos física y verbalmente por integrantes del Partido Patriota



06/06/2011	Julio Fernando Chacón	Hijo del coordinador de la campaña del Partido Patriota en Teculután, Zacapa.	Asesinado
08/06/2011	Sede Viva Escuintla	Sede Viva Escuintla	Robo de Computadoras y destrucción de la propiedad
12/06/2011	Doroteo Constanza Zapeta	Concejal suplente de Champerico, Retalhuleu por la UNE	Asesinado
12/06/2011	Gustavo Ovalle Barrera	Candidato a alcalde de San José Pinula por el Partido Unionista y dos acompañantes	Asesinados
17/06/2011	Carlos Enrique Dardón	Candidato a la alcaldía de San José Pinula por el Partido CREO	Asesinado
19/06/2011	Luis Fernando Marroquín	Candidato a la alcaldía de San José Pinula por el partido Líder y su guardaespaldas	Intento de asesinato
20/06/2011	Daniel Antonio Pirir Hernández	Hijo de candidato a Concejal de Villa Canales por VIVA	Asesinado
20/06/2011	Víctor Reyes Pur	Actual alcalde de San José Pinula por el FRG	Recibe amenazas en su contra
20/06/2011	Miguel Ángel Solares	Candidato a alcalde de San José Pinula por el Partido Patriota	Recibe amenazas en su contra
22/06/2011	Edwin Hernández Santiago	Candidato a Concejal II de Ocós, San Marcos por el Partido ADN	Asesinado
22/06/2011	Saúl Enrique Castro Navas	Candidato a síndico I de Río Hondo, Zacapa por el Partido Patriota	Herido él y un vendedor, tras atentado
23/06/2011	Correligionarios de la UNE	Atacan autobús de la UNE en la aldea El Jabalí en Santa Lucía Cotzumalguapa	Apedreados

23/06/2011	Heidy Judith Santos Flores	Pajapita, San Marcos, Fiscal de mesa del Partido Patriota	Torturada y Asesinada
23/06/2011	Víctor Hugo Méndez Cáceres	Actual alcalde de San Bernardino, Suchitepéquez	Intento de Asesinato
23/06/2011	Alcaldía de San José Pinula		Falsa alarma de Bomba
23/06/2011	Rony Rodríguez	Candidato a concejal de Moyuta, Jutiapa, UNE-GANA	Asesinado
23/06/2011	Hilcias Lemus	Candidato a alcalde de Villa Nueva por ADN	Amenazas de muerte
23/06/2011	Ramiro Pérez	Candidato a alcalde de Palencia	Amenazas de muerte
28/06/2011	Norman Alarcón y Ricardo Arturo Sandoval	Candidato a alcalde UNE-GANA y Candidato a alcalde PP	Sus respectivos vehículos fueron baleados en un confuso accidente
29/06/2011	Pablo Matías Pérez	Candidato a concejal suplente por VIVA-EG en Playa Grande, Ixcán, Quiché	Asesinado

Fuente: elaboración propia con información hemerográfica.

El total de candidatos, funcionarios y/o familiares asesinados de enero a junio de 2011 alcanzó la cifra de 30, de los cuales diez fueron cometidos durante el mes de junio.

**Tabla 38**  
**Resumen de violaciones del derecho a la vida e integridad física**  
**Relacionadas con el proceso electoral**  
1º de enero al 30 de junio de 2011

Fallecidos	30
Heridos	20
Amenazados	31
Allanamiento/robo	2
Otro tipo de agresiones	8

Fuente: elaboración propia con información hemerográfica